

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

64ª REUNIÓN — 28ª SESIÓN ORDINARIA — 30 DE OCTUBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM
y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor ANTONIO F. CAFIERO

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI
y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZA, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo

MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.
OYARZUN, Juan C.
PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES. CON AVISO:

LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MIRANDA, Julio
REUTEMANN, Carlos A.
VACA, Eduardo P.

EN COMISION:

DE LA SOTA, José M.

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

8. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Galván y otros señores senadores por el que se resuelve aprobar el reglamento interno redactado y votado afirmativamente en el plenario de la Comisión Investigadora de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. (S.-2.291/96). Se aprueba. (Pág. 6194.)
9. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre denominación de origen de vinos. (C.D.-16/95). Se aprueba. (Pág. 6195.)
10. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en los siguientes proyectos de ley: de los señores senadores de la Rúa y Genoudi; del señor senador Solana; del señor senador Alasino; de los señores senadores Bordón y Fadel; del señor senador Aguirre Lanari; de la señora senadora Fernández Mejjide; del señor senador Yoma; y del señor senador Almirón; en el anteproyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; en las consideraciones formuladas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y en dos mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo, sobre Ministerio Público (S.-520, 668, 1.350, 1.306 y 1.910/95; S.-623, 779 y 866/96; P.-190/95; P.-12/96; P.E.-500/95 y P.E.-186/96). (Pág. 6205.)
11. Moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador Galván para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 6345.)
12. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto 10 de este sumario. (Pág. 6345.)
13. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 6351.)
14. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto 10 de este sumario. Se aprueba en general. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 6351.)
15. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 6358.)
 - II. Inserción. (Pág. 6359.)

—En Buenos Aires, a las 12 y 58 del miércoles 30 de octubre de 1996:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por La Pampa doctor Enrique Martínez Almudevar a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Martínez Almudevar procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Figueroa. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Menem). — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Figueroa. — (Lee): Señor presidente, señores senadores: he solicitado la palabra para plantear una cuestión de privilegio a raíz de una publicación efectuada el 24 del corriente en el diario "La Unión", de la provincia de Catamarca, que reproduce declaraciones del gobernador de esa provincia, señor Arnoldo Castillo, que considero lesivas no sólo para mi persona, sino también para todo el cuerpo.

Concretamente, voy a permitirme leer preguntas formuladas y respuestas del gobernador.

Pregunta del periodista: "¿Le da garantías de que lo analice el Senado nacional?"

Respuesta: "No, por cómo se forma la mayoría de las opiniones ahí, hay todavía senadores como Figueroa, de Santiago del Estero, que todos sabemos que es una porquería de hombre".

A lo cual, para rematar, frente a la pregunta de "si esta movida se hace aprovechando que Ruckauf no está en el país", agregó, textualmente: "Por supuesto que sí".

Sus expresiones merecen tres reproches, señor presidente. Primero: en cuanto un gobernador de provincia, agente natural del gobierno federal, expresa que no le da garantías el Senado de la Nación, es decir que no da garantías una de las instituciones de la República.

Esto es, a no dudarlo, un agravio a este cuerpo, a la democracia, a la Constitución que el señor Castillo juró cumplir y hacerla cumplir.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

Sr. Figueroa. — No debe, sin embargo, llamarnos a extrañeza que este gobernador se mofe de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República. Ya lo hizo en su historia de hombre público al pisotear la Constitución, jurando por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional al asumir como gobernador de la dictadura. Y lo siguió haciendo ahora. Su burla a las instituciones no es historia antigua; es presente, y espero que no sea futura.

Castillo promovió la mora institucional para la designación de dos senadores por su provincia. Como agente del gobierno federal, no hizo cum-

por los senadores que nos han precedido en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan de la Cruzada Renovadora.

Sr. Avelín. — Señor presidente: este proyecto de ley conforma a todos quienes pertenecemos a las zonas vitivinícolas: riojanos, mendocinos, sanjuaninos y de otras regiones, porque en esta iniciativa se eslabonan varias cuestiones que son importantes: la calidad, el esfuerzo del hombre de campo, del peón de campo, del peón de viña, del viñatero, del industrial, del exportador y de los mercados internos y externos, en los que debemos competir con tecnología apropiada.

Esta ley nos va a llevar hacia ese objetivo, porque en virtud de la competencia por lograr calidad, unos y otros tratarán de sobresalir, a fin de imponer el producto en los mercados del país o del exterior.

Esto es importante porque traduce algo que interesa a todos los argentinos de las zonas involucradas: tenemos tierras, tenemos agua, buen sol, buen clima, cielos transparentes, gente que ha trabajado durante decenas de años, que sabe cultivar la viña, que sabe tratarla, acariciarla.

Por supuesto que vale la pena sancionar este proyecto de ley a fin de conformar todo el esquema estructural para la exportación correspondiente y para imponer nuestro producto fuera del país. Creo que se puede lograr, que podemos conseguirlo.

Y no se trata únicamente de los vinos finos; vendrá después otra ley —o bien podría complementarse la presente norma—, que incluirá otros vinos que, por supuesto, también habrán de tener la calidad necesaria para que puedan ser exportados.

Ojalá que entre San Juan y La Rioja podamos competir con Mendoza —y sobrepasar ese objetivo— para que, de esa manera, tengan el vuelo que corresponde estas provincias un tanto marginadas, pobres y olvidadas.

De tal manera que estoy de acuerdo con este proyecto de ley y ojalá que esto sea útil en relación con otras iniciativas que contemplen lo relativo a la instalación de industrias en las regiones donde se encuentra la materia prima. Y no sólo me refiero a la uva, sino también a elementos tales como el algodón, la lana, el cuero y tantos otros insumos que produce este país.

Es importante que la industria se instale en las zonas donde se extrae la materia prima. Una vez que tengamos industrializado el país en todas sus regiones, seremos una nación potente y po-

dremos estar ubicados en el primer mundo, porque podremos competir con todo lo que producimos, con cualquier país del planeta.

El proyecto en consideración nos conforma y constituye un primer paso que nos señala que la industria es el motor para el progreso, para el desarrollo y para lograr la independencia económica.

Me complace, entonces, votar afirmativamente este proyecto de ley y espero que constituya el puntapié inicial para que logremos luego una victoria final en lo que respecta a la industrialización de nuestras materias primas.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bauzá. — Señor presidente: atento a la conformidad que existe entre los diversos bloques que se han expresado, solicito que la iniciativa sea votada por capítulos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Como hay asentimiento, se va a votar en la forma propuesta por el señor senador por Mendoza.

En primer término, corresponde votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

—Con la enunciación por capítulos, la votación en particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

10

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en los siguientes proyectos de ley: de los señores senadores de la Rúa y Genoud; del señor senador Solana; del señor senador Alasino; de los señores senadores Bordón y Fadel; del señor senador Aguirre Lanari; de la señora senadora Fernández Meijide; del señor senador Yoma; y del señor senador Almirón en el anteproyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; en las consideraciones formuladas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y en dos mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo, sobre Ministerio Pú-

blico. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.217 y dos complementos.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, han considerado los expedientes: S.-520/95, de la Rúa y Genoud: reproduce proyecto de ley orgánica del Ministerio Público; S.-668/95, Solana: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-1.350/95, Alasino: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-1.306/95, Bordón y Fadel: proyecto de ley de Ministerio Público; S.-1.910/95, Aguirre Lanari: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-623/96, Fernández Meijide: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-779/96, Yoma: proyecto de ley orgánica del Ministerio Público; S.-866/96, Almirón: proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.-190/95, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: adjunta anteproyecto de ley sobre Ministerio Público; P.-12/96, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: formula consideraciones acerca del proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.E.-500/95, Mensaje 444/95 y proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.E.-186/96, Mensaje 598/96 y proyecto de ley reformando la organización del Ministerio Público a fin de unificar la competencia de las fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional y en lo criminal de instrucción; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1º—El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

Posee una organización jerárquica, la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

Composición

Art. 2º—El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Art. 3º—El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados:

- Procurador general de la Nación;
- Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fiscal nacional de investigaciones administrativas;
- Fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c);
- Fiscales ante los jueces de primera instancia; los fiscales de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas;
- Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 4º—El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- Defensor general de la Nación;
- Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, y los de la Defensoría General de la Nación;
- Defensores públicos de menores e incapaces adjuntos y defensores públicos oficiales adjuntos ante los tribunales y del organismo enunciado en el inciso c);
- Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales de primera instancia y de la Defensoría General de la Nación.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios, los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

CAPÍTULO II

Relación de servicio

Designaciones

Art. 5º—El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la desig-

nación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentarán una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Concurso

Art. 6º — La elaboración de la terna se hará de entre los cinco candidatos que seleccione, previo concurso de oposición y antecedentes, un tribunal convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público con jerarquía no inferior a los cargos previstos en el inciso b) de los artículos 3º y 4º, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los enunciados en el artículo 3º, incisos b) y c) o en el artículo 4º, incisos b) y c), según corresponda; salvo cuando el concurso se realice para cubrir cargos de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensor público ante tribunales colegiados, supuestos en los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso.

Requisitos para las designaciones

Art. 7º — Para ser procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional.

Para presentarse a concurso para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; fiscal general ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; defensor de menores; defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; defensor público de menores e incapaces y defensor público oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única y de la Defensoría General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para ser fiscal general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3º, inciso c); fiscal ante los jueces de primera instancia; fiscal de la Procuración General de la Nación; fiscal de Investigaciones Administrativas; defensor de menores e incapaces adjunto y

defensor público oficial adjunto ante los tribunales enunciados en el artículo 4º, inciso c); defensores de la Defensoría General de la Nación; defensor público de menores e incapaces y defensor público oficial de primera instancia, se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener título de abogado de validez nacional.

Juramento

Art. 8º — Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de ~~desempeño~~ bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación —según corresponda— o ante el magistrado que éstos designen a tal efecto.

Incompatibilidades

Art. 9º — Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Excusación y recusación

Art. 10. — Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las causales que —a su respecto— prevean las normas procesales.

Sustitución

Art. 11. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayera sobre el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador fiscal o el defen-

sor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.

De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

Remuneración

Art. 12. — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los magistrados enumerados en los incisos b) y c) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara;
- c) Los magistrados mencionados en el inciso d) y e), de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- d) Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara;
- e) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Estabilidad

Art. 13. — Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad. Los magistrados que alcancen la edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de cinco años, y podrán ser repetidas indefinidamente, mediante el mismo procedimiento.

Inmunidades

Art. 14. — Los magistrados del Ministerio Público, gozan de inmunidad de arresto.

No podrán ser molestados o enjuiciados por sus intervenciones en los procesos y por las opiniones que emitan de acuerdo con el regular desempeño de sus funciones.

Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público

que corresponda y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se substanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

Traslados

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. Sólo podrán ser destinados temporalmente a funciones distintas de las adjudicadas en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 32, inciso g) y 50, inciso d).

Poder disciplinario

Art. 16. — En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) Prevención;
- b) Apercibimiento;
- c) Multa de hasta el 20 % de sus remuneraciones.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se registrará por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la regla-

mentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán posibles de impugnación en sede judicial.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17. — Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o al defensor general de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

Mecanismos de remoción

Art. 18. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.

Tribunal de enjuiciamiento

Art. 19. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete (7) miembros:

- a) Tres vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ex procuradores o defensores generales de la Nación, y serán designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Dos vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión, y serán designados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;
- c) Dos vocales deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o fiscales generales y otro entre los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensores públicos ante tribunales colegiados.

A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.

El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, o por su presidente en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por alguno de aquéllos. Tendrá su asiento

en la Capital Federal y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones contados a partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior al fiscal general o defensor público ante los tribunales colegiados, designados por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un defensor oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, a opción del imputado.

La intervención como integrante del tribunal, fiscal o defensor de oficio constituirá una carga pública.

Los funcionarios auxiliares serán establecidos, designados y retribuidos en la forma que determine la reglamentación que conjuntamente dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación.

Reglas de procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 20. — El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las siguientes reglas:

- a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, de oficio o por denuncia, fundados en la invocación de hechos que configuren las causales de remoción previstas en esta ley;
- b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, deberá ser presentada ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, quienes podrán darle curso conforme el inciso precedente o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. En este último caso, el denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de diez días de notificado el rechazo. La queja deberá presentarse ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, quienes deberán girarla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su consideración;
- c) El procedimiento ante el tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicten conjuntamente el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, que deberá

respetar el debido proceso legal adjetivo y defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:

1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo.

El denunciante no podrá constituirse en parte.

2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes.

3. Durante el debate el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El pedido de absolución no será obligatorio para el tribunal, pudiendo condenar aún en ausencia de acusación fiscal.

4. La sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor de quince (15) días que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate.

5. Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio.

Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.

6. El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes.

7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiera de la prueba o aquélla ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente.

8. La sentencia podrá ser recurrida por el fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar

el recurso con las actuaciones a la Cámara mencionada, dentro de los cinco (5) días de interpuesto.

CAPÍTULO III

Administración general y financiera del Ministerio Público

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades, en relación a sus respectivas facultades de gobierno:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional, de personal, disciplinarios, y todos los demás que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y las leyes;
- c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público;
- d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral creada por esta ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público;
- f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo-financiero, acreditado y reconocido conforme la normativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Autarquía financiera

Art. 22. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el ministerio público contará con crédito presupuestario propio, el que será tendido con cargo a "Rentas generales" y con recursos específicos.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Relaciones con los Poderes Ejecutivo y Legislativo

Art. 23. — El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.

Ejecución presupuestaria

Art. 24. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 99, 34 y 117 de la ley 24.158.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

TITULO II

Funciones y actuación

Sección I

Normas generales

Funciones del Ministerio Público

Art. 25. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;
- b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
- c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- d) Promover y ejercer la acción pública civil en los casos previstos por la ley;
- e) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- f) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal;
- g) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieran a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- h) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;
- i) Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
- j) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos o internados sean tratados

con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;

- k) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Requerimiento de colaboración

Art. 26. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán —para el mejor cumplimiento de sus funciones— requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados, y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades judiciales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del ministerio público y destinado a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.

Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— sin perjuicio de las directivas que el juez competente impartir a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

Funciones excluidas

Art. 27. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: la representación del Estado y/o del Fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Principio de oficialidad

Art. 28. — Cuando se tratare de una acción pública, el ministerio público actuará de oficio.

Deber de informar

Art. 29. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según corresponda, y por

vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

Deber de obediencia. Objeciones

Art. 30. — Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general —en su caso—, su criterio disidente, mediante un informe fundado.

Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Informe anual al Congreso

Art. 31. — Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia —Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente— el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; una análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

Sección II

Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

Del procurador general de la Nación

Art. 32. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

El procurador general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:

1. Causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso.

2. Cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3. Causas, en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda a raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6º, apartados b) y c) del decreto ley 1.285/58.

4. Casos en los que se alegue privación de justicia.

5. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.

6. Causas en las que medien planteos de inconstitucionalidad de las leyes.

7. Causas en las que se encuentre en juego la interpretación de tratados internacionales.

En cuanto ello resulte pertinente a los fines de la intervención que resulta de lo establecido en los puntos que anteceden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios interpuestos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos, en los que podrá omitir la vista.

- b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- d) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal;
- f) Delegar sus funciones en los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 35 de esta ley;
- g) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no registrará para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En los casos de formación de equipos de

trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estará sujeta a las directivas del titular;

- h) Efectuar la propuesta en tema a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- j) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias; y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- k) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- l) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- m) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;
- n) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- o) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- p) Confeccionar el programa del Ministerio Público Fiscal dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público de la Defensa para su remisión al Congreso de la Nación;
- q) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
- r) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, al Ministerio Público

Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;

- q) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal;
- r) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 3º, incisos b) y c) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 31; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- s) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres poderes del Estado;
- t) Aprobar el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal.

De la Procuración General de la Nación

Art. 33. — La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del procurador general de la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del ministerio público fiscal.

En dicho ámbito se desempeñarán los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el procurador general de la Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el procurador general disponga encomendarles.

De los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 34. — Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellas causas en que así lo resuelva el procurador general de la Nación;
- b) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- c) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;

- d) Informar al procurador general sobre las causas en que intervienen;
- e) Colaborar con el procurador general en su gestión de gobierno del Ministerio Público Fiscal, en los términos y condiciones enunciados en el artículo precedente.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 35. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga, con los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso g) del artículo 32 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 3º de la presente ley.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 36. — Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- f) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes;
- g) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- h) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del área de su competencia;
- i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de

la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;

- j) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales adjuntos

Art. 37. — Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 38. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades y deberes propios del ministerio público fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

Deberán intervenir en los procesos de amparo y de *habeas corpus* y en todas las cuestiones de competencia; e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 39. — En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para

formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Art. 40. — Los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de la seguridad social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan;
- b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan, y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
- c) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

Fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia

Art. 41. — Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes facultades y deberes:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

CAPÍTULO II

Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Organización

Art. 42. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del ministerio público fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Designaciones y remociones

Art. 43. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley.

Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 44. — El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos.
- c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33, inciso 1).
- La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción;
- d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependen e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicto el procurador general;
- g) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se de-

sempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;

- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación;
- j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y persecución penal del ministerio público fiscal.

Fiscales generales de Investigaciones Administrativas

Art. 45. — Los fiscales generales de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- b) Reemplazar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del procurador general de la Nación;
- c) Informar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales general adjuntos y fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 46. — Los fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y los fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la Fiscalía que este último les asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 47. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Investigaciones disciplinarias

Art. 48. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate, de conformidad con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, di-

chas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 49. — Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc;
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación.

Sección III

Ministerio Público de la Defensa

Defensor general de la Nación

Art. 50. — El defensor general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, excepto en los supuestos en que según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que se podrá omitir la vista.

El defensor general también actuará, si correspondiere, cuando haya intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa.

- b) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de esta ley;
- c) Disponer por sí o mediante instrucciones generales o particulares, a los integrantes del Minis-

terio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos le confieran;

- d) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran la defensa oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los defensores que se designen estará sujeta a las directivas del titular;
- e) Efectuar la propuesta en terna a qué se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- f) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes;
- g) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial;
- h) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley, cuando a su juicio, se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación —ante los órganos competentes— cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;
- i) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia determinadas reformas legislativas o reglamentarias y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- j) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- k) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales —cuando sea del caso—, espe-

cialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros países;

- l) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes, supervisar su desempeño y lograr el mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes otorgan a dicho ministerio;
- m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;
- n) Confeccionar el programa del Ministerio Público de la Defensa dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público Fiscal, para su remisión al Congreso de la Nación;
- o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el servicio administrativo financiero del organismo;
- p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- q) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4º, incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 31; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
- r) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de los defensores generales y el grupo de defensores y defensores adjuntos, que colaborarán con ellos sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- s) Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- t) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa.
- u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- v) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.

De la Defensoría General de la Nación

Art. 51. — La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del defensor general de la Nación, como defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio Público de la Defensa.

En dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el defensor general de la Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor general disponga encomendarles.

Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 52. — Los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán al defensor general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en que intervengan;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de Menores e Incapaces

Art. 53. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extra judicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;
- b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.
- c) Promover, o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o

representantes legales, parientes, o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;

- d) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos; conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección, y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- e) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- f) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;
- g) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal;
- h) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre Internación y Externación de Personas; y controlar que se efectúen al Registro de Incapaces, las comunicaciones pertinentes;
- i) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- j) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- k) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educa-

tivos de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;

- l) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- m) Responder los pedidos de informes del defensor general;
- n) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidas en esta ley y sus reglamentación.

Art. 54. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, cuando no hubieren sido designados para actuar también en primera instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de Menores e Incapaces ante la primera instancia y promover o continuar las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;
- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Elevar un informe anual al defensor general de la Nación sobre la gestión del área bajo su competencia;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los Defensores de Menores e Incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

Art. 55. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales orales serán parte necesaria en todo expediente de disposición tutelar que se forme respecto de un menor autor o víctima de delito conforme las leyes de menores vigentes y deberán asistir bajo pena de nulidad, a los juicios orales de menores conforme lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 56. — El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81, pasa a integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del Defensor de Menores e Incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tutores y curadores públicos

Art. 57. — Los jueces, federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 58. — Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los títulos VII a XIV de la sección II del libro I del Código Civil, sin perjuicio de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el defensor general de la Nación. Especialmente deberán:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan —en su momento— acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos así como también su patrimonio; proveer, cuando corresponda, a su adecuada administración;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación, y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;
- g) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se los formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;

- h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes, para mejorarlos;
- i) Mantener informado al defensor de Menores e Incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.

Defensores públicos oficiales

Art. 59. — Los defensores públicos oficiales, en las instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que les encomiende el defensor general de la Nación, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre el trámite procesal de su causa;
- c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan; y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
- f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste el informe anual relativo a su gestión;
- g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos

dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 60. — Los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán —en especial— las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores públicos oficiales de las instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores públicos oficiales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomiende el defensor general de la Nación.

Honorarios de los defensores públicos oficiales

Art. 61. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor público oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Art. 62. — En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa.

Defensores públicos adjuntos de Menores e Incapaces y defensores públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 63. — Los defensores públicos adjuntos de Menores e Incapaces y públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actuarán en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades

funcionales, éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;

- b) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Sección IV

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 64. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley, las normas pertinentes del decreto ley 1.285/58 y las reglamentaciones que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación. En particular se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que hubieren pasado a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa, y se encuentren prestando servicios allí, quedan incorporados a su planta permanente;
- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Solo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación;
- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante y de acuerdo a lo que establezca la pertinente reglamentación. Los magistrados mencionados podrán delegar esta competencia.

TÍTULO III

Disposiciones complementarias

Representación del Estado en juicio

Art. 65. — A los efectos de dar cumplimiento al artículo 27, primer párrafo de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados.

En el interior de la República, cuando el organismo interesado carezca en el lugar de los servicios referidos, la citada representación será ejercida por delegados del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación y designados por el Poder Ejecutivo nacional. En su defecto, la ejercerán letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de otros servicios jurídicos y otros abogados designados para casos especiales.

Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente la representación judicial estatal será ejercida por el procurador del Tesoro de la Nación.

Art. 66. — Los representantes judiciales del Estado se ajustarán a las instrucciones que impartan el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados. En caso que la representación sea ejercida por delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, esas instrucciones no impartirán a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. En defecto de ellas, los representantes desempeñarán su cometido en la forma que mejor contemple los intereses del Estado nacional confiados a su custodia.

Art. 67. — En todos los juicios en trámite en que el Estado nacional o sus entes descentralizados estén representados por integrantes del Ministerio Público, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá adoptar las medidas conducentes para la designación de nuevos representantes de acuerdo a las disposiciones de esta ley, dentro de los 365 días de su entrada en vigencia.

Art. 68. — A los fines del cumplimiento de lo previsto en los artículos 27, 65 y 67 de la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer la creación, supresión, transferencia y redistribución de dependencias, servicios, funciones y cargos, así como efectuar las reestructuraciones de créditos presupuestarios que a tal efecto, sean necesarias.

Subsistencia de cargos

Art. 69. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejercían al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Recursos

Art. 70. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos, que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

Equiparaciones. Ministerio Público Fiscal

Art. 71. — Los actuales integrantes del Ministerio Público pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los secretarios de la Procuración General de la Nación, en el cargo de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto en el inciso b) del artículo 3º;
- c) El fiscal general de Investigaciones Administrativas, en el cargo de fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, previsto en el inciso b) del artículo 3º.

Mientras permanezca en el cargo, el actual fiscal general de Investigaciones Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato vigente al momento de la sanción de la presente ley;

- d) Los fiscales de Cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; el procurador general del Trabajo y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º;
- e) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el subprocurador general del Trabajo, los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3º.

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- f) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3º;

- g) Los fiscales adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3º.

Mientras permanezcan en el cargo, los actuales fiscales adjuntos ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional tendrán la equiparación presupuestaria, remuneratoria y previsional correspondiente a los cargos previstos en el inciso e) del artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 12 de la presente ley.

Equiparaciones. Ministerio Público de la Defensa

Art. 72. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 4º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor general de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a) del artículo 4º;
- b) El defensor oficial de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso b) del artículo 4º;
- c) Los defensores oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Cámara de Casación Penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- d) Los asesores de Menores e Incapaces de Cámara y los asesores de Menores ante los tribunales orales, en los respectivos cargos de defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- e) Los defensores oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes, en los cargos de defensores públicos oficiales ante los jueces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º;
- f) Los Asesores de Menores e Incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de Menores e Incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º.

Estructura

Art. 73. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, en sus respectivos ámb-

uros, pcuran modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, mediante el dictado de reglamentaciones, en tanto no afecten los derechos emergentes de la relación de servicio de los magistrados, funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteración, que implique la afectación de tales derechos y la creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente aprobada por el Congreso.

Art. 74. — En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se hubiesen designado los defensores oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia, ejercerán la función los defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o; en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones correspondientes, dichos defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 4º.

Derogaciones

Art. 75. — Deróganse las leyes 15.464, 17.516 y 21.383; los títulos VII, VIII, y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58, el artículo 3º, incisos a) y b) y 5º de la ley 20.581, el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3º de la ley 3.952, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; la ley 3.367 en cuanto se refiere a la representación por los procuradores fiscales y el procurador general de la Nación en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el fisco demande o sea demandado y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Art. 76. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de septiembre de 1996.

Jorge R. Yoma. — Juan R. Aguirre Lanari.
— Carlos A. Venna. — Eduardo Menem.
— Ernesto R. Oudín. — Augusto Alavín.
— Julio C. Humada. — Julio A. San Martín.
— César Mac Karthy. — Deo Indio F. Bittel. — José O. Figueroa. — Alberto M. Tell. — Jorge J. Massat. — Otilia del Valle Rivas. — Héctor M. Maya. — José L. Gioja. — Pedro G. Villarroel. — Angel F. Pardo. — José M. de la Sota. — Conrado H. Storani. — José A. Romero Ferts.

En disidencia parcial:

José Genoud. — Antonio T. Berhongaray.
— Alcides H. López. — Graciela Fernández Meljide. — Raúl A. Galván. — Horacio D. Usandizaga.

Disidencia parcial de la senadora Graciela Fernández Meljide

Al proyecto de Ley de Ministerio Público

Señor presidente:

Estamos ante las circunstancias de dar media sanción al proyecto de ley de Ministerio Público. Hemos recorrido muy lentamente desde la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1994, un camino que arribó a un considerable consenso luego que los proyectos originales enviados por el Poder Ejecutivo en épocas del ex ministro Barra, cuyo nivel de autoritarismo fue proporcional al rechazo y las críticas que generó. Frente a ello entidades representativas y organismos públicos que tienen que ver directamente con la administración de justicia participaron con sus opiniones. Vale citar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, como también al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación.

Ante estas circunstancias de consenso sostenido quiero expresar que voy a apoyar en general el dictamen aprobado pero voy a sostener en la votación en particular, disidencias en puntos vitales que me gustaría se consideraran para ser incorporados.

Entiendo que mejorarán el proyecto de Ley de Ministerio Público en su funcionamiento, que ajustado al principio jurídico de legalidad, será un instrumento de importancia para cualificar y promover justicia como deber indelegable del Estado.

Cabe destacar que la jerarquía dada al Ministerio de Defensa en pie de igualdad e independencia con el ministerio fiscal y el acceso en condiciones ciertas de legalidad del justiciable al servicio de justicia, conforman mi convicción que con este contenido se contribuirá directamente a la construcción de nuestras instituciones en el marco de un estado de derecho.

1º) Disidencia con respecto al artículo 6º "concursos para cumplir los cargos de Ministerio Público"

Debería el concurso tener las cualidades de ser público, de oposición y antecedentes. El carácter de público es justamente la calidad de transparencia para la ciudadanía y la posibilidad de tener información y eventualmente de impugnar a los candidatos.

Nosotros proponemos junto al carácter público del concurso que del jurado participe la comunidad académica, con tres titulares de cátedra de universidades nacionales, lo que nos parece muy importante en función de garantizar la calidad teórico-técnica de los car

didatos como también sería un aporte considerable la idoneidad de los académicos para incidir en la fijación del temario del concurso.

Se propone la siguiente redacción:

"El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros. Los demás magistrados y fiscales del Ministerio Público serán designados por estricto orden de mérito en concursos públicos de antecedentes y oposición por un jurado compuesto por tres titulares de cátedra de universidades nacionales, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dos legisladores. Los legisladores serán elegidos por mayoría absoluta de votos de cada Cámara, los académicos serán designados por sorteo público por una terna compuesta por los decanos de las facultades de Derecho y el miembro de la Corte Suprema de igual forma de una terna propuesta por el presidente de la misma. Los integrantes del jurado durarán dos años en sus funciones y tendrán su asiento en la ciudad de Buenos Aires pero podrá constituirse en otro lugar si lo considera más conveniente para sus fines".

2º) Disidencia con respecto al gobierno de Ministerio Público

En nuestro proyecto hemos propuesto un consejo consultivo para cada rama de Ministerio Público, su objeto es reducir la discrecionalidad y la posible arbitrariedad; que puedan darse en las cabezas de cada una de las ramas de Ministerio Público.

Lo entendemos como expresión de una arquitectura participativa, en la política institucional de Ministerio Público.

La presidencia de los consejos consultivos sería ejercida por el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación respectivamente; la importancia de crear y sostener ámbitos democráticos en los órganos que nos proponemos legislar, es fruto de creer ciertamente en que la participación contribuya a la eficacia, a la razonabilidad y a la transparencia de las políticas institucionales de la importancia que tiene el servicio de justicia.

Concebimos un consejo consultivo que resulte eficiente en la ejecución de las políticas y que contribuya interactuando con la cabeza del órgano en cuestión. Nos parece que un ámbito consultivo no vinculante, pero con funcionamiento regular, y que estos consejeros surjan de cada estamento elegidos democráticamente por sus pares, y la periodicidad de sus mandatos, les da a esta propuesta el carácter democrático y participativo que proponemos.

Proponemos incorporar el siguiente texto con el título de:

Gobierno y administración general y financiero del Ministerio Público

Gobierno y administración

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación tendrán a su cargo el gobierno y

la administración general del Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en la presente ley y los reglamentos que dicten y sin perjuicio de las atribuciones que esta ley asigna a sus respectivos consejos consultivos. En tal carácter, les corresponde:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos del personal, disciplinario, de sustitución de los magistrados integrantes del Ministerio Público y todos aquellos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones;
- c) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas actividades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuera necesaria;
- d) A los efectos de asegurar su autarquía financiera el Ministerio Público, con crédito presupuestario propio, el procurador general y el defensor general elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiendo incorporarlas en el proyecto de presupuesto general de la Nación. De no haber acuerdo entre el procurador y el defensor, elevarán los proyectos por separado correspondientes a cada rama del Ministerio Público;
- e) Disponer la contratación de abogados especializados, quienes se desempeñarán en calidad de asesores cuando la complejidad del proceso así lo exija.
- f) El procurador general y el defensor general remitirán conjuntamente o por separado a las presidencias de ambas Cámaras un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público, concurriendo a brindar las explicaciones que los requieran con motivo de los informes;

g) El consejo consultivo para cada rama del Ministerio Público estará integrado por un funcionario por cada estamento, que se elegirá por voto de sus pares, durarán cinco años en sus funciones, no podrán ser reelegidos para otro período consecutivo y sus remuneraciones serán equivalentes a las correspondientes para el estamento al que pertenecen. El consejo asistirá en forma permanente en todos los asuntos de la gestión del procurador general o del defensor y la opinión del consejo será obligatoria para todos los temas en los que estos magistrados deban intervenir o decidir. Las recomendaciones del consejo no serán vinculantes para el procurador o el defensor, pero cuando la resolución sea contraria a la recomendación, el consejo podrá insistir con los dos tercios de los votos del órgano.

En este caso el procurador o el defensor deberán decidir de acuerdo a lo resuelto por el respectivo consejo.

Los consejos consultivos serán presididos por el procurador general y por el defensor general, respectivamente, y deberán sesionar por lo menos dos veces al mes, pudiendo autoconvocarse por mayoría absoluta de sus miembros".

**39) Disidencia respecto al tribunal de enjuiciamiento
(artículo 19) de dictamen de comisión**

Pensamos que también debe tener presencia y participación el ámbito académico que compone el jurado de designación.

La participación académica de dos titulares de cátedra de universidad nacional, elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos propuestos por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, además de ser lógica porque participan en el jurado que los califica, la participación del ámbito académico, va a garantizar, un considerable nivel teórico y técnico, en la determinación que el cuerpo tome.

Proponemos el siguiente texto:

"El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general de la Nación y de los restantes magistrados y fiscales del Ministerio Público, se efectuará por un tribunal integrado por los abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán elegidos dos por mayoría y uno por minoría por el voto directo de todos los abogados de la matrícula federal; por dos titulares de cátedra de universidad nacional elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos propuesta por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales y por cuatro legisladores designados dos por cada Cámara, por dos tercios de votos de sus miembros. El tribunal se integrará por igual número de miembros suplentes.

El tribunal una vez constituido elegirá su presidente por sorteo, que rotará cada seis meses y todos sus integrantes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Cuando hayan vencido los plazos de las designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Como fiscal ante el tribunal actuará un diputado nacional elegido por la Cámara por mayoría de votos y durará en sus funciones por dos años.

La defensa del acusado estará a cargo del abogado de confianza que designe o en su caso un defensor oficial proveerá su defensa".

**49) Disidencia con respecto a los artículos 69 y 71,
inciso a), cuyo título es: subsistencia de cargos**

En este sentido comparto en general este artículo en cuanto a la estabilidad de personal del Ministerio Público. Pero entiendo que la homologación automática y vitalicia no puede abarcar al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación.

Sin duda empezar bien es que los designe el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tal como lo explicita el artículo 59 del dictamen de comisión.

La designación de los funcionarios que son cabeza de las ramas del Ministerio Público debe ajustarse a partir de la sanción del presente proyecto de ley, a la legalidad en todos sus aspectos, lo que implica su designación y la participación de esta Honorable Cámara en el debate y trámite mencionado y su consiguiente acuerdo.

Graciela Fernández Meljide.

ANTECEDENTES

Texto del proyecto presentado por los senadores
De la Rúa y Genoud

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización del Ministerio Público

Definición

Artículo 1º — El Ministerio Público, cuya estructura y funciones determina esta ley, es órgano del Poder Judicial de la Nación. Goza de independencia orgánica y funcional. En representación de los intereses generales de la sociedad, tiene por misión primordial la defensa del orden jurídico y de la causa pública en todos los casos y asuntos en que tales intereses lo requieran. El Ministerio Público es único e indivisible, cada uno de sus funcionarios cuando actúa en un procedimiento lo representa íntegramente.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas;
- c) Los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los fiscales generales de la Procuración General de la Nación; los fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal y ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal y ante las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las provincias; el procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo; el defensor público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores públicos ante las referidas cámaras;
- d) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y ante el Tribunal del Juicio en el proceso penal; los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y los defensores públicos ante los jueces de primera instancia;
- e) Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

Designaciones. Requisitos para acceder a los cargos

Art. 3º — Todos los integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación, a excepción de los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos, que serán nombrados por el procurador general de la Nación.

Las designaciones para ocupar cargos en el Ministerio Público se efectuarán respetando los antecedentes de quienes los integran. En el caso de los fiscales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el Poder Ejecutivo escogerá los candidatos de una propuesta en terna que hará el procurador general respetando la regla precedente de este mismo párrafo.

Para ejercer el cargo de procurador general de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y para el desempeño de los restantes cargos deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de cámara o de primera instancia según las correlaciones que resultan del artículo 5º, incisos b) y c) o secretario de cámara en el caso del inciso d) del mismo artículo.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones en el Ministerio Público sin contar con dos años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones judiciales que requieren ese título.

Estabilidad e independencia funcional.

Principios de actuación

Art. 4º — El Ministerio Público ejerce imparcialmente la defensa del interés público sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, con plena independencia funcional respecto de los poderes del Estado. Los magistrados que lo integran gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. Sólo podrán ser juzgados o removidos por las causas establecidas para los jueces de la Nación en el artículo 45 de la Constitución Nacional, por el tribunal y mediante el procedimiento que se establece en el título XI.

Ejerce sus funciones por medio de sus órganos propios ajustados a los principios de legalidad, imparcialidad y dependencia jerárquica con arreglo a las leyes.

Remuneraciones y subordinación jerárquica

Art. 5º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinan del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación percibirá una retribución equivalente a la de ministro de la Corte Suprema de Justicia;
- b) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal y ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal y las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las provincias, el procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo, el defensor público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores públicos ante las referidas cámaras, percibirán una remuneración equivalente a la juez de cámara;

c) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y ante el tribunal de juicio en el proceso penal, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los defensores públicos ante los jueces de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de jueces de ese rango;

d) Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos que esta ley prevé, percibirán una remuneración equivalente a la de secretario de cámara.

Las equipaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equiparación se establece en cuanto a jerarquía, autoridad, protocolo y trato.

Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo. Los funcionarios que asisten a un superior jerárquico deben obedecer sus instrucciones.

Incompatibilidades

Art. 6º — Quienes integran el Ministerio Público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio, salvo en sus propios asuntos o en los de los cónyuges, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hiciera en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establece la ley respecto de los jueces de la Nación. Estarán exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo responder por escrito bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Inmunidades

Art. 7º — Los integrantes del Ministerio Público, en cuanto concierne al cumplimiento de sus funciones, no podrán ser molestados ni enjuiciados por las opiniones que vertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos. Las cuestiones que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten al ejercicio de sus funciones, provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación, que tendrá la facultad de resolverlas o en su caso poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Recusaciones y excusaciones

Art. 8º — Los integrantes del Ministerio Público podrán ser recusados por las causales establecidas a su respecto en las leyes procesales que rijan las causas en que actúan, sin admitirse la recusación sin causa.

En los mismos supuestos deberán abstenerse de intervenir en las causas que les fueren asignadas. Podrán hacerlo también cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstan a su actuación imparcial.

Juramento

Art. 9º — Los integrantes del Ministerio Público, al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento

de desempeñarlos fielmente, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación lo hará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los restantes integrantes del Ministerio Público lo harán ante el procurador general de la Nación o ante las cámaras respectivas, según corresponda.

Sustituciones

Art. 10. — En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público, serán reemplazados en la forma que establecen las leyes y los reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme a la reglamentación que dicte el procurador general. Si el impedimento lo tuviere este último, se aplicará lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.

Correcciones disciplinarias

Art. 11. — Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones y apercibimientos a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las correcciones disciplinarias aplicadas a los litigantes. El tribunal comunicará al superior del sancionado la medida impuesta, como asimismo toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Parentesco con jueces

Art. 12. — No podrá ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los magistrados judiciales ante quienes desempeñe su ministerio.

TÍTULO II

De las funciones del Ministerio Público

Competencia. Facultades y deberes

Art. 13. — Corresponde al Ministerio Público:

- Representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera;
- Ejercer la acción penal pública en las causas criminales y correccionales que tramiten ante los tribunales federales o nacionales de la Capital Federal, en la forma y con el alcance establecido en el Código Procesal Penal de la Nación;
- Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en el artículo 25 de esta ley y en otras leyes y reglamentos;
- Ejercer la representación procesal de los intereses colectivos o difusos, promoviendo la acción tendiente a tutelarlos;
- Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas concernien-

tes a la tutela de los derechos de los menores, incapaces e inhabilitados carentes de representación legal, o cuando fuere necesario suplir la inacción de sus representantes legales o de las personas que los tuvieran a su cargo o cada vez que sea necesaria autorización judicial para la realización de determinados actos;

- Defender la jurisdicción de los tribunales y la competencia judicial;
- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la Nación y el orden público nacional;
- Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República, así como por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo y sustantivo;
- Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables, cuando fuesen pobres o estuvieren ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas.

Facultades de investigación

Art. 14. — Los integrantes del Ministerio Público en cualquiera de sus niveles, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales o a los particulares, así como a recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, atendiendo a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y medios a su alcance.

Alcance de su actuación judicial

Art. 15. — Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con las limitaciones que prevean las leyes procesales.

Los dictámenes y requerimientos del Ministerio Público merecerán siempre la consideración de los jueces ante los que actúen, quienes no están obligados a tratar todos los argumentos aducidos, sino sólo los que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

Límites funcionales

Art. 16. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo. Ello no obstante, ante un requerimiento fundado de organismos públicos, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de su competencia funcional.

Relación con el Poder Ejecutivo nacional

Art. 17. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Pú-

blico la existencia de todo delito que llegare a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública; ello sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa como parte afectada en representación del Estado.

Asimismo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación a fin de proponerle la emisión de instrucciones generales, tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública y la persecución penal.

TÍTULO III

Del procurador general de la Nación

Art. 18. — El procurador general de la Nación durará 4 años en sus funciones y podrá ser reelegido. Tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público y la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema, en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 101 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación para preservar el debido proceso legal;
- c) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela.

A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando según la razonable discreción del tribunal corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o fuesen manifiestamente infundados el recurso o la queja, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general;

- d) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encontrare comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso b) de este artículo;
- e) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- f) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema en los casos que corresponda y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público para instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- g) Intervenir, en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- h) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;

i) Convocar, por lo menos dos veces al año, a una reunión de consulta, a la que deberán asistir todos los magistrados mencionados en el artículo 2º, inciso b), con el objeto de:

- a') Considerar los informes anuales que se presenten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21, inciso d);
 - b') Procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público en los temas de su competencia;
 - c') Intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio;
 - d') Tratar las demás cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- j) Imponer a los integrantes del Ministerio Público, por incumplimiento de los deberes que les incumben, las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa de hasta el 10 % de sus retribuciones y suspensión no mayor de treinta días. Estas sanciones serán apelables ante la Corte Suprema de Justicia;
 - k) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general o defensor público de cámara la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o la dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
 - l) Delegar sus funciones en los fiscales generales ante la Corte Suprema, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de esta ley;
 - ll) Efectuar la propuesta en tema a que se refiere el artículo 3º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
 - m) Promover la sustanciación de juicio político ante la Cámara de Diputados de la Nación respecto de los jueces, así como el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el título XI, cuando a su juicio unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 45 de la Constitución Nacional;
 - n) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
 - ñ) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, en los casos en que lo juzgue pertinente, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación, del modo o forma como se hace efectiva su aplicación o la reglamentación de las leyes;
 - o) Disponer, que por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en el artículo 13

de esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.

Cuando actuaren en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, dichos magistrados podrán dejar a salvo su opinión personal;

- p) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TITULO IV

De los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia

Art. 19. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación, habrá dos fiscales generales ante la Corte Suprema, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia; en estos supuestos, salvo opinión fundada de aquél, el reemplazo se efectuará por orden de antigüedad;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas sometidas a su dictamen;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TITULO V

De los fiscales generales de la Procuración General de la Nación

Art. 20. — Los fiscales generales y adjuntos de la Procuración General de la Nación asistirán al procurador general y cumplirán las directivas que éste imparta de conformidad con los incisos h), k) y o) del artículo 18 y lo que establezca el reglamento de superintendencia. Los fiscales auxiliares tendrán las funciones que les asigne dicha reglamentación bajo las directivas del procurador general o de quien éste asigne.

TITULO VI

Del fiscal general de Investigaciones Administrativas

Art. 21. — Corresponde al fiscal general de Investigaciones Administrativas:

- a) Ejercer las funciones y facultades previstas en la ley 21.383, no de suadas por la presente ley;
- b) Proponer al procurador general la designación de los fiscales adjuntos de la Fiscalía a su cargo;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y someterlo a la aprobación del procurador general;
- d) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal

de la Fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley, de la ley 21.383, del reglamento de superintendencia del ministerio público y del reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;

- e) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión de la Fiscalía;
- f) Requerir del procurador general la solicitud de juicio político conforme lo previsto en el inciso m) del artículo 18 de la presente ley;
- g) Responder los pedidos de informe que le formule el procurador general de la Nación;
- h) Ofrecer su colaboración en los asuntos de su competencia, si lo considerase útil, al fiscal a cargo de la acción pública, quien, por igual materia, podrá solicitarlo. En caso de conflicto generado por la aplicación de este inciso, dirimirá en forma inapelable el procurador general;
- i) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y los reglamentos.

TITULO VII

De los fiscales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 22. — Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas asistirán al fiscal general y cumplirán las directivas que les imparta de conformidad con lo previsto en esta ley, y en la ley 21.383. Asimismo, los fiscales intervendrán en las investigaciones que les asigne el fiscal general, con el alcance y de conformidad con lo dispuesto en la ley 21.383.

TITULO VIII

De los fiscales generales ante las cámaras de apelaciones y ante la Cámara de Casación Penal

Art. 23. — Corresponde a los fiscales generales ante las cámaras de apelaciones y ante la Cámara de Casación Penal:

- a) Promover ante las mismas cámaras de ejercicio de la acción pública o continuar ante ellas la intervención que el ministerio público hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Controlar el correcto funcionamiento de la superintendencia que ejercen las cámaras de apelaciones, a cuyo fin podrán requerir los informes que consideren necesarios;
- c) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que

actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional, como en lo concerniente a la superintendencia. En ambos casos podrán aconsejar la conveniencia de iniciar el trámite del juicio político a integrantes del Poder Judicial;

- e) Ejercer superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- f) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- g) Responder los pedidos de informes que les solicite el procurador general de la Nación;
- h) Peticionar al reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- i) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;
- j) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que corresponden, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público en el artículo 13 y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- k) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 24. — Corresponde al procurador general del Trabajo o al subprocurador general, en su reemplazo, el ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 12 y 13 de la ley 18.345, así como las enunciadas en el artículo precedente. Estas últimas se aplicarán también a los fiscales generales ante las cámaras federales del interior del país y, en cuanto fuere pertinente, a los fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de las establecidas en los artículos 5º a 7º de la ley 23.473.

TÍTULO IX

De los fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 25. — Corresponden a los fiscales ante los jueces de primera instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón de grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Art. 26. — En especial le corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que

puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia.

Intervendrán igualmente, en forma ineludible, en representación de la sociedad, en los casos en que el interés fiscal esté comprometido.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder, en miras al interés público.

Art. 27. — Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal, deberán dar intervención inmediata a los fiscales ante la justicia criminal y correccional cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley confiere.

Art. 28. — Los fiscales ante la primera instancia deberán informar a las correspondientes fiscalías ante las cámaras de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

TÍTULO X

De los defensores públicos

Art. 29. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma autónoma o junto con los representantes individuales; con tal objeto los tribunales judiciales de las diferentes instancias deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare involucrado;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 13, inciso f) de esta ley y en los artículos 255, 491 a 494 y concordantes del Código Civil, así como las indicadas con toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas, tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas que estimaren pertinentes res-

pecto de menores que exteriorizaren reiteradas faltas de conducta o se encuentren expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieren ser conjuradas por los padres o personas que los tengan a su cuidado. Tales medidas no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al procurador general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha o desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y extención de personas.
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fueren consultados por los tutores o curadores públicos.

Art. 30. — Los defensores de menores e incapaces ante las cámaras de apelaciones tendrán además, en lo pertinente, las atribuciones que prevé el artículo 23, en particular los incisos d), e), g) y h). El defensor ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil conservará la dirección del Registro de Incapaces de conformidad con las disposiciones del decreto 282/81.

TITULO XI

De los tutores y curadores públicos

Art. 31. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán, en el trámite de las actuaciones judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueran huérfanos o se encontraren abandonados por sus padres, tutores, cuidadores o encargados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren personas que reúnan las condiciones legales e idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 32. — Serán funciones de los tutores y los curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso a algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar de su acervo patrimonial, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de con-

fornidad con lo estatuido por el artículo 152 bis, última parte, del Código citado;

- c) Llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargos que se les formularen por malos tratamientos u omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallaren a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrán también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de los mismos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.

TITULO XII

Del enjuiciamiento de los miembros del Ministerio Público

Art. 33. — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación se llevará a cabo por el procedimiento establecido al efecto para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso de los magistrados mencionados en el artículo 29, incisos b), c) y d) de esta ley, el enjuiciamiento se efectuará por un tribunal integrado por tres ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dos abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán desinsaculados de la lista de conjuces de la Corte Suprema.

Los demás funcionarios cuyo nombramiento efectúa el procurador general, podrán ser removidos por éste, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Art. 34. — Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento previsto en el artículo precedente, serán nombrados por el Poder Ejecutivo por dos años y podrán ser reelegidos. Una vez integrado, el tribunal designará su presidente de entre los ex jueces de la Corte Suprema que hubieren sido convocados.

Como fiscal ante este tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o en su defecto un abogado que reúna las condiciones establecidas en el artículo 33.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará el defensor oficial ante la Corte Suprema.

El tribunal designará un secretario de actuación que no podrá ser magistrado, ni funcionario en actividad.

Los integrantes del tribunal y funcionarios auxiliares, serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 35. — El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Art. 36. — Toda persona capaz podrá denunciar ante el Tribunal de Enjuiciamiento la existencia de hechos que den lugar a la remoción de un miembro del Ministerio Público. La denuncia deberá ser hecha por escrito y con firma de letrado.

En caso de darse curso a la denuncia, el procedimiento ante el tribunal será oral y público y se regirá por las normas del Código Procesal en lo Penal, en cuanto fueren aplicables. La etapa instructoria estará a cargo del fiscal, quien deberá sujetar su actuación a lo dispuesto por el artículo 196 y concordantes del código citado.

Art. 37. — Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar las medidas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que durase la suspensión, el imputado percibirá el 50 % de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio. Si fuese absuelto, percibirá el total de lo embargado.

Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del encausado e inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos.

Si la remoción se fundare en hechos que puedan constituir delitos de acción pública, o si ello resultare de la prueba, se dará intervención a la justicia en lo penal.

Si la decisión fuese absolutoria y se hubiere dispuesto la suspensión del imputado, éste se reintegrará de inmediato a sus funciones.

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 38. — Todo integrante del Ministerio Público podrá denunciar excesos cometidos por cualquiera de sus pares en el ejercicio de sus funciones, sea ante los jueces intervinientes en las causas en trámite, o ante el procurador general de la Nación a los efectos del ejercicio del poder de superintendencia que le otorga esta ley.

Art. 39. — Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no tengan por esta ley una forma especial de designación, serán nombrados por el procurador general de la Nación, quien podrá crear y suprimir cargos y delegar esta atribución en los magistrados de inferior jerarquía.

Art. 40. — Los actuales integrantes del Ministerio Público cuyos cargos se mencionan a continuación, pasarán a desempeñarse en los que en cada caso se indican, de acuerdo con las equiparaciones siguientes:

- a) Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema, como fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y los secretarios de la Procuración General de la Nación, como fiscales generales de la Procuración General de la Nación;

b) Los procuradores fiscales de cámara y fiscales de cámara, como fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal o ante las cámaras nacionales o federales de apelación que corresponda;

c) El procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo, conservan su actual denominación;

d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas conservan su actual denominación;

e) Los procuradores fiscales y agentes fiscales de los juzgados federales y nacionales de primera instancia de la Capital Federal, como fiscales ante los jueces de primera instancia o ante el Tribunal de Juicio en el proceso penal;

f) Los asesores de menores e incapaces de segunda o de primera instancia, como defensores públicos ante las respectivas cámaras o ante los jueces de primera instancia, según corresponda;

g) Los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación como fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación; y los prosecretarios letrados de las mismas, como auxiliares de la Procuración General de la Nación;

h) Los secretarios de los fiscales y de los asesores de menores de cámara y los secretarios letrados de la Procuración General del Trabajo, como fiscales auxiliares de dichas dependencias.

Art. 41. — Las fiscalías del Trabajo que el procurador general de la Nación de ermine, pasarán a constituir las defensorías públicas de menores e incapaces para la Justicia Nacional del Trabajo, y sus titulares pasarán a desempeñarse en esta última función de acuerdo a los términos de esta ley y las disposiciones pertinentes de la ley 18.345.

Créase el cargo de defensor público ante las cámaras nacionales del Trabajo y de la Seguridad Social, quien tendrá las funciones que esta ley determina en los títulos VIII y IX respectivamente.

Art. 42. — Los cargos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público actualmente existentes, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejercen al momento de su entrada en vigencia.

Art. 43. — Las erogaciones necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público, de acuerdo con las previsiones de la presente ley, provendrán de la partida asignada al Poder Judicial de la Nación.

Art. 44. — A partir de la vigencia de la presente ley, el ejercicio de la acción pública ante los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal, corresponderá a los integrantes del Ministerio Público que ella determina.

Derógase el título VII de la ley 1.893 y los artículos 3º, inciso d), en cuanto se refiere al ejercicio de la acción pública, y 4º de la ley 21.383, así como toda otra disposición que se oponga a la presente.

Los artículos 8º a 16 de la ley 18.345 se adecuarán a lo estatuido por esta ley en cuanto a la denominación, jerarquía y atribuciones de los magistrados y funcionarios respectivos.

El artículo 15 de la ley 18.345 quedará redactado en la forma siguiente: "Los defensores públicos de menores o incapaces ante la Justicia Nacional del Trabajo, actuarán en ambas instancias e intervendrán en todo asunto judicial o administrativo que interese a la persona o bienes de los menores y otros incapaces, con los alcances que se desprendan del artículo 12, inciso b), de esta ley y la Ley Orgánica del Ministerio Público".

Art. 45. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán a su superior jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que por su importancia, trascendencia o complejidad requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas.

Art. 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa. — José Genoud.

Texto del proyecto presentado por el senador Solana

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DEL

MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Disposiciones generales

Definición

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Integración

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Ministerio Público Fiscal. Integración

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por:

- a) El procurador general de la Nación y los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;
- b) Los fiscales generales de la Procuración General de la Nación;
- c) El fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;

- e) Los fiscales generales ante los Tribunales Colegiados de Casación, de Segunda Instancia y de Instancia Unica;
- f) Los fiscales ante los jueces de primera instancia;
- g) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia.

Ministerio Público de la Defensa. Integración

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por:

- a) El defensor general de la Nación y los defensores generales adjuntos;
- b) Los defensores públicos de Menores e Incapaces y de Pobres y Ausentes y los defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- c) Los defensores públicos de Menores e Incapaces y los defensores públicos y los defensores públicos de Pobres y Ausentes ante los jueces de primera instancia;
- d) Los tutores y curadores públicos que regula la presente ley.

Designación

Art. 5º — El procurador general de la Nación y el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación.

Igual procedimiento se observará para la designación de los demás integrantes del Ministerio Público, a cuyo efecto el procurador general y el defensor general, pondrán respectivamente, los postulantes a los cargos previstos en los artículos 3º y 4º, mediante una terna de candidatos que será elevada al Poder Ejecutivo nacional.

Se exceptúa del procedimiento previsto en el párrafo precedente a los fiscales auxiliares, quienes serán designados directamente por el procurador general de la Nación.

Estabilidad

Art. 6º — Los integrantes del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta, y sólo podrán ser removidos mediante los procedimientos previstos por la presente ley.

El procurador general de la Nación, el defensor general y los demás integrantes del Ministerio Público, podrán ser acusados ante el Tribunal de Enjuiciamiento, regulado en los artículos 38 a 45 de esta ley por las causales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

En el caso de los funcionarios cuyo nombramiento efectúa directamente al procurador general, la remoción será dispuesta por éste siempre que haya tramitado el proceso legal establecido al efecto.

Principios de la institución: independencia. Unidad, indivisibilidad y subordinación jerárquica

Art. 7º — El Ministerio Público es independiente de los demás Poderes del Estado. Es único e indivisible, cada uno de sus integrantes cuando actúa en un proce-

dimiento lo representa íntegramente, sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores, tutores y curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asistan y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo.

Autarquía financiera

Art. 8º — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente, el Ministerio Público dispondrá de una partida especial del presupuesto.

Remuneraciones. Intangibilidad

Art. 9º — En ningún caso, las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público podrán ser disminuidas.

Condiciones para el ejercicio de los cargos

Art. 10. — Para ser procurador general de la Nación y defensor general de la Nación se exigen las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iguales condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y de defensor general adjunto.

Para el desempeño de los cargos previstos en los incisos b), c) y e) del artículo 3º, e inciso b) del artículo 4º se requieren las condiciones exigidas para ser juez de cámara. Para los cargos previstos en los incisos d) y f) del artículo 3º, e inciso c) del artículo 4º, las condiciones para ser juez de primera instancia.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones del Ministerio Público sin contar con tres años en el ejercicio profesional de la abogacía, o haber desempeñado funciones en el Poder Judicial de la Nación y/o en el Ministerio Público por más de dos años.

Incompatibilidades

Art. 11. — Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas por la ley respecto de los jueces de la Nación, los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer su profesión, a excepción de los casos en que actúen en asuntos propios, en las de sus cónyuges, ascendientes o descendientes o cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal.

Tampoco podrán desempeñar empleos, funciones u otras actividades, a excepción de la docencia o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad. Están exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo hacerlo por escrito mediante declaración jurada con las especificaciones correspondientes.

Parentesco

Art. 12. — No podrá integrar el Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes desempeñan su ministerio.

Inmunidades

Art. 13. — Los integrantes del Ministerio Público en cuanto concierne al cumplimiento de sus funciones, gozarán de las inmunidades y prerrogativas que acuerda el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Las cuestiones de privilegio que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones, provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el superior jerárquico, que tendrá la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas necesarias para preservar el normal desenvolvimiento de aquellas funciones.

Recusaciones y excusaciones

Art. 14. — Los miembros del Ministerio Público podrán ser recusados por las causales establecidas a su respecto en las leyes procesales que rijan las causas en que actúen, sin admitirse la recusación sin causa. También deberán abstenerse de intervenir cuando mediante graves motivos que impidan su actuación imparcial.

Juramento

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos fielmente, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, prestarán juramento ante el presidente del Senado. Los demás miembros prestarán juramento ante el procurador general o ante el defensor general, según el cargo de que se trate.

Sustituciones

Art. 16. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público serán reemplazados en la forma que establecen las leyes y reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17. — Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas correcciones disciplinarias que establecen las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, o al respeto debido a las personas del proceso. Serán recurribles ante el tribunal inmediato superior. El tribunal comunicará al superior jerárquico del funcionario sancionado la medida impuesta, como asimismo, toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

TÍTULO II**De las funciones del Ministerio Público**

Art. 18. — Le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Representar y defender el interés público, tanto en sede judicial como administrativa, de oficio o a solicitud de parte interesada, sean particulares o, quienes actúen en representación de algún organismo estatal. Para legitimar el pedido de los particulares bastará la justificación de un interés simple;
- b) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, en la forma y con el alcance previstos en el Código Procesal Penal de la Nación;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en la presente ley, otras leyes y reglamentos y también en aquellos supuestos de notoria inacción social en que el interés público se encontrase afectado;
- d) Vigilar el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- e) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo o sustantivo;
- f) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas; o siempre que fuere necesario para suplir la inacción de sus parientes, de las personas que los tuvieran a su cargo, y/o de sus representantes legales; o bien para controlar la gestión de estos últimos;
- g) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables, cuando fuesen pobres o estuviesen ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas;
- h) Defender la jurisdicción de los tribunales y la competencia judicial y administrativa;
- i) Intervenir en todos los casos en que se hallaren involucrados los intereses de la sociedad y el orden público.

Facultades de investigación

Art. 19. — Los integrantes del Ministerio Público en cualquiera de sus niveles para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los tribunales y a los organismos nacionales, provinciales, municipales o a los particulares; así como recabar la colaboración de las autoridades policiales y demás fuerzas de seguridad para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin, el personal y los medios a su alcance.

Alcance de su actuación judicial

Art. 20. — Las acciones públicas interpuestas por los integrantes del Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio carecen de carácter vinculante, para los jueces de la Nación, con las limitaciones previstas en las leyes procesales.

Límites funcionales

Art. 21. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento al Poder Ejecutivo. No obstante ello, los organismos públicos podrán —mediante resolución fundada—, efectuar consultas al Ministerio Público sobre materias propias de su competencia funcional.

Denuncia de delito

Art. 22. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Público a existencia de todo delito que llegue a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública; ello sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa, como parte afectada en representación del Estado.

TÍTULO III**Del procurador general de la Nación**

Art. 23. — Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público y las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal así como también la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Intervenir en las causas de jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia que prevé el artículo 101 de la Constitución de la Nación;
- c) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal debe tutelar.
A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando según la razonable discreción del Tribunal corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o fuesen manifiestamente infundados el recurso o la queja; supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general;
- d) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encontrara comprometido;
- e) Intervenir y dictaminar en las cuestiones de competencia sometidas a decisión de la Corte Suprema de Justicia;
- f) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema en los casos que corresponda y dar instruc-

ciones generales a los integrantes del ministerio público fiscal para instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

- g) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- h) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución de tareas entre sus integrantes, sus deberes y atribuciones, y supervisar su cumplimiento;
- i) Imponer a los integrantes del ministerio público fiscal, por incumplimiento de los deberes que les incumben las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa y suspensión;
- j) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal de cámara, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del ministerio público fiscal, de igual o diferente jerarquía cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
- k) Delegar sus funciones en los procuradores generales ante la Corte Suprema, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de esta ley;
- l) Promover la sustanciación del enjuiciamiento de los integrantes del ministerio público fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el título XII, cuando a su juicio se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- m) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- n) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, en los casos que lo juzgue pertinente, la opinión del ministerio público fiscal acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación, o del modo o forma como se hace efectiva su aplicación o la reglamentación de las leyes;
- o) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del ministerio público fiscal, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en el artículo 18 de esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.

Cuando actúen en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, los fiscales podrán dejar a salvo su opinión personal.

TÍTULO IV

De los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 24. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores adjun-

tos ante la Corte Suprema, a quienes además de las funciones que aquél les encomiende, les corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, excusación, recusación, ausencia, impedimento o vacancia; en estos supuestos, salvo opinión fundada de aquél, el reemplazo se efectuará por orden de antigüedad;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas sometidas a su dictamen;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TÍTULO V

De los fiscales generales de la Procuración General de la Nación

Art. 25. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación asistirán al procurador general y cumplirán las directivas que éste imparta de conformidad con los incisos h), i) y m) del artículo 21 y lo que establezca el reglamento de superintendencia.

TÍTULO VI

Del fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 26. — Al fiscal general de Investigaciones Administrativas le corresponde:

- a) El ejercicio de las funciones previstas en el artículo 32, incisos a), b) y c) de la ley 21.383 y de las facultades establecidas en el artículo 6º del mismo cuerpo legal;
- b) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal de la Fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley, de la ley 21.383 y del Reglamento Interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y someterlo a la aprobación del procurador general;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión de la Fiscalía;
- e) Responder los pedidos de informes que le formule el procurador general de la Nación;
- f) Desempeñar las demás funciones que le encomienden las leyes y los reglamentos.

TÍTULO VII

De los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 27. — En relación inmediata con el fiscal general habrá cinco fiscales adjuntos, cuyas funciones serán asistir al fiscal general y cumplir las directivas impartidas

das por éste, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo anterior. Asimismo, les corresponde intervenir en las investigaciones que les asigne el fiscal general, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º, inciso c) de la ley 21.383, con el alcance fijado en el artículo 7º de la misma.

TITULO VIII

De los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 28. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- a) Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Controlar el correcto funcionamiento de la superintendencia que ejercen los tribunales, a cuyo fin podrán requerir los informes que consideren necesarios;
- c) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional como en lo concerniente a la superintendencia;
- e) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores y el personal de la Fiscalía a su cargo, en el marco de la presente ley y el Reglamento de Superintendencia del Ministerio Público;
- f) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- g) Evacuar los informes que les solicite el procurador general de la Nación;
- h) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria y requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- i) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- j) Desempeñar en la esfera de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia, promoviendo las acciones públicas que corresponden, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al ministerio público en el artículo 16 y las demás encomendadas por las leyes y reglamentos.

TITULO IX

De los fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 29. — Corresponde a los fiscales ante los jueces de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal y Nacional de la Capital Federal:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa; salvo aquellos casos que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en toda causa en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de los testigos ofrecidos en la causa y verificado el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, así como los recursos administrativos dirigidos a la averiguación de delitos o de infracciones administrativas, cuidando de instalarlos cuando se trata de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder en miras al interés público;
- e) Intervenir en los procesos de amparo de *habeas corpus*.

Art. 30. — Corresponde a los fiscales ante la Primera Instancia de la Justicia Federal en lo Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo, y de la Justicia Nacional de la Capital Federal en los referidos fueros:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales o administrativos en que el interés público los requiera, de oficio o a requerimiento de cualquier persona, o como consecuencia de las vistas de los expedientes que los jueces pongan a su consideración, a fin de asegurar el respeto del debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación; así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico histórico o paisajístico, y en todos los demás casos que las leyes establezcan;
- b) Ejercer todas las acciones y recursos previstos en la legislación a nombre del Ministerio Público, en el trámite de sus presentaciones ante

los órganos judiciales administrativos; en ausencia de prescripciones legales expresas, quedan legitimadas para ejercer la representación del interés público en las referidas instancias;

- c) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervegan, y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o recibidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso legal;
- d) Intervenir en forma ineludible en todos aquellos casos que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y del Estado, así como en todos aquellos asuntos en los que el Ministerio Público debe ejercer funciones por mandato de la ley;
- e) Intervenir, según la especialidad de su materia, en la gestión y administración de las fundaciones y asociaciones jurídicas de bien público, toda vez que tuvieran conocimiento de que el interés público, se encontrase afectado, o en peligro de serlo con el objeto de reclamar ante los órganos administrativos de control o ante la autoridad judicial, que se proceda a reparar el bien tutelado;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia, en los procesos de amparo tramitados en los tribunales ante los que ejercen su ministerio, así como en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

TÍTULO X

De los fiscales auxiliares de las fiscalías de Primera Instancia

Art. 31.—Corresponde a los fiscales auxiliares de las fiscalías de Primera Instancia:

- a) Sustituir al fiscal titular cuando éste así lo resuelva y en los casos de licencia, excusación, recusación, ausencia, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular de las causas sometidas a su dictamen y asistirlo en el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO XI

Ministerio Público de la Defensa, Defensor general de la Nación

Art. 32.—Corresponde al defensor general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas plan-

teadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores e incapaces interesados. El defensor general también actuará, cuando hubiera intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa de Pobres y Ausentes;

- c) Disponer de oficio o a pedido de un defensor público de Menores e Incapaces o de Pobres y Ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
- d) Designar defensores generales adjuntos de Menores e Incapaces y de Pobres y Ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores e incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres y ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- e) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de Pobres y Ausentes;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- g) Delegar sus funciones en los defensores generales adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta ley;
- h) Promover la sustanciación del enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el título XVI, cuando a su juicio se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- i) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- j) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución de tareas entre sus integrantes, sus deberes y atribuciones, y supervisar su cumplimiento;

- k) Imponer a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, por incumplimiento de los deberes que les incumben las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa y suspensión.

TITULO XII

De los defensores generales adjuntos

Art. 33. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes les corresponderán las siguientes funciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general en caso de licencia, recusación, excusación, ausencia, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

TITULO XIII

De los defensores públicos de menores e incapaces

Art. 34. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma directa o juntamente con los representantes individuales. Con ese objeto, los tribunales de las diferentes instancias deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes toda vez que aquel interés se hallare involucrado;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 18, inciso f) de esta ley y los artículos 255, 491 a 494 y otros del Código Civil, así como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces o inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas disciplinarias, correccionales o de seguridad que estimaren pertinentes respecto de menores que exteriorizaron reiteradas faltas de conducta o que se encontraren expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieran ser conju-

radas, por los padres o personas que los tengan a su cuidado;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informadas a las autoridades judiciales y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación sobre lo concerniente al desenvolvimiento relativo a la atención y cuidado de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance previsto por la ley 22.914 sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fúeren consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) El defensor ante las cámaras nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial ejercerá la dirección del Registro de Menores e Incapaces creado por el decreto 282/81, el cual integrará el Ministerio Público.

TITULO XIV

De los defensores públicos de Pobres y Ausentes

Art. 35. — Los defensores públicos de Pobres y Ausentes en las instancias y fueros en que actúen, tendrán a su cargo la función indicada en el artículo 18 inciso g); a cuyo fin serán designados en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y representación en juicio de quienes invocaren o justificaren pobreza o se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos. A ellos incumbe también la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional, siempre que fueren convocados al efecto.

En todos los casos tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos y de procurar hallarlos cuando estuvieren ausentes.

Deberán, asimismo, evacuar las consultas que les soliciten las personas carentes de recursos, asistirles en los trámites judiciales pertinentes, y en su caso, patrocinarias para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

También les corresponde asumir la defensa de las personas denunciadas como dementes o inhabilitados, cuando fueren convocados al efecto.

TITULO XV

De los tutores y curadores públicos

Art. 36. — Los jueces federales y los nacionales de la Capital Federal designarán en el trámite de las actuaciones judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueren huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren personas que reúnan las condiciones legales o idoneidad necesaria para desempeñar tales cargos.

Art. 37. — Serán funciones de los tutores o curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso al ejercicio de algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar su acervo patrimonial, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de conformidad con lo estatuido por el artículo 152 bis, última parte, del código citado;
- c) Llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargos que se les formularen por malos tratamientos u omisiones de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallaren a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrán también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas e intereses puestas a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de los mismos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.

TÍTULO XVI

Del Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 38. — De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la presente, los integrantes del Ministerio Público podrán ser acusados por las causales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y de acuerdo con el procedimiento regulado en este título.

Integración

Art. 39. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros:

- a) Dos ex integrantes del Ministerio Público que se hayan desempeñado en el cargo de procurador general de la Nación o defensor general de la Nación;

b) Dos senadores nacionales y dos diputados nacionales, designados por las respectivas Cámaras;

c) Tres abogados con veinte años de ejercicio profesional que serán desinsaculados de la lista de conjuces de la Corte Suprema.

Todos los integrantes deberán ser designados con la suficiente antelación a los efectos de que el tribunal esté constituido el 30 de abril de cada año.

Durarán un año en el ejercicio de las funciones y podrán ser reelegidos.

Presidencia

Art. 40. — El presidente se designará por sorteo y durará un año en su cargo. La presidencia será ocupada en forma rotativa por todos los miembros del tribunal. Ningún miembro podrá ser designado nuevamente presidente hasta tanto cada uno de los miembros haya ejercido el cargo.

Art. 41. — Como fiscal ante el tribunal actuará un ex procurador general, o en su defecto, un abogado que reúna los requisitos aludidos, artículo 39, inciso c).

En calidad de defensor de oficio actuará un defensor público ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única. En caso de ausencia de este último, el defensor oficial proveerá a su defensa.

El tribunal designará un secretario de actuación que no podrá ser funcionario en actividad del Ministerio Público.

Los integrantes del tribunal y los funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 42. — El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Procedimiento

Art. 43. — Toda persona capaz podrá denunciar por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento la existencia de hechos que puedan dar lugar a la remoción de un miembro del Ministerio Público.

El tribunal, en plenario, podrá rechazar *in limine* la denuncia formulada.

En caso de admitirse, el procedimiento ante el tribunal será oral y público y se regirá por las normas del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto fueren aplicables.

La etapa instructoria estará a cargo del fiscal quien deberá sujeta a su cometido a lo dispuesto por el artículo 190 y concordantes del código citado.

Suspensión

Art. 44. — El acusado podrá ser suspendido en sus funciones por el tribunal durante el curso del proceso, pudiendo disponer, según el caso, la suspensión total o parcial de sus haberes.

Sentencia

Art. 45. — El pronunciamiento del tribunal absolverá o destituirá al acusado, quien en el primer caso será reintegrado inmediatamente a sus funciones si hubiere sido suspendido; procediéndose si correspondiere a la restitución de los haberes respectivos.

En el segundo caso, el acusado resultará separado del cargo y, de resultar procedente, sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.

La condena podrá disponer la inhabilitación definitiva o provisoria del funcionario para ejercer cargos públicos.

El pronunciamiento condenatorio del tribunal deberá adoptarse por la mayoría de sus integrantes.

Art. 46. — Derógase toda ley que se oponga a la presente.

Art. 47. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge D. Solana.

Texto del proyecto presentado por el senador Alasino

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO**TITULO I****Principios generales**

Artículo 1º — *Definición.* El Ministerio Público es la institución esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que en representación de los intereses generales de la sociedad, defiende la legalidad, tutela el orden público y vela por la correcta administración de justicia. Es un órgano autónomo que tiene independencia orgánica y funcional y unidad de actuación.

El Ministerio Público, instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, está formado por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público Pupilar, cuya organización y funciones determina esta ley.

Art. 2º — *Composición - Ministerio Público Fiscal.* Integran el Ministerio Público Fiscal los siguientes funcionarios:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- e) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación;

- f) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 3º — *Composición - Ministerio Público Pupilar.* Integran el Ministerio Público Pupilar los siguientes funcionarios:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- d) Los defensores públicos adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior y los de la Defensoría General;
- e) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además integran el Ministerio Público Pupilar los tutores y curadores que esta ley prevé.

Art. 4º — *Designaciones.* El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado.

Los demás funcionarios mencionados en los incisos b), c), d) y e), de los artículos 2º y 3º serán designados por igual procedimiento. Para cada designación, el Poder Ejecutivo deberá elegir dentro de una terna presentada por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda, la que será integrada respetando los antecedentes de los candidatos.

Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores serán nombrados por el procurador general de la Nación y defensor general de la Nación, respectivamente.

Art. 5º — *Requisitos para acceder a los cargos.* El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deberán reunir las mismas condiciones que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Para el desempeño de los restantes cargos deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de cámara o de primera instancia, según las correlaciones que resultan del artículo 7º, incisos b) y c) o secretario de cámara en el caso del inciso d) del mismo artículo.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones en el Ministerio Público sin contar con tres años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Art. 6º — *Estabilidad.* Los integrantes del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta.

1. El enjuiciamiento y remoción del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

2. El enjuiciamiento y remoción de los demás miembros del Ministerio Público se regirá por lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Nacional.
3. La remoción de los magistrados cuyo nombramiento efectúa el procurador general o defensor general de la Nación, será efectuada por éstos, respectivamente, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Art. 7º — *Remuneraciones. Jerarquías.* Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, percibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los funcionarios mencionados en el inciso b) y c) de los artículos 2º y 3º, percibirán una retribución equivalente a la de juez de cámara;
- c) Los funcionarios mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 2º y 3º, percibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte mera instancia;
- d) Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 2º y los mencionados en el último párrafo del artículo 3º, percibirán una retribución equivalente a la de secretario de cámara.

Las equiparaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, trato, protocolo y autoridad.

Art. 8º — *Inmuntades.* Los integrantes del Ministerio Público gozan de las inmunidades funcionales y prerrogativas que acuerda el artículo 120 de la Constitución Nacional, y no podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones que viertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos. Las cuestiones que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Estarán exentos de la obligación de comparecer a prestar declaración como testigo ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Art. 9º — *Juramento.* Los integrantes del Ministerio Público, en todos sus rangos, al tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento ante sus superiores jerár-

quicos de desempeñarlos fiel y legalmente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación, en su calidad de jefe de Estado.

Art. 10. — *Incompatibilidades.*

1. Quienes integran el Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos, las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación;
2. No podrá ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes desempeña su ministerio.

Art. 11. — *Recusación y excusación.* Los integrantes del Ministerio Público podrán ser recusados por las mismas causales establecidas respecto de los jueces en las leyes procesales aplicables a las causas que intervengan.

Por los mismos motivos deberán declinar intervenir o inhibirse en las causas que les asignen. Podrán excusarse también cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstan a su actuación imparcial.

En ningún caso se admitirá la recusación sin causa.

Art. 12. — *Sustitución.* En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezca las leyes y los reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme la reglamentación que dicten el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda. Si el impedimento lo tuvieran estos últimos, serán reemplazados por el procurador general adjunto y el defensor general adjunto con mayor antigüedad en el cargo, respectivamente.

Art. 13. — *Sanciones disciplinarias.* El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán imponer a los miembros del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Popular, que incumplieren los deberes y obligaciones que les incumben, las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta treinta días;
- d) Multa de hasta el veinte por ciento de sus retribuciones;
- e) Remoción por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes.

La sanción deberá ser adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y a los antecedentes en la función.

Las decisiones disciplinarias serán adoptadas, previo sumario que garantice el debido proceso legal, cuando no se hubiere dispuesto de otra forma en la presente ley.

Art. 14. — Sanciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquel desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o defensor general de la Nación, será comunicada a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

Art. 15. — Remoción con causa. Enjuiciamiento. Tribunal competente.

1. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos en la forma y por las causas establecidas para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, conforme el párrafo 1 del artículo 6º.
2. El enjuiciamiento de los restantes miembros, que componen el Ministerio Público conforme el párrafo 2 del artículo 6º, se efectuará por un tribunal compuesto por siete miembros e integrado de la siguiente manera:

a) Dos ex integrantes del Ministerio Público que se hayan desempeñado en el cargo de procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, designados por el Poder Ejecutivo nacional;

b) Dos senadores nacionales y dos diputados nacionales, designados por las respectivas Cámaras;

c) Un abogado designado por el Colegio Público de Abogados, que deberá ser abogado de la matrícula que haya ejercido la profesión no menos de veinte años y forme o haya formado parte de la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reglamentación a dictarse establecerá las cuestiones atinentes a la presidencia, asiento, procedimiento y toda otra cuestión inherente a la creación y funcionamiento de dicho tribunal de enjuiciamiento.

3. Los demás funcionarios cuyo nombramiento efectúen el procurador general o el defensor general de la Nación podrán ser removidos por éstos, conforme lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 6º.

TÍTULO II

Gobierno y administración del Ministerio Público

Art. 16. — Órgano competente. El gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público estará a cargo del procurador general de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten.

El Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

La Jefatura de gobierno y administración mencionadas incluyen, en particular las siguientes atribuciones:

- a) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, incluso el reglamento disciplinario del Ministerio Público;
- b) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los poderes del Estado;
- c) Informar anualmente al Congreso Nacional sobre las labores cumplidas por el Ministerio Público;
- d) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación o sus reglamentos y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación en los casos que lo juzgue pertinente;
- e) Celebrar los convenios y contratos necesarios para el funcionamiento del Ministerio Público;
- f) Disponer el gasto del organismo conforme el presupuesto asignado;
- g) Solicitar la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarlas en la medida de su respectiva competencia;
- h) Decidir sobre la promoción y designación del personal del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades del defensor general de la Nación.

Art. 17. — Autarquía financiera. A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con el crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación elaborará, con intervención del defensor general de la Nación el proyecto de presupuesto y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis e integración al presupuesto general nacional.

Art. 18. — Ejecución presupuestaria. Control. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación. La Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuenta del ejercicio.

TITULO III

Funciones del Ministerio Público en general

Art. 19. — *Competencia. Facultades y deberes del Ministerio Público.* Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que así se requiera;
- b) Ejercer la acción pública penal en las causas criminales y correccionales, en la forma y con el alcance previsto en el Código Procesal Penal de la Nación;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en la ley o los reglamentos. En especial, la representación procesal de los intereses colectivos o difusos, promoviendo la acción tendiente a tutelarlos mediante los procedimientos que establezcan las leyes;
- d) Intervenir en todos los asuntos en que se hallaren involucrados el interés de la Nación y el orden público;
- e) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales;
- f) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo y sustantivo;
- g) Promover acciones, intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesario suplir la inacción de sus representantes necesarios o de las personas que los tuvieren bajo su guarda o custodia, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que corresponde por ley;
- h) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los judiciales, cuando fuesen pobres o estuviesen ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas;
- i) Concurrir a solicitud del Defensor del Pueblo a las inspecciones o visitas que realice en el ejercicio de sus funciones;
- j) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona; no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho fin, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación.

Art. 20. — *Alcances de actuación en el proceso judicial.* Las acciones públicas, dictámenes e intervenciones en juicios de los miembros del Ministerio Público,

carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con las limitaciones que prevayan las leyes procesales.

No obstante, sus dictámenes y requerimientos merecen siempre la consideración de los jueces, quienes están obligados a tratar sólo los argumentos que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

Art. 21. — *Límites funcionales.*

1. Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo. No obstante ante un requerimiento fundado de organismos públicos, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de sus competencias funcionales.
2. Los miembros del Ministerio Público bajo ningún concepto podrán ejercer funciones jurisdiccionales.

Art. 22. — Los integrantes del Ministerio Público, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales o a los particulares, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales para realizar diligencias, citar personas a sus despachos, al solo efecto de recabar información testimonial.

Ante el requerimiento de cualquier miembro del Ministerio Público, los organismos policiales y de seguridad prestarán la colaboración necesaria, destinando el personal y medios a su alcance, con el objeto de satisfacer la directiva impartida por el requirente.

Art. 23. — *Relaciones con el Poder Ejecutivo.* El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para ser más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces inhabilitados, pobres y ausentes.

Art. 24. — *Relaciones con el Poder Legislativo.* La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten ambas Cámaras del Congreso.

El procurador general de la Nación remitirá a dicha comisión un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público.

TITULO IV

Funciones del Ministerio Público Fiscal

Art. 25. — *Procurador General de la Nación.* Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público Fiscal y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;

- b) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Imponer sanciones a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- d) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los funcionarios de la Procuración General de la Nación.
En estos casos, la actuación del fiscal que se designe estará sujeta a la dirección del titular;
- e) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;
- f) Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 4º de esta ley conforme con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- g) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional.

Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;

- h) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.
A tal efecto, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios llegados a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;
- i) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso anterior h);
- j) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados de la Procuración General de la Nación y los del Ministerio Público;
- k) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- l) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar

- instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las distintas instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- m) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- n) Promover la sustanciación de juicio político a los jueces, así como el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, cuando a su juicio unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- o) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores, respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- p) Disponer, por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos. Cuando actúen en cumplimiento de las instrucciones emanadas del procurador general dichos funcionarios podrán dejar a salvo su opinión personal.

Art. 26. — *Procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia.* En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, les corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema en aquellas causas en las que así lo resuelva el procurador general;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas en que intervengan;
- d) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento, o vacancia;
- e) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 27. — *Fiscales generales de la Procuración General.* Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general, y cuando éste así lo disponga, con los procuradores generales adjuntos, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso d) del artículo 26 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal establecidos en el artículo 2º.

Art. 28. — *Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única. Competencias especiales.* Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única y a los de competencias especiales:

- a) Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Elevar al procurador general de la Nación un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;
- d) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- e) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general de la Nación;
- f) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la justicia plenaria;
- g) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general de la Nación sobre los fiscales ante las instancias inferiores y el personal de la fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general de la Nación;
- h) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que corresponda, a los efectos de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- i) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación.

Art. 29. — *Fiscal general de Investigaciones Administrativas.* Corresponde al fiscal general de Investigaciones Administrativas:

- a) Ejercer las funciones y facultades previstas en los artículos 3º, incisos a), b) y c), y 6º de la ley 21.383, y las demás previstas en ellas que no sean derogadas por la presente ley;
- b) Proponer al procurador general la designación de los fiscales adjuntos de la fiscalía a su cargo;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y someterlo a la aprobación del procurador general de la Nación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general de la Nación sobre la gestión de la Fiscalía y res-

ponder los pedidos de informes que este último le formule;

- e) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal de la fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley, de la ley 21.383, del reglamento de superintendencia del Ministerio Público y del reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Art. 30. — *Fiscales generales adjuntos.* En relación inmediata con los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única y de la Procuración General de la Nación, actuarán los fiscales generales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción, cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 31. — *Fiscales generales adjuntos ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.* En relación inmediata con el fiscal general ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas actuarán los fiscales generales adjuntos quienes lo asistirán y cumplirán las directivas que les impartan, de conformidad con lo previsto en la presente ley, y en la ley 21.383. Asimismo, dichos fiscales intervendrán en las investigaciones que les asigne el fiscal general, conforme lo dispuesto por la ley 21.383.

Art. 32. — *Fiscales ante los jueces de primera instancia.*

- 1. Corresponde a los fiscales que actúen ante los jueces en primera instancia, actuar con las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón de grado debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijan las leyes.

Especialmente, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberá intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencias.

2. Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder, en miras al interés público.

Art. 33. — Intervención fiscal. Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal deberán dar intervención a los fiscales ante la justicia criminal y correccional, cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley confiere.

Art. 34. — Deber de informar. Los fiscales ante la primera instancia deberán informar a las correspondientes fiscalías ante las cámaras, de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

Art. 35. — Fiscales auxiliares. Los fiscales auxiliares colaborarán con un fiscal y les corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio;
- Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 36. — Reuniones de consultas. El procurador general de la Nación convocará, por lo menos una vez al año, una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 2º incisos b) y c).

Tales reuniones tendrán por finalidad:

- Considerar los informes anuales que se presenten conforme la presente ley;
- Procurar la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público;
- Tratar todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria.

TITULO V

Funciones del Ministerio Público Pupilar

Art. 37. — Defensor general de la Nación. El defensor general de la Nación tendrá las atribuciones que a continuación se señalan:

- Ejercer la jefatura del Ministerio Público Pupilar y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;

- Dictar reglamentos de superintendencia del Ministerio Público Pupilar, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;

- Intervenir en la confección del presupuesto del Ministerio Público Pupilar;

- Imponer sanciones a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Pupilar en los casos y formas establecidos en esta ley y la reglamentación que se dicte;

- Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 4º de esta ley de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;

- Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del ministerio a su cargo, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público Pupilar, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;

- Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público Pupilar. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones que se mencionan en el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de esta ley. También actuará, si correspondiere, cuando hubiera intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público Pupilar por pobres y ausentes;

- Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Pupilar de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un solo funcionario. Esta limitación no regirá para los funcionarios de la Defensoría General de la Nación.

En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas funciones. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso

menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos funcionarios;

- f) Asegurar, en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes.

Art. 38. — Defensores generales adjuntos. En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes, además de las funciones que aquél les encomienda, les correspondrán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general, en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

Art. 39. — Defensores públicos de menores e incapaces. Corresponde a los defensores de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúan:

- a) Intervenir en todo asunto que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sean en forma autónoma o junto con los representantes individuales. Con ese objeto los tribunales judiciales deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare comprometido;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en la presente ley y los artículos 50, 255, 491 a 494 y otros del Código Civil como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas de seguridad, correccionales o disciplinarias que consideren pertinentes respecto de menores que exteriorizaren reiteradas faltas de conducta o se encontraren expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieren ser conjuradas por los padres o personas que los tengan a su cuidado. Tales medidas no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad;
- d) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos

tratos, deficiencias u omisiones, en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentran. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda tratamiento y reeducación de menores e incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informada a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha y desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del Patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley 10.903 y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos, y conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección, y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- i) Responder los pedidos de informes del defensor general.

Art. 40. — Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia - Competencias especiales. Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, además de las descritas en el artículo anterior, las siguientes atribuciones:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Pupilar de menores e incapaces y las encomendadas por las demás leyes y reglamentos;
- b) Elevar un informe anual al defensor general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- c) Dictaminar los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- d) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;

- e) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 continuará bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante la Cámara Nacional en lo Civil.

Art. 41. — *Defensores públicos adjuntos.* En relación inmediata con los defensores ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los defensores generales adjuntos, a quienes corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- Sustituir al defensor titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- Informar al defensor titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- Desempeñar las demás funciones que les encomiten judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo

Art. 42. — *Defensores públicos de pobres y ausentes.* Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán a su cargo la función que prescribe el artículo 20 en su inciso h) y a tal fin les corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- Ejercer la defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza o se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional siempre que fueren convocados al efecto;
- Entrevistar periódicamente a sus defendidos y arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes;
- Contestar las consultas que les formulen las personas carentes de recursos y asistirlos en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y en su caso, patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
- Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación;
- Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que correspondan, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos para su homologación.

Art. 43. — *Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales de casación y de segunda instancia.* Los defensores de pobres y ausentes ante los tribunales de casación y de segunda instancia, tendrán además de las atribuciones mencionadas en el artículo anterior, las siguientes:

- Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias anteriores;
- Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general de la Nación.

Art. 44. — *Tutores y curadores públicos.* Los jueces nacionales y federales designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueren huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren personas que reúnan las condiciones legales o idoneidad necesaria para desempeñar tales cargos.

Serán funciones de los tutores y curadores:

- Cuidar los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso al ejercicio de algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan de enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar su patrimonio, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de conformidad con lo estatuido por el artículo 152 bis del código citado;
- Llamar a hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrá también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- Aplicar correctivos a sus pupillos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;

- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllas, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlas;
- g) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia de las gestiones y los asuntos que se encuentren a su cargo, y evacuar cualquier requerimiento que éste les formule.

TITULO VI

Funcionarios y personal del Ministerio Público

Art. 45. — *Régimen jurídico.* Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente.

Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderá el reconocimiento de su jerarquía y antigüedad, al efecto de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras. Asimismo, conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas.

TITULO VII

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 46. — *Equiparaciones, Ministerio Público Fiscal.* Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Nación, pasarán a desempeñarse en los cargos que en cada caso se indican, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, mencionado en el inciso a) del artículo 2º;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema, en los cargos de procuradores fiscales adjuntos previstos en el inciso b) del artículo 2º;
- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales de casación, de segunda instancia y orales de instancia única; el procurador y el subprocurador general del trabajo, los secretarios de la Procuración General de la Nación y el fiscal nacional de investigaciones administrativas, en los cargos de fiscales generales mencionados en el inciso c) del artículo 2º;
- d) Los fiscales adjuntos de los fiscales de cámara o de tribunales orales, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y los secretarios

letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 2º;

- e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia de cualquier fuero, los fiscales criminales de instrucción, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales mencionados en el inciso e) del artículo 2º;
- f) Los fiscales adjuntos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación, y el fiscal coadyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 2º.

Art. 47. — *Equiparaciones, Ministerio Público Púpilar.* Los actuales integrantes del Ministerio Público Púpilar pasarán a desempeñarse en los cargos que en cada caso se indica, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor general de la Nación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;
- b) Los defensores generales adjuntos creados por esta ley, en el cargo previsto en el inciso b) del artículo 3º;
- c) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la Cámara de Casación Penal, ante los tribunales orales en lo criminal y ante los tribunales orales de menores, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 3º;
- d) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de instancia única y de segunda instancia, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 3º;
- e) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia, y defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 3º.

Art. 48. — *Subsistencia de cargos.* Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías determinados en esta ley.

Art. 49. — *Estructura.* El procurador general de la Nación, con intervención del defensor general de la Nación, podrá modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Para ello elaborará una propuesta que será remitida al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso de la Nación.

Art. 50. — *Información.* Los integrantes del Ministerio Público informarán a su superior jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que debido a su importancia, trascendencia o complejidad requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas.

Art. 51. — *Derogaciones. Modificaciones.* A partir de la vigencia de la presente ley el ejercicio de la acción pública ante los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal será ejercido por los integrantes del Ministerio Público que ella determina.

Derógase la ley 15.464; el título VII, VIII y XI de la ley 1.893; el artículo 31 cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58; el inciso d) del artículo 3º en cuanto se refiere al ejercicio de la acción pública y los artículos 4º y 8º de la ley 21.383, y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Los artículos 1º y 2º de la ley 21.383 y los artículos 8º a 16 de la ley 18.345 deberán adecuarse a lo que estatuye esta ley en cuanto a denominación, jerarquía, obligaciones y atribuciones de los funcionarios respectivos.

Art. 52. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Alasino.

Texto del proyecto presentado por los senadores
(m. c.) Bordón y Fadel

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización del Ministerio Público

Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional está formado

por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la Defensa, cuya organización y funciones establece la presente ley.

El Ministerio Público ejerce imparcialmente la defensa de la legalidad, con unidad de actuación e independencia funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

El principio de dependencia jerárquica exige que cada integrante del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados y funcionarios que lo integran.

Integración. Ministerio Público Fiscal

Art. 2º — Integran el Ministerio Público Fiscal los siguientes magistrados:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales generales adjuntos ante los mismos tribunales indicados en el inciso anterior, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- e) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas;
- f) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Integración. Ministerio Público de la Defensa

Art. 3º — Integran el Ministerio Público de la Defensa los siguientes magistrados:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;

- d) Los defensores públicos adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior y los de la Defensoría General;
- e) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además, forman parte del Ministerio Público de Defensa como funcionarios, los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

Requisitos para acceder a los cargos. Designaciones

Art. 4º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación.

Los magistrados mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 2º y b), c), d) y e) del artículo 3º serán designados por igual procedimiento. Para cada designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá elegir dentro de una terna presentada por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda; la que será integrada respetando los antecedentes de los candidatos, de acuerdo con la reglamentación que se dicte, que incluirá un examen de aptitud.

En la designación de los fiscales generales y defensores generales públicos adjuntos mencionados en los artículos 2º, inciso d) y 3º, inciso d), el titular de la fiscalía o defensoría, según el caso, propondrá al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación la terna, que éstos elevarán al Poder Ejecutivo, luego de aprobarla. Igual procedimiento se seguirá para la designación de los fiscales auxiliares mencionados en el artículo 2º, inciso f) a propuesta del titular de la fiscalía donde estuviera la vacante.

Para ejercer los cargos de procurador general de la Nación y Defensor General de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Iguales condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y defensor general adjunto.

Para el desempeño de los cargos mencionados en los incisos c) y d) de los artículos 2º y 3º deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de cámara.

Para el desempeño de los cargos mencionados en los incisos e) y f) del artículo 2º y e) del artículo 3º deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de primera instancia.

En ningún caso se podrá acceder a funciones de magistrado del Ministerio Público sin contar con cuatro años de ejercicio efectiva en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Estabilidad

Art. 5º — El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y los demás magistrados que

se mencionan en los artículos 2º y 3º, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta, y sólo podrán ser removidos por las causas expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, por el tribunal de enjuiciamiento y mediante el procedimiento que esta ley prevé.

Sólo con su conformidad podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales o destinadas a otras funciones distintas a las asignadas en su designación, siempre dentro de la misma jerarquía.

Remuneraciones. Jerarquía

Art. 6º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del modo siguiente:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación percibirán una remuneración equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos y los magistrados mencionados en el inciso c) de los artículos 2º y 3º percibirán una retribución equivalente a la de juez de Cámara;
- c) Los magistrados mencionados en los incisos c) y d) de los artículos 2º y 3º percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- d) Los magistrados mencionados en el inciso f) del artículo 2º percibirán una retribución equivalente al 80 % de la que corresponda al juez de primera instancia.
- e) Los funcionarios mencionados en el último párrafo del artículo 3º, percibirán una retribución equivalente al de secretario de Cámara;
- f) Las equiparaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Inmunidades

Art. 7º — Los magistrados del Ministerio Público en sus respectivos desempeños en el proceso, gozan de las inmunidades funcionales acordadas a los legisladores por el artículo 69 de la Constitución Nacional, en este supuesto, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda y al tribunal de enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho. No podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones o intervenciones en los procesos.

Las cuestiones que ellos denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación, o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Juramento

Art. 8º — Los integrantes del Ministerio Público, en todos sus rangos, al tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de desempeñarlos fielmente y cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación lo harán ante el presidente de la Nación, en su calidad de jefe de Estado (artículo 99, inciso 1º de la Constitución Nacional).

Los demás integrantes del Ministerio Público lo harán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda o ante el magistrado que éstos designen al efecto.

Incompatibilidades

Art. 9º — Quienes integran el Ministerio Público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio, salvo cuando se trate de sus propios asuntos o de los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hagan en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establece la ley respecto de los jueces de la Nación.

Parentesco con los jueces

Art. 10. — No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los magistrados judiciales ante los cuales desempeñe su ministerio.

Recusación y excusación

Art. 11. — La recusación y excusación de los miembros del Ministerio Público se rigen por lo establecido en las leyes procesales aplicables a la causa en que intervengan.

Podrán excusarse cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obsten a su actuación imparcial.

En ningún caso se admitirá la recusación sin causa.

Sustituciones

Art. 12. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las reglamentaciones que dicte su autoridad competente.

Sanciones disciplinarias

Art. 13. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente,

por incumplimiento de los deberes que les incumben, las sanciones disciplinarias siguientes: prevención, apercibimiento y multa de hasta el 20 % de sus retribuciones. Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales generales y defensores generales de segunda instancia respecto de los magistrados de rango que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que reglamentará el procurador general de la Nación, debiendo quedar garantizado el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, serán impugnables por la vía judicial que corresponda.

Sanciones disciplinarias en el proceso

Art. 14. — Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones, apercibimientos o multas que no podrán superar el 10 % de sus remuneraciones a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las sanciones disciplinarias aplicadas a los litigantes.

TITULO II

Gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público

Organo competente - Atribuciones

Art. 15. — El procurador general de la Nación, tendrá a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley de las reglamentaciones que se dicten.

A los efectos operativos el Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

El gobierno y la administración general y financiera a cargo del procurador general de la Nación incluyen, en particular, las siguientes atribuciones:

- Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, incluso el reglamento disciplinario del Ministerio Público;
- Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;
- Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales y, cuando sea el caso, con las autoridades provinciales y municipales;
- Requerir la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarla en la medida de su respectiva competencia;

- e) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esa competencia;
- f) Celebrar los contratos y convenios que se requieran para el funcionamiento del organismo;
- g) Poner en conocimiento del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, en los casos en que lo juzgue pertinente, las opiniones del Ministerio Público acerca de la conveniencia de producir reformas legislativas o reglamentarias.

Autarquía financiera

Art. 16. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera el Ministerio Público contará con crédito presupuestario propio. El procurador general elaborará, con intervención del Defensor General, el proyecto de presupuesto y lo remitirá al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Ejecución presupuestaria. Control

Art. 17. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observará la previsión de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación. La comisión bicameral creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

TITULO III

Enjuiciamiento de los magistrados del Ministerio Público

Tribunal competente

Art. 18. — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general de la Nación y de los restantes magistrados que componen el Ministerio Público se efectuará en un tribunal integrado por:

- a) Dos vocales que deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex procuradores generales de la Nación o ex defensores generales de la Nación, designados uno por el Poder Ejecutivo y otro por el Senado;
- b) Dos abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán designados mediante sorteo público, de la lista de jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal de enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del tribunal de enjuiciamiento durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Aún cuando hayan vencido los plazos de sus designa-

ciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Como fiscal ante el tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o, en su defecto, un abogado que reúna las condiciones establecidas en el segundo párrafo de este artículo designado por el procurador general de la Nación.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará el defensor general de la Nación, o un defensor público ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, o de instancia única, a opción del imputado. En caso de ausencia de este último, el defensor oficial proveerá a su defensa.

Los integrantes del tribunal y funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Reglas de procedimiento

Art. 19. — El tribunal de enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las siguientes reglas:

- a) Podrá rechazar *in limine* o luego de una sucinta prevención sumaria, toda denuncia manifiestamente infundada, previa opinión del fiscal;
- b) La instancia de debate será abierta por decisión del tribunal, fundada en los hechos concretos materia de denuncia o acusación, que puedan configurar alguna de las causales expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, contra personas determinadas; la prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes;
- c) Durante el debate, el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. Esto último no será vinculante para el tribunal;
- d) El juicio será oral, público, contradictorio y continuo;
- e) Los plazos para el cumplimiento de los actos procesales serán fijados por el presidente del tribunal entre un mínimo de cinco y un máximo treinta días, salvo traslados y vistas en la prevención sumaria, que serán siempre de tres días. Todos los plazos se contarán en días hábiles;
- f) La sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor de quince días, que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate;
- g) Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptará otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo

que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabará embargo del resto, a las resultas del juicio.

Si fuera absuelto y hubiese sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;

- h) El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes. Si hubiese empate, el acusado será absuelto;
- i) La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos. Si se funda en hechos que puedan configurar un delito de acción pública o ello surgiera de la prueba, o aquella ya hubiese sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;
- j) La sentencia solamente podrá ser recurrida por la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48. El fiscal podrá apelar en favor del acusado;
- k) A todos los efectos, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación.

TITULO IV

Funciones del Ministerio Público en general

Atribuciones, facultades y deberes del Ministerio Público

Art. 20. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
- b) Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales;
- c) Promover y ejercer la acción penal pública en la forma y alcances establecidos por la ley;
- d) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos por la ley;
- e) Intervenir cuando fuera necesaria la autorización judicial para la realización de determinados actos;
- f) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales, pidiendo el remedio de los incumplimientos y abusos que noten;
- g) Defender la jurisdicción y competencias de los tribunales;
- h) Promover acciones, intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesario suplir la inacción de los representantes necesarios o asistentes le-

gales o de las personas que las tengan a su cargo, o bien para controlar la gestión de estos últimos;

- i) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes.

Facultades de investigación

Art. 21. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, para el mejor cumplimiento, podrán requerir informes a los tribunales y a los organismos nacionales, provinciales, comunales, o a los particulares, conforme a lo establecido en las leyes procesales.

Límites funcionales

Art. 22. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fiscal en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Relaciones con el Poder Ejecutivo

Art. 23. — El Poder Ejecutivo se relacionará con el Ministerio Público por intermedio del Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Relaciones con el Poder Legislativo

Art. 24. — La relación del Poder Legislativo con el Ministerio Público se efectuará a través de una comisión bicameral cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten ambas Cámaras del Congreso.

El procurador general, por su parte, remitirá a dicha comisión un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público.

TITULO V

Funciones del Ministerio Público Fiscal

Procurador general de la Nación

Art. 25. — Sin perjuicio de las facultades otorgados por el título II de esta ley, el procurador general de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público Fiscal y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;

- b) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- d) Disponer a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación.

En estos casos la actuación del fiscal que se designe estará sujeta a la dirección del titular;

- e) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de esta ley;
 - f) Efectuar la propuesta de terna a que se refiere el artículo 4º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
 - g) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;
 - h) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.
- A los fines del ejercicio de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando la sana discreción del tribunal, corriendo el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;
- i) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto por el inciso h) de este artículo;
 - j) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;

- k) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

- l) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;

- m) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el título III de esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos y otros se hallaren en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;

- n) Disponer, por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y reglamentos;

Cuando actúen en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, dichos magistrados podrán dejar a salvo su opinión personal;

- o) Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23, podrá responder las consultas sobre materias propias de la competencia funcional del Ministerio Público Fiscal que le formule el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, y los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional.

Magistrados de la Procuración General de la Nación

Art. 26. — En el gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público y en las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal, el procurador general actuará asistido por los procuradores generales adjuntos, los fiscales generales, fiscales generales adjuntos móviles y fiscales auxiliares de la Procuración General de la Nación instituidos por la presente ley.

Procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 27. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema, en aquellas causas en las que así lo resuelva el procurador general;
- b) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;

- c) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- d) Informar al procurador general respecto de las causas en que intervengan;
- e) Desempeñar las demás funciones que les encomiende las leyes y reglamentos.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 28. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación, cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga con los procuradores generales adjuntos en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso d) del artículo 28 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 2º.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 29. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- a) Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- e) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia

Art. 30. — Corresponde, además a los fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia:

- a) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- b) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;

d) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes;

e) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos.

Fiscales generales adjuntos

Art. 31. — En relación inmediata con los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los fiscales generales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 32. — Corresponderá a los fiscales ante los jueces de primera instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

En especial, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados, o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia.

Los fiscales ante la Justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento o controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que puedan corresponder en aras al interés público.

Podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidas en esta ley y su reglamentación.

Fiscales auxiliares de primera instancia

Art. 33. — En relación inmediata con los fiscales ante los tribunales de primera instancia, actuarán los fiscales auxiliares ante dichos tribunales, a quienes corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales, éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Reuniones de consulta

Art. 34. — El procurador general convocará, por lo menos una vez al año, una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 2º incisos b) y c).

Dichas reuniones tendrán por objeto:

- a) Considerar los informes anuales que se presenten de acuerdo con lo previsto en la presente ley;
- b) Procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público en los temas de su competencia;
- c) Intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio;
- d) Tratar las demás cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria.

TÍTULO VI

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación

Organización

Art. 35. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano desconcentrado de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Art. 36. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley. El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas propondrá al procurador general de la Nación las ternas de candidatos para desempeñar los cargos de magistrados de la Fiscalía y nombrará por sí a los funcionarios y demás personal.

Procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas

Art. 37. — Corresponde al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos;
- c) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales las investigaciones que no resolviera efectuar personalmente;
- d) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del procurador general fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 28 inciso d). La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y de personal de servicio y maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- g) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;

- 1) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.

Fiscales generales de Investigaciones Administrativas

Art. 38. — En relación inmediata con el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas habrá dos fiscales generales de Investigaciones Administrativas a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante los tribunales nacionales y federales en las causas en que así se resuelva conforme lo establecido en el artículo 38 inciso d);
- b) Sustituir al procurador general adjunto en los sumarios administrativos y en las investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- c) Reemplazar al procurador general adjunto en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del procurador general de la Nación;
- d) Informar al procurador general adjunto respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 39. — Corresponde a dos fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y a diez fiscales de Investigaciones Administrativas asistir al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias del Ministerio Fiscal que este último les asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 40. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía.

Investigaciones disciplinarias

Art. 41. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso de tratarse los imputados de personal superior. En los supuestos restantes, los antecedentes serán girados al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate. En ambas circunstancias, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida necesariamente como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de re-

currir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 42. — Además de las facultades de investigación previstas en el artículo 21 de esta ley, los magistrados que integran la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, estarán investidos de las siguientes:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrá requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc;
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación para que determine las acciones a adoptar;
- c) Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, previa conformidad del procurador general de la Nación, la suspensión de los actos o hechos sometidos a investigación cuando puedan causar perjuicio grave e irreparable al Estado;
- d) Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de sus funciones, ya sea en forma directa o por medio de las autoridades judiciales correspondientes, a las que deberán requerir a tal efecto.

Intervención de los fiscales

Art. 43. — Los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, intervendrán en aquellas investigaciones que les hayan sido asignadas por el procurador general adjunto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 inciso c), con las facultades que esta ley acuerda a dicho magistrado.

Agotada la investigación o cuando el procurador general adjunto lo disponga, los fiscales generales, fiscales generales adjuntos o fiscales, pondrán el expediente a su despacho y continuarán asistiendo en cuanto éste resuelva.

Comunicación de sumarios administrativos.

Intervención de la Fiscalía

Art. 44. — La autoridad administrativa que corresponda deberá comunicar a la Fiscalía la iniciación de aquellos sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que la originen, a fin de que ésta tome intervención, si lo estimare conveniente. Si la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no tomare intervención, una vez resuelto el sumario, deberá remitirsele copia autenticada de la resolución final, dentro de los cinco días de quedar firme.

Carácter de parte en sumarios administrativos

Art. 45. — En los casos mencionados en el artículo precedente, en que decidiera tomar intervención, la Fiscalía será tenida como parte necesaria en los términos del artículo 42 último párrafo de esta ley.

Investigaciones Administrativas y juicio político

Art. 46. — Cuando de las investigaciones practicadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, resulten cargos imputables a funcionarios que, de acuerdo con la Constitución Nacional, están sometidos al procedimiento de juicio político, los antecedentes serán girados al procurador general de la Nación, quien dispondrá lo que corresponda.

Investigaciones Administrativas y cese del agente

Art. 47. — Las facultades, atribuciones y deberes que por la presente ley se confieren a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se mantendrán aun cuando el agente cese o hubiera cesado en su cargo.

Normas supletorias

Art. 48. — En las investigaciones mencionadas en el artículo 38, inciso a), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ajustará sus procedimientos a las normas del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto sean compatibles con las disposiciones contenidas en la presente.

TÍTULO VII**Funciones del Ministerio Público de la Defensa***Defensor general de la Nación*

Art. 49. — Sin perjuicio de las potestades previstas en el título II de esta ley que competen al procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia sobre las funciones del Ministerio Público de la Defensa, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Intervenir en la confección del presupuesto del Ministerio Público de la Defensa;
- d) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos en esta ley y la reglamentación que se dicte;
- e) Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 49 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medi-

das que fueran necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa y ejercer las demás atribuciones que la confieren las leyes y reglamentos;

- g) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos en que correspondi, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos en su despacho, y en las quejas planteadas en forma directa por la regoría de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones que se mencionan en el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de la presente ley. También actuará el defensor general, si correspondiere cuando hubiere intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes;
 - h) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un sólo magistrado. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación.
- En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;
- i) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
 - j) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes;

- k) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en el título III de esta ley, cuando a su juicio se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Defensores generales adjuntos

Art. 50. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general, en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 51. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen.

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces;
- b) Entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con los representantes necesarios;
- c) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores e incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen;
- d) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 20 inciso h) de esta ley, así como las que les asigne otra norma legal o reglamentaria;
- e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados así como penados bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso podrán por sí solos tomar medidas ur-

gentes propias de la representación promiscua que ejercen;

- f) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral con independencia de su situación familiar o personal;
- g) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- h) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos, y conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- i) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas;
- j) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- k) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- l) Citar y hacer comparecer personas a su despacho, cuando a su juicio ello sea conducente al ejercicio de su ministerio, para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- m) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- n) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación;
- o) Responder los pedidos de informes del defensor general.

Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia. Competencias especiales

Art. 52. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, además de las descriptas en el artículo anterior, las siguientes atribuciones:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público de la defensa de menores e incapaces y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se deberán fundar en cada caso;
- c) Elevar un informe anual al defensor general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- f) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiere al derecho de los menores e incapaces;
- g) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueran invitados o lo prevean las leyes;
- h) Participar, por razones fundadas y con la conformidad del defensor general, en comisiones o consejos u organismos de otros poderes del Estado que desarrollen actividades permanentes vinculadas con la función de que se trata.

El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 pasa a integrar el Ministerio Público, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y en lo comercial.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 53. — En relación inmediata con los defensores ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los defensores generales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales,

ésto así lo requiera, y, en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;

- b) Informar al defensor titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Tutores y curadores públicos

Art. 54. — Los jueces nacionales y federales designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se encuentren abandonados. Ello impedirá la designación de tutores o guardadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Serán funciones de los tutores y curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan en su momento acceder a una profesión, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda su rehabilitación.
- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos como así también su patrimonio; cuando corresponda proveer a su adecuada administración, y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva;
- d) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, como así también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;
- e) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando ello fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirle explicaciones o para considerar los tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo;

f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallen alojadas personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;

g) Mantener informado al defensor de menores o incapaces de primera instancia sobre las gestiones y los asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 55. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, ejercerán las funciones indicadas en el artículo 20, inciso 1) de la presente ley, a cuyo fin tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores y demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza;

b) Ejercer la defensa y representación en juicio de las personas demandadas que se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;

c) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos;

d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;

e) Contestar las consultas que les formulen las personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan;

f) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;

g) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste informe anual relativo a su gestión;

h) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia

Art. 56. — Los defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia, tendrán, además, las atribuciones siguientes:

a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de instancias anteriores;

b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;

c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público de la Defensa que actuará en el área de su competencia.

Honorarios de los defensores de pobres y ausentes

Art. 57. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor de pobres y ausentes, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con medios suficientes. A tal fin, el tribunal, regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ello surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

En caso de incumplimiento en el pago de honorarios dentro de los diez días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios recaudados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público.

TITULO VIII

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Régimen jurídico

Art. 58. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley las normas pertinentes del decreto ley 1.258/58 y la reglamentación que dicte el procurador general de la Nación. En particular, se establece:

a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente;

- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría u otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre la Procuración General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Nación gozan de estabilidad y no podrán ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales, distintas a las asignadas en su designación, siempre conservando su jerarquía;
- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general de la Nación, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante. El procurador general podrá delegar esta competencia.

TÍTULO IX

Disposiciones complementarias y transitorias

Cese de la representación del Estado en juicio

Art. 59. — Dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, cesando al vencimiento de dicho plazo la intervención de los integrantes del Ministerio Público. Esta disposición regirá incluso en los casos en que los códigos procesales dispongan la intervención del Ministerio Público para la ejecución de condenas pecuniarias.

Subsistencia de cargos

Art. 60. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general no reglamente la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Equiparaciones - Ministerio Público Fiscal

Art. 61. — Los actuales integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General de la Nación pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 2º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El Procurador General de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a);
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de procuradores generales adjuntos previstos en el inciso b).

Mientras permanezca en el cargo, el actual titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que preveían los artículos 1º y 2º de la ley 21.383;

- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y orales de instancia única; el procurador general de la Nación y los fiscales adjuntos de los secretarios de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c);
- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el subprocurador general del Trabajo, los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d).

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales, previstos en el inciso e);
- f) Los fiscales adjuntos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, en los respectivos cargos auxiliares previstos en el inciso f).

Equiparaciones - Ministerio Público de la Defensa

Art. 62. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a

desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor general de la Nación, previsto en el inciso a);
- b) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la cámara de casación penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c);
- c) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c);
- d) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia y defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e).

Art. 63. — En los distritos judiciales donde no se hubieran cubierto con cargos autónomos las funciones de defensores de menores e incapaces y de pobres y ausentes establecidas en la presente ley, hasta tanto se designen titulares respectivos en ambos cargos, los actuales defensores de pobres, incapaces y ausentes continuarán ejerciendo ambos ministerios.

En los ámbitos de competencia material o territorial donde se hubiesen designado defensores públicos ante los tribunales colegiados de segunda instancia ejercerán la función de los defensores públicos ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o, en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto las designaciones se produzcan, dichos defensores públicos, ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 3º.

Derogaciones

Art. 64. — Deróganse las leyes 15.464 y 21.383; los títulos VII; VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31 cuarto párrafo inciso a) del decreto ley 1.258/58; el artículo 3º incisos a) y b) y 5 de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Mi-

nisterio Público en la ejecución de condenas pecuniarias y toda otra norma que resultare contradictoria con la presente ley.

Art. 65. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José O. Bordón. — Mario N. Fadel.

Texto del proyecto presentado por el senador
Aguirre Lanari

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente que goza de autonomía funcional y autarquía financiera, y tiene por función promover la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación, de conformidad a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, el procurador general adjunto, el defensor general adjunto, el procurador general del Trabajo, el subprocurador general del Trabajo, los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación, los defensores adjuntos de la Defensoría General de la Nación, los fiscales y defensores de la Cámara Nacional de Casación Penal, los fiscales y defensores ante las cámaras de apelaciones en lo federal y nacionales de la Capital Federal, los fiscales y defensores ante los tribunales orales, juzgados en lo criminal y correccional y penal económico, los fiscales ante los juzgados de primera instancia, los asesores de menores e incapaces y defensores de pobres y ausentes ante todas las instancias, fiscales auxiliares y defensores auxiliares.

Art. 3º — Los magistrados y funcionarios que integran el Ministerio Público gozan de inmunidad funcional e intangibilidad de sus remuneraciones.

Art. 4º — Tienen calidad de magistrados los integrantes del Ministerio Público que actúen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cámaras nacionales y tribunales orales.

Los restantes, revestirán la categoría de funcionarios.

Art. 5º — Los magistrados y funcionarios que integran el Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta, y sólo podrán ser removidos en la forma indicada en esta ley.

Art. 6º — Los magistrados que integran el Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Senado de la Nación.

Los funcionarios serán designados por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda.

Art. 7º — Para ser procurador general de la Nación, defensor general de la Nación, procurador general adjunto o defensor general adjunto, se requieren las mismas condiciones que para ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los restantes magistrados del Ministerio Público deberán reunir las condiciones exigidas para ser designados

juez de cámara de tribunal oral o de primera instancia, según se trate del tribunal ante el cual desempeñen sus funciones.

Los funcionarios del Ministerio Público deberán reunir los requisitos para ser designados secretarios de cámara.

Art. 8º — La remoción de los magistrados que integran el Ministerio Público únicamente podrá hacerse efectiva por las causales y según el procedimiento establecido por la Constitución Nacional para los jueces de los tribunales inferiores de la Nación.

Art. 9º — La remoción de los funcionarios que integran el Ministerio Público únicamente podrá hacerse efectiva mediante resolución del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según corresponda, previo sumario en el que se asegurará al imputado el debido proceso y la inviolabilidad de su defensa en juicio.

Art. 10. — Para la aplicación de las demás sanciones disciplinarias a los magistrados y funcionarios del Ministerio Público, regirán análogamente las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Justicia Nacional y en el reglamento para la justicia nacional, las que serán dispuestas por resolución del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según corresponda.

Las mismas normas regirán para la remoción y sanciones disciplinarias de los empleados que se desempeñen ante la Procuración General de la Nación y ante la Defensoría General de la Nación.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan B. Aguirre Lanari.

Texto del proyecto presentado por la señora senadora
Fernández Meijide

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

EL MINISTERIO PÚBLICO

Organización. Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público, instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, es el órgano encargado de la defensa jurisdiccional de la legalidad y la tutela de los intereses generales de la sociedad, cuya organización, funciones y competencias se establecen en la presente ley.

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, quienes tendrán a su cargo el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, y los fiscales defensores y tutores públicos cuyas funciones establece la presente ley.

Art. 3º — El Ministerio Público ejerce la defensa del interés público con plena autonomía y sin dependencia funcional respecto de los otros poderes del Estado. Su actuación imparcial se sujetará al principio de legalidad, con unidad de actuación.

Forma de designación y remoción

Art. 4º — El procurador general y el defensor general serán designados por la asamblea legislativa por mayoría absoluta de votos y durarán en sus funciones el término de 5 años.

Los demás magistrados y fiscales del Ministerio Público serán designados por estricto orden de mérito en concursos públicos de antecedentes y oposición por un jurado compuesto por tres titulares de cátedras de universidades nacionales, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dos legisladores.

Los legisladores serán elegidos por mayoría absoluta de votos de la asamblea legislativa; los académicos serán designados por sorteo público de una tema propuesta por los decanos de las facultades de Derecho y el miembro de la Corte Suprema en igual forma de una tema propuesta por el presidente de la misma. Los integrantes del jurado durarán dos años en sus funciones y tendrá su asiento en la ciudad de Buenos Aires, pero podrá constituirse en otro lugar si lo considera más conveniente para sus fines.

Para ejercer los cargos de procurador general y defensor general se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema. Iguales condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y defensor general adjunto.

Para el resto de los cargos del Ministerio Público se requerirán que los aspirantes cuenten con cuatro años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Art. 4º bis — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general, y de los restantes magistrados y fiscales del Ministerio Público se efectuará por un tribunal integrado por los abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión que serán elegidos dos por mayoría y uno por minoría por el voto directo de todos los abogados en la matrícula federal, por dos titulares de cátedra de universidad nacional elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos, propuestas por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, y por cuatro legisladores designados por dos tercios de votos de la asamblea legislativa. El tribunal se integrará con igual número de miembros suplentes.

El tribunal una vez constituido elegirá su presidente por sorteo, que rotará cada seis meses y todos sus integrantes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Cuando hayan vencido los plazos de las designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Como fiscal ante el tribunal actuará un legislador elegido por la Asamblea Legislativa por mayoría de votos y durará en sus funciones dos años.

La defensa del acusado estará a cargo del abogado de confianza que designe o en su caso un defensor oficial proveerá a su defensa.

Condiciones para el nombramiento

Art. 5º — Para ser procurador general de la Nación y defensor general de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para el desempeño de los restantes cargos se exigirán las mismas condiciones que las previstas para los jueces de los tribunales ante los cuales deban actuar.

En todos los casos deberán acreditar el desempeño efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial que requieran ese título, durante cuatro años.

Las incorporaciones se harán preferentemente por las magistraturas inferiores tomando en cuenta los antecedentes de los postulantes y previa selección mediante concursos públicos.

Ascensos

Art. 6º — Los ascensos se decidirán por el mismo consejo previsto en el artículo 4º de la presente ley para la designación de los magistrados, previo informe del procurador general o del defensor general, según corresponda, sobre el desempeño del magistrado a promover.

El reglamento que se dicte sobre el particular respectará la carrera en el Ministerio Público, los antecedentes de los candidatos y —si correspondiere— examen de aptitud de los mismos.

Remuneraciones

Art. 7º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público serán equivalentes a las que a continuación se detallan:

- a) El procurador general y el defensor general de la Nación, con la retribución del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los procuradores generales y defensores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la de los jueces de cámara incrementada en un 50 % de la diferencia con la retribución de juez de la Corte Suprema;
- c) Los fiscales generales y defensores generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, con la de los jueces de cámara;
- d) Fiscales y defensores ante los jueces de primera instancia, con la de los jueces de dicha jerarquía;
- e) Los fiscales y defensores adjuntos ante los jueces de primera instancia, con la de dichos jueces disminuida en un 20 por ciento;
- f) Los tutores y curadores públicos, con la de los secretarios de primera instancia.

En materia tributaria y previsional las remuneraciones de los magistrados del Ministerio Público recibirán igual tratamiento que el acordado por las leyes en materia a las retribuciones de los miembros del Poder Judicial de la Nación.

Inmunidades

Art. 8º — Los magistrados del Ministerio Público gozan de las inmunidades funcionales y prerrogativas establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional a favor de los legisladores. No podrán ser desplazados del conocimiento de las causas en que intervengan y sólo con su conformidad, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones o destinados a funciones distintas a las que corresponden a su designación. La jerarquía de sus miembros será equivalente a la de los magistrados judiciales ante los cuales actúan, tanto en lo relativo a su autoridad, protocolo y trato.

Art. 9º — En caso de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones, tanto proveniente de los poderes públicos como originadas en el hecho de particulares, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda, quien será competente para adoptar las medidas tendientes a resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial requiriendo la adopción de las acciones necesarias para preservar el normal desempeño de las funciones.

Juramento

Art. 10. — Los integrantes del Ministerio Público en todos sus rangos, deberán prestar juramento al tomar posesión de sus cargos de desempeñar fielmente, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Art. 11. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación jurarán ante el presidente de la Nación y los demás integrantes del Ministerio Público lo harán ante los titulares del mismo o del funcionario que éstos designen al efecto.

Incompatibilidades

Art. 12. — Los magistrados que integran el Ministerio Público están alcanzados por las mismas incompatibilidades que las que se establecen para los miembros del Poder Judicial de la Nación. Sólo podrán ejercer en juicio la representación de sus propios intereses o los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes o bien cuando lo hagan en cumplimiento de un deber legal.

Parentesco con los jueces.

Art. 13. — No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes ejerzan su ministerio.

Recusación y excusación

Art. 14. — Los miembros del Ministerio Público podrán ser recusados y se excusarán de intervenir por las causales que establecen las leyes procesales aplicables a las causas en que intervengan, con excepción de la recusación sin causa. También podrán excusarse cuando existieren motivos graves de decoro o de otra naturaleza que obsten su actuación imparcial.

Sustituciones

Art. 15. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, suspensión, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan los reglamentos que a tal efecto dicten el procurador general de la Nación para el Ministerio Público Fiscal y el defensor general de la Nación para el Ministerio Público de la Defensa.

Sanciones en el proceso

Art. 16. — Los magistrados judiciales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público, previo descargo, las mismas correcciones disciplinarias que fijan las leyes para los litigantes, por faltas contra su autoridad o decoro, con excepción de la sanción de arresto, y las de tipo pecuniario y de las que sean de competencia del código profesional, pudiendo ser recurridas por el sancionado en la misma forma que las sanciones disciplinarias aplicadas a los litigantes. Una vez firmes, serán comunicadas al superior jerárquico del sancionado.

*Gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público**Gobierno y administración*

Art. 17. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación tendrán a su cargo el gobierno y la administración general del Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en la presente ley y los reglamentos que dicten y sin perjuicio de las atribuciones que esta ley asigna a sus respectivos consejos consultivos.

En tal carácter, les corresponde:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos del personal, disciplinario, de sustitución de los magistrados integrantes del Ministerio Público y todos aquellos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones;
- c) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- d) A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público con crédito presupuestario propio, el procurador general y el defensor general elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiendo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación. De no haber acuerdo entre el procurador y el defensor elevarán los proyectos por separado, correspondientes a cada rama del Ministerio Público;

- e) Disponer la contratación de abogados especializados, quienes se desempeñarán en calidad de asesores, cuando la complejidad del proceso así lo exija;
- f) El procurador general y el defensor general remitirán conjuntamente o por separado, a las Presidencias de ambas Cámaras un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público, concurriendo a brindar las explicaciones que les requieran con motivo de los informes;
- g) El consejo consultivo para cada rama del Ministerio Público, estará integrado por un funcionario por cada estamento de los mencionados en los artículos 2º y 3º, que se elegirán por el voto de sus pares, durarán cinco años en sus funciones, no podrán ser reelegidos para otro período consecutivo y sus remuneraciones serán equivalentes a las correspondientes para el estamento al que pertenecen. El consejo asistirá en forma permanente en todo los asuntos de la gestión del procurador general o del defensor y la opinión del consejo será obligatoria para todos los temas en los que estos magistrados deban intervenir o decidir. Las recomendaciones del consejo no serán vinculantes para el procurador o el defensor, pero cuando la resolución sea contraria a la recomendación, el consejo podrá insistir con los dos tercios de los votos del órgano. En este caso el procurador o el defensor deberán decidir de acuerdo a lo resuelto por el respectivo consejo.

Los consejos consultivos serán presididos por el procurador general y por el defensor general respectivamente y deberán sesionar por lo menos dos veces al mes, pudiendo autoconvocarse por mayoría absoluta de sus miembros.

Funciones del Ministerio Público en general

Art. 18. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos en que se halle comprometida, de oficio o a pedido de parte interesada, sean particulares o en representación del Estado. Bastará la justificación del interés simple para legitimar el pedido de los particulares;
- b) Interponer la acción popular cuando fuera notoria la inacción social en circunstancias en que el interés público se encuentre afectado;
- c) Velar por el efectivo cumplimiento de las leyes reglamentos y del debido proceso legal adjetivo o sustantivo. Para la mejor concreción de este objetivo podrán actuar en oportunidad del trámite de la creación legislativa como en el de aplicación de la legislación en sede jurisdiccional, tanto judicial como administrativa;
- d) Velar por el respeto de la Constitución Nacional, de las instituciones creadas por ella y de los derechos fundamentales.

Para hacer efectiva su tarea de interpretación y aplicación del derecho, será obligatoria la vista al representante del Ministerio Público en todas las instancias, inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 19. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán requerir informes a organismos nacionales, provinciales, municipales o a los particulares. Podrán asimismo recabar la colaboración de los organismos de seguridad y policiales para realizar diligencias, citar personas y hacerlas comparecer a sus despachos al solo efecto de prestar declaración testimonial con los alcances y apercibimientos que fijan los códigos de procedimiento. En todos los casos, los organismos requeridos deberán prestar la colaboración que se les solicite, con los medios a su alcance, bajo apercibimiento —en el caso de las fuerzas de seguridad y policiales— de incurrir en el delito de desobediencia.

Art. 20. — Las acciones públicas interpuestas por los representantes del Ministerio Público, sus dictámenes o intervenciones en juicio, siendo su función la de representar el interés social, deberá el juzgador atender sus planteos, y tratar todos los argumentos conducentes, bajo pena de quedar sus fallos afectados a la tacha de arbitrariedad.

Art. 21. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo y el contralor interno de la administración pública.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Público la existencia de todo delito que llegue a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública, sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa, como parte afectada, en representación del Estado.

Asimismo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según corresponda, con el fin de coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

El Ministerio Público Fiscal

Composición. Funciones

Art. 23. — Componen el Ministerio Público Fiscal los siguientes magistrados:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales y adjuntos ante los tribunales colegiados de casación de segunda instancia y de instancia única;
- d) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos de dichas fiscalías.

El procurador general de la Nación

Art. 24. — Sin perjuicio de las atribuciones que como responsable de la administración general del Ministerio Público le asigna el artículo 17 de esta ley, y de la

confección, del presupuesto del Ministerio Público Fiscal, le corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Intervenir en las causas que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la competencia originaria dispuesta por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Esta intervención será a través de dictámenes y/o produciendo pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlando su sustentación a fin de preservar el debido proceso legal;
- b) Intervenir en el trámite de todas las causas en que se debatan cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia, se haya o no concedido el recurso extraordinario, por parte del tribunal superior de la causa a los efectos de dictaminar si corresponde a su competencia extraordinaria y en relación con los intereses que el Ministerio Público dará vista al procurador general de todos los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa en caso de denegatoria de aquéllos. Esta intervención podrá omitirse cuando según la sana discreción del tribunal se disponga en rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia;
- c) Intervenir en el trámite de la jurisdicción por apelación ordinaria ante la Corte Suprema, cuando la Nación sea parte o el interés público que tutela el ministerio se encuentre comprendido con el mismo alcance que el previsto en el inciso b) de este artículo;
- d) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- e) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal sólo con el objeto de instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- f) Intervenir en las causas por extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia;
- g) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o inferior jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia o del territorio, quien actuará en calidad de adjunto;
- h) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;
- i) Requerir informe a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;

- f) Rendir informe público anual, dirigido al Congreso de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en relación con el juicio que le merece al Ministerio Público la actuación del Poder Judicial y de la administración pública en orden a la defensa de los intereses generales de la sociedad, según las previsiones de la presente ley;
- g) Ejercer la superintendencia general sobre los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, aplicándoles correcciones disciplinarias por incumplimiento de los deberes que le corresponden, en los casos y formas establecidos en esta ley y los reglamentos que a tal efecto dicte. Entender en grado de apelación de las resoluciones adoptadas por magistrados inferiores. El reglamento que se dicte deberá prever la obligatoriedad de sustanciación de sumario previo a la aplicación de sanción disciplinaria, y éstas no podrán violar la garantía constitucional de intangibilidad salarial establecida en el artículo 120 de la Constitución Nacional;
- h) Promover la remoción de los magistrados del Poder Judicial ante la Cámara de Diputados de la Nación mediante la sustanciación de juicio político o enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento que prevé el artículo 115 de la Constitución Nacional, según corresponda, por las causales previstas en el artículo 53 de dicha norma;
- i) Promover la remoción de los miembros del Ministerio Público Fiscal, ante el tribunal previsto en el artículo 49 de la presente ley;
- j) Delegar en magistrados inferiores la administración financiera y el ejercicio de facultades disciplinarias en sus jurisdicciones, con carácter general, cuando razones territoriales o de mejor administración así lo aconsejen;
- k) Convocar a reuniones de consulta a las que asistirán los magistrados del ministerio a su cargo, con el propósito de elaborar el informe anual al que hace referencia el artículo 24, inciso f) de esta ley y unificar criterios de actuación y todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio.

Procuradores generales adjuntos

Art. 25. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación, se desempeñarán cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le corresponderá el ejercicio de las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general de la Nación en las causas sometidas a su dictamen, cuando aquél lo resuelva, o en casos de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia; y presidir el Consejo de Fiscales;
- b) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia, cuando así lo disponga el procurador general;

- c) Informar al procurador general acerca de las causas en que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que le encomiendan las leyes y reglamentos;
- e) Cada procurador general adjunto dirigirá un departamento que estará integrado por una parte proporcional de los funcionarios de cada estamento y la especialidad de cada dirección, decidirá la intervención de los agentes fiscales en los sumarios, en los juicios y en los recursos ante los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Nación. El ámbito de competencia de los departamentos y sus agentes fiscales será decidido por el procurador general y el defensor general en cada rama, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes que los delitos afectan y la especialización de los funcionarios.

Fiscales generales y adjuntos ante los tribunales de colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 26. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- a) Promover ante dichos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido ante los jueces inferiores, sin perjuicio de su facultad de desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Promover la aplicación de medidas disciplinarias contra los magistrados inferiores del Ministerio Público Fiscal, sus funcionarios y empleados;
- c) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura o de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios y empleados de los tribunales de justicia, que se consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar al procurador general un informe anual de la gestión del Ministerio Público que actúa en su jurisdicción, tanto en lo relativo al trámite judicial, administrativo como de superintendencia. En tales casos podrá aconsejar la conveniencia de iniciar el proceso de remoción a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público;
- e) Ejercer la superintendencia federal sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de las reglamentaciones que dicte el procurador general de la Nación;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia que se planteen entre los fiscales de primera instancia;
- g) Evacuar los informes que les solicite el procurador general de la Nación y peticionar la reunión del tribunal ante quien ejercen su ministerio, a fin de que reuniéndose en pleno proceda a unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la

revisión de la jurisprudencia plenaria. A tales fines, no será necesario el carácter de parte en el juicio;

- h) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- i) Desempeñar en el ámbito de su competencia, las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos.

Art. 27. — El procurador general de la Nación podrá designar fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, quienes actuarán en relación inmediata con los fiscales generales que se desempeñen ante dichos tribunales. Sus funciones serán las de sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. Los fiscales generales titulares podrán requerir de los mismos asistencia en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio, en cuyo caso deberán informar al mismo respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 28. — Corresponderá a los fiscales ante los jueces de primera instancia el ejercicio de las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de su competencia en razón del grado, debiendo ejercitar los actos procesales y las acciones y recursos necesarios para el cometido que les fija la presente ley.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieron y llegar a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en toda causa que la acción pública criminal o contravencional estuviera abierta, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de los testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimientos, cuidando de evitar la efectiva denegación de justicia;
- d) Asistir a las visitas a las cárceles, no sólo para formar conocimiento de la situación de los alojados en ella, sino, para promover o aconsejar la

adopción de medidas tendientes a la corrección del sistema carcelario que en miras al interés público pudiere corresponder,

Art. 29. — Los magistrados judiciales deberán dar intervención a los fiscales cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública o fuere iniciada la investigación por prevención policial, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley le concede para la promoción de la acción. Deberán asimismo intervenir en los procesos de amparo y hábeas corpus.

Art. 30. — Cuando actúen en los fueros civil, comercial, contencioso administrativo y del trabajo, deberán hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, de oficio o a requerimiento de cualquier habitante, o como consecuencia de las vistas de los expedientes que los jueces o las autoridades administrativas pongan a su consideración. En todos los casos, su actuación será en defensa del interés público, del debido proceso legal y del efectivo cumplimiento de la legislación.

Art. 31. — Corresponde a los representantes del Ministerio Público el ejercicio de todas las acciones y recursos de su competencia y, en ausencia de prescripciones legales expresas, ellos quedan legitimados para el ejercicio de la representación del interés público con el propósito de prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud, al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos pertenecientes al patrimonio artístico, cultural o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Art. 32. — Los fiscales públicos ante la justicia de primera instancia, deberán asimismo:

- a) Intervenir en todas las cuestiones de competencia;
- b) Informar a las fiscalías ante los tribunales que enumera el artículo 27 de toda irregularidad advertida en el desempeño de las funciones judiciales o administrativas que afecten el debido proceso legal y el interés público que el Ministerio Público está obligado a tutelar.

Art. 33. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas previstos en esta ley y las reglamentaciones que dicte el procurador general de la Nación.

Art. 34. — En relación inmediata con los fiscales ante los tribunales de primera instancia, actuarán los fiscales auxiliares ante dichos tribunales. Les corresponde sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. En todos los casos, deberán informar al fiscal titular respecto de las causas en las que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público de la Defensa

Composición. Funciones

Art. 35. — Componen el Ministerio Público de la Defensa, los siguientes magistrados:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única y los defensores públicos adjuntos ante dichos tribunales;
- d) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además integran el Ministerio Público de la Defensa, como funcionarios, los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

El defensor general de la Nación

Art. 36. — Corresponde al defensor general de la Nación ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia relativa al ejercicio específico de sus funciones. En tal carácter, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dictar los reglamentos de superintendencia, fijar normas de distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- b) Confeccionar del presupuesto de Ministerio Público de la Defensa;
- c) Imponer las sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa en los casos y formas establecidos en la presente ley y la reglamentación que dicte;
- d) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio a su cargo y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- e) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando estas funciones estuvieren en cabeza de un solo magis-

trado. En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- f) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes en los procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. Ello no será necesario cuando concurren a un mismo proceso menores e incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- g) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes.

Art. 37. — El defensor general de la Nación ejerce su ministerio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este efecto, dicho tribunal le dará vista en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones previstas en el artículo 24, inciso b) de la presente ley. También actuará, si correspondiere, cuando hubiere intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes.

Defensores generales adjuntos

Art. 38. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación, se desempeñarán dos defensores generales adjuntos, quienes tendrán a su cargo las funciones que aquí les asigne y las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su dictamen cuando aquél lo resuelva o en caso de licencia, excusación, impedimento, suspensión o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 39. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces y la defensa en juicio de los mismos cuando su interés estuviere comprometido;

- b) Entablar las acciones y recursos pertinentes a tal objeto, ya sea en forma autónoma o conjuntamente con los representantes de los incapaces;
- c) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa, emitiendo el correspondiente dictamen, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias;
- d) Requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesaria suplir la inacción de sus representantes necesarios o asistentes legales o de las personas que los tenga a su cargo, o bien para controlar la gestión de estos últimos;
- e) Emitir dictámenes en los asuntos que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- f) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de menores o incapaces sobre la persona y derecho de éstos, conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores o incapaces, ejerciendo todos los actos que sean conducentes a su protección, y sometiendo a la autoridad judicial cuando corresponda para su homologación.

Art. 40. — Los Defensores públicos de menores e incapaces están habilitados para requerir de las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de menores, incapaces e inhabilitados, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deban dispensarles sus padres, tutores, curadores o las personas o instituciones a cuyo cargo se encuentren. En caso de ser necesario, podrán por sí solos tomar las medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen.

Art. 41. — Podrán solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes o graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal.

Art. 42. — Cuando llegare a su conocimiento la existencia de mala conducta de menores, por quejas o de oficio, podrán requerir de la autoridad judicial la aplicación de medidas disciplinarias o de seguridad correccional, las que no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad.

Art. 43. — Para el logro de la protección integral de los menores, incapaces e inhabilitados, podrán asesorar a los mismos y a sus representantes necesarios, parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces. Con el mismo propósito, deberán:

- a) Citar y hacer comparecer personas a su despacho, cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su ministerio, para pedir expli-

caciones o contestar cargos que se formulen en los que se encuentre afectado el interés de menores o incapaces;

- b) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que afecten los intereses de menores o incapaces;
- c) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de guarda o correccionales de menores o incapaces, sean públicos o privados, informando por la vía jerárquica al defensor general de la Nación y a la autoridad judicial sobre el cuidado y atención que reciben. Dichos informes podrán evaluar el desarrollo de los tratamientos y de las tareas de reeducación de los internados.

Art. 44. — Los defensores públicos podrán imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y la reglamentación que dicte el defensor general de la Nación.

Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 45. — Les corresponderá, además de las atribuciones previstas en los artículos anteriores, las siguientes:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan para cumplir en forma efectiva las funciones del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa ante las instancias anteriores sólo por razones de necesidad o urgencia que se deberán fundar en cada caso;
- c) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- d) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley;
- e) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera a los intereses de menores e incapaces y participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 46. — El defensor general de la Nación podrá designar defensores públicos adjuntos ante los tribu-

nales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, quienes actuarán en relación inmediata con los defensores generales que se desempeñen ante dichos tribunales. Sus funciones serán las de sustituir o reemplazar al defensor general titular en el ejercicio de sus deberes, cuando éste así lo resuelva por necesidades funcionales y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. El defensor general podrá requerir de los mismos asistencia en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio, en cuyo caso deberán informar al mismo respecto de las causas en las que intervengan.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 47. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, ejercerán la defensa de la persona y los derechos de los justiciables que se encuentren en dichas condiciones, toda vez que sea requerida en las causas penales y en otros fueros. Tendrán a este fin las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encontraran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de quienes se encuentran imputados en las causas que se tramitan ante la justicia penal, cuando así lo requiera la legislación procesal de dicho fuero.

Art. 48. — Tendrán atribuciones para arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes, cesando en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso. Podrán asimismo intentar la conciliación, la mediación o el arbitraje, presentando los acuerdos logrados a los tribunales para su homologación.

Art. 49. — Tendrán a su cargo el ejercicio de facultades de superintendencia y disciplinas respecto del personal a su cargo, de conformidad a las reglamentaciones que dicte el defensor general de la Nación.

Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia

Art. 50. — Los magistrados que actúan ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán además las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias inferiores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes de las instancias inferiores e impartirles las instrucciones generales dentro del marco fijado por el defensor general de la Nación.

Tutores y curadores públicos

Art. 51. — Los magistrados judiciales designarán en el trámite de las actuaciones judiciales tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces encontraren las personas que cumplan las condiciones legales y de idoneidad necesarias para el desempeño de tales cargos.

Serán sus funciones respecto de las personas a su cargo:

- a) Cuidar de las mismas, tratando que sean educadas para el ejercicio de algún oficio o profesión útil;
- b) Cuando se tratare de personas afectadas por enfermedades mentales, toxicomanía o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y rehabilitación;
- c) Ejercer la representación legal de oficio y extrajudicialmente y cuidar el acervo patrimonial de las personas puestas bajo su guarda, bajo las condiciones que prevé el Código Civil para los tutores y curadores.

Art. 52. — Podrán llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de sus funciones, para pedir explicaciones sobre malos tratos a los menores o incapaces a su cuidado o por cualquier otra causa vinculada a su bienestar. Con el mismo objeto podrán dirigirse a autoridades o instituciones públicas.

Art. 53. — Los tutores o curadores públicos deberán visitar periódicamente los establecimientos donde estuvieran alojadas las personas a su cargo, debiendo informar al juez y defensor público sobre el estado de los mismos, efectuando gestiones para mejorar su situación cuando lo juzgare conveniente.

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 54. — Los funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público se registrarán por la presente ley y las reglamentaciones que en ejercicio de sus facultades de superintendencia dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación.

Art. 55. — Los funcionarios y empleados del Ministerio Público gozan de estabilidad y no podrán ser removidos sino por causas de ineptitud, mala conducta o incumplimientos graves en su desempeño, previo sumario. Sólo podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales, con su conformidad, siempre conservando su jerarquía.

Art. 56. — La designación, promoción y remoción del personal del Ministerio Público estará a cargo del procurador general de la Nación, quien deberá requerir la conformidad del Defensor General de la Nación cuando se trate de personal del Ministerio de la Defensa. En todos los casos se requerirá el informe del magistrado del Ministerio Público responsable del área donde se desempeña o desempeñará el personal.

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 57. — Dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley cesará la intervención del Ministerio Público como representante del Estado y/o el fisco en juicio. Dentro de dicho plazo la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fueros donde estén radicadas.

Art. 58. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia. Subsistirán asimismo las estructuras administrativas hasta tanto el procurador general de la Nación, en uso de sus competencias y con la correspondiente aprobación presupuestaria produzca las modificaciones que esta ley autoriza.

Art. 59. — Deróganse todas las normas contenidas en leyes generales, especiales y códigos procesales que resulten contrarias a las disposiciones de la presente normativa.

Art. 60. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meljide.

Texto del proyecto presentado por el senador Yoma

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia funcional, en coordinación con los tres poderes del Estado pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Posee una organización jerárquica la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Procurador general de la Nación;
- b) Procuradores generales adjuntos;
- c) Fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c);
- e) Fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los fiscales de investigaciones administrativas;
- f) Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Defensor general de la Nación;
- b) Defensores generales adjuntos;
- c) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- d) Defensores públicos adjuntos ante los tribunales enunciados en el inciso c) y los de la Defensoría General de la Nación;
- e) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios, los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

CAPÍTULO II

Relación de servicio

Designaciones

Art. 5º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentarán una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá también el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado.

Concurso

Art. 6º — La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso de oposición y antecedentes que será rendido ante un tribunal convocado

por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, el cual estará integrado por cuatro magistrados con una antigüedad en el Ministerio Público superior a los 10 años, y será presidido por un fiscal general o un defensor general, según corresponda. Cuando el concurso se realice para cubrir un puesto de fiscal o defensor general, deberá el procurador o el defensor general, respectivamente, presidir el tribunal examinador.

Requisitos para las designaciones

Art. 79.— Para ser magistrado del Ministerio Público se debe contar con 4 años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro años de antigüedad en el título de abogado.

El procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, deberán reunir las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el desempeño de los restantes cargos mencionados en los artículos 39 y 49, se aplicarán los requisitos existentes para ser juez de cámara, juez de primera instancia o secretario de cámara, según las equivalencias que surgen de los artículos 66 y 67 de esta norma.

Juramento

Art. 80.— Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación —según corresponda— o ante el funcionario que éstos designen a tal efecto.

Incompatibilidades

Art. 90.— Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Excusación y recusación

Art. 10.— Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las mismas causas previstas por las normas procesales respecto de los jueces.

Podrán excusarse cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obsten su actuación imparcial. En ningún caso será procedente la recusación sin causa.

Sustitución

Art. 11.— En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se remplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayera sobre el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador general adjunto o el defensor general adjunto, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.

De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

Remuneración

Art. 12.— Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los magistrados enumerados en los incisos b) y c) de los artículos 39 y 49 de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de Cámara;
- c) Los magistrados mencionados en el inciso d) y e) de los artículos 39 y 49 de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- d) Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara;
- e) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Estabilidad

Art. 13.— Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad. Los magistrados cuya edad sea la indicada precedentemente que-

darán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento tal como lo prevé el artículo 99 inciso 4 de la Constitución respecto de los jueces de la Nación.

Inmunidades

Art. 14. — Los magistrados del Ministerio Público en sus respectivos desempeños en el proceso, gozan de las inmunidades funcionales acordadas a los legisladores nacionales por el artículo 69 de la Carta Magna.

No podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones o intervenciones en los procesos. Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Traslados

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales o destinados a funciones distintas de las adjudicadas en su designación.

Poder disciplinario

Art. 16. — En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) Prevención;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta 30 días;
- d) Multa de hasta el 20 % de sus remuneraciones.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores generales respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, la cual deberá garan-

tizar el debido proceso ~~adjetivo~~ y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17. — Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o al defensor general de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

Mecanismos de remoción

Art. 18. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y mediante el procedimiento reglado por el artículo 59 de la Carta Magna.

El resto de los magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos por el Tribunal de Enjuiciamiento creado por esta ley, mediante el procedimiento que se reglamente y por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público, cuyo nombramiento efectúan el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, serán removidos por las causales que reglamentariamente se prevean y mediante un sumario previo que garantice el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 19. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por cinco miembros:

- a) Tres vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ex procuradores o defensores generales de la Nación, y serán designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Dos vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, y serán designados

nados por el procedimiento electivo que dispongan, entre todos aquellos profesionales que posean matrícula federal.

El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Añ cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Como fiscal ante este tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o, en su defecto, un abogado que reúna las condiciones establecidas para ser vocal del tribunal, designado por el procurador general de la Nación.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un ex defensor general de la Nación o, en su defecto, un defensor público ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o de instancia única, a opción del imputado.

Los integrantes del tribunal y los funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Reglas de procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 20. — El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme al siguiente procedimiento:

- a) Podrá rechazar *in limine* o luego de una sucinta prevención sumaria, toda denuncia manifiestamente infundada, previa opinión del fiscal;
- b) La instancia de debate será abierta por decisión del tribunal, fundada en los hechos concretos materia de denuncia o acusación, que puedan configurar alguna de las causales expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, contra personas determinadas; la prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes;
- c) Durante el debate, el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. Esto último no será vinculante para el tribunal;
- d) El juicio será oral, público, contradictorio y continuo;
- e) Los plazos para el cumplimiento de los actos procesales serán fijados por el presidente del

tribunal entre un mínimo de cinco y un máximo de treinta días, salvo traslados y vistas en la prevención sumaria, que serán siempre por tres días. Todos los plazos se contarán en días hábiles;

- f) La sentencia deberá dictarse en el plazo que fijará el presidente del tribunal, el cual no podrá ser mayor de quince días;
- g) El tribunal podrá, mediante resolución debidamente fundada, suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trará embargo sobre el resto, a las resultas del juicio. Si el magistrado fuera absuelto, se lo reincorporará a sus funciones inmediatamente, y se le reintegrará el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;
- h) El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes;
- i) La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos. Si se funda en hechos que puedan configurar un delito de acción pública o ello surgiera de la prueba, o aquélla ya hubiese sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;
- j) La sentencia podrá ser recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual controlará la razonabilidad del pronunciamiento y el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado. El recurso deberá interponerse, por escrito y fundado, ante el Tribunal de Enjuiciamiento dentro de los treinta (30) días de notificado el fallo. El tribunal deberá elevar el recurso y las actuaciones a la Cámara dentro de los cinco (5) días de interpuesto. Cumplidas las medidas que la Cámara pudiera haber dispuesto para mejor proveer, se llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse dentro de los sesenta (60) días. Todos los términos fijados en este inciso se computarán en días hábiles judiciales;
- k) A todos los efectos se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación.

CAPÍTULO III

Administración general y financiera del Ministerio Público

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, tendrán a su cargo el

gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los tres poderes del Estado;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos de personal, disciplinarios y todos aquellos que resulten necesarios para obtener un cumplimiento armónico de las funciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa;
- c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público;
- d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral creada por esta ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.

Autarquía financiera

Art. 22. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Ejecución presupuestaria

Art. 23. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

Relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo

Art. 24. — El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.

TÍTULO II

Funciones y actuación

Sección I

Normas generales

Funciones del Ministerio Público

Art. 25. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público, tanto en sede judicial como administrativa, de oficio o a solicitud de parte interesada, carácter éste que podrán asumir los particulares o quienes actúen en representación de alguna repartición estatal. Para legitimar el pedido de los particulares bastará la justificación de un interés simple;
- b) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los casos previstos por la ley, y en aquellos supuestos de notoria inacción social ante circunstancias en que el interés público se encontrase afectado;
- d) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- e) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo o sustantivo, en el trámite de la creación de normas legales y reglamentarias y en su aplicación, tanto en sede judicial como administrativa;
- f) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes legales, parientes o personas que los tuvieran a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- g) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;
- h) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
- i) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho ob-

jeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;

- f) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Requerimiento de colaboración

Art. 26. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán —para el mejor cumplimiento de sus funciones— requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.

Los fiscales ante la Justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— sin perjuicio de las directivas que el juez competente imparta a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

Funciones excluidas

Art. 27. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: la representación del Estado y/o del fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Carácter de los dictámenes

Art. 28. — Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con la limitación prevista en el artículo 461 del Código Procesal Penal de la Nación y las limitaciones que otras leyes procesales prevean.

Principio de legalidad

Art. 29. — Cuando se tratare de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio.

La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley.

Deber de informar

Art. 30. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

Deber de obediencia. Objeciones

Art. 31. — Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general —en su caso—, su criterio disidente, mediante un informe fundado.

Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Informe anual al Congreso

Art. 32. — Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia —Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente— el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

Sección II

Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

Del procurador general de la Nación

Art. 33. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

El procurador general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;

b) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.

A los fines del ejercicio de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;

c) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso anterior;

d) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

e) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

f) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

g) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;

h) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 35 de esta ley;

i) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de

la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En todos estos casos, la actuación del fiscal que se designa estará sujeta a la dirección del titular;

j) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;

k) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;

l) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;

ll) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias; y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;

m) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;

n) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;

ñ) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos o instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;

o) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;

p) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;

q) Confeccionar con el defensor general el presupuesto del Ministerio Público, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo, presentar por separado el proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público Fiscal;

- r) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- s) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal;
- t) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 3º, incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- u) Representar al Ministerio Público Fiscal en las relaciones con los tres poderes del Estado;
- v) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

De los procuradores generales adjuntos

Art. 34. — Los procuradores generales adjuntos asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al procurador general sobre las causas en que intervienen.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 35. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga, con los procuradores generales adjuntos, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso t) del artículo 33 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 3º.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 36. — Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Mi-

- nisterio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- f) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- g) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del área de su competencia;
- h) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales adjuntos

Art. 37. — Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Fiscales antes los jueces de primera instancia

Art. 38. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

Deberán intervenir en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia;

e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 39. — En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, así como los recursos administrativos dirigidos a la averiguación o investigación de delitos o de infracciones administrativas, cuidando de instarlos cuando se trata de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional;
- e) Recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente lo que hubieren solicitado en sus dictámenes.

Art. 40. — Los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de la seguridad social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan;
- b) Ejercer todas las acciones y recursos previstos en la legislación a nombre del Ministerio Pú-

blico Fiscal, en el trámite de sus presentaciones en sede judicial o administrativa;

- c) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan, y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso legal;
- d) Intervención en forma ineludible en todos aquellos casos en que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y no del Estado, así como en todos aquellos asuntos en los que el Ministerio Público debe ejercer funciones por mandato de la ley;
- e) Intervenir en la gestión y administración de las fundaciones y asociaciones jurídicas de bien público, toda vez que tuvieran conocimiento de que el interés público se encontrase afectado, o en peligro de serlo, con el objeto de reclamar ante los órganos administrativos de control o ante la autoridad judicial, que se proceda a reparar el bien tutelado;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

Fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia

Art. 41. — Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes facultades y deberes:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

CAPÍTULO II

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación

Organización

Art. 42. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano desconcentrado de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Designaciones y remociones

Art. 43. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley. El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas propondrá al procura-

dor general de la Nación las ternas de candidatos para desempeñar los cargos de magistrados de la Fiscalía y nombrará por sí a los funcionarios y demás personal.

Procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas

Art. 44. — El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades de la inversión dada a los mencionados recursos;
- c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33 inciso 1);
- d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- g) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a su cargo;

- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.

Fiscales generales de investigaciones administrativas

Art. 45. — Los fiscales generales de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general adjunto en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- b) Reemplazar al procurador general adjunto en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia con intervención del procurador general de la Nación;
- c) Informar al procurador general adjunto respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales generales adjuntos y fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 46. — Los fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y los fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la Fiscalía que este último le asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 47. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Investigaciones disciplinarias

Art. 48. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso de tratarse los imputados de personal superior. En los supuestos restantes los antecedentes serán girados al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate. En ambas circunstancias, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 49. — Además de las previstas en el artículo 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc.
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación para que determine las acciones a adoptar.

Sección III

*Ministerio Público de la Defensa**Defensor general de la Nación*

Art. 50. — El defensor general de la Nación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, excepto en los supuestos en que según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que se podrá omitir la vista.

El defensor general también actuará, si correspondiere, cuando haya intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes;

- b) Delegar sus funciones en los defensores generales adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de esta ley;
- c) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o inferior jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un

solo magistrado. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación.

En todos estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- d) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- e) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- g) Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 59 de esta ley, de conformidad con lo que establezca el reglamento de superintendencia;
- h) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley cuando, a su juicio, se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación —ante los órganos competentes— cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;
- j) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias; y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- k) Responder a las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;

- l) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- ll) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa, y dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes y supervisar su cumplimiento;
- m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;
- n) Confeccionar con el procurador general el presupuesto del Ministerio Público, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo, presentar por separado un proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público de la Defensa;
- ñ) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- o) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- p) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4º, incisos b) y c) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
- q) Representar al Ministerio Público de la Defensa en las relaciones con los tres poderes del Estado.

Defensores generales adjuntos

Art. 51. — Los defensores generales adjuntos asistirán al defensor general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en que intervengan.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 52. — Los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extra-

judicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;

- b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen;
- c) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; hacer necesario suplir la inacción de sus asistentes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- d) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos; conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- e) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- f) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;
- g) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal;
- h) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes

que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas; y efectuar las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;

- l) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- j) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- k) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestos para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- l) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- m) Responder los pedidos de informes del defensor general;
- n) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 53. — Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;
- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Elevar un informe anual al defensor general de la Nación sobre la gestión del área bajo su competencia;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias

inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

Art. 54. — El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81, pasa a integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tutores y curadores públicos

Art. 55. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 56. — Los tutores y curadores públicos tendrán las siguientes funciones:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan —en su momento— acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos, así como también su patrimonio, proveer cuando corresponda, a su adecuada administración; y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación, y representarlas en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva.
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;

- g) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se le formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
- h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;
- i) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 57. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos;
- c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan; y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;

- f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste el informe anual relativo a su gestión;
- g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 58. — Los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán —en especial— las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia.

Honorarios de los defensores de pobres y ausentes

Art. 59. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor de pobres y ausentes, deberá solventar la defensa, en caso de condena si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará las honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Art. 60. — En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del ministerio público.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 61. — Los defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actuarán en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones.

- a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades

funcionales, éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;

- b) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio.

Sección IV

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 62. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley, las normas pertinentes del decreto ley 1.285/58 y la reglamentación que dicte el procurador general de la Nación. En particular se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente;
- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios y los setenta y cinco años de edad. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación;
- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante. Los magistrados mencionados podrán delegar esta competencia.

TÍTULO III

Disposiciones complementarias

Representación del Estado en juicio

Art. 63. — La representación del Estado en juicio será fijada por una ley especial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27, primer párrafo de esta ley. En igual sentido, dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la presente ley, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, cesando al vencimiento de dicho plazo la intervención de los integrantes del Ministerio Público.

Subsistencia de cargos

Art. 64. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Recursos

Art. 65. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

Equiparaciones. Ministerio Público Fiscal

Art. 66. — Los actuales integrantes del Ministerio Público pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de procuradores generales adjuntos y el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, respectivamente, previstos en el inciso b) del artículo 3º;
- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; el procurador general del Trabajo, los secretarios de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º;

- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la capital, el Subprocurador General del Trabajo, los Secretarios Letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3º.

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3º;
- f) Los fiscales adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3º.

Equiparaciones. Ministerio Público de la Defensa

Art. 67. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 4º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso a) del artículo 4º;
- b) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la cámara de casación penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación de segunda instancia o de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- c) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, conforme lo previsto en el inciso d) del artículo 4º;
- d) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º;

Estructura

Art. 68. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, en su caso, podrán modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para ello, elaborarán una propuesta que será remitida al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso.

Art. 69. — En los distritos judiciales donde no se hubieran cubierto con cargos autónomos las funciones de defensores de menores e incapaces y de pobres y ausentes establecidas en la presente ley, hasta tanto se designen los titulares respectivos a ambos cargos, los actuales defensores de pobres, incapaces y ausentes continuarán ejerciendo ambos ministerios.

En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se hubiesen designado los defensores públicos ante los tribunales colegiados de segunda instancia, ejercerán la función los defensores públicos ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones correspondientes, dichos defensores públicos ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 4º.

Derogaciones

Art. 70. — Deróganse las leyes 3.367, 15.464 y 21.383; los títulos VII, VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a), del decreto ley 1.285/58, el artículo 3º, incisos a) y b), y 5º de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3º de la ley 3.952, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; los artículos 1, inciso b) 2, 3, y 4 en cuanto instrumenta la forma de otorgar a un miembro del Ministerio Público el mandato para actuar en representación del Estado en juicio y la facultad del ministro de Justicia para dar las instrucciones pertinentes; y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Art. 71. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge R. Yoma.

Texto del proyecto presentado por el senador Almirón

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones goza de autonomía e independencia en relación con los demás órganos contemplados en la

Constitución. Representa los intereses generales de la sociedad; tiene a su cargo la defensa del orden jurídico y de la causa pública y actúa en todos los casos previstos por las leyes generales y especiales en que estén comprometidos los intereses y valores de la sociedad y del Estado.

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por: el procurador general de la Nación, los procuradores fiscales de la Corte Suprema, los fiscales de las cámaras de apelaciones, los fiscales ante los jueces de primera instancia, los defensores ante todas las instancias, fiscales auxiliares y demás funcionarios jerárquicos previstos en las leyes particulares.

Art. 3º — Los componentes del Ministerio Público serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Tienen la estabilidad, incompatibilidad e inmunidades previstas para los jueces en la Constitución Nacional.

Art. 4º — Para ser procurador general de la Nación, son precisos los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte Suprema. Los demás integrantes de la magistratura del Ministerio Público, deben reunir las mismas condiciones correspondientes a los jueces, según su grado y su destino.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia procederá en el término de 180 días a elaborar un texto ordenado complementario de la presente ley, con todas las disposiciones legales en vigencia inherentes al Ministerio Público.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos H. Almtrón.

Texto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
de fecha 7-9-95

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPÍTULO I

Principios generales

Misión

Artículo 1º — El Ministerio Público, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, tendrá por misión la que le asigna el artículo 120 de la Constitución Nacional para que en representación de los intereses de la sociedad defienda el orden jurídico en coordinación con los tres poderes del Estado.

Ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, jerarquía, unidad de actuación e independencia funcional, en todo lo concerniente a lo establecido por la presente ley.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público estará integrado por el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales, defensores y demás funcionarios y empleados que establezca la presente ley.

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas integra el Ministerio Público, excepto en sus competencias de naturaleza administrativo-disciplinarias, contenidas en el inciso a) del artículo 3º de la ley 21.383, que se transfieren a la Procuración del Tesoro de la Nación, y en el inciso b) del mismo artículo, que serán ejercidas por la Procuración del Tesoro de la Nación juntamente con la Sindicatura General de la Nación. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas será ejercida por un procurador delegado designado por el procurador general de la Nación.

Creación legislativa de cargos

Art. 3º — Toda creación legislativa de cargos a los que se atribuyeran competencias encomendadas al Ministerio Público por el artículo 120 de la Constitución Nacional u otras leyes, se considerará efectuada bajo la jefatura del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según la distribución de funciones prevista en esta ley, quienes podrán ejercer directamente o controlar el ejercicio de toda atribución de competencia que se hubiere otorgado a tales nuevos cargos.

Relaciones con los Poderes del Estado

Art. 4º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación se relacionarán con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial de la Nación por medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con el Poder Legislativo a través de una comisión bicameral, cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten en conjunto ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Autarquía financiera

Art. 5º — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público, contará con crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación elaborará el proyecto de presupuesto de su jurisdicción y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis e integración al presupuesto de la administración nacional.

Ejecución presupuestaria. Control

Art. 6º — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del Congreso Nacional creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de las cuentas del ejercicio.

CAPÍTULO II

Relación de servicio

Designación

Art. 7º.—El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán nombrados por el señor presidente de la Nación, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, y podrán ser removidos en cualquier tiempo por el señor presidente de la Nación con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Honorable Senado de la Nación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.

Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación, según el caso, de acuerdo con lo preceptuado por esta ley y su reglamento en materia de concursos.

Requisitos

Art. 8º.—Para ejercer el cargo de Procurador General de la Nación o Defensor General de la Nación, se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para el desempeño de los restantes cargos deberán reunirse las condiciones exigidas por esta ley y su reglamentación.

Ingreso, promoción y concursos

Art. 9º.—El ingreso y la asignación de cargos en el Ministerio Público se realizará previo concurso que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Los requisitos del cargo previstos en la ley;
- b) Los antecedentes que acrediten idoneidad especial en materias relativas al cargo y la formación jurídica del aspirante;
- c) Los antecedentes relativos a la tarea profesional o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación.

Para valorar estos aspectos se citará a una entrevista personal a los aspirantes que reúnan las condiciones establecidas, y se requerirá una prueba de idoneidad particular.

El concurso será abierto a cualquier aspirante.

Prohibición de ingreso

Art. 10.—No podrán ingresar en el Ministerio Público:

- a) Quienes no tengan aptitud física o psíquica para la función;
- b) Los inhabilitados de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional;
- c) Quienes no cuenten con cuatro (4) años de ejercicio en la profesión de abogado o en funciones en el Poder Judicial de la Nación que requieran título de abogado.

Lista de candidatos

Art. 11.—Anualmente, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación convocarán respectivamente y en las áreas de su competencia, a un concurso para conformar la lista de candidatos a ocupar diversos cargos del Ministerio Público. Este concurso tendrá por finalidad cubrir las vacantes que se produzcan en la lista y no se realizará uno nuevo mientras aquella no esté totalmente cubierta u operado el plazo de caducidad. Los candidatos seleccionados permanecerán tres (3) años en la lista, a contar desde el momento de su incorporación en ella, luego de lo cual se producirá la caducidad automática.

Tribunales de concurso

Art. 12.—El procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación según el caso, constituirá tribunales para los respectivos concursos, con fiscales o defensores presididos por un fiscal general o un defensor general, y con representantes de los tres Poderes del Estado uno por el Poder Ejecutivo nacional, uno por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, y uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juramento

Art. 13.—El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación y los fiscales y defensores, al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación lo harán ante el señor presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, o ante el funcionario que éstos designen, según los casos.

Incompatibilidades

Art. 14.—Quienes integran el Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien, cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. En lo demás alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Recusaciones y excusaciones

Art. 15.—El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales o defensores deberán excusarse o podrán ser recusados por las causas establecidas a su respecto en las leyes procesales.

que rijan las causas en que actúen. También podrán excusarse cuando existieren motivos graves que obstan a su actuación imparcial.

En tales supuestos, la sustitución se registrará conforme a lo dispuesto por la presente ley. Los conflictos que pudieran suscitarse a raíz de las excusaciones serán resueltos por el superior jerárquico del excusado.

Subrogación y sustitución

Art. 16. — En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los integrantes del Ministerio Público se reemplazarán de acuerdo con la reglamentación que dictarán el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, según los casos.

De no ser posible la subrogación entre sí, serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público y que los fiscales generales y los defensores generales formarán por insculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

En caso de recusación o excusación, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán reemplazados por el procurador fiscal y el defensor general adjunto con mayor antigüedad en el cargo, respectivamente.

Inmunidades

Art. 17. — El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales y los defensores, no podrán ser perturbados en el ejercicio de sus funciones por los integrantes de los poderes del Estado ni por persona alguna.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denunciaren con motivo de perturbaciones provenientes de dichos poderes, que afecten el ejercicio de sus funciones, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, quienes tendrán las facultades de resolverlas y poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones, cuando así correspondiere.

Estarán exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Remuneraciones

Art. 18. — Las remuneraciones del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, serán fijadas por ley y no podrán ser inferiores a las que perciban los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las remuneraciones de los fiscales, defensores, funcionarios y empleados del Ministerio Público serán fijadas en la Ley de Presupuesto y no podrán ser inferiores a las vigentes al 24 de agosto de 1994.

Estabilidad

Art. 19. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º, primer párrafo, el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y los fiscales y defensores del Ministerio Público, gozan de estabilidad en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad.

No obstante ello, el procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación según el caso, podrá disponer el cese de aquellos fiscales y defensores que alcancen los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.

Los funcionarios y empleados administrativos gozarán del derecho a la estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.

Disciplina y servicio

Art. 20. — Los miembros del Ministerio Público que incumplieren los deberes y obligaciones que establezcan las leyes y demás disposiciones reglamentarias, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta treinta (30) días;
- d) Multa de hasta el equivalente a treinta (30) días de la remuneración respectiva;
- e) Remoción por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes.

La sanción deberá ser adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y a los antecedentes en la función.

Las decisiones disciplinarias serán adoptadas por el procurador general de la Nación, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Remoción con causa

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos en la forma y por las causas establecidas para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º, primer párrafo.

Los fiscales, defensores y funcionarios con rango equivalente, podrán ser removidos por decisión de un jurado de enjuiciamiento, en los supuestos del artículo 20, inciso e).

Jurado de Enjuiciamiento

Art. 22. — Créase el Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público que estará presidido por el procurador general de la Nación, e integrado, además, por un representante del Poder Judicial de la Nación, un re-

presentante por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, y un representante del Poder Ejecutivo nacional, que tendrá a su cargo la sustanciación y decisión de los sumarios que pudieran concluir en la remoción con causa de los fiscales, defensores y funcionarios con rango equivalente del Ministerio Público, de conformidad al reglamento que deberá dictar a tal efecto.

Correcciones disciplinarias

Art. 23. — Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones y apercibimientos, o solicitar al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, la formación de sumarios administrativos a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o el decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las correcciones disciplinarias aplicadas a los litigantes.

Cesación

Art. 24. — Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7º, 19, 20 y 21 la relación de servicio en el Ministerio Público se extinguirá por las siguientes causas:

- a) Renuncia;
- b) Remoción;
- c) Muerte o incapacidad sobreviniente;
- d) Jubilación forzosa o voluntaria;
- e) Cumplimiento de la edad límite.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán disponer la jubilación forzosa de quienes hayan cumplido los requisitos previstos en la ley previsional, cesando en el cargo una vez concedido el beneficio, conforme lo dispuesto en el artículo 19, segundo párrafo, de la presente.

TÍTULO II

Funciones y actuación

Sección primera

Normas generales

CAPÍTULO I

Funciones

Funciones del Ministerio Público

Art. 25. — Al Ministerio Público le compete:

- a) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la Nación;
- b) Representar y defender el interés público en todos los casos y asuntos que así se requiera;
- c) Promover y ejercer la acción penal pública en la forma y alcance establecido por la ley. Los jueces no procederán a instruir sumarios, ni

condenarán sin previo requerimiento fiscal. Mediando prevención policial y llegadas las actuaciones al juzgado, se dará inmediata intervención al fiscal, sin cuyo requerimiento promoviendo la acción penal no podrá continuar el trámite de la causa;

- d) Intervenir en todos los asuntos en que esté comprometido el interés de la Nación o el orden público;
- e) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos por la ley;
- f) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como el efectivo cumplimiento del debido proceso adjetivo y sustantivo;
- g) Velar por el respeto permanente de los derechos humanos —comunicando de manera inmediata cualquier violación a ellos—, y formular la denuncia penal y/o promover las acciones civiles que correspondieren;
- h) Solicitar la protección de las huellas o vestigios del delito, manteniendo la confidencialidad de los materiales correspondientes;
- i) Requerir la asistencia de las víctimas de los delitos, mantenerlas informadas del grado de avance de la causa respectiva, atender sus pedidos de informes sobre el hecho y evacuar cualquier consulta que formulen;
- j) Concurrir a solicitud del Defensor del Pueblo a las inspecciones o visitas que realice en el ejercicio de sus funciones;
- k) Observar un trato digno con el público y los detenidos;
- l) Tener en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima y prestar atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso, sin perjuicio de las obligaciones del defensor oficial respecto de su defendido;
- ll) Velar contra la práctica, propiciamiento o consentimiento de cualquier acto de tortura o de incommunicación ilegal.
Cuando se sepa, o se tengan sospechas fundadas que las pruebas fueron obtenidas por medios ilícitos, especialmente torturas u otros abusos de los derechos humanos, deberá negarse a utilizar las mismas contra cualquier persona salvo para los responsables de la obtención ilícita de dichas pruebas;
- m) Considerar la posibilidad de deistir de la acción penal o de interrumpir el proceso condicionalmente en los casos y en los términos que la ley lo autorice, según las instrucciones que emanen del procurador general, dejando a salvo los derechos del imputado y de la víctima;
- n) Los fiscales deberán cooperar con otros organismos e instituciones gubernamentales dentro de su competencia específica;
- ñ) Controlar que no se realicen detenciones ilegales;
- o) Guardar la más absoluta reserva acerca de los hechos y actuaciones de la causa;

- p) Promover ~~le~~ *Intervenir* en cualquier causa o asunto concerniente al derecho de menores, incapaces e inhabilitados, cuando los mismos sean carentes de representación legal; cuando se deba suplir la inacción de sus representantes legales o de las personas que los tuvieran bajo su guarda o custodia; todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que corresponde por ley;
- q) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y de los derechos de los habitantes que carecieren de recursos o estuvieren ausentes;
- r) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;
- s) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Funciones excluidas

Art. 26. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación en juicio cualquiera sea la naturaleza de éste, del Estado y el del Fisco, así como el asesoramiento al Poder Ejecutivo. Ello no obstante, ante un requerimiento fundado de organismos públicos expedido por su máximo nivel jerárquico, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de sus competencias funcionales.

Los integrantes del Ministerio Público, bajo ningún concepto, podrán subrogar en sus funciones a los magistrados, del Poder Judicial.

CAPÍTULO II

Actuación

Facultades de investigación

Art. 27. — Los funcionarios del Ministerio Público, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales o comunales, a los organismos privados, y a los particulares cuando corresponda; así como recabar la colaboración de las autoridades policiales para realizar diligencias propias de aquéllos.

Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— y sin perjuicio de las directivas que el juez competente impartiera a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil

para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

Carácter de los dictámenes

Art. 28. — Las acciones públicas, dictámenes e intervenciones en juicio de los integrantes del Ministerio Público, carecen de carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales, con las limitaciones que prevean las leyes procesales.

Los dictámenes y requerimientos merecerán siempre la consideración de los jueces, quienes no están obligados a tratar todos los argumentos aducidos, sino sólo los que estimen conducentes para motivar y fundar sus decisiones.

Principios de legalidad y oportunidad

Art. 29. — Cuando se trate de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio.

La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley.

La aplicación de criterios de oportunidad será decidida o autorizada por el procurador general de la Nación por instrucciones generales o particulares, pudiendo delegar las autorizaciones sólo en los casos particulares.

Organización jerárquica

Art. 30. — El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de los que estén a su cargo.

Quienes asisten a un superior jerárquico deben obedecer sus instrucciones, según lo dispuesto en la presente ley y su reglamento.

Deber de informar

Art. 31. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su importancia, trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

CAPÍTULO III

Del procurador general de la Nación

Principio general

Art. 32. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público y el responsable político de su buen funcionamiento —con la participación del defensor general de la Nación en la medida de sus competencias—, respondiendo de ello ante el Congreso de la Nación conforme lo establecen los artículos 6º, segundo párrafo, 7º y 21 de la presente ley.

El procurador general de la Nación ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

Atribuciones y deberes

Art. 33. — Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público, establecer normas para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- b) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- c) Conformar, coordinar y radicar equipos de trabajo ordinarios o especiales en cualquier lugar del país, según las necesidades del servicio;
- d) Intervenir personalmente o designar un funcionario especial en cualquier proceso judicial, cualquiera sea su estado, asumiendo la representación del Ministerio Público y desplazando al agente ordinario o actuando en forma conjunta o alternada con éste. La actuación dentro de un proceso judicial determinado de los magistrados especiales no será causal de impedimento o recusación si posteriormente debieren intervenir como agentes ordinarios en el mismo proceso;
- e) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado conforme a la ley, pudiendo delegarla en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente
- f) Modificar la planta básica del Ministerio Público, crear nuevos cargos, aumentar el número de los ya creados, crear organismos, áreas o dependencias para los fines y funciones previstos en esta ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63, primer párrafo;
- g) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del organismo;
- h) Requerir la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarlas en la medida de su respectiva competencia;
- i) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea del caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- j) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados de la Procuración General de la Nación y los funcionarios del Ministerio Público;
- k) Rendir anualmente al Congreso Nacional un informe escrito sobre las labores cumplidas por el Ministerio Público a su cargo;

- l) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la competencia originaria que prevé la Constitución Nacional, pudiendo ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público y controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso legal;
- m) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de dictaminar si corresponde a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela. A este objeto, cuando resulte competente, el tribunal dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios concedidos y de las quejas planteadas por denegatoria, de aquéllos;
- n) Solicitar, con la sola invocación de esta norma, el rechazo del recurso extraordinario en las causas que para dictamen le remita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando falte agravio federal suficiente o las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia;
- ñ) Eximirse de dictaminar en las causas que le remita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según su sana discreción y con sola invocación de esta norma, cuando en ellas no se hallaren comprometidos los intereses y derechos que el Ministerio Público debe tutelar, en función del artículo 120 de la Constitución Nacional y del artículo 25 de la presente ley;
- o) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante dicho tribunal cuando el interés público se encontrare comprometido;
- p) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- q) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda;
- r) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- s) Dictar el reglamento de la carrera y ascenso de los funcionarios y empleados administrativos del Ministerio Público;
- t) Ejercer, por avocación, las facultades que la ley prevé para el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en los términos del artículo 2º de la presente;
- u) Representar al Ministerio Público en las relaciones con los Poderes del Estado;
- v) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- w) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia

de la reforma de la legislación o sus reglamentos y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente.

Sustituciones y traslados

Art. 34. — El procurador general de la Nación podrá designar a uno o más funcionarios del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos de trabajo o asumir directamente la conducción personal de un caso, cualquiera sea la instancia o el fuero en que se halle radicado.

Podrá ordenar traslados por razones de servicio dentro del área territorial o funcional de actuación de los afectados. Estos traslados podrán ser definitivos o transitorios.

Instrucciones

Art. 35. — El procurador general de la Nación impartirá a sus subordinados las instrucciones inherentes al servicio y al ejercicio de las funciones tanto de carácter general cuanto referidas a asuntos específicos.

Deber de obediencia

Art. 36. — El integrante del Ministerio Público que reciba una orden de un superior concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones deberá cumplirla y atenerse a ella en sus dictámenes, sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal si así lo estimare.

En los debates orales, el funcionario interviniente actuará y/o concluirá según su criterio, sin perjuicio de observar las instrucciones generales relativas a la interpretación de la ley. Si algún superior jerárquico deseara conducir el debate según su propio criterio, asistirá a él asumiendo personalmente la representación del Ministerio Público, previa autorización expresa del procurador general de la Nación.

Objeción

Art. 37. — El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, así lo hará saber al procurador general de la Nación por informe fundado. Este, sobre la base del mismo, decidirá si mantiene o no la instrucción objetada.

Cuando una instrucción objetada, general o particular, concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior.

Si la instrucción objetada consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del reemplazo que se pudiese ordenar o del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Forma de las instrucciones

Art. 38. — Las instrucciones serán impartidas, como regla general en forma escrita y transmitidas por cual-

quier vía de comunicación. En caso de peligro en la demora, podrán ser dadas oralmente y confirmadas de inmediato por escrito, por dichos medios.

Las instrucciones sencillas, consistentes en simples órdenes del servicio, podrán ser impartidas oralmente.

Informe anual al Congreso Nacional

Art. 39. — Anualmente y en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación remitirá un informe de lo actuado que deberá contener:

- a) El resumen pormenorizado del trabajo realizado en el ejercicio;
- b) El análisis de la eficiencia del servicio prestado con detalle de los inconvenientes que lo afectaron y las medidas adoptadas para superarlos;
- c) El detalle de las instrucciones generales y particulares impartidas, las objeciones efectuadas y la decisión recaída; los equipos formados, los reemplazos y traslados producidos y la asunción personal de la actuación en los diversos casos;
- d) El detalle de las modificaciones producidas en los cargos del Ministerio Público y la descripción de su planta actual;
- e) Las propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que requiera el servicio, si correspondiere;
- f) Las sugerencias o propuestas sobre la actividad general o particular del Ministerio Público recibidas de los poderes del Estado y sus correspondientes respuestas;
- g) Las demás que le recomendaré el Congreso Nacional por medio de la comisión bicameral creada por esta ley;
- h) Toda otra información que se considere conveniente y necesaria hacer conocer al órgano legislativo;
- i) La rendición de las cuentas del ejercicio.

SECCION SEGUNDA

Del Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

De los procuradores fiscales y procuradores delegados

Atribuciones y deberes

Art. 40. — Los procuradores fiscales asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con los incisos l), ll), m), n), ñ), o), p) y q) del artículo 33 de la presente ley y lo que establezca el Reglamento de Superintendencia.

Los procuradores delegados son designados por el procurador general de la Nación para la investigación de cierta clase de delitos que por su magnitud, complejidad y particularidades así lo aconsejen, quedando ello reservado a su prudente arbitrio. Igualmente podrá designarlos para que tengan a su cargo, por delegación, el go-

bierno del Ministerio Público en una determinada zona o área territorial del país, sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 42 a los fiscales generales.

Requisitos para la designación

Art. 41. — Para ser procurador fiscal o procurador delegado se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
- c) Ser abogado, con título habilitante para ejercer esa profesión en la República y haberla ejercido o haber cumplido funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación que requieran dicho título, o en todas esas actividades alternativamente, por un lapso no menor de seis (6) años.

CAPÍTULO II

De los fiscales generales

Atribuciones y deberes

Art. 42. — Los fiscales generales serán los jefes del Ministerio Público en los distritos o departamentos que les fueren encomendados y los responsables de su buen funcionamiento ante el procurador general de la Nación, o el procurador delegado, en su caso.

Ellos ejercerán la acción penal pública y las demás atribuciones que la ley otorga al Ministerio Público, por sí o por intermedio de los funcionarios que establece la presente ley según se reglamente, salvo cuando el procurador general de la Nación, asuma directamente esa función o la encomiende a otro, conjunta o separadamente.

Corresponde a los fiscales generales:

- a) Promover ante las cámaras de apelaciones el ejercicio de la acción pública o continuar ante aquellas la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido en instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Elevar al procurador general de la Nación un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional como en lo concerniente a la superintendencia;
- c) Ejercer superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general de la Nación;
- d) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- e) Responder los pedidos de informes que les solicite el procurador general de la Nación;

f) Peticionar la reunión de la cámara de apelaciones en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria y requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria. En ambos casos, será requisito para el ejercicio de esta atribución el carácter de parte en el juicio;

g) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario.

Requisitos para la designación

Art. 43. — Para ser fiscal general se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO III

De los fiscales

Atribuciones y deberes

Art. 44. — Los fiscales ejercerán sus funciones bajo la dependencia de los fiscales generales, asistiéndolos o tomando a su cargo las tareas que éstos determinen.

Ejercerán la acción penal pública de manera autónoma y por sí mismos o por intermedio de los órganos auxiliares que esta ley establece, salvo cuando el procurador general de la Nación o el fiscal general asuman directamente esa función o el primero la encomiende a otro, u otros funcionarios, conjunta o separadamente.

Corresponde a los fiscales actuar por ante los jueces de primera instancia, con las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Atribuciones en particular

Art. 45. — En particular, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus, en todas las cuestiones de competencia y en los procesos donde se solicite el otorgamiento de la ciudadanía argentina.

Intervendrán igualmente, en forma ineludible, en los casos en que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y no del Estado.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán realizar las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, y para

promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder en miras al interés público.

Denuncias intervención fiscal

Art. 46. — Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal deberán dar intervención a los Fiscales ante la justicia criminal y correccional, cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley le confiere.

Deber de informar

Art. 47. — Los Fiscales ante la Primera Instancia deberán informar a la correspondiente Fiscalía General, de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

Requisitos para la designación

Art. 48. — Para ser Fiscal se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido veinticinco (25) años de edad;
- c) Ser abogado con título habilitante para ejercer esa profesión dentro de la República y haberlo ejercido o haberse desempeñado en funciones del Ministerio Público o del Poder Judicial de la Nación que requieran dicho título, o en esas actividades alternativamente, por un lapso no menor a cuatro (4) años.

CAPÍTULO IV

De los fiscales adjuntos y auxiliares

Atribuciones y deberes

Art. 49. — Los fiscales adjuntos colaborarán con un fiscal general y los fiscales auxiliares con un fiscal. Los fiscales adjuntos que dependan de una fiscalía general actuarán dentro de la jurisdicción territorial correspondiente a la misma.

Los fiscales adjuntos ejercerán autónomamente la acción penal pública y las demás atribuciones que las leyes otorgan al Ministerio Público, respondiendo a las indicaciones del superior jerárquico de quien dependan o a quien asistan.

Los fiscales auxiliares no podrán intervenir autónomamente en juicio, sino bajo la supervisión y responsabilidad del superior jerárquico a quien asisten.

Requisitos para la designación

Art. 50. — Para ser fiscal adjunto o fiscal auxiliar se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido veinticinco (25) años de edad;

c) Ser abogado con título habilitante para ejercer la profesión en la República y haberla ejercido o haber desempeñado funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación, que requieran dicho título, o en esas actividades alternativamente, por un lapso no menor de cuatro (4) años.

CAPÍTULO V

De la Procuración General de la Nación

Composición, atribuciones y deberes

Art. 51. — La Procuración General de la Nación es el domicilio y la sede de actuación del procurador general de la Nación, como fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio Público.

En dicha sede se desempeñarán los procuradores fiscales, fiscales generales, fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares que colaboren con el Procurador general de la Nación, en el número que éste decida, de conformidad a las facultades que en materia presupuestaria se le asignen por esta ley.

Todos los fiscales mencionados en el párrafo anterior que se desempeñen en la Procuración General de la Nación, colaborarán, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público, de conformidad con los planes y organigramas de trabajo que el procurador general disponga.

Sin perjuicio de lo anterior, los procuradores fiscales desempeñarán las funciones que les asigna el artículo 40 de la presente y los fiscales generales de la Procuración General tendrán a su cargo las distintas Secretarías que funcionen en la sede. Los Fiscales de la Procuración General de la Nación, actuarán en todo el territorio de la Nación, en las causas que el procurador general disponga.

SECCION TERCERA

Del Ministerio Público de la Defensa Oficial

CAPÍTULO I

Composición, funciones y jerarquía

Composición

Art. 52. — Integran la defensa oficial el defensor general de la Nación, los defensores generales adjuntos, los defensores oficiales generales y los defensores oficiales.

Funciones

Art. 53. — La defensa oficial interviene en los asuntos judiciales en los que se hallen involucrados menores, incapaces, pobres y ausentes, y deberá entablar en su defensa todas las acciones y recursos que legalmente corresponden.

Jefatura

Art. 54. — El defensor general de la Nación es el jefe máximo de la defensa oficial y responderá en el marco de sus competencias ante el Congreso de la Nación conforme lo establece los artículos 6º, segundo párrafo, 7º y 21 de la presente ley.

El defensor general de la Nación ejercerá la defensa oficial y las demás facultades que la ley le otorga por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

CAPÍTULO II

*Del defensor general de la Nación**Atribuciones*

Art. 55. — Al defensor general de la Nación le corresponde:

- a) La representación de menores, pobres, ausentes e incapaces en todas las causas en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia, en que sea designado en el trámite de recursos extraordinarios, de gracia por denegación de recurso extraordinario, y en el de apelación ordinaria;
- b) Ejercer la superintendencia sobre todos los defensores generales adjuntos, defensores oficiales generales, defensores oficiales en los fueros nacional y federal y sobre todos los tutores y curadores públicos; vigilar el cumplimiento de las funciones de los defensores de oficio, de los curadores de ausentes e incapaces y promover las acciones tendientes a definir su responsabilidad por incumplimiento de sus deberes;
- c) Designar con la participación del procurador general de la Nación a los defensores generales adjuntos, defensores oficiales generales y defensores oficiales, de acuerdo al reglamento vigente;
- d) Avocarse, cuando lo estimare conveniente, el ejercicio de las funciones asignadas a los defensores oficiales generales y defensores oficiales.

CAPÍTULO III

*De los defensores generales adjuntos**Atribuciones y deberes*

Art. 56. — Los defensores generales adjuntos asisten al defensor general de la Nación, y cumplen las directivas que éste imparta de conformidad al inciso a) del artículo 55 de la presente ley.

Requisitos para la designación

Art. 57. — Para ser defensor general adjunto se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO IV

*De los defensores oficiales generales**Atribuciones y deberes*

Art. 58. — Los defensores oficiales generales serán los jefes de la Defensa Oficial en los distritos o departamentos que les fueren encomendados y los responsables de su buen funcionamiento ante el Defensor general de la Nación.

Corresponde a los defensores oficiales generales ejercer, ante las cámaras de apelaciones y tribunales orales, la defensa pública o continuar ante aquéllas la intervención que la defensa oficial hubiera tenido en instancias inferiores.

Asimismo podrán avocarse el ejercicio de las funciones asignadas a los defensores oficiales.

La Dirección del Registro de Incapaces, creada por el decreto 84.466/63 quedará a cargo del defensor oficial general titular a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

Requisitos para la designación

Art. 59. — Para ser defensor oficial general se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO V

*De los defensores oficiales**Atribuciones y deberes*

Art. 60. — Corresponde a los defensores oficiales, en los fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces o inhabilitados, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma directa o juntamente con los representantes individuales. Con ese objeto, los tribunales judiciales, deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare involucrado;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en la presente ley y en las de aplicación del Código Civil, así como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas disciplinarias, correccionales o de seguridad que estimaren pertinentes respecto a menores que exteriorizaran reiteradas faltas de conducta o se encontraren expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral,

cuando tales situaciones no pudieran ser controladas por los padres o personas que los tengan a su cuidado;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha y desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del Patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley 10.903, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que los incumben de acuerdo con la ley 22.914 sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fueren consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) Ejercer la defensa y la representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza o justificaren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- i) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional, siempre que fueren convocados al efecto;
- j) Asumir la defensa de las personas denunciadas como dementes o inhabilitados, cuando fueren convocados al efecto;
- k) En todos los casos en que ejerzan la defensa pública, tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos y de procurar hallarlos cuando estuvieren ausentes;
- l) Evacuar las consultas que le soliciten las personas caientes de recursos, asistirles en los trámites judiciales pertinentes, y en su caso patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

Requisitos para la designación

Art. 61. — Para ser defensor oficial se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 48 de la presente ley.

TITULO COMPLEMENTARIO

Presupuesto vigente, reestructuración

Art. 62. — Autorízase al Poder Ejecutivo para abrir los créditos presupuestarios adicionales o hacer las reestructuraciones en el presupuesto vigente que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Estructura y planta básica

Art. 63. — La estructura orgánica, funcional y administrativa del ministerio público será elaborada por el procurador general de la Nación, con la intervención

del defensor general de la Nación en lo que corresponda, quien la remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso de la Nación.

Sin perjuicio de las modificaciones que se adopten en el futuro, el Ministerio Público contará con la planta básica existente a la fecha de entrar en vigencia la presente ley.

Los funcionarios y empleados serán designados por el procurador general de la Nación, sin perjuicio de las facultades de defensor general de la Nación, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación dentro de los límites presupuestarios.

Recursos y créditos presupuestarios

Art. 64. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

A los efectos operativos el Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

Representación del Estado en juicio

Art. 65. — La representación del Estado en juicio será fijada por una ley especial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 26, primer párrafo. Hasta tanto, el Ministerio Público continuará con dicha representación, conforme las leyes vigentes a la fecha.

Cargos preexistentes y equivalencias

Art. 66. — Los cargos de los integrantes del Ministerio Público actualmente existente, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia.

A tales fines se establecen las siguientes equivalencias:

- a) Los actuales procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tendrán en adelante la jerarquía de procuradores fiscales. Igual jerarquía tendrán los cargos de procuradores delegados y los defensores generales adjuntos, creados por esta ley;
- b) Los actuales fiscales y defensores ante las cámaras de apelaciones, fiscales y defensores ante los tribunales orales y ante los tribunales colegiados de casación, o secretarios de la Procuración General de la Nación, los asesores fiscales y defensores ante los tribunales orales de menores, los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y el procurador general del trabajo, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales generales o defensores oficiales generales;
- c) Los actuales fiscales adjuntos de los fiscales de cámara o de tribunales orales, el subprocurador general del trabajo y los secretarios letrados de

la Procuración General de la Nación, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales adjuntos de los fiscales generales;

- d) Los actuales fiscales y defensores ante los juzgados de primera instancia de cualquier fuero, los fiscales criminales de instrucción, los procuradores fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales y defensores oficiales;
- e) Los actuales prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación, los fiscales adjuntos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal y el fiscal coadyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales auxiliares de los fiscales.

Funcionarios y empleados. Transferencia.

Derechos adquiridos

Art. 67. — Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente.

Las remuneraciones de los funcionarios y empleados técnico-administrativos del Ministerio Público no podrán ser inferiores a las que perciban a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

También mantendrán su jerarquía y antigüedad sea que anteriormente se hubieren desempeñado en cargos del Ministerio Público o del Poder Judicial de la Nación o de ambos, alternativamente.

También conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación mediante convenio a celebrarse entre la Procuración General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con similar cobertura e igual porcentualidad en las cuotas.

Todo futuro traspaso de empleados y funcionarios técnico-administrativos desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación o a la inversa, se hará teniendo en cuenta los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo.

Art. 68. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Eduardo Bauzá. — Rodolfo C. Barra.

Texto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de fecha 5-6-96

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Las fiscalías transformadas y creadas por los artículos 28 y 44 de la ley 24.121, se denominarán en lo sucesivo fiscalías ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y se identificarán con los números 1 a 63. Los números 50 a 63 corresponderán a las ex fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal.

Art. 2º — Las fiscalías mencionadas en el artículo precedente, tendrán competencia indistinta ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal y ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal y actuarán conforme los turnos que establezca la reglamentación, que deberá dictar al respecto el procurador general de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Rodolfo C. Barra.

NOTA

Los fundamentos de los proyectos presentados por los señores senadores y los dos mensajes del Poder Ejecutivo no se publican, dejándose constancia que los mismos se hallan impresos en los diarios de asuntos entrados según el siguiente detalle:

S.-520/95 DAE Nº 42/95; S.-668/95 DAE Nº 54/95; S.-1.350/95 DAE Nº 110/95; S.-1.306/95 DAE Nº 106/95; S.-1.910/95 DAE Nº 161/96; S.-623/96 DAE Nº 44/96; S.- 779/96 DAE Nº 52/96; P.E.-500/95 DAE Nº 94/95; P.E.-186/96 DAE Nº 68/96; asimismo los proyectos presentados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y el del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran a disposición de los señores senadores en los expedientes originales.

Disidencia parcial del señor senador Usandizaga al dictamen sobre ley orgánica del Ministerio Público (expedientes S.-520, S.-668, S.-1.350, S.-1.306, S.-1.910 de 1995 y S.-623, S.-779, S.-866 de 1996, P.E. 500/95 y; P.E. 186/96)

Señor presidente:

El Ministerio Público como órgano nuevo creado por el artículo 120 de la reformada Constitución Nacional, nace con las características propias que determina expresamente dicha norma.

Es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Según Humberto Quiroga Lavié "dicho órgano configura un poder de control social fundamental en aras de lograr el equilibrio de los Poderes del Estado", "es un órgano extrapoder", "un representante de los derechos de la sociedad, verdadero control social externo".¹

Para el doctor Bidart Campos, no es un "auxiliar del Poder Judicial", es "en rigor, un órgano de fiscalización o vigilancia en el sentido político de estos términos... reviste una función controladora, desde fuera de los tres poderes clásicos, y queda definido con claridad suficiente que no depende del Poder Ejecutivo, con lo que, "se corta de raíz toda posibilidad de que el Ejecu-

¹ Humberto Quiroga Lavié: *Constitución de la Nación Argentina comentada*, Editorial Zavalla, 1998, página 691 y siguientes.

tivo interfiera en las funciones del Ministerio Público, o, lo que es peor, que le imparta instrucciones a través del Procurador General de la Nación.²

Por su parte, el artículo 120 de la Constitución agrega que el órgano "está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y por los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones".

De acuerdo con la norma constitucional hay un bicefalismo en el Ministerio Público, gozando ambos miembros de "inmunidades funcionales" iguales a las de los legisladores.

Hasta aquí lo normado por la Constitución, la que deja librado a la ley la reglamentación de importantes cuestiones, como la de designación y remoción de sus miembros.

Es cumplimiento de ello, en el artículo 5º del dictamen que analizamos, se determina que el Procurador General y el Defensor General serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, no estableciéndose límite a la duración de su mandato. Ello lleva a interpretar que ambos funcionarios permanecerán en el cargo mientras dure su buena conducta o hasta que cumplan setenta y cinco años, según lo dispone el artículo 13 de este proyecto. Sólo podrán ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Pero al completar el análisis de los artículos anteriores con la lectura de las disposiciones del artículo 69 del proyecto, observamos que por esta norma, los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la misma norma.

Se crean así, por ley de la Nación dos categorías de funcionarios: aquellos que acceden al cargo en cumplimiento estricto del artículo 5º de la misma, y una categoría preexistente de los que no se adecuan a dicho precepto, ya que en la actualidad el Procurador General como el Defensor General no han accedido a su cargo con acuerdo de este Senado. Se les está otorgando una singular situación de privilegio, al brindárseles la inamovilidad por una ley que aprobará este Congreso sin la exigencia de mayorías especiales.

Es por ello que proponemos la sustitución del artículo 69 del dictamen por el siguiente:

Artículo 69: Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público excepto el del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejer-

zan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el Procurador General y el Defensor General no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Dentro de los treinta días de publicada la presente ley, se procederá a la designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación en los términos del artículo 5º.

Esta modificación se completa con la eliminación del inciso a) del artículo 71 y del inciso a) del artículo 72, corrigiendo la numeración de los restantes incisos de dichos artículos.

Como medida entonces de equidad y atento a que la institución ha de significar una nueva etapa en la consolidación de un régimen judicial eficiente y socialmente respetado, es que solicitamos que, tanto el Procurador General como el Defensor General, en su carácter de cabezas del órgano Ministerio Público, se designen en el plazo estipulado, dándose estricto cumplimiento a los requisitos del acuerdo.

Horacio D. Usandizaga.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR NACIONAL ALCIDES H. LOPEZ CON EL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MINISTERIO PUBLICO

Expedientes: S-520, 668, 1.350, 1.306 y 1.910/96; S-623, 779 y 866/96; P.E-500/95 y 186/96; y P-190/95 y 12/96.

Señor presidente:

Me dirijo a usted, a fin de remitirle las disidencias parciales que mantengo con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público, y sus fundamentos, las que expongo a continuación explicitando cada una de las normas del mencionado proyecto que observo, y la redacción que propongo se adopte en cada caso.

Artículo 5º: Se advierte una omisión, consistente en no prever la forma de designación de los miembros del Ministerio Público que se mencionan en el artículo 3º, inciso f) (fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación). Al mismo tiempo, en el último párrafo del artículo 7º se prevén las condiciones para presentarse al concurso necesario para ser designado en esos cargos.

Proponemos agregar al artículo 5º: "Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 3º, serán designados por el procurador general de la Nación, entre los candidatos que seleccione el tribunal examinador del concurso de antecedentes y oposición, y a propuesta del magistrado de quien dependan, en su caso".

No es necesario solicitar acuerdo del Senado para funcionarios cuya jerarquía es equivalente a la de secretario de cámara (Cfr.: artículo 12, inciso d). Igualmente, parece razonable que pueda elegirse entre todos aquellos que rindan satisfactoriamente el concurso de

² Germán Bidart Campos: *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, tomo VI. *La reforma constitucional de 1994*, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1995, página 488.

antecedentes y oposición y, asimismo, respetar la facultad de los magistrados de proponer el candidato para ser designado en funciones de estrecha colaboración con aquel, tradicionalmente reconocida en el Poder Judicial de la Nación hasta ahora y, como consecuencia, también reconocida en el ámbito del Ministerio Público.

Artículo 6º: El sistema de elaboración de la terna de entre otros cinco candidatos no parece conveniente, resulta complicado, y desnaturaliza el mismo mecanismo del concurso. En todo caso, deberá adoptarse una solución análoga a la propuesta en el proyecto original del senador Yoma, con algunas modificaciones en dos sentidos. Por un lado, que la terna se elabore entre todos los candidatos que resulten seleccionados por el tribunal examinador, toda vez que esa selección resultante del concurso garantiza suficientemente el cumplimiento del requisito de idoneidad para desempeñar cargos públicos (artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional). Por otro, en cuanto a la integración del tribunal examinador, tampoco parece necesario ni conveniente que en todos los casos se integre obligadamente con fiscales o defensores generales, en especial para cubrir cargos de menor jerarquía. Otros magistrados se encuentran perfectamente habilitados para integrar el tribunal, sin necesidad de recaer en las tareas propias de los fiscales o defensores generales con la de integrar estos tribunales. Por otra parte, el número de integrantes del tribunal examinador deberá ser impar para evitar que eventuales discrepancias entre sus miembros impidan llevar a cabo la selección (empate).

Se propone la siguiente redacción al artículo sexto:

Artículo 6º: "La elaboración de las ternas se hará entre los candidatos que seleccione, previo concurso de oposición y antecedentes, un tribunal convocado por el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con tres magistrados del Ministerio Público con una antigüedad en el superior a diez años, con jerarquía superior a la del cargo sometido a concurso. Cuando al concurso se realice para cubrir alguno de los cargos indicados en los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º, incisos b) y c), el tribunal examinador deberá integrarse con dos magistrados de la jerarquía prevista en esas normas, y el procurador general o el defensor general de la Nación, quienes lo presidirán, en su caso."

Artículo 7º: La redacción que se propone en el proyecto de dictamen es innecesariamente complicada. Asimismo, no nos parece correcta la redacción utilizada en el dictamen en cuanto establece requisitos "para presentarse a concurso", toda vez que tales requisitos son exigibles para acceder al cargo y, naturalmente, deberán ser cumplidos liminarmente por quienes se postulan a él.

En consecuencia, debería mantenerse la redacción original del proyecto del senador Yoma que tanto es más precisa como sencilla en cuanto remite a las condiciones personales exigidas para los cargos equivalentes del Poder Judicial.

Proponemos que el artículo 7º quede redactado de la siguiente manera:

"Para ser procurador general o defensor general de la Nación, deberá reunirse las mismas condiciones que

para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el desempeño de los restantes cargos mencionados, en los artículos 3º y 4º, se aplicarán los requisitos existentes para ser juez de Cámara, juez de primera instancia o secretario de Cámara, según las equivalencias que surgen del artículo 12".

Artículo 12: En el inciso d) se omite establecer la equiparación de remuneración de los fiscales auxiliares de la Procuración General de la Nación, mencionados en el inciso f) del artículo 3º juntamente con los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia.

Para subsanar la omisión y mantener la misma línea de redacción proponemos que el inciso d) del artículo 12 quede redactado de la siguiente manera:

"d) Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 3º percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara".

Artículo 15: Si bien compartimos establecer como requisito legal la conformidad del interesado y el respeto de su jerarquía para posibilitar su traslado a otra jurisdicción territorial, el mismo recaudo debe imponerse para el traslado a un organismo distinto a aquél para el que fue designado aún dentro de la misma jurisdicción territorial. De tal manera se evita que, por la vía de trasladar un fiscal de una fiscalía a otra (lo cual no implicaría cambio de funciones ni necesariamente de jurisdicción territorial) puede obtenerse su apartamiento de una causa determinada, o su asignación deliberada a ella.

Asimismo, compartimos la posibilidad de conformar equipos de fiscales para atender asuntos de particular complejidad, o aún para auxiliar a un fiscal que deba dedicar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a atender una causa compleja o de mayor repercusión social que otras. En este sentido, la posibilidad de designar fiscales coadyuvantes fue introducida en el antiguo Código Procesal Penal (artículo 116) como resultado de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional durante la época del gobierno radical. En tal sentido convenimos con el dictamen de la comisión que tras varias modificaciones aceptó el criterio propuesto por la Comisión del Ministerio Público de la Asociación de Magistrados en cuanto a que los equipos que se formen estarán sujetos a las directivas del titular.

En consecuencia, y en lo que atañe a esta norma proponemos que el artículo 15 quede redactado de la siguiente manera:

"Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. La misma conformidad se requerirá para el traslado de un magistrado o funcionario del Ministerio Público a un organismo distinto a aquél para el que fue designado, aún dentro de la misma jurisdicción territorial. Sólo podrán ser destinados temporalmente a funciones u organismos distintos de los adjudicados en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 32, inciso g) y 50, inciso d)".

Artículo 16: Formulamos dos observaciones a este artículo.

La primera de ellas, al 4º párrafo que atribuye facultad disciplinaria a los fiscales y defensores genera-

les respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan. En el 1º párrafo de la norma se reconoce con acierto la facultad disciplinaria al procurador general y al defensor general de la Nación. Decimos con acierto, porque a dichos magistrados —en un todo de acuerdo con la doctrina y la práctica tradicional, con la economía del proyecto y, a nuestro juicio, con el artículo 120 de la Constitución Nacional— cabe reconocerles la facultad de superintendencia sobre ambas vertientes (Fiscalía y Defensoría) del Ministerio Público, facultad que se integra con la potestad disciplinaria. En tal inteligencia, resulta inconveniente que el legislador desmembre esa potestad reconociéndosela también a magistrados de inferior jerarquía, con lo cual se cercenar atribuciones que deben reconocerse como propias y exclusivas de las cabezas del Ministerio Público. Además el párrafo que cuestionamos no se compadece con el primero de la misma norma que ya hemos comentado y en el que se adjudica la potestad disciplinaria sólo al procurador general y al defensor general de la Nación ni con las prescripciones de los artículos 32, inciso m), y 50, inciso 11), y contradice la organización tradicional del Poder Judicial del que el Ministerio Público formó parte hasta la sanción del nuevo texto constitucional. Ello es así, porque en el ámbito del Poder Judicial las facultades de superintendencia corresponden exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia (artículo 113 de la Constitución Nacional) que, por vía reglamentaria, en algunos casos —concretamente la potestad disciplinaria— la ha delegado en tribunales inferiores (por razones de conveniencia que sólo a la Corte incumbe apreciar), manteniendo al mismo tiempo su facultad de avocación, que puede ejercer de oficio cuando lo estime necesario, o a instancias del interesado y como revisor de las decisiones de los tribunales que actúan por delegación.

Esto así, nos parece conveniente mantener *in totum* la superintendencia en el procurador general y defensor general de la Nación, autorizándolos a delegar algunos aspectos de ella en los magistrados de inferior jerarquía, y estableciendo que el reglamento que se dicte deberá contemplar los mecanismos adecuados para el agotamiento de la vía administrativa.

La segunda observación está referida a la última frase del artículo. Por supuesto, es correcto dejar establecido que los actos que impongan sanciones disciplinarias pueden ser pasibles —agotada la vía administrativa— de impugnación en sede judicial. Empero, estimamos conveniente dejar en claro cuál es la vía de impugnación en sede judicial, para facilitar la defensa y el acceso a la justicia a los potenciales interesados evitando las dudas y discusiones que pueden plantearse frente al caso concreto, con el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional y la dilación de los procesos que ello trae aparejado.

Consecuentemente, proponemos eliminar el 4º párrafo que dice:

"Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores generales respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan".

Asimismo proponemos reemplazar el último párrafo por el siguiente:

"El procurador general y el defensor general de la Nación podrán delegar la atribución conferida en este

artículo en magistrados de menor jerarquía con relación a los de rango inferior, funcionarios y empleados que de ellos dependan. El reglamento que se dicte deberá garantizar a los afectados la revisión de las sanciones disciplinarias por parte del procurador general o el defensor general de la Nación, en su caso. Las decisiones de éstos que apliquen o confirmen sanciones disciplinarias podrán ser recurridas por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se interpondrá fundadamente ante este tribunal, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles judiciales contados a partir de la notificación de la sanción, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 40 y 41 de la ley 22.140".

Artículo 19: En cuanto a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de los miembros del Ministerio Público, participamos en general con la redacción propuesta en el dictamen, que recoge las observaciones formuladas por la Comisión de Ministerio Público de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, con dos observaciones. La primera de ellas, de carácter formal, al 9º párrafo referido a quienes actúan como fiscales ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En tal sentido debe corregirse la mención "defensor oficial", por "defensor público ante tribunales colegiados", para respetar la denominación del cargo asignada en el artículo 4º, inciso c) y en el cuarto párrafo de este mismo artículo.

La segunda observación, se refiere a un aspecto de fondo. No consideramos conveniente que el fiscal ante el tribunal sea designado por el procurador general o el defensor general de la Nación. Ello así, porque si el mencionado tribunal se convoca en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por alguno de aquéllos, no contribuye a asegurar la transparencia y la imparcialidad del procedimiento ante el tribunal que actúe como fiscal un magistrado designado por quien, en principio, había desestimado la denuncia. Por tal razón, la designación del fiscal ante el tribunal deberá hacerse por sorteo entre los magistrados en condiciones de integrarlo.

En consecuencia, proponemos que el 9º párrafo del artículo 19 quede redactado de la siguiente manera:

"Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior a fiscal general o defensor público ante tribunales colegiados, los que serán designados mediante un sorteo público realizado por el procurador general o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado".

Artículo 21: Formulamos una observación al inciso c) de este artículo. Es necesario dejar convenientemente aclaradas las pautas a las que deberán someterse el procurador general y el defensor general de la Nación en la celebración de "los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público". En tal sentido, entendemos que dichos magistrados deberán sujeción su actuación en este terreno a las mismas normas que rigen las contrataciones en cualquier otro organismo del Estado. Tal circunstancia contribuirá a la transparencia en el manejo del presupuesto que se les asigne, y garantizará el correcto manejo de los fondos posibilitando la adecuada imputación de responsabilidades en caso contrario, circunstancias todas que —además— constituyen un reclamo

generalizado de la actividad como presupuesto incluido en la lucha contra la corrupción. En especial, porque la cuestión no es económicamente poco significativa si se tiene en cuenta que en proyecto de presupuesto para 1997 se asignan ciento treinta millones de pesos al Ministerio Público. Al mismo tiempo se pondrá como a la discrecional disposición de fondos que hasta ahora viene llevando a cabo el procurador general de la Nación que, por otra parte, ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito por fiscales de primera instancia, circunstancia ésta que, sin abrir juicio sobre el acierto y el destino de la denuncia, abona la postura en el sentido de dejar perfectamente aclaradas las reglas a los cuales deberían someterse los magistrados titulares del Ministerio Público. Es cierto que en el dictamen de la comisión se ha incorporado al proyecto original de este artículo el inciso f) y que también se ha previsto una norma relativa a ejecución presupuestaria (artículo 23), pero igualmente estimamos conveniente formular un agregado al inciso c) para evitar cualquier interpretación que pueda distorsionar la cuestión en el futuro.

Por ello, proponemos que el inciso c) quede redactado de la siguiente manera:

"Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público, de conformidad con lo prescrito en las leyes que rigen las contrataciones del Estado".

Artículo 25: Participamos de la redacción que se propone en este dictamen, que también ha recogido aquí las observaciones más relevantes de la Comisión de Ministerio Público de la Asociación de Magistrados. Solamente, por razones meramente formales proponemos agregar como inciso 1):

"En general ejercer todas las facultades y desempeñar todas las funciones que se les atribuyan en las leyes".

A continuación del artículo 27:

No compartimos la eliminación de los artículos 22 y 29 del proyecto original del senador Yoma. Entendemos que tanto el carácter de los dictámenes como la sujeción del Ministerio Público al principio de legalidad —con la aclaración original relativa a la prosecución de la acción pública— no pueden omitirse en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En especial, porque aunque se diga que todo ello está implícito, no puede dejar de emitirse una directiva expresa y concreta del Congreso de la Nación.

En consecuencia, proponemos agregar como artículo 28:

"Carácter de los dictámenes. Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con la limitación prevista en el artículo 461 del Código Procesal Penal de la Nación y las limitaciones que otras leyes procesales prevean".

Asimismo, proponemos agregar como artículo 29:

"Principio de legalidad. Cuando se trate de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio. La

persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la notificación de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley".

En consecuencia, deberá corregirse la numeración de los artículos siguientes, sin perjuicio de que en este trabajo, para no dificultar la comprensión, continuaremos refiriéndonos al articulado del proyecto de dictamen en tratamiento.

Artículo 36: Proponemos la eliminación del inciso d), en concordancia con la modificación propuesta al artículo 16.

Artículo 38: Proponemos agregar en el segundo párrafo la intervención en los procesos de *habeas data*, y eliminar la facultad disciplinaria, nuevamente de acuerdo con lo sugerido respecto del artículo 16 en torno a la actuación por delegación.

En consecuencia, el 2º párrafo del artículo 38 debe quedar redactado de la siguiente manera:

"Deberán intervenir en los procesos de amparo, de *habeas corpus* y *habeas data* y en todas las cuestiones de competencia."

Artículo 39: Debe mantenerse el original inciso e) del proyecto del senador Yoma, toda vez que es correcto que los fiscales deban recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente su pretensión. Esta es una regla propia de todos aquellos que actúan en nombre de otros, y debe aplicarse a quienes desempeñan sus funciones en defensa del interés público y ejercitando una acción pública.

Consecuentemente, proponemos agregar como inciso e): "Recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente lo que hubieren solicitado en sus dictámenes."

Artículo 53: De acuerdo con lo propuesto en el artículo 16, solicitamos la eliminación del inciso n).

Artículo 56: Proponemos la eliminación de dicha norma, porque entendemos que es completamente ajena a la organización y funciones del Ministerio Público a que se refiere esta ley. En efecto, el propuesto artículo 56 se refiere a la forma en que ejercerán sus funciones los representantes judiciales del Estado, cuestión que en todo caso deberá considerarse, debatirse y legislarse en el cuerpo legal que reglamente la representación judicial del Estado, pero no introducirse en la Ley Orgánica del Ministerio Público a la que es absolutamente extraña. En especial, si se tiene en cuenta que —acertadamente— de conformidad con lo normado en el artículo 27 del proyecto en tratamiento se ha excluido de las funciones del Ministerio Público la representación judicial del Estado y del Fisco.

Las restantes disposiciones de este título III no ofrecen ese reparo, toda vez que reglamentan cuestiones atinentes, precisamente, a la cesación de los fiscales en la representación del Estado, y a la asunción de ella por los integrantes del cuerpo de abogados dependientes de la Procuración del Tesoro.

Artículo 69: Planteamos un severo reparo de fondo al texto proyectado de este artículo.

En primer lugar, es necesario dejar en claro que compartimos la propuesta en cuanto viene a confirmar en

sus cargos a las personas que actualmente los ejercen en el Ministerio Público porque, independientemente de la opinión personal que pueda merecernos la actuación de algunos fiscales, la apertura de concursos, elaboración de térmis, acuerdo de este Senado y designación por el Poder Ejecutivo, insumen un lapso dilatado durante el cual la situación de inestabilidad e incertidumbre que de ello se generaría, terminaría —seguramente— por ocasionar daño durante bastante tiempo al normal desarrollo de las funciones y tareas del Ministerio Público en particular, y la administración de justicia en general.

Empero, creemos que de tal disposición deben ser excluidos el procurador general y el defensor general de la Nación. Ello es así porque la evidente jerarquía y relevancia de sus funciones torna aconsejable que, quienes van a dirigir un Ministerio Público con jerarquía constitucional (artículo 120 de la Constitución Nacional según la reforma de 1994) y por vez primera en la historia jurídica argentina debidamente organizado, sean designados con la intervención de los poderes políticos del Estado, como lo son el Poder Ejecutivo nacional y este Senado, tal como se prevé en este mismo proyecto. No debe olvidarse, además, que los únicos cargos creados y mencionados en la Constitución —es decir los únicos a los que cabe reconocer origen y jerarquía constitucional— son, precisamente, los del procurador general y defensor general de la Nación (artículo 120, 2º párrafo, de la Constitución Nacional), siendo todos los demás cargos del Ministerio Público de creación legislativa, circunstancia que abona su exclusión de una confirmación por vía legal.

Por otra parte, de acuerdo a este mismo proyecto esos dos magistrados son quienes revisten la mayor amplitud de facultades como cabezas de las dos vertientes del Ministerio Público (fiscal de la defensa), tanto en cuanto a la dirección del organismo, superintendencia (organización, convocatoria de concursos, miembros necesarios en los concursos de los más altos cargos, convocatoria del tribunal de enjuiciamiento, manejo de un abultado presupuesto, designaciones de personal, etcétera, lo cual también amerita que en este momento histórico de la vida jurídica de nuestro país —como lo es la organización del Ministerio Público tras más de 120 años de existencia en la Nación organizada— quienes vayan a desempeñar su más alto cargo con tal amplitud de facultades reciban el acuerdo del Senado de la Nación, como deberán hacerlo quienes los sucedan.

Cabe destacar también que el mecanismo de designación del procurador general y el defensor general de la Nación previsto en este mismo proyecto son de ejecución más rápida que los contemplados para el resto de los cargos. Por tal razón no podrá argumentarse que el Ministerio Público quedará desahucado a partir de la entrada en vigencia de este proyecto. Por un lado, porque se encuentran previstos también las formas transitorias de subrogación. Y por otro, porque dependerá de la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional la mayor o menor celeridad que se imprima al trámite de acuerdo a este Senado.

Por lo tanto proponemos que el artículo 69 quede redactado de la siguiente manera:

"Con excepción del procurador general y del defensor general de la Nación los demás cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley".

Artículo 71: Como primera observación de tipo formal puntualizamos que en el 1er. párrafo debe agregarse la palabra "fiscal" a la expresión "Ministerio Público". En segundo lugar, creemos que del inciso b) debe eliminarse a los secretarios de la Procuración General de la Nación. Ello por dos razones. Por un lado ya existen en la actualidad cuatro procuradores fiscales de la Corte Suprema, número que parece ser demás suficiente en atención a las funciones que les toca desempeñar de acuerdo con esta ley. Por el otro, la correcta equiparación de aquellos secretarios es con los fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º. Las funciones que tradicionalmente han correspondido a los secretarios de la procuración, más allá de su equiparación salarial con los procuradores fiscales de la Corte, son de jerarquía menor a la de éstos, por lo que no se advierte la razón para atribuirle ahora mayores funciones —que incluyen hasta el reemplazo del procurador general de la Nación en su caso— en especial cuando, como quedó dicho, el número actual de procuradores fiscales es más que suficiente. Tampoco se advierte cuál es el particular motivo que puede llevar a elevar la jerarquía de los secretarios de la procuración y no la de los secretarios letrados, utilizando un diferente criterio en cada caso.

Por lo tanto proponemos eliminar del inciso b) la expresión "y los secretarios de la Procuración General de la Nación", y añadir en el inciso d), a continuación de "investigaciones administrativas" "y los secretarios de la Procuración General de la Nación".

Alcides H. López.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja del bloque Justicialista.

Sr. Yoma. — Señor presidente: me voy a referir en forma breve al proyecto de ley en consideración, a través del cual se reglamenta el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Se trata de un instituto que históricamente reconoce su antecedente en el Estado absolutista, donde esta figura protegía los intereses y la hacienda real. Luego el monarca determinó que defendiese los intereses de los más desposeídos. Y con el advenimiento de los regímenes demo-

cráticos pasó a ser una herramienta de defensa de la legalidad y de persecución de la acción penal.

A lo largo de toda la historia institucional del país este instituto nunca tuvo una ley orgánica que lo reglamente. Tampoco reconoce todavía una perfecta ubicación institucional. Así, algunos autores lo ubican en la órbita del Poder Ejecutivo, como sucede en algunos países europeos —Francia, por ejemplo— y en los Estados Unidos. En este último caso, el jefe del ministerio público es el ministro de Justicia, que participa de las reuniones del gabinete nacional. Por otra parte, hay autores importantes que lo ubican en la órbita del Poder Judicial.

La Convención reformadora de Santa Fe, sobre la base del inciso g) del artículo 3º de la ley 24.309, comenzó a utilizar la fórmula del órgano extrapoder. Esa interpretación se basa fundamentalmente en que este instituto está ubicado en la sección IV, separado de los tres poderes del Estado. En segundo término, debe tenerse en cuenta lo que dijo el convencional Masnatta, miembro informante de la Comisión de Redacción y de la mayoría. Respecto de este tema decía: "La norma constitucional ha enfatizado la independencia funcional del Ministerio Público, de manera de hacer inequívoca su falta de dependencia, definiendo categóricamente al Ministerio Público como una institución que no depende de órgano alguno que ejerza funciones administrativas, judiciales o legislativas".

Sin entrar en un debate doctrinario, para una perfecta ubicación constitucional, que reitero que todavía la doctrina no pudo acordar, quiero decir que en la ley 24.309 ya se habla del órgano extrapoder, denominación a la que el señor convencional Masnatta no adhiere.

De todos modos, en lo que a la doctrina se refiere, el doctor Bianchi, quien desmenuza la teoría del órgano extrapoder, en su trabajo "El ministerio público: ¿Un nuevo poder?" (publicado en "El Derecho", 162:139) dice: "Si tenemos en cuenta que cada poder del Estado tiene asignada —dentro de la distribución constitucional— una sección específica, podemos llegar a suponer que los constituyentes de 1994 han querido erigir un nuevo órgano de gobierno diferente y separado de los tres clásicos" de la República.

Esta interpretación de Bianchi también ha sido suscrita por un dictamen de la Procuración General del Tesoro de la Nación que data de diciembre de 1994. Adhiere a la doctrina del órgano extrapoder cuando en el dictamen 165 en el expediente 96.781/94 sostiene que "la intención

de la Convención Constituyente de configurar al Ministerio Público como un órgano extrapoder, en el sentido de independizarlo tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial resulta con claridad de los proyectos y debates suscitados en la Convención Constituyente".

También es bueno tener en cuenta la opinión de calificados convencionales miembros de la Comisión de Organos de Control de la Convención Constituyente, como los doctores Cavagna Martínez y Jorge de la Rúa. En el dictamen de dicha comisión se afirmaba que "el Ministerio Público es un órgano —no un poder— cuya pertenencia se agota con el mismo órgano, con su propia regulación constitucional y legal, con su propio estatuto administrativo y con sus propias relaciones de dependencia funcional".

Esto muestra a las claras que en la propia Convención Constituyente, tanto en los debates en las comisiones —de Organos de Control, que fue la originaria, y en la de Redacción— como luego en el plenario, no pudimos ubicar doctrinariamente con exactitud el órgano extrapoder del que habla la ley 24.309.

Lo claro es que el constituyente, como lo dice la letra de la Constitución, da autonomía funcional, autarquía financiera y plena independencia a este instituto respecto del resto de los poderes del Estado.

Por otra parte, quiero destacar la similitud que este instituto, de acuerdo a cómo está legislado en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento, tiene con el derecho brasileño.

Autores brasileños como José Manuel Burle Folho entienden que la Constitución le atribuye al ministerio público una parcela de soberanía y por lo tanto una fracción del poder estatal, fracción no confiada —dice Burle Filho— como función institucional a ninguno de los tres poderes del Estado. Se trata de la función institucional de "promover, privativamente, el ejercicio de la acción penal pública".

Por encima de estas diferencias que —reitero— son muy profundas desde el punto de vista doctrinario, por lo cual se han generado distintos debates, en la Convención Constituyente se coincidió en que lo fundamental era asegurar la independencia de este organismo, a cuyos integrantes había que dotarlos de similares garantías a las que amparan a los miembros del Poder Judicial.

Ya dijimos cuál es la ubicación que el artículo 120 de la Constitución Nacional otorga a esta institución.

Los principales aspectos que regulan el dictamen han sido motivo de un profundo debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Digo profundo porque en su momento comenzó a debatirse un proyecto originado en el Poder Ejecutivo, que establecía aspectos que obstaculizaban el consenso y que, a juicio de los miembros de todos los partidos representados en la comisión, podían configurar ciertos riesgos para la letra y el espíritu con que el constituyente quiso dotar al ministerio público y al defensor público de la Nación, dándoles la correspondiente independencia.

Uno de los principales aspectos que fue motivo de debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales se refiere a un tema en el que nos apartamos del proyecto originario y elaboramos otro que fue consensuado entre los distintos bloques, sobre la base de proyectos presentados por distintos senadores, como Alasino, Solana, Genoud, Aguirre Lanari, Fernández Meijide y Almirón. Allí se establece el carácter bicéfalo de este instituto. Esto se ajusta estrictamente a la letra y al espíritu del artículo 120 de la Constitución Nacional.

Creo que esto, sumado al rango constitucional que adquirieron los tratados por los derechos humanos en nuestra Carta Magna reformada en Santa Fe, es una conquista desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos.

Equiparar al defensor general de la Nación al rango de procurador general, con la misma jerarquía y atribuciones, y dotarlo de las mismas inmunidades que los magistrados del Poder Judicial, implica terminar, como bien definió el doctor Masnatta en su trabajo sobre el ministerio público en la Convención Reformadora en Santa Fe (*La Ley* 1.444-E:878), con una suerte de esquizofrenia histórica de esta institución, por la cual el que manejaba la acusación era el mismo que dirigía la defensa. En este sentido, al establecer —reitero— el carácter bicéfalo se cumple con la letra del artículo 120 de la Constitución Nacional.

Al respecto quiero recordar lo dicho por el doctor Masnatta en la Convención de Santa Fe cómo miembro informante de la mayoría y por el doctor Jorge de la Rúa, quien fue miembro de la Comisión de Control y también miembro informante de la mayoría.

Decía el doctor Masnatta con respecto a este tema que en la Corte Suprema de Justicia se le dio al defensor de ausentes la misma jerarquía que tiene el procurador general de la Nación, lo cual ha tenido consideración y recepción en la norma constitucional. Tenemos, entonces, la su-

peración de lo que puede llamarse una esquizofrenia, en el sentido de que el jefe del ministerio público, al mismo tiempo que manejaba la acusación, tenía que dirigir a los defensores, lo cual evidentemente producía una situación poco clara que, ahora, queda zanjada con la sabia sanción de esta norma constitucional.

En el mismo sentido, el convencional Jorge de la Rúa sostuvo en la sesión citada: "Será, pues, un órgano con autonomía funcional, con autarquía y estructurado bicéfalamente para custodiar la asistencia social indispensable"; todo lo cual —y en esto coinciden los dos convencionales— es derivado a la reglamentación que establezca la respectiva ley del Congreso de la Nación que es, precisamente, lo que estamos tratando hoy.

Para mayor abundamiento, ya que en su momento el proyecto originario remitido por el Poder Ejecutivo mantenía al procurador general como cabeza del ministerio público y no establecía el carácter bicéfalo de la norma constitucional, lo que generó un debate con la visita del entonces ministro de Justicia doctor Barra, debo decir que en la ley de presupuesto número 24.624 se establece como política presupuestaria de la jurisdicción atender a la jerarquización de la defensa oficial que surge del mandato constitucional organizado en la nuevas estructuras de esa rama del ministerio público.

Es decir que el Congreso Nacional, ya antes de reglamentar este instituto, ha reconocido el carácter bicéfalo indiscutido como surge del dictamen por unanimidad, de esta norma constitucional.

Dentro de las principales conquistas que hacen a la independencia y a la jerarquización del ministerio público que surgen de la norma constitucional, señor presidente, están las inmunidades que se equiparan a las de los magistrados de la Nación y las garantías para el ejercicio de su función.

Es por ello que a partir de esta norma, los fiscales y los defensores de la República tienen inmunidad de arresto y no pueden ser molestados por las opiniones que emitan en el regular ejercicio de sus funciones.

En el mismo sentido, no pueden ser obligados a presentarse a declarar ante los Tribunales; sí pueden hacerlo por escrito y gozan de la intangibilidad de sus remuneraciones.

Creo que se trata de garantías esenciales, que hacen a la independencia con que el constituyente dotó a esta institución. Se trata de uno de los avances más formidables, dirigido hacia la independencia del ministerio público. Como lo definía el presidente de nuestro bloque, el se-

nador Alasino, este hallazgo del ministerio público extrapoder por parte del constituyente de Santa Fe es un paso más hacia la conquista y el afianzamiento de las instituciones democráticas.

Este dictamen consta de tres títulos. El primero se refiere a los aspectos orgánicos de la institución; el segundo, a los aspectos funcionales, y el tercero trata de las disposiciones complementarias.

Dentro del Título I, en los principios generales queda definido que se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Ya leímos algunos aspectos de la legislación comparada referidos a este punto, fundamentalmente, constituciones de países que siguen regímenes similares al nuestro, como las de Brasil, Costa Rica y Portugal.

Respecto de la forma de designación, nuestro dictamen de comisión establece que el procurador general de la Nación y el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado de la Nación. Se equipara la situación con la de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El resto de los fiscales y los magistrados inferiores y defensores serán designados, previo concurso de oposición y antecedentes, según una terna propuesta al Poder Ejecutivo por el procurador o el defensor general, en su caso, y con acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Con respecto al tribunal de concurso que legisla el actual dictamen, si me permite el señor presidente, voy a leer cómo quedó redactado: el Tribunal será integrado con cuatro magistrados del ministerio público con jerarquía no inferior a la de los cargos previstos en el inciso b), que será no inferior a la de los defensores generales o procuradores generales, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en que exista la vacante a cubrir.

Para el caso de remoción, al que me voy a referir más adelante, el Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros.

Además, en el proyecto en tratamiento se establecen las incompatibilidades, los supuestos de recusación y de excusación y los mecanismos para la sustitución.

Como decía antes, una garantía funcional de importancia es la intangibilidad en las remuneraciones de los miembros del ministerio público. Estos cargos se equiparan con las distintas jerarquías de los magistrados respecto de los aspectos previsionales, tributarios y patrimoniales.

En cuanto al tema de la estabilidad, cabe señalar que se legisla de manera genérica en el artículo 13, mientras que se legisla para los actuales miembros en el artículo 69. Ya me voy a referir más adelante a este tema.

En el caso del procurador y del defensor general se equipara su estabilidad a la de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tienen estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años. Luego, requerirán de acuerdos sucesivos cada cinco años y podrán ser removidos por juicio político al igual que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su obra "El Ministerio Público según la reforma constitucional de 1994" el doctor Vanossi critica el hecho de que el constituyente le otorgó autonomía funcional y autarquía financiera y jerarquizó el instituto pero no le dio estabilidad. Frente a ello, el doctor Vanossi se pregunta: ¿Qué hacemos con todo ello si no le damos estabilidad? Sin la estabilidad, todo el espíritu de la norma se cae. Por eso, este proyecto de ley viene a legislar sobre algo que no legisló la Convención Constituyente. Esto se omitió en aquella oportunidad dejándolo para que lo reglamentara el Congreso de la Nación. Hemos consultado mucho la opinión del doctor Vanossi porque a veces formula una crítica muy dura a este instituto y a la labor de la Convención Constituyente de Santa Fe. Al respecto, considero que tiene validez todo lo que él sostiene. Básicamente, el doctor Vanossi dice que se le dieron todas las garantías salvo la de estabilidad, que es el contrasentido por él planteado.

Dentro de las garantías que formaron parte de un profundo debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales está el derecho a no ser trasladado si el procurador no cuenta con el consentimiento del fiscal.

Esta facultad que tenía el procurador en el original proyecto remitido por el Poder Ejecutivo —y que fue motivo de un gran debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales— fue superada por la actual norma, al establecerse el consentimiento del magistrado para ser trasladado a otras jurisdicciones territoriales. Si procede porque este magistrado acepta ser trasladado, mantiene su jerarquía.

Ahora me voy a permitir leer una cita del constitucionalista Sagües, porque este tema fue motivo de un gran debate y seguramente lo volverá a ser con posterioridad. Es bueno dejar a salvo hoy la interpretación del legislador respecto del tema de los traslados.

Reitero: el artículo 15 de este dictamen sostiene el derecho a no ser trasladado a otras jurisdicciones territoriales sin su consentimiento y, en caso de que presten conformidad al cambio de destino, conservarán su jerarquía. Sólo temporalmente y cuando se dé alguno de los supuestos de excepción que prevé este proyecto, podrán encomendárseles funciones distintas de aquellas para las que fueron designados.

Sagües dice textualmente: "La autonomía del Ministerio Público Fiscal demanda, como analógicamente ocurre con la autonomía del Poder Judicial, magistrados fiscales inamovibles mientras dura su buena conducta, y compensaciones irreductibles. Si los miembros del Ministerio Público Fiscal pudiesen ser removidos o trasladados discrecionalmente por cualquier autoridad, y si sus remuneraciones fuesen disminuibles o no indexables, aquella autonomía funcional carecería del sustento fáctico y jurídico suficiente para ser real y operativa". (Néstor Pedro Sagües, "Carrera Fiscal". *El Derecho*, 106:985.)

En la legislación comparada, en cuanto al tema de los traslados, encontramos que en la ley española se contempla la posibilidad del traslado de los miembros, primero por disidencias graves con el fiscal y, segundo, cuando, por causas a ellos imputables, tuvieran enfrentamientos graves con el tribunal. La ley portuguesa también faculta al procurador general para disponer traslados.

Como decía antes, este proyecto de dictamen se aparta de lo que originariamente sostenía el proyecto del Poder Ejecutivo, que facultaba al procurador general para ordenar traslados definitivos o transitorios por razones de servicio dentro del área territorial o funcional de actuación de los afectados.

Nuestro bloque propuso apartarse de esta norma porque —reitero— consideramos que se atentaba seriamente contra la independencia de los fiscales.

Estas objeciones también alcanzaban a otras propuestas que había en algún otro proyecto, por el cual el procurador general podía designar y sustituir a fiscales que estuviesen trabajando en determinadas causas para que actúen en asuntos determinados o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos de trabajo o asumir directamente la conducción personal en cada una de las causas.

Reitero que nos hemos apartado de propuestas de ese tipo y la comisión ha superado este debate. Y creo que uno de los hallazgos más grandes de consenso que hubo en la Comisión

de Asuntos Constitucionales fue el artículo 32, que dice en su inciso g) que el procurador general podrá "disponer fundadamente de oficio o a pedido del fiscal general, cuando la importancia o la dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación...".

Con esto se está reconociendo que la conformación de equipos de trabajo, cuando sea necesaria por la complejidad de los temas o a requisitoria del fiscal, respetará la competencia en razón del territorio y de la jurisdicción por parte del titular, en este caso del fiscal que está llevando a cabo la acción penal. Está sujeta a las directivas de ese titular, que no puede ser apartado ni sustituido bajo ninguna causa,

En la legislación comparada de España, también se prevé que cuando el volumen o la complejidad de los asuntos lo requiera, se puedan conformar equipos de trabajo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

Sr. Yoma. — Este ha sido uno de los motivos de mayor discusión en la comisión y en el artículo 32 queda reflejado el alto grado de consenso obtenido para este instituto. Hemos superado incluso a la propia legislación comparada que, al establecer la posibilidad de los traslados indiscriminados o que el procurador pueda asumir las causas, violentaba la independencia de que se quiere dotar a este instituto.

Siguiendo con el análisis del dictamen, recién mencionaba algunos aspectos que hacen a los mecanismos para la remoción de los magistrados del ministerio público.

En este sentido decíamos que el procurador general y el defensor general se asimilan en la norma constitucional a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se los puede remover únicamente mediante el mecanismo previsto en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, que establece la acusación por la Cámara de Diputados y la sentencia por parte del Senado.

Respecto de los fiscales y defensores inferiores, se crea este tribunal de enjuiciamiento mencionado anteriormente en mi exposición, el cual estará integrado por siete miembros: tres ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción, o ex defensores generales de la Nación o ex procuradores generales, designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; dos abogados —uno propuesto por la Federación de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal— que deberán tener como mínimo veinte años de antigüedad en el ejercicio de la profesión; y otros dos miembros designados por sorteo entre los procuradores y los defensores ante la Corte. Así estará integrado el tribunal de enjuiciamiento, que podrá remover a los fiscales y defensores inferiores.

Quiero, señor presidente, que tengamos en cuenta la increíble reforma que estamos legislando, si consideramos que actualmente los fiscales y los defensores son designados por resolución del ministro de Justicia, ni siquiera por decreto del Poder Ejecutivo. El procurador y el defensor general sí son designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Estamos jerarquizando de tal manera este instituto, que además de requerirse un concurso previo con acuerdo senatorial para la designación de los fiscales y defensores, para ser removidos hace falta un tribunal de enjuiciamiento o el juicio político, en el caso de las cabezas del ministerio público.

Esta es a las claras quizás una de las más fabulosas reformas tendientes a la independencia del Poder Judicial que dio la Convención de Santa Fe y que está considerando hoy la clase política argentina en el Congreso de la Nación.

Se regulan también en este dictamen aspectos relativos a la administración financiera de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa, a través de dos oficinas autónomas.

Se reconocen dos programas presupuestarios distintos. A partir de esta ley se crean dos oficinas de administración financiera diferentes.

Se regulan también las relaciones con los otros poderes del Estado, lo cual es otra manera de afirmar la independencia del instituto y su carácter extrapoder. Si bien coincidimos en que, quizá no es la mejor denominación, sí, probablemente, es la que más se ajusta a separarlo de la estructura de los poderes del Estado, dándole rol y funciones distintos e independientes.

El ministerio público se va a relacionar con el Poder Ejecutivo a través del señor ministro de Justicia y con el Parlamento a través de una comisión bicameral que deberá conformar el Congreso de la Nación. También legislamos en lo que hace a las atribuciones y funciones del ministerio público.

Globalmente, como decía al comienzo de mi exposición, en principio se trata de promover la acción de la Justicia, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, representar, promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales y en los asuntos civiles que esta ley prevé.

Queda taxativamente excluida como atribución del ministerio público la representación del Estado en juicio y el asesoramiento permanente del Poder Ejecutivo de la Nación que, como todos sabemos, en nuestro régimen está en cabeza de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Otro aspecto que venimos a salvar, y que lo omitió la Convención Constituyente de Santa Fe dejándolo referido a la futura ley, es el vinculado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. A través del proyecto que estamos considerando, se prevé que forme parte del ministerio público. Es un órgano dependiente del procurador general y tiene como competencias promover la investigación de la conducta de los entes de la administración, ya sean centralizados o descentralizados, la investigación de toda entidad cuya principal fuente de recursos sea el Estado y, por supuesto, denunciar ante la Justicia los hechos delictuosos que se produzcan en la órbita de la administración.

El doctor Vanossi se refirió de manera crítica a la labor de la Convención reformadora por haber omitido legislar en esta materia. Sin embargo, la Convención redactó el artículo 120 en los últimos días de sesión, cuando ya muchos creíamos que no íbamos a poder incluir como norma constitucional la autonomía del ministerio público. Como se nos acababa el tiempo, hubo necesidad de acordar entre las distintas fuerzas políticas ya que también era un tema que estaba fuera del Núcleo de Coincidencias Básicas. Es bueno destacar esta cuestión porque es una muestra del espíritu con que trabajaron los partidos políticos en la Convención reformadora de Santa Fe.

Reitero que se trataba de un tema que no formaba parte del Núcleo de Coincidencias Básicas y que era facultativo de la convención reformadora incluir o no al Ministerio Público como mecanismo autónomo y como órgano extrapoder. También la falta de tiempo a la que aludí anteriormente fue el principal motivo por el cual la Comisión Redactora no elaboró un dictamen previo.

Es, entonces, por estas razones, y como respuesta a quienes critican la actuación de la Convención reformadora en este punto, que el artículo 120 es genérico y deja librado todo a la

futura ley que se sancione. Realmente, por falta de tiempo, no queríamos que quedara fuera del trabajo del constituyente esta formidable conquista del régimen democrático como es la autonomía de los fiscales de la República.

El artículo 120 es una norma genérica a fin de que hoy, en este Congreso Nacional y en base al consenso demostrado, se pueda legislar.

Señor presidente: se establecen por los artículos 28 y 30 del proyecto los principios de oficialidad y de obediencia. El de oficialidad, cuando los procuradores y defensores tienen la obligación de denunciar o reclamar, ante el procurador o defensor, asistencia especial para asuntos que por su complejidad la requieran.

El artículo 30, por su parte, se refiere al principio de obediencia, en virtud del cual un magistrado actúa en cumplimiento de instrucciones generales.

Al respecto, vuelvo a remarcar que en el proyecto de ley en consideración se prevé la posibilidad de que el procurador imparta instrucciones generales sobre la política criminal, es decir, instrucciones globales, que hacen al diseño de la persecución penal, pero no se acepta que imparta instrucciones sobre las causas particulares en las que están actuando cada uno de los fiscales. Esto ha quedado absolutamente claro en el dictamen. Y cuando el fiscal actúe en cumplimiento de esas instrucciones generales podrá dejar a salvo su oposición o su opinión personal en contrario con respecto a ellas.

En cuanto al carácter bicéfalo de este instituto, si bien lo analizaremos seguramente en el tratamiento en particular, cabe señalar que quedan como atribuciones del procurador las de dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entender en los asuntos referidos a los tratados de extradición, impulsar la acción pública e intervenir en las causas que lleguen a la Corte Suprema en grado de apelación; mientras que son atribuciones del defensor general ejercer ante la Corte Suprema las facultades del Ministerio Público de la Defensa y disponer las medidas tendientes a garantizar el ejercicio del ministerio que está reconocido por este proyecto de ley. También integran la defensoría los defensores públicos de menores e incapaces, los defensores públicos oficiales y los tutores y curadores públicos.

La oficina de la Curaduría Oficial que se ocupa de esa materia, y que está hoy en la órbita del Ministerio de Justicia, pasa a la del Ministerio Público de la Defensa, respetándose los dere-

chos adquiridos de los trabajadores. El tema de los derechos adquiridos ha sido un especial pedido del gremio de los trabajadores judiciales, quienes fueron escuchados por parte de la comisión y manifestaron su preocupación y su incertidumbre por el traslado del personal desde una órbita a la otra. En consecuencia, en el proyecto de ley se garantizan los derechos adquiridos por los trabajadores con respecto a su antigüedad en el cargo y a su jerarquía y, por acuerdo que deberá celebrar el Ministerio Público con la Corte Suprema, los compañeros trabajadores trasladados mantendrán la obra social del Poder Judicial con la que cuentan actualmente.

Por último, en este muy somero análisis del proyecto de ley en tratamiento, quiero referirme a un tema que quizás —y desgraciadamente— es hoy motivo del principal debate y está entorpeciendo, de alguna manera, el gran consenso que hemos conseguido para emitir el dictamen respectivo: el referido a la estabilidad establecida por el artículo 69.

La cuestión de la estabilidad de los actuales miembros del Ministerio Público, tanto del procurador como el defensor general, de los fiscales y de los defensores inferiores, reconoce un gran debate en la comisión. Existen al respecto distintas posiciones y propuestas. Incluso ayer a la noche y hoy a la mañana estuvimos debatiendo en el seno de la comisión en torno de las diferentes propuestas existentes.

¿Cuál es la diyuntiva con que nos encontramos quienes estamos legislando, con total responsabilidad? Si decimos que los miembros del Ministerio Público no tienen estabilidad, es necesario promover un nuevo acuerdo, tanto de las cabezas como del resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría.

Una de las objeciones que han planteado el cuerpo de fiscales de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios, la que también ha surgido de las consultas que hemos hecho a las distintas federaciones de abogados y sectores del derecho —no hemos consultado a políticos sino a sectores académicos del derecho—, ha sido la posibilidad de dejar, *sine die*, en un estado de total incertidumbre —hasta tanto el Senado preste su acuerdo— a los miembros del Ministerio Público.

Si nosotros resolvíamos hacer una separación y dábamos estabilidad a unos y no a otros, estableciendo, por ejemplo, que no tendrían estabilidad el procurador y el defensor general y sí el resto de los funcionarios, hubiéramos caído quizás en el contrasentido de negar la estabi-

lidad a aquellos que fueron designados por un decreto del Poder Ejecutivo nacional y otorgársela a aquellos cuya designación fue hecha a través de una mera resolución interna del Ministerio de Justicia, sensiblemente inferior a un decreto en cuanto a su jerarquía normativa. Esto sería, obviamente, un contrasentido.

Me estoy refiriendo a los dilemas que se nos han planteado y no a la resolución final, que luego voy a pasar a exponer. Estos dilemas los hemos tenido en la comisión y en el bloque y hoy los trasladamos al recinto porque afectan a la construcción del consenso en este tema.

También quiero mencionar aquí otra solución que se ha planteado como una hipótesis de trabajo —quizás no la hemos explorado lo suficiente— y que ha traído anoche a nuestro bloque el senador Bauzá. Esa solución planteaba la posibilidad de establecer —como se lo hace en la legislación comparada— la estabilidad para los magistrados y funcionarios inferiores y la periodicidad —no la estabilidad plena o permanencia a perpetuidad— para el procurador general y el defensor general. Es decir que estos dos funcionarios tendrían una suerte de estabilidad, pero requerirían la ratificación en sus cargos cada cuatro o seis años, según se lo establezca. Esta es una propuesta que inclusive la hemos esbozado ayer en el bloque pero que aún no hemos explorado a fondo, no obstante lo cual constituye una hipótesis de trabajo al igual que todas las otras propuestas. Sobre todo si va dirigida a lograr el consenso que requiere un instituto como éste y a mantener el acuerdo formidable a que hemos arribado las fuerzas políticas, evitando que ese logro se desvirtúe por el debate en torno a un nombre.

De lo contrario, este gran avance en la regulación de esta institución que todos los partidos políticos aquí representados podemos exhibir como una sanción formidable de este Congreso quedará desmerecido por el problema de un nombre, visto desde la óptica partidaria de cada uno de nosotros.

Esta circunstancia nos preocupa como integrantes del gobierno y como bloque del Partido Justicialista que tuvo un trabajo fundamental en el acuerdo que permitió la reforma de la Constitución Nacional.

Nosotros seguimos con nuestros dilemas y seguimos en este debate porque aún no hemos conseguido alcanzar una fórmula que consideremos correcta desde el punto de vista funcional, olvidándonos de los nombres y apellidos que son transitorios para dotar a este instituto de

la mayor legitimidad, con el apoyo unánime del Congreso de la Nación.

A fin de otorgar tiempo para la construcción del consenso —tal como está ocurriendo con el instituto del Consejo de la Magistratura, que en este cuerpo no logró unanimidad, pero hoy en la Cámara de Diputados se está consiguiendo un acuerdo importantísimo en torno a ese tema—, nuestro bloque va a impulsar la eliminación —no la derogación, porque no está sancionado— del artículo 69 del dictamen.

¿Qué implicancias puede acarrear esto? Nosotros creemos que si de la ley que sancionemos no surge ningún mecanismo taxativo, no es necesario que mediante una norma fijemos la estabilidad en los cargos, porque estas personas fueron designadas de acuerdo con el régimen constitucional vigente en su momento.

En efecto, si nosotros dijéramos que por el solo hecho de cambiar el régimen hace falta que se lleve a cabo un concurso para la designación de los fiscales inferiores, o el acuerdo para los magistrados superiores, con ese mismo criterio, cuando se sancione el Consejo de la Magistratura, todos los jueces de la Nación deberían rendir un concurso.

Creo que esto implicaría crear un estado de incertidumbre en la Justicia argentina, lo cual no está en el espíritu de quienes hoy estamos trabajando en este tema.

Por lo tanto, reitero, para contar con el tiempo que no tuvimos para lograr el consenso y a fin de no postergar aún más la sanción de este proyecto, ya que queremos que sea votado en este período de sesiones ordinarias a efectos de que este año la República cuente con esta institución, nuestro bloque va a proponer la eliminación del artículo 69 del dictamen.

En consecuencia, como partido, vamos a buscar en la Cámara de Diputados ese consenso que nos permita encontrar, entre todas las propuestas que recibimos en las últimas horas y días y lo debatido en la comisión, una fórmula que unifique los criterios y permita lograr unanimidad en la sanción de esta norma.

Señor presidente: me reservo el comentario de otros aspectos del proyecto de ley para el debate en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza de la Unión Cívica Radical.

Sr. Genoud. — Voy a comenzar por el final. Como el verdadero quid de la cuestión lo planteó el senador Yoma sobre el final de su exposición, y teniendo en cuenta que hay grandes coincidencias sobre los principales puntos del

proyecto, voy a fijar la posición de la Unión Cívica Radical en torno al artículo 69 del dictamen que, según informó el senador por La Rioja, en su oportunidad el oficialismo propondrá eliminar.

Por la cantidad de senadores anotados para hacer uso de la palabra, y habiéndose acordado que la sesión se levantará a las 18, es presumible que hoy no se llegue a concluir con el debate en general. De todos modos, aunque ello ocurriera, probablemente no se alcance a votar en particular.

Por lo tanto, en ese caso, nosotros propondríamos que el tratamiento en particular se postergue para el miércoles que viene y que, en curso de la semana, tratemos de encontrar una fórmula explícita en el texto que contemple la preocupación del señor senador Yoma que, por otra parte, es la misma que tiene el bloque de la Unión Cívica Radical. Es decir, cómo se armoniza la nueva organización del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa frente a los cargos actualmente en vigencia del procurador, defensor general y de todos los fiscales que están cumpliendo tareas en distintos lugares de la República.

Señor presidente: hoy estamos considerando una de las normas reglamentarias de la Constitución reformada y lo hacemos con alguna demora, toda vez que han transcurrido más de dos años sin que el Senado haya abordado este tema, lo cual, felizmente, realizamos hoy.

Es cierto que la reforma constitucional permitió transformar sustantivamente el ministerio público, que, hasta el momento, estaba bajo una dependencia —diría— grave del Poder Ejecutivo, con la consecuente ineficacia en muchas de sus actuaciones.

Ahora se da un paso realmente trascendente en orden a nuestra legislación con el proyecto de ley que seguramente sancionaremos en el Senado; sin lugar a dudas, hará lo propio la Cámara de Diputados.

A partir de la sanción de esta iniciativa, el ministerio público estará concebido como un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera, teniendo como función principal, según dice la propia Constitución, la defensa de la legalidad, como así también de los intereses generales de la sociedad.

Debo señalar, señor presidente, así como lo plantearon los convencionales constituyentes de nuestro partido en Santa Fe, que hubiese sido más correcta una mejor definición de cómo debía constituirse el ministerio público, con más

pormenores y detalles, en el propio texto constitucional.

Es decir que no sólo debió darse una definición de carácter general, considerándolo como un órgano extrapoder, con autonomía funcional, con autarquía financiera, planteándose —como se establece— la intangibilidad de las remuneraciones y la estabilidad de los fiscales, sino que el texto constitucional debió haber avanzado sobre cómo se eligen los integrantes del ministerio público, cuánto duran en sus cargos y cómo se remueven.

¿Por qué, señor presidente? Porque cuando la norma constitucional delega en el Congreso la reglamentación de este instituto, éste queda sometido a circunstanciales mayorías parlamentarias. Así, lo que hoy son conquistas, mañana pueden no serlo. Pasado el tiempo y al no estar estos principios consagrados en la Carta Magna —reitero—, cambiada o modificada la composición del Senado, puede verse alterado lo que hoy día hemos coincidido todos en señalar que constituye un paso importante en relación con un instituto que tiene que ver directamente con lo que conforma la mayor preocupación de los argentinos, esto es, la seguridad jurídica y la Justicia independiente.

Hace pocos días, cuando solicitamos la interpelación de dos ministros del gabinete nacional, hicimos un diagnóstico muy crudo del estado de la Justicia en la Argentina. Me remito a aquellas expresiones formuladas por legisladores de nuestra bancada.

Ahora, con más serenidad, quizás porque hay menos senadores sentados en el recinto, debo decir que el mejor modo de poner en marcha un proceso que concrete una Justicia independiente, que aporte seguridad a los ciudadanos, debe partir de un diagnóstico absolutamente real del estado en que se encuentra nuestra Justicia.

Además, este diagnóstico debe nutrirse de la propia opinión pública. Los sondeos de opinión, las encuestas, dicen de un modo elocuente que hay una marcada inseguridad jurídica, que existe desconfianza del ciudadano común respecto de la independencia de los jueces y de la imparcialidad de sus fallos, así como también existen dudas con respecto a muchos jueces y fiscales —no a todos— en lo que respecta a su solvencia técnica y moral.

Considerando este contexto, debemos avanzar con una gran decisión a los efectos de dictar una ley de ministerio público como la que hoy estamos discutiendo y aprobar prontamente una

ley de Consejo de la Magistratura, sin violentar el espíritu de los constituyentes, que incorporaron ese instituto en la Carta Magna, y, de ese modo, con mucha voluntad y con el transcurso del tiempo, seguramente iremos recuperando un valor que en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, luce deteriorado en la Argentina.

No voy a insistir en conceptos que ya se han vertido aquí sobre cuál es el origen del ministerio público, que viene de la época absolutista. Sólo diré que se entendía al fiscal como un defensor del monarca, que en definitiva actuaba en beneficio de los intereses económicos de los reyes, ya que era el encargado de defender la hacienda real. Luego, cuando sobreviene el sistema republicano, el fiscal comienza a ser un instrumento en defensa del Estado — adviértase bien —, y con el tiempo el perfeccionamiento del ministerio público termina haciendo que sea lo que es en la actualidad, o sea, no la defensa del Estado *per se* sino de los intereses de la sociedad y la custodia de los derechos y garantías individuales.

De tal modo que en el régimen republicano actual al Estado lo defiende el procurador general del Tesoro, así como también el cuerpo de abogados del Estado. Son los integrantes del ministerio público quienes se convierten en custodios y protectores de los derechos y garantías individuales a través de su intervención en los procesos penales o civiles.

Además, quiero poner de manifiesto que todos los autores, así como también el señor miembro informante y los constituyentes que hicieron uso de la palabra en la Convención Constituyente, establecen que el ministerio público, en lo que hace a funciones y objetivos, es una institución bicéfala. Al respecto, participo del criterio expuesto por el señor senador por La Rioja y miembro informante del bloque de la mayoría. Es bicéfalo porque por un lado está la cabeza del ministerio público fiscal y, por el otro, el ministerio público de la defensa.

Hay quienes opinan que el ministerio público es un instituto único. Pero es un despropósito pensar que bajo una misma cabeza pueda haber dos intereses contrapuestos en el proceso.

Recordemos que en el proceso está el fiscal, de naturaleza acusatoria, y el defensor. De manera que quienes interpretan dos roles diferentes en el proceso judicial no pueden estar bajo una misma administración o conducción.

Entonces, el ministerio público tiene como principal función controlar la legalidad y la defensa del orden público y velar por el cumplimiento de la ley en todas las instancias.

Además, es parte obligada en todos los procesos penales a través de la promoción de la acción penal, y cumple la función pupilar en el sentido de aportar la defensa a todos aquellos que por distintas razones no pueden hacerlo por estar ausentes, ser incapaces o menores.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Antonio Cafiero.

Sr. Genoud. — Tampoco deja de ser interesante la discusión respecto de en qué órbita de los poderes de la República se ubica al ministerio público. En Hungría, Bulgaria y Rusia está bajo la dependencia del Poder Legislativo. A su vez, en muchas provincias argentinas — diría casi en la totalidad, salvo Salta y alguna otra que es posible que no recuerde en este momento — está bajo la órbita del Poder Judicial, siguiendo a grandes profesores de derecho, autores de varios códigos de procedimientos y que fueron los que en definitiva inspiraron en esa materia muchas reformas en estados provinciales, como Vélez Maricón y Clariá Olmedo. Legislaciones como la de Córdoba y la de Mendoza consagran el principio de que el ministerio público está dentro del Poder Judicial, con un cierto grado de autonomía, pero bajo su administración.

Los fiscales son designados por el mismo procedimiento que los jueces; gozan de estabilidad; tienen la intangibilidad de las remuneraciones, etcétera, pero dentro del Poder Judicial. Pero también tenemos muchos casos — concretamente, en nuestra legislación, la que se aplica en la actualidad — en los que se hace depender al ministerio público directamente del Poder Ejecutivo.

La reforma constitucional da un salto cualitativo realmente trascendente, por el cual el ministerio público fiscal y de la defensa serán extrapoder. Ello quiere decir que no estarán bajo la órbita de ninguno de los tres poderes del Estado sino que tendrán — como establece la Constitución — autonomía funcional y autarquía financiera. Esto es así porque se procura que el fiscal, parte fundamental del proceso — que es quien promueve la acción judicial, y quien tiene el rol de denunciar y de investigar hasta las últimas consecuencias —, debe ser imparcial. Y la imparcialidad se logra a través de la independencia. En la medida en que otro poder del Estado pueda dar instrucciones, ordenar, mandar, influir sobre los fiscales, se desvirtúa — por no decir se pierde definitivamente — el valor sustantivo que debe tener el Ministerio Público, que es su total neutralidad.

Por eso, para garantizar su independencia, se consagran dos atributos. Uno de ellos es la estabilidad. Se ha informado bien aquí —y por eso no voy a reiterar conceptos ya vertidos— que la estabilidad significa que nadie puede ser removido de su cargo sino por justa causa y a través de un procedimiento que consagra la propia ley; permaneciendo en sus funciones hasta los setenta y cinco años de edad. De manera que quien ejerce tan alta magistratura no está supeditado a quedarse sin el cargo o a ser desplazado.

Lo mismo sucede en cuanto a la intangibilidad de sus remuneraciones. Se trata de un principio que existe para todos aquellos que integran el Poder Judicial.

También se ha hecho mención de un sinnúmero de características realmente importantes, que no dudo en apoyar, como es el caso de evitar el traslado de los fiscales, como ocurre en la actualidad, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, y como estaba previsto, lamentablemente, en el proyecto que vino a defender a este cuerpo el ex ministro de Justicia Barra.

En aquel proyecto, que afortunadamente no prosperó, los fiscales podían ser trasladados de una jurisdicción a otra. Esto significaba sacar de una jurisdicción a un fiscal que estaba entendiendo en ciertas y determinadas causas, sin siquiera consultar la opinión del propio magistrado.

Por eso es que ahora la norma establece que pueden ser trasladados de jurisdicción, pero como condición sine qua non se requiere la autorización o el consentimiento por parte del fiscal aludido.

Obviamente, no se puede prohibir el traslado como principio, porque muchas veces ocurre que los fiscales cambian de domicilio o que por distintas razones se tienen que mudar a otras provincias, por lo que sería un contrasentido impedir todo tipo de cambio de jurisdicción. En este caso debe existir una decisión política y, además, el aval o el consentimiento del fiscal.

Se ha mejorado mucho la redacción que originariamente traía el proyecto del Poder Ejecutivo respecto de las instrucciones que se daban a los fiscales. El proyecto que defendió el ex ministro Barra, con la oposición del bloque de la Unión Cívica Radical, consagraba el principio de las instrucciones, que debían ser —lisa y llanamente— acatadas por los fiscales, lo que entrañaba un serio peligro, como por ejemplo que desde el poder se dieran instrucciones de desistir de una acción o de cambiar de dirección en la investigación o en el curso del proceso penal,

lo que desvirtuaba absolutamente el sentido y la función que tiene el ministerio público en cuanto a la defensa de la sociedad.

Ahora, las instrucciones pueden ser impartidas. Esto lo admitimos, pero el fiscal puede efectuar sus reparos por escrito y dejar constancia en el proceso de que se trate. Esto hace recaer las consecuencias en aquel de quien emanó la responsabilidad de la orden.

Además, se da un paso trascendente en lo que se refiere a la designación de los fiscales. A partir de la sanción de esta ley deberá concursarse por antecedentes y por oposición.

Debo decir a título personal —quizá otros señores senadores de mi bancada compartan este criterio o, incluso, lo amplíen— que no satisface la integración del tribunal que tiene a su cargo el llamado a concurso de antecedentes y oposición.

En el proyecto que estamos analizando, el procurador general de la Nación convoca a cuatro integrantes del Ministerio Público, que van a actuar como tribunal para tomar estos concursos. Nosotros pensamos que esto es demasiado acotado. Hubiésemos deseado —así lo proponemos en la votación en particular— que haya participación de, al menos, dos académicos del derecho, y de dos legisladores que cumplan con los requisitos para ser ministros de la Corte, en el sentido de que sean abogados y tengan determinada antigüedad en el ejercicio de la profesión, para que integren el tribunal que tendrá a su cargo la selección de la terna que va a ser remitida al Poder Ejecutivo para la selección de los que, en definitiva, integrarán el Ministerio Público.

Es un paso adelante significativo, cualitativamente valioso, el hecho de que para ser fiscal federal en cualquiera de sus rangos se requiera pasar por el concurso de antecedentes y oposición, que la terna sea elevada por el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo remita el pedido de acuerdo al Senado que, en el caso del resto de los fiscales, requerirá simple mayoría y, en el del defensor general y del procurador general de la Nación, una mayoría especial de dos tercios igual a la que exige nuestra Constitución para ser ministro de la Corte Suprema de la Nación.

Participamos del criterio de la oficialidad, propio de la naturaleza jurídica del Ministerio Público, de que el fiscal debe denunciar, debe excitar la acción, debe incoar el proceso penal y, además, de establecer la creación de una comisión bicameral como una suerte de contralor del

funcionamiento del Ministerio Público, toda vez que anualmente deberá analizar el informe que se remita al Congreso.

Señor presidente: comparto la objeción realizada en su momento por algunos constitucionales como el doctor Reynaldo Vanossi, en el sentido de que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debió haber tenido un rango de carácter constitucional. Si bien no lo tiene, en la Constitución reformada se establece a partir del artículo 44 cuál es la naturaleza, funcionamiento y los objetivos que tiene la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está llamada a cumplir una muy importante función.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos Ruckauf.

Sr. Genoud. — De hecho, en muchas épocas de nuestro pasado reciente las ha cumplido.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tiene como principal función investigar la conducta de quienes ejerzan funciones públicas. Además, tiene la responsabilidad de investigar a las entidades que administran fondos o recursos del Estado nacional. Se deduce, obviamente, de estas importantes funciones que he señalado a modo de síntesis que tiene el deber de denunciar penalmente aquellas conductas o personas que hayan incurrido en acciones supuestamente dolosas.

Obviamente, señor presidente, se consagra un principio muy importante en estos tiempos como lo es que toda investigación que se lleve a cabo contra funcionarios públicos o entidades que administran recursos del Estado nacional debe ser comunicada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que tome participación —no sólo conocimiento, sino intervención— en dichos procesos y, además, lleve adelante las actuaciones que correspondan.

Señor presidente: quiero hacer un breve *racconto*, en pocas palabras, de la historia del Ministerio Público, que comienza con la ley 27, cuando se reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Allí se hablaba del procurador general de la Nación.

Tampoco es menos cierto que no ha existido, a lo largo de nuestra historia, una ley que reglamente pormenorizadamente cómo debe funcionar el ministerio público. Por eso es casi un hito —diría— en la historia del Poder Judicial de la Nación y de la justicia en la Argentina que exista una norma que puntualmente detalle cómo funciona esta institución, que tiene que ver directamente con nuestra seguridad jurídica.

Este *racconto* histórico pasa porque en el gobierno de 1983 —hace pocos instantes se rindió un homenaje a la recuperación de la democracia a través de la elección celebrada en ese año, y que marca como un símbolo— el presidente de la República de ese entonces pidió el correspondiente acuerdo para el primer procurador general de la Nación, que fue el doctor Gauna. El acuerdo fue concedido y la Corte le tomó juramento. Posteriormente hizo lo propio con el doctor D'Alesio: pidió el acuerdo del Senado, éste lo concedió y el doctor D'Alesio juró ante la Corte.

Pero con el advenimiento del actual gobierno se produjo un cambio sustancial. Sin modificar ley alguna —porque, obviamente, no existe ley que obligue al acuerdo—, el presidente de la Nación designó por decreto al actual procurador general de la Nación y le tomó juramento el Poder Ejecutivo y no la Corte, como había sido tradición en los últimos tiempos.

Señalo esto porque reivindicamos el proyecto que estamos evaluando, por el cual el procurador general de la Nación y el ministerio público de la defensa —o defensor general, como indistintamente lo denomina el proyecto— requieren de los dos tercios de los votos del Senado para contar con el correspondiente acuerdo.

Aquí viene lo que había analizado el miembro informante en la última parte de su exposición. La posición sustentada por la Unión Cívica Radical es que, como mínimo, correspondería que una vez sancionada la ley se remitieran los acuerdos del defensor general y del procurador general de la Nación para que cuenten con el aval correspondiente establecido en la norma. De ese modo, el proyecto que hoy estamos discutiendo —que con seguridad se va a convertir próximamente en ley— no será para el futuro, sino que tendrá plena vigencia a partir de ahora, incluso con los requisitos y condiciones que consagra el propio precepto. De lo contrario nos encontraríamos con un contrasentido: por una ley aprobada por la simple mayoría de los votos —porque no requiere mayoría especial— se confirmaría con estabilidad y para todos los tiempos —hasta los 75 años— a funcionarios que requieren los dos tercios de los votos de este Senado para obtener la convalidación legal que consagra la propia norma.

Además, sería una ejemplar señal que el Parlamento y el propio gobierno —quien ostenta la mayoría en las dos Cámaras— podrían dar a la opinión pública: al decir que el procurador general —principal responsable de la administra-

ción del ministerio público— y el defensor general de la Nación cuentan con el aval correspondiente del Senado —integrado por representantes de todas las provincias y, prácticamente, todos los partidos políticos con volúmenes electorales significativos— se estaría dando —repito— un buen ejemplo. Si los candidatos propuestos no logran los dos tercios, el Poder Ejecutivo podrá nominar a otros integrantes para ocupar los más altos cargos de este instituto que, totalmente reformulado, pondremos en marcha en la Argentina.

De no ser así, creo que vamos a empalidecer o a desmerecer un gran trabajo parlamentario que reconozco —esto significa, de hecho, un elogio a quienes han conducido la Comisión de Asuntos Constitucionales—, porque partimos en la discusión de una propuesta que no tiene absolutamente nada que ver con el que ahora estamos debatiendo. Aquél fue un proyecto que alentó, en alguna medida, el anterior ministro de Justicia. Aquí no sólo se encontró el consenso importante de las fuerzas políticas que integran esta Cámara, sino que se escuchó atentamente a muchas entidades prestigiosas, como colegios de abogados y asociaciones de magistrados. Inclusive, se evaluaron y aceptaron con gran permeabilidad diversas modificaciones, las que se incorporaron a este expediente, que es una síntesis, más allá de los cuestionamientos puntuales que hemos señalado y que seguramente otros legisladores de otras bancadas, y de la nuestra también, van a exponer: De cualquier manera, en términos generales, esta iniciativa es aceptada de muy buen grado.

Entonces, si se mantiene el criterio —con el artículo 69 o sin él— por el cual los miembros del ministerio público, desde el procurador hasta el último fiscal, permanecerán en sus cargos sin pasar por el acuerdo del Senado —reitero que, como mínimo, esto último debiera cumplirse en el caso del procurador y del defensor— les estaremos quitando el gran mérito que, sin lugar a dudas, tienen quienes han monitoreado el trabajo parlamentario para llegar a este proyecto que esperamos se convierta en ley. Además, deseamos que ello se concrete junto con la sanción del proyecto de ley del Consejo de la Magistratura, que esperamos sea reformado totalmente en la Cámara de Diputados para que, de ese modo, se dé comienzo a un proceso que transforme a la actual justicia en realmente independiente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: los señores senadores preopinantes han incursionado prolijamente en el análisis del articulado del proyecto en tratamiento. Por lo tanto, no voy a entrar en un análisis de ese tipo en este momento, sin perjuicio de las manifestaciones que haga al considerarse esta iniciativa en particular.

Simplemente, como autor de uno de los proyectos que han servido de base al que estamos considerando, voy a hacer algunas consideraciones generales que dan fundamento a este instituto, que ahora tiene origen en la Constitución.

En el esquema de poder estructurado en el estado democrático moderno se presupone la necesidad de establecer un equilibrio entre las distintas fuerzas pluralistas que compiten en la sociedad, con el fin de garantizar al individuo una esfera de libertad que le permita el desarrollo de su personalidad y salvaguardar su dignidad.

La organización democrática parte del principio realista según el cual el hombre tiende a corromperse cuando detenta el poder. Esta sería una razón por la cual es necesario, en consecuencia, establecer la mayor cantidad posible de controles, los que sin llegar a obstaculizar las acciones de gobierno garanticen el ejercicio de las libertades individuales.

Cabe afirmar, entonces, que existe una relación directa entre el cumplimiento de este objetivo y la eficiencia de los mecanismos de control del poder.

La teoría de la separación de poderes, expuesta por Montesquieu en *El espíritu de las leyes*, que es un instrumento para que los órganos que ejercen el poder se controlen recíprocamente, garantizando así un espacio de libertad, respondió esencialmente a la necesidad de esa limitación o control.

Esta idea se encarnó en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que expresa que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes determinada, no tiene Constitución.

Esta afirmación tan concluyente demuestra que el control del poder asume un rol de gran trascendencia en la organización democrática.

Pero si cada individuo desconoce los mecanismos para actualizar los derechos consagrados por la Constitución, o si las instituciones encargadas de su custodia no se encuentran debidamente estructuradas para ser eficientes, puede

afirmarse, señor presidente, que de nada sirve una estructura constitucional democrática.

Lo referido hasta ahora demuestra la importancia del tema que nos convoca: el tratamiento del proyecto de ley que regirá uno de los órganos fundamentales de control, el Ministerio Público, a efectos de organizar su pleno funcionamiento.

No sería oportuno, señor presidente, efectuar una reseña histórica del citado organismo, ni de las posiciones relativas a su ubicación institucional, pues estas cuestiones ya han sido analizadas por distintos autores y objeto de numerosas iniciativas parlamentarias. Podemos sí afirmar que han quedado atrás, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994.

En lo esencial, quisiera poner de relieve en mi exposición la importancia de que el Ministerio Público se configure en nuestro sistema como un órgano independiente, pues ésta ha sido la problemática que desde siempre ha tenido que afrontar y de la que no es posible prescindir cuando se trata de regular esta materia.

En el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de mi autoría hice una reseña de las leyes nacionales que regulaban de un modo disperso esta institución, las viejas leyes 27, 1.893, 4.055, 17.516, entre otras. Más reciente, la ley de ministerios, en su artículo 22, inciso 5º, dispone la competencia del Ministerio de Justicia en la organización del Ministerio Público, en la designación de sus miembros y en el ejercicio de su dirección.

Con relación a esta norma que configura a la institución como un órgano dependiente del poder administrador, expresé en los fundamentos de aquella iniciativa que esa situación distaba de ser la conveniente tratándose de un órgano que controla la correcta administración de justicia.

Por esa razón debía estar rodeado de las máximas garantías de independencia, lo que importa sostener su desvinculación de instrucciones o directivas provenientes de otros poderes.

Resulta evidente que las funciones de control no pueden ser ejercidas con eficiencia si el Ministerio Público se encuentra integrado en marcadas relaciones jerárquicas con alguno de los poderes a los que debe controlar.

En aquel momento, previo a la reforma constitucional, la solución más acorde era la adopción del sistema judicialista con independencia funcional, como lo consagran algunas constituciones provinciales: Buenos Aires, Catamarca, Cór-

doba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja y San Juan.

Sin embargo destacó la importancia de que este órgano sea incluido en la Constitución Nacional a la manera en que se halla regulado en algunas modernas constituciones latinoamericanas, como las de Brasil, Perú y Venezuela.

Tras la reforma de 1994, el Ministerio Público ha adquirido merecido rango constitucional, consagrándose en el artículo 120 de la Carta Magna su carácter de órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.

En lo que respecta a su calificación como órgano extrapoderes, sobre lo cual hoy se manifiestan opiniones divergentes, sería necesario efectuar algunas precisiones.

En primer término, como surge de la ley número 24.309, de declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, su artículo 3º habilitó el tratamiento del Ministerio Público como órgano extrapoderes.

El convencional Héctor Masnatta expresó que la ausencia de la palabra extrapoderes no debía interpretarse como una intención diversa a la expuesta en la norma antes citada, sino como una conformidad conceptual con ésta, pero sin inclusión del vocablo por no considerárselo adecuado.

De modo tal que conforme con la sección cuarta —artículo 120— de la Constitución Nacional y con las señaladas expresiones, debiera considerarse al ministerio público como un órgano extrapoder, pese a que en el texto constitucional no se le atribuye esa denominación.

En este punto, señor presidente, reiteraré aquí un aspecto que mencioné al inicio de mi exposición y que se vincula con el nuevo perfil de esta institución después de la reforma.

He señalado que el principio de la división de los poderes ha permitido el mantenimiento de un equilibrio relativo entre los diversos grupos y aspiraciones opuestas, y pese a que sus dificultades en la práctica son grandes, constituye sin lugar a dudas el fundamento sin el cual no puede concebirse, y menos aún funcionar, el sistema democrático.

No obstante que dicho principio se mantiene vigente en las constituciones modernas, su alejamiento de la realidad del siglo XX ha llevado a algunos autores como Lowenstein a calificar a la misma de "antigua teoría" o a Maurice Duverger a referirse a su desactualización, pero sin perder de vista los aspectos positivos de la misma.

Es por ello que la ciencia política contemporánea ha propuesto un nuevo enfoque según el

cual los tres poderes se transforman y aparecen unidos a una multiplicidad de órganos y funciones intervencionales, y a la par otros fenómenos nuevos, virtualmente ignorados por aquella, tales como el control y la oposición.

Esos diversos órganos colocados al margen de los poderes enumerados por Montesquieu, aunque en relación con todos, alguno o algunos de ellos, han recibido el nombre de órganos extrapoderes por parte del profesor Germán Bidart Campos.

Esta es la modalidad que han adoptado las constituciones latinoamericanas. Así por ejemplo la Constitución del Perú en vigor desde el 28 de julio de 1989 incluye a continuación de los tres poderes clásicos, como típico órgano "extrapoder" en el sentido de esta expresión, al ministerio público con el fiscal de la Nación a la cabeza.

Otro típico ejemplo de órgano extrapoder lo constituye el ombudsman, incorporado a nuestra Constitución en 1994. Pero independientemente de la multiplicación de funciones y de órganos a que he aludido, ha adquirido prioritario lugar la idea de que la concepción del control debe reemplazar a la de separación a los fines de la consolidación del estado de derecho.

Según este criterio, la función de control político según Lowenstein pasa a ocupar un lugar privilegiado con la constancia de que dicho control es múltiple, no meramente tripartito.

En el marco de dichas ideas es que debe concebirse al ministerio público y así también entiendo que debe interpretarse la norma constitucional que regula la institución que hoy pretendemos reglamentar.

Pero más allá de estas consideraciones de carácter doctrinario, pero no por ello menos importantes porque sirven de guía en el desenvolvimiento práctico de la institución, quisiera destacar algunos aspectos fundamentales contenidos en el dictamen en mayoría, los que por otra parte coinciden con los oportunamente propuestos en el proyecto de mi autoría.

En el artículo 1º el ministerio público es definido en su justa dimensión como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera cuya actuación esencialmente es ante los tribunales, como órgano de control de éstos, siempre en representación de los intereses generales de la sociedad, los que no se confunden con los intereses o requerimientos de alguna rama del gobierno en particular.

Su función prominente es preservar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, a la

vez que le atañe el ejercicio de la acción pública en la esfera penal y en determinados supuestos en el orden civil (artículo 25). Asimismo, le corresponde una acción tuitiva y asistencial en la que igualmente se halla interesada la sociedad.

Dada la especificidad de las funciones que, en su conjunto, son distintas y opuestas, resulta apropiada su organización en dos líneas jerárquicas y diferenciadas: ministerio público fiscal, integrado por el procurador general y los fiscales, y el ministerio público de la Defensa, integrado por el defensor general y los defensores. Con ello, se supera la contradictoria situación actual en la cual los defensores deben responder al procurador general.

Si bien el ejercicio de sus funciones con independencia implica desvincularlo de instrucciones o directivas provenientes de órganos ajenos a su estructura, ello no importa, como bien lo expresó el doctor Argentino Barraquero en un prolijo estudio, conformar un absolutismo absoluto dentro de nuestro régimen político, sino una coordinación de atribuciones que es propia del gobierno representativo. Así lo señala este ex magistrado en un estudio que publica la revista "La Ley", en el tomo 119, página 1.141.

Contribuye al mismo propósito el artículo 27 que excluye de sus tareas la de representar o abogar por el Estado nacional.

Como complemento necesario para resguardar la independencia de sus integrantes singularmente considerados, se exige para su designación el acuerdo senatorial —artículo 5º— a la vez que se le confiere la misma estabilidad de que gozan los jueces. Asimismo, se los equipara a estos últimos en lo que se refiere a otros efectos: remuneratorios, previsionales, protocolares, de autoridad y trato.

La incorporación del requisito del concurso de oposición y antecedentes previsto por el artículo 6º resulta altamente positiva pues refuerza la idea de la estabilidad y se orienta a la profesionalización de los fiscales y defensores.

También responden a los fines de la independencia funcional, los artículos 14 y 15 que, respectivamente, establecen el carácter privilegiados de sus actos y expresiones en lo que concierne al ejercicio de sus funciones y la disposición de traslados sujeta a determinadas condiciones.

La estabilidad aparece resguardada mediante rigurosos procedimientos de remoción.

En lo que respecta al procurador general y al defensor general se instituye el procedimiento del juicio político previsto por los artículos 53 y

59 de la Constitución Nacional y para los restantes cargos se instituye un tribunal de enjuiciamiento.

Dicho criterio, además de resultar adecuado coincide a su vez con el que regía en los antecedentes de nuestro derecho patrio, en el recordado reglamento provisorio de 1817, que extendía a los fiscales la garantía de inamovilidad que se concedía a los jueces. Estaban también plasmado en la ley 1893 para los fiscales de cámara. Y, desde luego, estuvo siempre prevista para el máximo representante del ministerio público, el procurador general de la Nación, conforme el artículo 6º de la ley 27 y artículo 21 del decreto ley 1.285/58.

La autarquía financiera que contempla el proyecto y en virtud de la cual el ministerio público contará con un crédito presupuestario propio, constituye junto con los aspectos antes señalados, garantías suficientes para su desenvolvimiento eficaz.

Entiendo, como consecuencia de lo expuesto, que el dictamen en mayoría contiene ampliamente los recaudos que posibilitarán el cumplimiento de dicha finalidad y es, por tales razones, que fundo mi voto favorable para su aprobación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — (*Lee*): Señor presidente: este es un tema indudablemente trascendente, que tiene sin duda alguna gran importancia, y que nos toca analizar hoy a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución Nacional en su reciente reforma de 1994, cuyo artículo 120 establece la constitucionalización del Ministerio Público, lo cual es darle carácter constitucional y de extrapoder a este instituto que, como ya dije, es de suma trascendencia.

El proyecto de ley en consideración se origina en una delegación que el poder constituyente ha hecho en el Poder Legislativo, el que ha trabajado intensamente sobre este tema y ha dado por tierra así con las acusaciones que a veces recibe en el sentido de que no actúa de acuerdo a como lo exigen las circunstancias. Este ha sido un caso concreto en el que se ha demostrado cabalmente lo contrario.

Señor presidente: comparto totalmente en general lo resuelto por la comisión respectiva y por ello voy a votar favorablemente esta iniciativa, respecto de la cual he preparado algunas reflexiones que, en virtud de ser extensas debido a la importancia del proyecto, pido su inserción en el Diario de Sesiones.

— El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

El proyecto que hoy nos toca analizar tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional en su reciente reforma de 1994, la que en su artículo 120 estableció la constitucionalización del instituto del Ministerio Público como un órgano extrapoder, ubicando al mismo en una sección independiente de nuestra Constitución Nacional.

Este proyecto de ley contiene enorme trascendencia institucional, no solo por encontrarnos ante una ley constitucional, es decir aquellas delegadas al Poder Legislativo por expresa disposición del Constituyente, sino por la importancia de la temática que aborda su tratamiento.

Una de las preocupaciones más evidentes de la sociedad, y de toda su dirigencia, se centra en el cumplimiento y fortaleza de los controles que nuestro sistema institucional ha dispuesto sobre los poderes públicos.

Dichos controles integran el elemento esencial de la teoría de división de poderes que rige el sistema republicano, y se constituyen en el mejor resguardo de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación.

Es irrefutable la realidad que indica que muchos sectores de nuestra comunidad advirtieron con preocupación respecto del incremento de poder que la administración actual fue progresivamente incorporando, al altísimo precio de usurpar en muchos casos competencias constitucionales y legales de otros poderes del Estado; de modificar estructuras de organismo de control, debilitando sus metas y funciones, y de ignorar sanas costumbres republicanas nacidas para evitar el predominio de alguno de los tres poderes del Estado.

En esta línea de pensamiento, el Poder Judicial no se mantuvo al margen de la vorágine centralizadora del Ejecutivo que —en su momento— se asestó un golpe importante contra su independencia al promover y obtener el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al sostener la doctrina minoritaria que ubica al Ministerio Público bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, en contra de aquellas posiciones que lo visualizan dentro de la órbita del Judicial o como órgano extrapoder, posición finalmente adoptada por nuestra Carta Magna a partir de su última reforma.

No debemos olvidar que a través del largo camino recorrido hasta la situación actual, este gobierno se apartó de la sana tradición institucional seguida hasta 1989 de solicitar el acuerdo del Senado para perfeccionar la designación del procurador general de la Nación, fiscal del Fuero Superior y cabeza del Ministerio Público.

Este hecho que despertara oportunamente gran cantidad de críticas de todos los sectores de la comunidad, fue reafirmado con la modificación que, a propuesta del Poder Ejecutivo, se introdujera en el artículo 21 del decreto ley 1.285/58 mediante la ley 23.774 que al elevar a nueve los miembros de la Corte Suprema de Justicia eliminó a la figura del procurador general de la Nación de la composición del máximo tribunal.

Ejemplos comparados de esta dependencia del Poder Ejecutivo, lo constituyen todos aquellos países que han seguido los derroteros marcados por Francia. En la Argentina, han sostenido doctrinariamente la conveniencia de esta inserción destacados autores, cuya prédica caló profundamente en muchos funcionarios de distintos gobiernos.

En su momento me opuse a la sanción de la ley 23.774 advirtiendo los riesgos que el aumento de los miembros de la Corte y la sumisión del procurador general al Poder Ejecutivo implicaba para el sistema institucional vigente en el país.

El tiempo diría que no estaba equivocado, y que tanto el aumento de los miembros de la Corte, como la designación en lo sucesivo del procurador de la Nación sin acuerdo del Senado y su remoción por sola voluntad del poder administrador, se constituyeron en las primeras señales de una larga serie de actos encarados por el oficialismo tendientes a concentrar el poder, en peligroso desmedro de la característica republicana de controles recíprocos.

Tal como sostuviera en aquella época un editorial de un prestigioso matutino de esta Capital, "Una vez más ha quedado demostrada la necesidad de que el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones, dicte una ley del Ministerio Público que consagre definitivamente su independencia y establezca la exigencia del acuerdo senatorial para la designación y para la remoción del procurador general" ("La Nación", 5 de mayo de 1992).

Era doctrina constitucional mayoritaria en aquellos años la autonomía del Ministerio Público, y en tal sentido algunas Constituciones provinciales así lo consagraban, tal por ejemplo la Constitución de Salta, que organizó el Ministerio Público como un órgano autónomo y extrapoder (artículo 160).

Es que pretender que el Ministerio Público esté dentro de la órbita del Poder Ejecutivo y sea independiente constituye una utopía, una imposibilidad. Por lo demás, es el resquicio por el cual el Ejecutivo se entromete en funciones judiciales, con grave riesgo de las libertades individuales.

Como sostuve en la Constituyente de 1994, la posición que reúne mayores adhesiones —y a la que personalmente adhiero— es la que lo sitúa dentro del Poder Judicial constituyendo una de sus ramas, pero dotando a sus titulares de suficientes facultades y autonomía. Esta es la posición en la que se encuentran Ayarragaray, Avellaneda, Huergo, Lapalma, Cortés, Segovia, Podetti, Barraquero, Chiara Díaz, Garro, Bianchi, Coussirat, etcétera. Así también lo propiciaron las reuniones de procuradores y fiscales generales en sus declaraciones de Salta de 1989, Santa Fe de 1990, Misiones de 1991, Córdoba de 1992, Río Negro de 1993 y Entre Ríos de 1994.

La realidad y la experiencia valiosa del funcionamiento del Ministerio Público en las órbitas provinciales nos indican que la circunstancia de colocarlo dentro del Poder Judicial no hubiera puesto en riesgo su independencia, porque la propia naturaleza de ese poder y su estructura, lo hacen poco proclive a que se produzcan situaciones conflictivas de este tipo.

Los argumentos aportados por los autores que propiciaron que el Ministerio Público debía constituir un órgano extrapoder —me refiero a los doctores Vanossi, Sagüés y Seisdedos— se centraron fundamentalmente en respetar su independencia.

Si bien compartí siempre dicha preocupación, discrepo con ellos por lo siguiente. La independencia necesaria hubiese podido igualmente alcanzarse dotándole de autonomía al órgano dentro del Poder Judicial. La estructuración como órgano extrapoder, a pesar de lo seductor de la teoría, tropieza a mi criterio con la dificultad

de que importa alterar la larguísima tradición occidental de la trilogía de poderes porque, quírase o no, al sacarlo de la estructura de los otros, se lo ha convertido en un "cuasi poder" con facultad de control, resultando, como ha sucedido, más compleja su inserción en el esquema constitucional, por traspasarse una conceptualización que cierta doctrina utiliza para ubicar al rey en Inglaterra o al presidente en Francia, donde se encuentran separadas las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado.

Esta postura, adoptada reitero finalmente por la reforma, encierra importantes dificultades que atentan contra la precisión y fundamentalmente la eficacia del instituto. Repárese únicamente, y solo a título de ejemplo, en los aspectos económicos involucrados en la estructuración.

Un órgano extrapoder siempre va a encontrarse frente a los otros tres poderes, especialmente respecto al Poder Ejecutivo, en inferioridad de condiciones.

Finalmente, y esto es esencial, por la propia naturaleza de la institución, el lugar correcto para instalarla hubiera sido el Poder Judicial. Ello es así porque la función judicial del Estado considerada sustancialmente, no es ejercida tan sólo por el juzgador, aunque éste tenga el máximo poder decisorio que en el área procesal caracteriza a la jurisdicción, sino también por el Ministerio Público en cuanto coadyuva a la obra de administrar justicia.

Es un desdoblamiento que obedece a la necesidad de proveer a la defensa oportuna y adecuada de las personas que no cuentan con la posibilidad de ser defendidas, de la sociedad en general o de los incapaces y menores.

Las razones sintéticamente expuestas siempre me llevaron a la convicción de fomentar la ubicación del Ministerio Público en el lugar que he predicado. El resguardo del interés general exigía que se respetara la naturaleza de la institución, ubicándolo institucionalmente en el ámbito del Poder Judicial.

En dicho sentido y en tren de recordar los antecedentes de los últimos años que nos han conducido al proyecto de ley en tratamiento, la necesidad del dictado de una ley orgánica del Ministerio Público siempre concentró la opinión favorable de los principales tratadistas.

Fue así que en su momento y siguiendo criterios oportunos, propuse una modificación a los artículos 2° y 3° del decreto-ley 1.285/58 (ley orgánica de la Justicia nacional), a efectos de retomar la posición que veía al procurador como un funcionario público designable con doble control, y solo removible a través del procedimiento de juicio político.

Desde la perspectiva histórica —como ilustradamente se expuso en la Convención Constituyente de Santa Fe y Paraná— el instituto surgió con caracteres definidos en el Estado absolutista y nace como protector de la hacienda real. El rey no sólo tenía que custodiar su hacienda, su patrimonio, sino que debía defender a los pobres, a los ausentes y a los incapaces. Así se fueron definiendo las características de la institución. Cuando llega la República, el carácter democrático del Estado la ubicó por distintas razones dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

En el desarrollo ulterior de la institución, el derecho procesal enfatizó fundamentalmente la defensa de los in-

tereses públicos por sobre lo que se podría llamar el fisco. De esa manera se erigió más bien como acusador independiente para que se asegure así la defensa del justiciable. Entonces, se produjo un corrimiento hacia la órbita del Poder Judicial, como figura por ejemplo en la Constitución de la provincia de Córdoba.

La ley declarativa de la necesidad de la reforma de nuestra Carta Fundamental habilitó en su artículo 3º la posibilidad de constitucionalizar el Ministerio Público como órgano extrapoder, es decir independiente del Ejecutivo y del Judicial.

Según expuso brillantemente Sagüés el Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo, sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de legalidad y por la recta administración de justicia.

Fue así que la Constituyente de 1994 según el dictamen de la Comisión de Sistema de Control que consideró varios proyectos presentados por distintos convencionales articuló la normativa —y más allá de las disidencias doctrinarias que he expuesto— de conformidad con la más avanzada línea de la doctrina contemporánea, con el propósito de servir mejor hacia un más adecuado servicio de justicia.

Así en el artículo 120, Constitución Nacional, se establece claramente que el Ministerio Público es un órgano independiente, desvinculado de los poderes Ejecutivo y Judicial. En ese sentido, corresponde partir de la premisa de que el Ministerio Público es un órgano esencial del estado de derecho. Por ello, se exige que en el cumplimiento de sus funciones exista adecuada imparcialidad e independencia.

Además, la posibilidad de asegurar la defensa del justiciable con el más adecuado servicio de justicia tiene que obedecer a otro principio rector, cual es que el funcionario debe tener las garantías necesarias que aseguren su imparcialidad. Entre ellas, se enumeran en forma taxativa la inmunidad funcional y la intangibilidad de las remuneraciones. El segundo aspecto fue el de asegurar la autonomía funcional. Con este objeto se otorgó autarquía financiera e independencia funcional.

Al hacer referencia a la independencia, estoy aludiendo a una institución organizada, de tal manera que esté al margen de cualquier tipo de indicaciones, presiones u órdenes de cualquier otra autoridad.

Esa independencia no importa en mi concepto un absolutismo, porque dentro de nuestro régimen político debe existir una necesaria coordinación de atribuciones.

En definitiva, el Ministerio Público debe ser imparcial y, por ello, independiente. Requiere, para ese cometido, de la inamovilidad e inmunidad de sus integrantes, además de la intangibilidad de las retribuciones.

Los caracteres citados no bastan; es necesario que tenga también una organización y una estructura que le permitan una actuación eficaz. Esta organización y estructura han sido analizadas en distintos momentos y foros. Existe un denominador común que indica la necesidad de una disposición jerárquica del órgano.

La imparcialidad debe ser visualizada como la actitud de permanente y absoluto acatamiento al principio de legalidad, que no debe sufrir excepciones por el hecho de tener en cuenta quién es el destinatario de la norma.

Ahora bien; pilar de esa imparcialidad debe ser la independencia. Así lo entiende Teixidor, quien sostiene que la imparcialidad en el ejercicio de las competencias sólo se logra con independencia. En otras palabras, si se quiere un Ministerio Público imparcial la única manera de obtenerlo es que se lo establezca como independiente.

Asimismo, el artículo 120 de la Constitución delineó las funciones primordiales: a) promover la actuación de la justicia. Es decir, se trata de un órgano destinado a asegurar la permanencia del servicio de justicia; b) defender la legalidad y c) lo que es muy importante, los intereses generales de la sociedad.

Es interesante hacer referencia al importante debate que tuvo lugar en la Comisión de Sistemas de Control de la Constituyente, donde existió consenso sobre cuáles serían los extremos de esta función. Así por ejemplo, se indicó que debía tutelar la ética pública y atacar las manifestaciones delictivas que ponen en entredicho la credibilidad del sistema democrático, tal como lo hace con claridad la Constitución colombiana.

Asimismo el artículo 120 de la Constitución Nacional establece como garantías la inmunidad funcional a imagen y semejanza de la que posee el defensor del pueblo; y la intangibilidad de las remuneraciones, como ocurre con los jueces. A este respecto se agrega que las funciones que se desempeñen tendrán que ser efectuadas en coordinación con las demás autoridades de la República.

A partir de la fórmula sintética y amplia del artículo 120 de la Constitución Nacional muy similar al artículo 124 de la Constitución española, que regula sobre el Ministerio Público en dicho país, la organización fue diferida a una ley futura, precisamente la que hoy consideramos.

Creo conveniente destacar, en esta síntesis que estoy efectuando respecto del desarrollo y evolución del instituto en el país durante los últimos años, que en la Constituyente de 1994 también se formularon dictámenes de minoría en la Comisión de Sistemas de Control, sostenidos posteriormente en la Comisión de Redacción. Como lo dicen los propios suscriptores el objetivo que se buscaba era desvincular a los integrantes del Ministerio Público de los avatares político-partidarios, entendiéndose que la mejor forma de concebirlo era integrándolo —como lo indica la experiencia constitucional argentina recogida por la mayoría de las constituciones provinciales vigentes y tal mi postura personal— bajo la pertenencia del aparato jurisdiccional del Estado.

Pues bien, es dable reconocer que la ley reglamentaria que estamos debatiendo ha logrado un consenso digno de destacar, y que el presente dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Interior y Justicia; Legislación General y Presupuesto y Hacienda, ha mejorado notablemente muchos de los proyectos en consideración, especialmente los enviados por el Poder Ejecutivo cuando el doctor Rodolfo Barra era ministro de Justicia.

Y creo que lo dicho debe ser remarcable ante los ojos de la opinión pública por dos circunstancias. La primera por el hecho que nos encontramos ante una de las instituciones más complejas desde el punto de vista del derecho positivo (que incluso llevó a que un gran procesalista como Jofré la calificara como la quinta rueda de la

carreta de la justicia) por lo que resulta muy difícil su conceptualización y esto se ha logrado satisfactoriamente; la segunda porque el dictamen en cuestión evidencia una voluntad de trabajo y de consenso digna de poner en evidencia, en momentos en que desde muchos sectores se ataca al Poder Legislativo bajo argumentos que pretenden denunciar supuesta inactividad y que en su ámbito se privilegian intereses personales y políticos de sus integrantes por sobre los de la comunidad.

Es correcta, a mi entender, la división que el artículo 120 de la Constitución Nacional ha efectuado dentro del instituto, al separar al procurador general de la Nación cabeza de los fiscales y al defensor general de la Nación jefe de los defensores. Este acierto redundará en beneficio de la eficiencia en el funcionamiento del ministerio.

Como ya he adelantado el bloque autonomista que represento va a apoyar en general el dictamen del Ministerio Público elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y las restantes comisiones intervinientes, bajo el convencimiento que ha sido el resultado de una importante tarea de la cual no han estado ajenas las voces de todos los sectores vinculados con el quehacer judicial, los que aportaron sus distintas visiones enriquecedoras para lograr el consenso general que alrededor de este dictamen hoy advertimos.

El dictamen en su contenido refleja con fidelidad la letra y el espíritu que emana del artículo 120 de la Constitución. En este caso, señor presidente, no podemos decir —como he señalado en oportunidad de tratarse otras leyes reglamentarias de nuevos institutos constitucionales— que la voluntad del Constituyente haya sido torcida o desnaturalizada, ya que el proyecto de ley respeta cabalmente los principios constitucionales que emanan de la norma superior.

A pesar de esto quisiera contribuir con algunas disidencias parciales que considero pueden resultar de utilidad para enriquecer el proyecto.

Con respecto al artículo 6° referido a la forma de selección de los integrantes del Ministerio Público con excepción de sus cabezas y de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3° y 4°, considero que el concurso allí previsto debería tener carácter público, y en esto coincido con la disidencia parcial de la senadora Fernández Meijide. La transparencia que esta característica y sus consecuencias le otorgaría a los concursos es un requisito que a esta altura de los acontecimientos no podemos soslayar.

También adhiero al hecho de procurar que el tribunal de enjuiciamiento que se prevé en el artículo 19 tenga participación del ámbito académico en su composición, y en este sentido apoyaré la intención de reforma parcial que propone el dictamen minoritario al que he hecho referencia.

El artículo 23 establece la creación de una comisión bicameral que tendrá a su cargo la relación del nuevo instituto con el Poder Legislativo, determinando que su composición y funciones serán fijadas por la Cámaras del Congreso.

Estoy de acuerdo en líneas generales con la intención, pero creo que razones de economía legislativa aconsejan definir en este proyecto la composición y funciones de dicha comisión, que como principio debería integrarse respetando a los bloques minoritarios.

Me parece desacertada, y el único hecho grave del dictamen, la pretensión que encierra el mismo de confirmar en el cargo al actual procurador general de la Nación, al defensor general y al fiscal de Investigaciones Administrativas, como se intenta a través de lo que surge de los artículos 69; 71 incisos a) y c) y 72 inciso a). Este es quizás el punto más álgido —a mi criterio— que encierra el dictamen, sobre todo en los casos del procurador general de la Nación, figura que se encuentra cuestionada políticamente, y del fiscal de Investigaciones Administrativas, impugnado por inactividad funcional.

En estos casos debería requerirse el acuerdo senatorial. Esta conducta es deseable y aconsejable por muchas razones; constituiría un acto de buena fe política; se respetaría íntegra y fielmente el espíritu de la ley; y se pondría en evidencia el deseo de acatar el sistema de controles republicano.

No creo prudente además, que si pretendemos otorgar a un instituto sospechado popularmente de parcialidad en muchas de sus actuaciones, una nueva y mejorada etapa en la vida institucional de la República, se confirmen automáticamente figuras que la sociedad identifica con un proceso ya superado. El oficialismo debe entender que la revisión por parte del Senado de dichas designaciones no puede ni debe evitarse en beneficio del sistema democrático.

Para finalizar, señor presidente, y sin perjuicio de las observaciones formuladas, estoy seguro que el dictamen que próximamente vamos a votar se destaca por su calidad técnica y por su consenso político.

Siempre he dicho que el Congreso debe ejercer plenamente las facultades que constitucionalmente hacen a su competencia, sancionando normas que permitan mantener y ejercer los controles que apuntalan el sistema republicano.

Con la aprobación de este dictamen, daremos un paso adelante en el cumplimiento adecuado de esta atribución, situada en la esencia misma del espíritu parlamentario.

Sr. Romero Feris. — De todos modos, voy a señalar algunos aspectos puntuales que me interesan. En tal sentido, una de las preocupaciones más evidentes de nuestra sociedad y de toda la dirigencia se sienta en el cumplimiento y la fortaleza de los controles que nuestro sistema institucional ha dispuesto sobre los poderes públicos. Dichos controles integran el elemento esencial de la teoría de la división de los poderes del sistema republicano de gobierno, que debe existir y tener plena vigencia en resguardo de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación.

Creo que es irrefutable la realidad que indica que muchos sectores de nuestra comunidad advirtieron con preocupación, respecto del incremento de poder que la administración actual fue progresivamente incorporando, el altísimo precio de usurpar en muchos casos competencias constitucionales y legales de otros poderes del Estado, de modificar estructuras de orga-

nismos de control debilitando sus metas y funciones y de ignorar también sanas costumbres republicanas nacidas para evitar el predominio de alguno de los tres poderes del Estado.

El Poder Judicial no se mantuvo al margen de la vorágine centralizadora del Poder Ejecutivo. Recuerdo en este momento que cuando tratamos en este Senado el incremento del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —de cinco a nueve— expresé mi disconformidad con esa propuesta porque consideré que iba a politizar de alguna manera el cuerpo, a la vez que sostuve que no sería conveniente para que la Justicia actúe con total independencia.

No debemos olvidar que a través del largo camino recorrido hasta llegar a la situación actual, en el Senado hemos debido perfeccionar la designación del procurador general de la Nación, fiscal del fuero superior y cabeza del Ministerio Público.

Para resaltar la importancia de este proyecto, quiero mencionar lo que oportunamente ha expresado en su editorial un prestigioso matutino de nivel nacional: "Una vez más ha quedado demostrada la necesidad de que el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones, dicte una ley de Ministerio Público que consagre definitivamente su independencia, y establezca la exigencia del acuerdo senatorial para la designación y para la remoción del procurador general". Esto fue publicado por el diario "La Nación" del 5 de mayo de 1992.

Como lo sostuve en la Convención Constituyente de 1994, la posición que reúne mayores adhesiones, a la que personalmente suscribo, señor presidente, es la que sitúa al Ministerio Público dentro del Poder Judicial constituyendo una de sus ramas, pero dotando a sus titulares de suficientes facultades y autonomía. Esta es la posición en la que se encuentran varios autores, como Avarragaray, Avellaneda, Huergo, Lapalma, Cortés, Segovia, Podetti, Barraquero, Chiara Díaz, Garro y Bianchi.

Así también lo han propiciado las reuniones de procuradores y fiscales generales en sus declaraciones de Salta, 1989; Santa Fe, 1990; Misiones, 1991; Córdoba, 1992; Río Negro, 1993 y Entre Ríos, 1994.

Los argumentos aportados por los autores que propiciaron que el Ministerio Público debía constituir un órgano extrapoder —me refiero a los doctores Vanossi, Sagüés y Seisdedos— se centraron fundamentalmente en el respeto de su independencia.

En su momento compartí esta preocupación, pero discrepo con ellos por lo siguiente: la independencia necesaria hubiese podido igualmente alcanzarse dotando de autonomía al órgano dentro del Poder Judicial. La estructuración como órgano extrapoder, a pesar de lo seductor de la teoría, tropieza —a mi criterio— con la dificultad de que importa alterar la larguísima tradición occidental de la trilogía de poderes porque, quierase o no, al sacarlo de las estructuras de los otros poderes, se lo ha convertido en un cuasipoder con facultades de control, resultando —como ha sucedido— más compleja su inserción en el esquema constitucional por trasladarse una conceptualización que cierta doctrina utiliza para ubicar al rey en Inglaterra o al presidente en Francia, en donde se encuentran separadas las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado.

Según mi criterio, los órganos extrapoder siempre van a encontrarse frente a los otros tres poderes, especialmente con respecto al Poder Ejecutivo, en inferioridad de condiciones.

Según lo expuso brillantemente Sagüés, el Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo, sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal, velar por el principio de legalidad y por la recta administración de justicia.

Asimismo, señor presidente, el artículo 120 de la Constitución reformada en 1994, delineó sus funciones primordiales: a) promover la actuación de la Justicia, es decir, se trata de un órgano destinado a asegurar la permanencia del servicio de justicia; b) defender la legalidad, y c) defender los intereses generales de la sociedad, que es muy importante.

Es dable reconocer, señor presidente, que la ley reglamentaria que estamos debatiendo ha logrado un consenso digno de destacar, como dije al comienzo, y el presente dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda ha mejorado notablemente muchos de los proyectos en consideración, especialmente los enviados por el Poder Ejecutivo durante la gestión del doctor Rodolfo Barra como ministro de Justicia de la Nación.

A mi entender es correcta la división que el artículo 120 de la Constitución Nacional ha efectuado dentro del instituto, al separar al procurador general de la Nación, cabeza de los fiscales, y al defensor general de la Nación, jefe de los defensores. Este acierto redundará en beneficio de la eficiencia en el funcionamiento del ministerio.

Señor presidente: a pesar de lo señalado y de mi coincidencia en el aspecto general —como dije al comienzo—, marcaré mis discrepancias en particular con respecto a este tema, porque quiero contribuir con algunas disidencias parciales, que considero pueden resultar de utilidad para enriquecer el proyecto.

Con respecto al artículo 6º referido a la forma de selección de los integrantes del Ministerio Público, con excepción de su cabeza y de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º enunciados en el artículo 5º, considero que el concurso allí previsto debería tener carácter público. Y en esto coincido con la disidencia parcial de la señora senadora Fernández Meijide. La transparencia que esta característica y sus consecuencias le otorgaría a los concursos es un requisito que a esta altura de los acontecimientos no podemos soslayar.

También adhiero al hecho de procurar que el tribunal de enjuiciamiento, que se prevé en el artículo 19, tenga participación del ámbito académico en su composición. En este sentido, apoyaré la intención de reforma parcial que propone el dictamen minoritario al que hice referencia.

El artículo 23 establece la creación de una comisión bicameral, que tendrá a su cargo la relación del nuevo instituto con el Poder Legislativo, determinando que su composición y funciones serán fijadas por las Cámaras del Congreso.

En líneas generales estoy de acuerdo con la intención, pero creo que razones de economía legislativa aconsejan definir en este proyecto la composición y funciones de esa comisión, que como principio debería integrarse respetando a los bloques minoritarios.

Me parece desacertada, y el único hecho grave del dictamen, la pretensión que encierra el despacho de confirmar en los cargos al actual procurador general de la Nación, al defensor general de la Nación y al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, tal como se intenta a través de lo que surge de los artículos 69, 71 incisos a) y c) y 72 inciso a).

Según mi criterio, éste es el punto más álgido que encierra el dictamen; sobre todo en los casos del procurador general de la Nación, figura que de alguna manera fue cuestionada, y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, que fue impugnado por una inactividad funcional.

En estos casos debería requerirse el acuerdo senatorial. Creo que esta conducta es deseable y

aconsejable por muchas razones, ya que constituiría un acto de buena fe política, respetaría íntegra y fielmente el espíritu de la ley y pondría en evidencia el deseo de acatar el sistema de controles republicano.

Para finalizar, y sin perjuicio de las observaciones formuladas, estoy seguro de que el dictamen que próximamente vamos a votar se destaca por su calidad técnica y por su consenso político.

Siempre dije que el Congreso debe ejercer plenamente las facultades que constitucionalmente hacen a su competencia, sancionando normas que permitan mantener y desempeñar los controles que apuntalan el sistema republicano.

Con la aprobación de este dictamen daremos un paso adelante en el cumplimiento adecuado de esta atribución, que está situada en la esencia misma del espíritu parlamentario.

Señor presidente: quiero también mencionar que hoy recibí una nota del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en donde se dirigen a los señores senadores y se refieren al artículo 69.

Concretamente, solicitan que se haga un agregado, que dice: "Conservarán sus cargos, con las denominaciones, estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley, todos aquellos que los desempeñaren en la actualidad y cuya designación hubiere reunido los requisitos que ella impone".

Manifiestan, más adelante, que: "Mientras el procurador y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley".

Con ello, también se relaciona, de alguna manera, el artículo 5º del proyecto, a que hacía mención, que dice: "El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes".

De esta manera, señor presidente, dejo aclarada la posición que he decidido adoptar con respecto a esta tema, aprobándolo en general, con las disidencias que ya dejo señaladas en particular y tratando la inserción del resto de mi exposición con el propósito de lograr que este debate llegue a su finalización a la hora acordada ayer en la reunión de labor parlamentaria.

Se. Presidente. — Oportunamente —cuando haya quórum—, se habrá de votar la inserción solicitada por el señor senador por Corrientes.

Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: el proyecto que estamos considerando refleja fielmente —diría— el artículo 120 de la Constitución Nacional, al definir al Ministerio Público como independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, con lo cual coincido plenamente.

Además, establece cómo se designan sus miembros, cómo se los remueve, qué condiciones deben cumplir para acceder a los cargos y cuáles son las funciones relativas a cada cargo.

Creo que éste ha sido el producto de un gran esfuerzo de consenso de los señores legisladores que intervinieron en el tema, a fin de lograr un todo orgánico muy necesario.

Sin embargo, me preocupan dos aspectos, de los que destaco el siguiente: si bien el artículo 5º del proyecto que estamos analizando exige para la aprobación de la designación del procurador general y del defensor general los dos tercios de los votos de los miembros presentes de la Cámara, esto se desmiente con el artículo 69, que confirma y ratifica —dándoles estabilidad— a los actuales procurador y defensor generales.

Creo que esto no es conveniente. De aprobarse esta iniciativa, podría argüirse que el Senado está confirmando la circunstancia referida. Pero resulta que esto sería válido para el resto de los funcionarios, porque su confirmación requiere la simple mayoría de los votos del Senado. Sin embargo, esto no es así respecto de los casos del procurador general y del defensor general, los cuales necesitan la mayoría dada por los dos tercios de los votos.

Creo que este esfuerzo significativo que ha hecho la comisión para llegar a una ley realmente importante podría desmerecerse si no encontramos una solución adecuada para esta cuestión.

En principio, adhiero a lo sostenido en disidencia por el señor senador Usandizaga, quien propone que dentro de los 30 días de sancionada la ley se nombre, con el acuerdo del Senado, a esos dos funcionarios.

Creo que en vez de 30 días, por razones prácticas podrían fijarse 120 días. Es decir que el año que viene, cuando empiecen las sesiones, se pueda tener el acuerdo del Senado para esos funcionarios.

Eso despejaría dudas y daría tranquilidad y cumpliríamos con la filosofía de la ley y evitaríamos un debate innecesario en la opinión pú-

blica, que no nos hace bien sobre todo en estos momentos.

También tengo algunas reservas con respecto al segundo párrafo del artículo 27 del proyecto de ley, cuando faculta al Poder Ejecutivo a proponer instrucciones al Ministerio Público con la finalidad de coordinar. Creo que esto es aceptable pero debiera aclararse que esas instrucciones deberían ser públicas y que el Ministerio Público tomará la decisión sin necesidad de fundamentarla. Así se evitaría toda sospecha de que pueda existir una presión. Lo contrario nos haría aparecer institucionalizando la posibilidad de ejercer, a través del Poder Ejecutivo, una presión sobre el Ministerio Público.

Al hablar del artículo 69 lógicamente tenemos que pensar en modificar también los incisos a) y c) del artículo 71 y el inciso a) del artículo 72, porque el fiscal general de Investigaciones Administrativas tiene una significación política que requiere la intervención específica del Senado para su designación, aunque sea con simple mayoría como prevé la ley.

Hechas estas aclaraciones, adelanto mi voto afirmativo en general al proyecto de ley. Espero que encontremos una alternativa válida, que podría ser la propuesta formulada por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en el sentido de esperar una semana para llegar a un acuerdo, ya que ciertamente un instrumento de estas características y jerarquía no merece ser aprobado con una sombra de sospecha.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: estamos culminando un debate ciertamente importante, quizás no tanto por lo que digamos o no digamos, sino porque significa el fin de un esfuerzo destacable que importa concretar un afán de mejoramiento que debemos reconocer que surge del propio texto constitucional y también de las vicisitudes y variaciones que ha tenido el dictamen de la mayoría, que se va a aprobar posiblemente con modificaciones, mostrando que por encima de las disidencias partidarias en el seno de la comisión existió un loable espíritu de mejoramiento de la institución.

Dicho espíritu fue puesto de manifiesto por la Comisión de Asuntos Constitucionales y por las que dictaminaron después. Así se mostró una significativa predisposición a escuchar sin preconceptos y con el mejor deseo de justicia y de progreso de las instituciones a las diversas partes afectadas que espontáneamente fueron llegando al seno de nuestra Comisión de Asuntos Consti-

30 de octubre de 1996

tucionales y nos hicieron llegar sus quejas, reclamos o sugerencias.

Esto no es sino una expresión de problemas que se vienen discutiendo, tanto en la teoría como en la práctica, en diversos países. Muchos de ellos han sido ya puestos de manifiesto, de manera que simplemente me voy a limitar a recordar, como lo hicieron algunos oradores anteriores, que estamos laudando entre dos grandes sistemas. Uno de ellos es el llamado sistema judicialista, que estima que los fiscales forman parte del Poder Judicial, y con ello entienden que se está sirviendo a la vocación de dar independencia a los integrantes del instituto para asegurar el más pleno reinado de la justicia.

Por otra parte, están aquellos que estiman que esta institución o estos funcionarios forman parte del poder administrador o, por decirlo así, del Poder Ejecutivo, en consonancia con tradiciones históricas, que también han sido recordadas en el curso del debate.

En este momento tenemos en nuestro país la aplicación práctica del segundo de los sistemas. Pero me resisto a no hacer un brevísimos resumen —quiero ser muy breve para cumplir con lo acordado ayer en la reunión de presidentes de bloque— para mostrar que la cosa no ha sido tan fácil y que incluso con las modificaciones de la Constitución se ha producido la posibilidad de adoptar uno u otro sistema.

Afortunadamente con la Constitución reformada de 1994 nos podemos encontrar en un punto de coincidencia que, como busca asegurar el texto del artículo 120, quiere la estabilidad para asegurar la independencia. Incluso, como veremos después, ni siquiera podemos decir que forma parte del Poder Judicial y, mucho menos, del Poder Ejecutivo. Es decir que se aleja de los grandes sistemas que han venido buscando predominar en el campo de la teoría y luego en el de la práctica. Inaugura una cuestión novedosa cuando se puede decir que al asegurar que es un órgano independiente, conforme a la ubicación metodológica que tiene dentro del articulado de la Constitución, no entra a formar parte del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, aunque sin duda alguna tiene muchas más notas similares con el primero de aquellos poderes.

Recién decía que si hacemos un repaso de la propia Constitución originaria —estoy hablando de la del año 53—, ella decía en su artículo 91 que el Poder Judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta por nueve jueces y dos fiscales, que residirán en la Capital, y por los demás tribunales

inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Confederación.

Es evidente que en esa versión originaria de la Constitución del 53 los fiscales ante la Corte formaban parte del Poder Judicial. Luego vino la reforma del año 60 y el artículo 94 expresaba que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Es decir que a partir de esa sanción constitucional los fiscales quedaban excluidos como miembros integrantes de la Corte, según lo refería la versión originaria de nuestra Ley Fundamental.

En definitiva, a raíz de este texto, la Constitución deja abierta la instrumentación legal para que sea la ley quien establezca la ubicación precisa de los fiscales. Así vemos cómo hay distintas normas legales que van tomando una u otra alternativa. Por ejemplo, el decreto ley 1.285/58 decía que la Corte Suprema se compone de cinco jueces y un procurador general. Acentuó la palabra "y" porque significa que, conforme a esa prescripción legal, el procurador general integraba la Corte, es decir que se volvía a la versión originaria de la Constitución de 1853.

En 1973 la ley 20.677 suprimió el requisito del acuerdo del Senado para todas las designaciones no especificadas por la Constitución. Es decir que creaba dudas en lo que nosotros estamos examinando sobre si todavía formaba parte del Poder Judicial o si no era así.

La ley 23.774 establece que la Corte Suprema se compone de nueve jueces y agrega que ante ella actuarán el procurador general y procuradores fiscales. Por lo tanto, es evidente que aquí los fiscales tampoco integran la Corte.

¿Cómo se traducía esto en la práctica? En la práctica institucional sabemos que antes de 1990 —el señor senador Genoud lo puso de manifiesto— se llegó a pedir acuerdo para el procurador general de la Nación, no obstante la ley de 1973. Pero a partir de 1990 el nombramiento fue por decreto, o sea, sin acuerdo, y con juramento que se prestaba ante el ministro de Justicia. En la práctica se trataba —y todavía se trata— de un típico funcionario administrativo.

Con el transcurso del tiempo, dos leyes votadas por nosotros pusieron una duda en esta situación. Me refiero a la ley 23.984 sobre Código Procesal Penal o Código Levene, y la ley 24.050, que organiza la competencia de los tribunales penales. Aquí, no obstante tratarse de un funcionario administrativo, se advierte que los jueces de instrucción pueden delegar atribuciones en

los fiscales. En este caso, los fiscales podían ejercer funciones judiciales no obstante la prohibición que existía en la Constitución de 1853 y en la de 1860 y también en la actual, en el sentido de que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse el conocimiento de causas judiciales. En ese caso, un delegado o un funcionario administrativo dependiente de él, sí se las arrogaba.

Con este nuevo espectro jurídico, creí necesario clarificar las cosas. En agosto de 1992 presenté un proyecto sobre ministerio público; destaco que todavía estaba en vigencia la Constitución anterior y asimilé el ministerio público al Poder Judicial.

Con la reforma de la Constitución de 1994 presenté un nuevo proyecto sobre ministerio público, adecuándolo a lo que establece el artículo 120 de la Constitución Nacional. Este es uno de los proyectos que menciona como antecedente el dictamen que estamos considerando.

Así llegamos a la reforma de 1994 y a su artículo 120, que establece pautas generales.

Tengo incorporado en mí lo que estudié siendo profesor de derecho constitucional, siguiendo las enseñanzas de mis maestros, y siempre consideré plausible como técnica constitucional.

El doctor Linares Quintana, sobre todo en sus numerosos estudios sobre técnica constitucional —seguramente lo repetirá en su libro sobre técnica de interpretación constitucional que está, si no imprimiéndose, al menos, trabajándose afanosamente—, siempre ha destacado como una buena condición el hecho de que las constituciones, para no envejecer, deben ser concisas porque, si no, se transforman en leyes que van envejeciendo y, a veces, contradiciendo lo que dice la realidad.

Las constituciones deben señalar grandes principios y dejar a la ley la materia relativa a su reglamentación.

Creo que este artículo 120 que estamos considerando se ajusta a esa buena técnica. Con franqueza lo expresó el señor senador Yoma, que integró la convención reformadora: no se entró en detallismo porque en la Constituyente de 1994 no se llegó a acuerdo respecto de los pormenores. Me alegro por eso. Dejemos que sea el legislador quien se equivoque, porque, si lo hace, podrá rectificarse; si se equivoca el constituyente la rectificación es siempre mucho más difícil.

¿Cuál es, entonces, y según el artículo 120 de la Constitución, la caracterización del instituto que estamos considerando? Quedan establecidos

aquí tres conceptos: se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Estos tres conceptos están incrustados en lo que significa un poder judicial independiente. Aunque por la ubicación metodológica dentro de la Constitución no se trate de un órgano del Poder Judicial, debemos convenir que está —llámese órgano extrapoderes o lo que fuere—, sin embargo, mucho más cerca del Poder Judicial que del poder administrador.

No voy a entrar en mayores detalles ni en la caracterización del instituto —que ha sido suficientemente ponderado y explicado, a veces, con enfoques no coincidentes entre los miembros informantes de los partidos que me han precedido— porque quiero ser fiel a la promesa de concisión que anteriormente hicimos. Tengo escritos algunos apuntes que solicito sean insertados oportunamente en el Diario de Sesiones para, de este modo, contribuir a este homenaje a la brevedad.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

La cuestión del ministerio público siempre me preocupó. Fui partidario de que debía estar incluido en el ámbito del Poder Judicial, como garantía de su independencia funcional, amén de la norma del artículo 95 de la Constitución, hoy 109, que prohíbe el ejercicio de funciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo. Pero para ello era necesario que una ley expresamente así lo impusiera, ya que de otra manera existían elementos de convicción como para considerarlo parte del Poder Ejecutivo, como se resolvió en la mencionada respuesta al presidente del Tribunal de Cuentas.

Tanto es así, que en el mes de agosto de 1992 presenté acá en el Senado un proyecto de ley mediante el que se organizaba el ministerio público. En ese momento, todavía la Constitución no se había reformado, y siempre existía la incertidumbre sobre la ubicación institucional del ministerio público.

Además, ya regían dos leyes muy importantes. Una, la ley 23.984, mediante la que se aprobara el Código Procesal Penal de la Nación. La otra, ley 24.050, sobre organización y competencia de los tribunales penales de la Nación.

En ambas leyes se prevé el ejercicio de funciones judiciales instructorias por parte de los integrantes del ministerio público. En efecto, una de las importantes innovaciones que trajo el Código Levene, además de la oralidad del juicio penal y el sistema acusatorio, consiste en la posibilidad de que el juez de instrucción delegue alguna de sus facultades en el fiscal, con lo que, en el fondo, no haría otra cosa que desempeñar tareas judiciales. No de juzgamiento, esto es obvio, pero al menos tareas de instrucción que, hasta ese momento, eran atribución exclusiva de los jueces.

Haciéndome cargo de esa realidad, entendí que ello imponía la necesidad de asimilar a los integrantes del mi-

nisterio público a los jueces de la Nación, de manera de integrarlos expresamente al Poder Judicial.

En los fundamentos que acompañaban al proyecto de ley, se expresaba, entre otras consideraciones (*leo*): "La relevante función institucional del ministerio público en los procesos judiciales, en su condición de custodios de la legalidad, constituye un mecanismo idóneo para garantizar la seguridad jurídica de los habitantes. Sus integrantes, en la inmensa mayoría de los casos, son auténticos funcionarios judiciales que han desarrollado la carrera judicial con destacada eficacia, contribuyendo a la concreción del imperio de la justicia en los procesos. En el sistema constitucional argentino, y considerando las funciones que le han sido asignadas legalmente al ministerio público, corresponde ubicarlo en el ámbito de autonomía funcional e independencia que rige para los magistrados judiciales, a fin de evitar la gravitación de los criterios políticos que inciden sobre el ministerio público en perjuicio de una recta y justa administración de justicia. La inserción del ministerio público en el Poder Judicial de la Nación resulta ineludible, no solamente para asegurar la independencia de su accionar frente a los órganos políticos del gobierno, sino también para respetar fielmente el principio de la división de los poderes constituidos que establece la Constitución Nacional como instrumento eficaz para asegurar la vigencia del estado de derecho. Ella prohíbe categóricamente que la función judicial sea ejercida por quienes no integran aquel poder, de modo que el ejercicio de estas últimas por el ministerio público determina su necesaria independencia funcional".

Estos eran los fundamentos de mi proyecto, los que, a mi juicio, conservan actualidad.

Ahora bien, al reformarse la Constitución en el año 1994, se decide, entre otras cosas, incorporar lo atinente al ministerio público, lo que ha quedado plasmado en el artículo 120.

Esta norma establece pautas generales a tener en cuenta en la ley que reglamente el funcionamiento de la institución, lo que sin duda es de buena técnica constitucional.

En otras palabras, lo que la Constitución trae son rasgos fundamentales, ya que las cuestiones de detalle son propias de la legislación que se dicte en su consecuencia.

Bien lo dice Badeni en su obra *Reforma Constitucional e instituciones políticas*, en la página 426, cuando afirma (*leo*): "La tipificación de estos rasgos fundamentales deberá ser efectuada por una ley reglamentaria cuyo contenido nos permitirá determinar la naturaleza del ministerio público".

Aquí llegamos, entonces, al meollo del asunto. ¿Cuál es, en definitiva, la naturaleza institucional del ministerio público?

Para responder a este interrogante, es tarea ineludible acudir a la fuente constitucional, esto es, lo que establece el artículo 120 de la Constitución.

Esta disposición señala aquellos rasgos fundamentales a que hice referencia. En efecto, dice el artículo 120 que el ministerio público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.

De aquí resultan tres caracteres esenciales, que son los de independencia, autonomía y autarquía. La con-

junción de los tres elementos dará como resultado la instauración de un ministerio público dotado de las atribuciones necesarias para cumplir acabadamente las funciones que debe llenar.

Y bien, cabe preguntarnos entonces cuáles son aquellas funciones. Volviendo a la norma constitucional, recordemos que allí se señala que compete al ministerio público promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Por otra parte, no deja de tener importancia y significación, en lo concerniente a los rasgos fundamentales y funciones del ministerio público que se analice la ubicación metodológica que le atribuyó la reforma constitucional.

El ministerio público, como ya hemos dicho, aparece en el artículo 120 de la Constitución, y esa norma se ubica en la sección cuarta de la segunda parte, título primero de la ley fundamental de la Nación.

Ello nos da una cabal idea sobre la intención del constituyente, ya que le ha asignado una sección especial, a continuación de la tercera, que se refiere al Poder Judicial.

Entonces, debemos señalar que no forma parte del Poder Judicial, si bien sus funciones se ejercen ante los órganos judiciales.

Estimo acertado que se haya hecho de esta forma, lo que indudablemente consolidará la independencia del ministerio público. Independencia irrenunciable para el funcionamiento eficaz de esta institución, en defensa de la legalidad y del orden público.

Reforzado este principio, la última parte del artículo 120 de la Constitución consagra la inmunidad funcional de sus miembros y la intangibilidad de sus remuneraciones.

No quiero dejar de destacar que nuestro texto constitucional tiene similitud con lo que establece la Constitución de España, cuyo artículo 124 acuerda al ministerio fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

Vemos pues una marcada analogía entre nuestras normas constitucionales y las de España.

Un acierto indudable de la reforma constitucional ha sido el de crear dos cabezas en el ministerio público, separando nítidamente las funciones de la fiscalía, a cargo del procurador general de la Nación y restantes magistrados, y las de defensa, que se atribuyen al defensor general de la Nación y sus colaboradores. En cambio, antes de la reforma, el procurador general era él solo el máximo representante de todo el ministerio público. Creo que es mucho más lógico lo que resolvió la reforma constitucional, ya que las funciones que competen a cada una de las ramas, es decir, la de la fiscalía por un lado y la de la defensa por el otro, deben encontrarse nítidamente diferenciadas, y es razonable que cada una de estas ramas tenga una cabeza, un jefe máximo.

Y bien, estimo que se ha arribado a un muy satisfactorio dictamen sobre el proyecto de ley de ministerio público, que ha sido el resultado de una medulosa tarea de

la Comisión de Asuntos Constitucionales, para cuya elaboración se han escuchado las voces de diversos sectores vinculados al quehacer judicial. Han expresado su opinión diferentes magistrados y funcionarios, ministros, fiscales y representantes de la abogacía. En general, el dictamen ha recibido la conformidad de quienes fueron consultados o acercaron su opinión sobre el tema.

Suscribí ese dictamen, convencido de las bondades del proyecto, y consciente de que estamos respetando y consolidando por vía legislativa las pautas que trae el artículo 120 de la Constitución.

Sin perjuicio de ello, creo oportuno adelantar algunas observaciones específicas sobre el dictamen, las que han sido fruto de la meditación que la importancia del tema requiere, y que, en su caso, reiteraré en la discusión en particular.

El artículo 1º del proyecto, en definitiva no hace más que reiterar lo que establece el artículo 120 de la Constitución, así que, en cierto modo, se podría decir que es sobreabundante. De todas formas, no considero indispensable su supresión. Y lo que es realmente importante es que en los restantes párrafos se reafirma la independencia del ministerio público, en cuanto se señala que sus integrantes no se encuentran sujetos a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. Se aclara debidamente el principio de unidad de actuación al agregarse que ello es sin perjuicio de la autonomía por la especificidad de las funciones asignadas.

Creo que en el artículo 7º deberían establecerse los requisitos para asumir el cargo de tutores y curadores públicos, funcionarios que no ostentan el nivel jerárquico de magistrados, conforme al artículo 4º, último párrafo, pero que integran el ministerio público de la Defensa, al menos para el ejercicio de las funciones transitorias que establecen los artículos 57 y 58 del dictamen.

En lo que hace a la designación de los magistrados del ministerio público, el artículo 5º no hace otra cosa que asimilar el sistema de nombramiento del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, máximos representantes de cada rama del ministerio, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo los recaudos que trae el artículo 99, inciso 4º de la Constitución, esto es, propuesta del Poder Ejecutivo y de acuerdo del Senado, requiriéndose el voto de los dos tercios de los presentes. Esto se complementa con la equiparación que en materia salarial consagra el artículo 12, inciso a) del dictamen, y con las condiciones personales que deben llenar y que señala el artículo 7º, en consonancia con lo que expresa el artículo 111 de la Constitución.

En cambio, para la designación de los demás magistrados del ministerio público, si bien también será necesario el acuerdo del Senado, bastará con la mayoría simple de votos, es decir, se los asimila a los jueces de los Tribunales inferiores de la Nación.

Señor presidente, he firmado de conformidad el dictamen, inducido no sólo por mi propia opinión sino que también a ello me estimuló la significativa adhesión que al proyecto final le prestaron representantes del ministerio público, del Poder Judicial y de los abogados que fueron consultados oportunamente y formularon valiosas observaciones y críticas constructivas que confluyeron finalmente en la elaboración de dicho dictamen.

No obstante haber firmado en general y sin disidencias el aludido despacho de la mayoría, la existencia de diversas críticas y hasta nuevos estudios que hice sobre el texto en cuestión, me inducen a formular algunas observaciones que se incluyen en los apuntes, cuya inserción solicito en homenaje a la brevedad prometida en el día de ayer, en la reunión de presidentes de bloques.

Sin perjuicio de otros asuntos, debo referirme al que ha agitado las disidencias en esta materia. Me refiero a la confirmación o no, por esta vía, de los titulares del ministerio público, en las dos cabezas previstas como cargos máximos en cada una de las ramas. En el seno de la comisión escuché ayer mismo por parte de alguno o alguno de los opositores a la confirmación prevista en el proyecto de la mayoría, que de modo alguno su disidencia apuntaba a cuestionar personalmente a los actuales titulares.

Con esta aclaración, creo que puede sostenerse que retomando las prácticas existentes antes de 1990, también en esta ocasión se requiera el acuerdo del Senado para quienes van a desempeñar tales funciones como titulares de cada una de las ramas del ministerio público, excluyendo de la confirmación automática que establece el artículo 69 del dictamen de mayoría a los mismos.

Dada la jerarquía de ambos cargos, que serán cabezas de sus subordinados y que actuarán sin tener ninguna instancia superior sobre sus decisiones, marcando por su propia determinación la política de ministerio público, creo que reforzaríamos de tal manera su autoridad y la del propio Senado, permitiendo a este último ratificar en su caso la confianza que esos funcionarios le merezcan.

El artículo 10 se refiere a la excusación y recusación de los integrantes del ministerio público. En este punto quiero recordar que en lo que hace al proceso civil o comercial, el Código que lo rige establece en su artículo 33 que los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados, pero si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal, quienes podrán separarlos de la causa y dar intervención a quien deba subrogarlos. En cambio, en materia penal, el Código Procesal Penal indica en su artículo 71 que los miembros del ministerio público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces.

En materia de remuneraciones, interesa destacar que la parte final del artículo 12 recoge la regla constitucional del artículo 120, en cuanto consagra para los integrantes del ministerio público la garantía de la intangibilidad de sus salarios, en modo similar a la que para los jueces la Constitución la determina en su artículo 110.

Una similar observación puede hacerse con respecto al tema de la estabilidad en sus cargos, ya que el artículo 13 del proyecto la otorga hasta que los funcionarios cumplan los setenta y cinco años de edad, y mientras dure su buena conducta. Otra vez cabe la analogía con los miembros del Poder Judicial. El artículo 120 de la Constitución establece que los integrantes del ministerio público gozan de inmunidad funcional. Esta inmunidad, para ser efectiva, requiere de la estabilidad, que en el caso de los jueces la trae el artículo 110 de la Constitución. Ahora bien, a partir de la reforma del año 1994, esa estabilidad, que antes era ilimitada en el tiempo, es decir, de por vida, ahora ha sufrido una importante modificación, ya que el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, que se re-

fiere al acuerdo del Senado en el proceso de designación de los magistrados judiciales, establece que para mantener en su cargo a los jueces una vez que ellos alcancen la edad de setenta y cinco años, se requiere un nuevo nombramiento precedido de otro acuerdo del Senado. Además, a partir de esa edad, los nombramientos son por un plazo de cinco años, pudiendo repetirse. Este artículo 13 del dictamen no hace sino aplicar estas mismas reglas que consagra la Constitución para los magistrados judiciales y los hace extensivos al ministerio público. En el fondo, lo que hace la ley es sencillamente reglamentar las garantías de inmunidad funcional e independencia que trae el artículo 120 de la Constitución para el ministerio público con la mayor amplitud posible.

A tal punto esto es así, que el artículo 14 del dictamen establece la inmunidad de arresto y de opinión para los integrantes del ministerio público, en consonancia con lo que para los legisladores consagran los artículos 63 y 69 de la Constitución. Vemos que en este punto se otorgan en forma expresa garantías que corresponden no ya a los jueces, como en los ejemplos anteriores, sino a senadores y diputados, lo que acentúa la independencia funcional de los miembros de la institución.

En el párrafo final del artículo 14 se expresa que los miembros del ministerio público no podrán ser condenados en costas. Quizás habría que hacer una salvedad, y es cuando de su actuación resulta un notorio desconocimiento del derecho vigente, ya que en este supuesto, que es ciertamente excepcional, el funcionario negligente debería responder patrimonialmente con las costas, lo que en modo alguno atenta contra la intangibilidad de sus remuneraciones, garantía que no es absoluta, y que reconoce la excepción que traen los artículos 16, inciso c) y 20, inciso 5) del propio dictamen. Voy a proponer este agregado cuando tratemos en particular el dictamen.

Es muy importante que se requiera la conformidad del funcionario para su traslado a otra jurisdicción territorial; como lo determina el artículo 15, ya que ello fortalece su independencia. Por otro lado, evitará abusos y otorgará transparencia a los procedimientos judiciales, como forma de afianzar la Justicia, tal como lo requiere el Preámbulo.

Un tema de gran relevancia es el que se refiere al mecanismo de remoción. Ya vimos que se les garantiza la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, como a los jueces. Pues bien, el artículo 18 señala que los máximos representantes del ministerio público, esto es, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, sólo pueden ser removidos por el procedimiento de juicio político que está regulado en los artículos 53 y 59 de la Constitución. En otras palabras, se los asimila a los jueces de la Corte Suprema. En lo que hace a los restantes magistrados del ministerio público, el procedimiento de remoción es similar al que para los jueces de los tribunales inferiores trae el artículo 115 de la Constitución, mediante un Tribunal de Enjuiciamiento.

Se prevé en el artículo 23 la creación de una comisión bicameral, que tiene por objeto encauzar las relaciones institucionales entre el ministerio público y el Poder Legislativo. Sin perjuicio del acierto que esa creación implica, estimo que en esta misma ley se podría definir tanto la composición como las funciones de esa comisión

bicameral, en lugar de diferirla a la decisión ulterior de las Cámaras. Por otra parte, ello trae el interrogante de si para establecer esa composición y esas funciones será necesario la sanción de otra ley o si bastará con una resolución conjunta de las cámaras legislativas. Por estas razones, considero más razonable que solucionemos el tema en este mismo proyecto. Adelanto que, a mi juicio, la composición debería respetar, en cuanto sea posible, la representatividad de los bloques minoritarios de las cámaras.

No quiero olvidarme de algunas observaciones con respecto al artículo 32 del dictamen, que se refiere a los deberes y atribuciones que se otorgan al Procurador General de la Nación.

La primera, que en el inciso a), apartado 1), se podría agregar la expresión "y exclusiva" a continuación de la palabra "originaria", de manera de respetar textualmente la terminología del artículo 117 de la Constitución.

La segunda, en el apartado 6) de este mismo inciso, sugiero se agregue al final la expresión "u otras normas jurídicas", ya que no solamente las leyes pueden ser descalificadas por su eventual inconstitucionalidad.

Por fin, quiero hacer notar que en el inciso s) se expresa que corresponde al Procurador General de la Nación "representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres Poderes del Estado". Pero cuando en el artículo 50 se enumeran los deberes y atribuciones de la otra cabeza del ministerio público, esto es, el Defensor General de la Nación, en el inciso q) se dice que le corresponde "representar al ministerio público de la defensa en sus relaciones con las demás autoridades de la República", no se alude a los poderes del Estado. Estimo que dado que ambos magistrados poseen idéntica jerarquía y son los máximos representantes de cada una de las ramas del ministerio público, correspondería una redacción uniforme al describir funciones idénticas en ese punto.

Creo, señor presidente, que sin perjuicio de las observaciones que he formulado, hemos logrado un muy buen dictamen, que ha sido el fruto de una meditada elaboración de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Estamos cumpliendo un deber para con la ciudadanía y con la aprobación de esta ley habremos dado otro paso adelante en el rumbo que nos marca la Constitución Nacional. Es la primera vez que la República contará con una ley orgánica del ministerio público, instrumento indispensable para ratificar uno de los elevados propósitos que enuncia el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental.

Propósito expresado en palabras tan breves como excelentes: "Afianzar la Justicia".

En consecuencia, apoyo el dictamen en general, sin perjuicio de las observaciones antes expresadas.

Sr. Aguirre Lanari. — Pero si quiero referirme al tema que, sin duda alguna, es el más candente y el que más divide a la opinión de la Cámara: la confirmación que para los funcionarios establece el controvertido artículo 69.

No creo que alguien pueda asumir categóricamente que tiene la verdad absoluta o incuestionable sobre este punto. Si bien es cierto que,

por un lado, debemos propender a la estabilidad —y respecto de ésta debemos empezar con lo que ya está y no que cada gobierno que llegue eche a los que estaban, con lo que se rompe la estabilidad de la institución—, por otro lado, también es legítimo sostener que, estableciéndose ciertos procedimientos para el nombramiento y estabilidad de los funcionarios, habría que aplicarlos a éstos o a parte de éstos.

Respecto del artículo 69 y habiendo recogido ayer en el seno de la comisión la opinión de aquellos que se oponen a la confirmación, por lo menos, de las dos cabezas de este órgano bifronte que estamos legislando —sostenían que en absoluto había cuestión personal alguna en su aseveración sino, simplemente, el deseo de dar por lo menos intervención al Senado en el caso de estos dos funcionarios—, creo vendría bien, para respaldar la autoridad misma de quienes vayan a ejercer esas funciones y también para resguardar la autoridad del Senado en cuanto a su atribución para actuar en esta materia, que, en este caso concreto, se especifique que el artículo 69 no rige y que se excluya a esos funcionarios de la letra que él contempla.

Tomo nota de lo que nos ha explicado el señor senador Yoma, incluso, con distintas vertientes como aquella que nos refirió respecto del proyecto sugerido ayer en su bloque por el señor senador Bauzá, distinguiendo entre la estabilidad que se otorgaría a los funcionarios inferiores y la periodicidad que se establecería para las cabezas de ambos institutos. Supongo que no es la única propuesta, sino que hay más de una. Seguramente, en el curso de la discusión irán surgiendo otras.

Por ello, considero plausible que se siga conversando sobre el tema y que se acepte la idea de que debemos buscar consenso, porque esta conquista que hoy vamos a lograr —una institución que se pergeñó a través de un trabajo legislativo tendiente a recoger opiniones de los distintos sectores interesados en el tema— está inserta en la búsqueda de coincidencias y de mejoras.

Ello hizo que hayamos podido firmar el dictamen sobre este instituto con muy pocas disidencias. Por mi parte, lo he firmado sin disidencias. No obstante, después de haberlo firmado y leyendo alguna de las observaciones y escuchando otras que se efectuaron posteriormente, me parece conveniente que en temas absolutamente discutibles, como es el caso del artículo 69, extrememos los recaudos para arribar al consenso.

Hay otras observaciones que también debería realizar pero que, en homenaje a la brevedad prometida, no voy a explicitar. En su momento, adheriré a alguna de las propuestas que se hagan en el curso de la discusión en particular o propondré alguna alternativa para determinados aspectos de esta iniciativa, con el objeto de mejorar su texto.

Con estas aclaraciones y cumpliendo con el deber de brevedad prometido, adelanto mi apoyo en general al proyecto en tratamiento, sin perjuicio de las observaciones que he adelantado y de otras que habré de explicitar en el tratamiento en particular.

Sr. Presidente. — Señor senador: cuando sea el momento oportuno, se someterá a votación la inserción que usted ha solicitado.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente, señores senadores: como miembro de la Comisión de Labor Parlamentaria estoy vinculado con la misma promesa de brevedad —que más que ello sería de parquedad— en nuestras exposiciones en este recinto y, desde luego, voy a hacer honor a esa promesa.

En ese sentido, cabe señalar que no resulta difícil honrar esa promesa porque el trámite que ha recibido este proyecto de ley es casi un paradigma de una verdad que se conoce desde hace mucho tiempo en el derecho parlamentario según la cual lo más importante de la función legislativa está en el trabajo en las comisiones y mucho menos en lo que se expone en el recinto en oportunidad de desarrollarse el debate plenario.

Hago esta aseveración porque el trabajo de las comisiones, como lo han destacado otros oradores, ha sido fructífero. Hubo un intercambio de ideas que, en algunos casos, llegó a ser bastante agudo, sobre todo al principio, con motivo de la remisión del proyecto originario por parte del Poder Ejecutivo. Felizmente, luego de la confrontación de ideas y de la colaboración que prestaron varias entidades que concurrieron aquí —entre otras, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires—, se ha llegado a un texto que en general hace honor al propósito —reitero, por lo menos al del texto— de la reforma de la Constitución.

Considero que ha sido muy feliz la cita que acaba de hacer el señor senador por Corrientes sobre el texto del artículo 91 de la originaria Constitución de 1853, que prevía que la Corte Suprema de Justicia se integraba por nueve jueces y dos fiscales. Esa referencia no sólo es feliz por los dos fiscales incorporados a la Corte sino también por la determinación taxativa del número de jueces que la integraban. Desgraciadamente, esa precisión numérica de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no fue repetida luego en las reformas posteriores de la Constitución. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales, a lo largo del tiempo, se han ido poniendo en entredicho —digamos así— los caracteres que deben rodear a la cabeza del Poder Judicial, particularmente en esta época.

Yo diría que, desde entonces y hasta no hace mucho tiempo, hace once años, hasta la acordada número 34 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 25 de junio del año 85 —acabo de repasar el dato—, se ha tenido por tradición y por ley —son más o menos los términos textuales de esa acordada— al jefe del Ministerio Público como un integrante, como un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo dijo la Corte.

Y, desde luego, en el curso de nuestra historia constitucional, desde aquel sabio texto del artículo 91 de 1853 ha corrido mucha agua bajo el puente. Aunque también es justo anotar, sin ánimo de provocar alguna polémica, que esas aguas se han ido enturbiando, en especial desde que, con ruptura de la tradición, prácticamente se promovió —por no decir que se forzó— la renuncia del procurador general, doctor D'Alessio y se procedió al nombramiento de un nuevo procurador general, que juró ante el presidente de la Nación y que fue nombrado sin acuerdo del Senado.

De todas maneras, el Ministerio Público siempre adoleció de una normativa rigurosa y precisa, no sólo en cuanto a su ubicación. Y eso dio lugar, desde luego, a una situación —yo diría— de minusvalía de los integrantes de ese Ministerio, que nunca supieron exactamente a qué atenerse con respecto a su ubicación institucional e, incluso, con relación a algunos aspectos del cumplimiento de sus tareas.

Desde ese punto de vista sí es loable que la norma constitucional haya procurado, creo que con éxito, centrar ese papel institucional y definirlo de una manera que, aunque pueda no ser compartida, signifique ya un concepto claro. Y, de esta manera, promover el valor justicia que,

en definitiva, es lo que nos promete el Preámbulo de la Constitución.

Cuando arribó a la comisión el proyecto del Poder Ejecutivo, tuvimos, varios de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, alguna participación activa en los primeros cambios de impresiones, particularmente los que se llevaron a cabo cuando concurrió el por entonces ministro de Justicia doctor Barra y el procurador general de la Corte doctor Agüero Iturbe.

Al proyecto del Ejecutivo le cuestionamos —me incluyo en el plural porque así consta en las actas de la comisión y en las versiones taquigráficas del caso—, en primer lugar, que el órgano aparecía como virtualmente, unipersonal porque, pese a que el artículo 120 de la Constitución reformada dice que se compone del procurador, del defensor general y demás miembros, tal como estaba concebida la estructura legal, resultaba que en rigor había un solo miembro y los demás eran virtualmente vicarios de las órdenes, incluso orales, que podía emitir el que era miembro cabal del Ministerio Público.

Además de ese defecto, que nos parecía bastante grave, había otro que era el del carácter —por así decirlo— unicéfalo de la jefatura del Ministerio Público, pese a que el texto constitucional, en su artículo 120, habla del procurador general y del defensor general de la Nación, ambos, como debe ser, cabeza de los respectivos órganos.

Ese proyecto, además, mediante algunas disposiciones no demasiado claras —suponemos que esto no era a designio—, ponía en situación de precariedad la estabilidad que, como regla, aparentaba ser sancionada para los miembros del Ministerio Público. A ello se sumaba esta previsión sobre órdenes de carácter particular que, incluso, podían ser verbales y que resultaban tanto más ominosas para el valor justicia en cuanto esas órdenes también podían versar sobre verdaderos poderes de disposición de los miembros del Ministerio Público Fiscal, en este caso, respecto de la acción penal que ya había sido promovida y que llegaba a juicio.

Esto tenía relación con algunos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidieron que el pedido de absolución formulado por un fiscal al cabo de un debate oral le impedía al tribunal dictar sentencia condenatoria, lo que ponía en manos de un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo la suerte de una acusación penal que había sido debidamente promovida, configurándose así una clarísima

violación del principio constitucional según el cual el presidente de la Nación no puede intervenir en causas judiciales pendientes.

Otro aspecto que también se encuentra dentro de la misma vertiente de objeciones, que se sigue dando y que en nuestra provincia —Catamarca— lo hemos sufrido recientemente a propósito de una cuestión eminentemente política y parlamentaria, como la de la por entonces pendiente elección de un senador nacional por mi provincia, es la anomalía consistente en que un funcionario, en este caso un defensor general previsto como subrogante del juez, ejercía la función judicial pese a ser un funcionario que no había sido designado con acuerdo del Senado, carecía de responsabilidad política y era dependiente del Poder Ejecutivo,

Ese funcionario dictó por ejemplo en Catamarca una sentencia de hábeas corpus declarando electo a un ciudadano cuyo nombramiento ni siquiera había analizado la Legislatura de mi provincia. Anomalía que no es de menor cuantía puesto que significa una vez más que el Poder Ejecutivo, a través de un funcionario de su dependencia —removible según su voluntad—, estaba administrando justicia, dicha esta última palabra entre comillas.

De todos modos y, felizmente, luego de estos intercambios de opiniones que hubo —principalmente con el ex ministro de Justicia y luego con el procurador de la Corte—, se realizó otra reunión con el defensor general, que tuvo otro tono pues habían cambiado los términos de la cuestión, y se llegó a un texto que ha contado con el consenso generalizado, y que he suscripto, como miembro de la comisión, de conformidad.

Por consiguiente me parece que ya están holgando mayores desarrollos para sustentar debidamente lo que está escrito respecto de mi voto.

Con esta salvedad: comparto, luego de la reflexión debida y suficiente, los criterios de algunas disidencias parciales que se encuentran impresas en el orden del día, que son las del señor senador por Santa Fe Usandizaga, la del señor senador por Entre Ríos López y la de la señora senadora por la Capital Federal Fernández Meijide, en cuanto al texto del artículo 69 del proyecto que vamos a tratar, pues creo, y me parece, que no debe haber mayores dudas de que los que son cabeza de estos órganos deben pasar por la aprobación del Senado.

Hay sobre este particular una reflexión que me gustaría rescatar —creo que la hizo el señor senador López al exponer su disidencia—, en el

sentido de que son cargos creados directamente por la Constitución, a diferencia del resto de los cargos del Ministerio Público que derivan de la ley. Y eso marca además una jerarquía, porque al defensor y al procurador se los llama con alguna redundancia "jefes máximos". No sé por qué extraña asociación me suena esto como "El Fiscal" y "Yo, el Supremo", novelas ambas de Roa Bastos.

Los cargos para estos funcionarios, y retomo la idea central, sí deben pasar, a mi criterio, por la consideración del Senado de la Nación, dada la relevancia de su función y el hecho de que ellas ahora están definidas directamente por una norma constitucional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: creo que desde 1983 en adelante se instaló en la sociedad argentina el conocimiento pleno de lo que puede llegar a ser la justicia para las mujeres y los hombres de este país.

Tal vez ustedes hayan compartido la lectura de un resumen de la investigadora Catalina Smulovitz sobre el tema de la Justicia. Ella marca muy bien cómo el juicio a las juntas militares creó docencia en la sociedad argentina en cuanto a la posibilidad de que jueces y fiscales tuvieran que ver con lo que se necesitaba en ese momento.

Creo que por primera vez en mucho tiempo, muchos habitantes de este país dijeron: "Ese es mi fiscal". De allí, la importancia de esta nueva herramienta que estamos dando, en un momento en que las leyes emanadas de la Constitución reformada —en el sector, a mi criterio, más productivo de la reforma— están avanzando y produciendo, al mismo tiempo que vemos escándalos de los cuales somos bien conscientes y que lamentamos, una mayor participación de la gente en cuanto al control de los funcionarios. Y el Ministerio Público es un organismo de control.

He participado en la Comisión de Organismos de Control en ocasión de la Convención Constituyente de 1994 y lamenté que no quedara mejor reglamentada la forma de elección de los funcionarios que iban a cumplir esa tarea. Pero hoy no se puede llorar sobre la leche derramada.

Por estas razones, adelanto mi voto afirmativo en general para este proyecto.

No voy a reiterar lo que se acaba de decir, pero estoy complacida por el hecho de que se haya avanzado en la obtención de consensos. Igualmente, quiero adelantar muy someramente

que para el momento del tratamiento en particular, voy a sugerir algunas modificaciones que, a mi humilde criterio —y a mi humilde interés, por qué no—, mejorarían el proyecto y se vinculan con la forma de gobierno, administración general y finanzas del Ministerio Público, la conformación del tribunal de enjuiciamiento contemplado en el artículo 19 v, por supuesto, los artículos 69 y 71 en cuanto a la subsistencia de los cargos. En ese punto, voy a sostener la inamovilidad de los cargos de los fiscales de la actualidad y, por cierto, en el caso del procurador general y defensor general, por lo mismo que dije antes en cuanto a que cada vez la sociedad debe y está dispuesta a participar en la designación y control de sus funcionarios, así sea a través de sus representantes —y como debe ser—, solicitaré que sean designados con, al menos, el acuerdo del Senado.

Señor presidente: quisiera usarlo como intermediario para decir que, más allá de la propuesta del señor senador Yoma, que me parece bien intencionada, considero que deberíamos animarnos a seguir buscando el consenso ya que pudimos avanzar tanto. En consecuencia, en el marco de este criterio, pido que se postergue esta discusión en aras de la búsqueda del consenso.

Lamentablemente, tengo que partir de viaje, pero dejo planteadas mis disidencias —que todos ya poseen— y el pedido muy expreso de que no renunciemos a encontrar en este cuerpo el consenso al que me he referido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: realmente, he escuchado las exposiciones que nos han ilustrado claramente sobre el tema que estamos tratando.

No obstante ello quiero agregar algunos conceptos que considero importantes y que voy a ampliar cuando llegue el momento de la discusión en particular.

Para comenzar mi exposición quiero decir que el artículo 120 de la Constitución Nacional ha establecido una sabia disposición, en virtud de la cual se dio autonomía al Ministerio Público. Pero esa cláusula, desgraciadamente, hasta ahora ha sido solamente teórica, porque en la práctica no se ha puesto en vigencia.

Señor presidente: hasta ahora no tenemos constituido el Consejo de la Magistratura, que es el órgano fundamental a partir del cual, si se aprueba como corresponde, recién vamos a lograr tener jueces que sean realmente independientes.

También tenemos que analizar todo lo que está ocurriendo en la Justicia, así como la última ley que sancionamos referida a los auxiliares de la Justicia. Con respecto a esta última norma, recuerdo que en su momento afirmé que era total y absolutamente inconstitucional porque creaba auxiliares del Poder Ejecutivo para que presten servicio ante el Poder Judicial, mientras que los auxiliares de este Poder desde ningún punto de vista pueden estar dentro de la órbita del Poder Ejecutivo sino dentro de la órbita del Poder Judicial, sin ningún lugar a dudas.

Pocos días después, por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación colocó las cosas en su lugar mediante una acordada un poco curiosa pero que, de todas maneras, invalidó esa ley inconstitucional especificando que los auxiliares de la Justicia siguen dependiendo de ese alto tribunal.

Ahora tenemos en estudio otro proyecto de ley tanto o más importante que aquél. Este proyecto ha sido objeto de un dictamen mayoritario, lo que me alegra porque se han logrado coincidencias en una gran cantidad de aspectos fundamentales, pero creo que tenemos que avanzar en algunos otros aspectos para perfeccionarlo aún más porque han quedado —considero— algunas cosas muy importantes que podrían ser modificadas para tener una ley más adecuada a la Constitución y más representativa de lo que significa la autonomía del Ministerio Público.

Señor presidente: todo esto es hoy muy importante, porque como dije anteriormente, teóricamente todos hablamos mucho en favor de la independencia del Poder Judicial; el propio presidente de la República continuamente se manifiesta en favor de su independencia. Sin embargo, desgraciadamente, esa opinión no coincide con la de los diarios ni con la de la ciudadanía en general, quienes interpretan que tenemos un Poder Judicial que no es realmente independiente y que, como consecuencia de ello, se está perjudicando gravemente al gobierno democrático si es que lo queremos catalogar como democrático.

Podemos observar la preocupación que existe al respecto en un editorial del 16 de octubre de 1996 del diario "La Nación", diario que todos consideramos como serio y bastante equilibrado en cuanto a que no se inclina a favor de una ni otra parte.

Dicho editorial se titula "El perfil institucional de los fiscales" y dice lo siguiente: "Uno de los factores que han conspirado en los últimos años contra el prestigio y la credibilidad del Poder Judicial es, sin duda, la manera desaprensiva y ar-

bitraria con que el Poder Ejecutivo ha manejado su relación con la actividad de los agentes fiscales”.

“El gobierno del presidente Carlos Menem consideró desde el primer momento que las fiscalías son organismos dependientes del Poder Ejecutivo, que designa y traslada a sus agentes con absoluta discrecionalidad y, además, les imparte instrucciones como si fuesen meros apéndices de la administración central.”

La doctrina, señor presidente, nunca aceptó esta postura que hoy tiene el Poder Ejecutivo. Ni los fiscales ni los miembros del Ministerio Público han interpretado jamás —y esto lo han dicho muchos senadores de su bancada— que podrían formar parte de una dependencia del Poder Ejecutivo. Por el contrario, toda nuestra historia, a partir de la Constitución de 1853, ha demostrado que se los ha considerado una institución ligada al Poder Judicial y nunca al Poder Ejecutivo.

Por eso, en ese mismo artículo del diario “La Nación” se dice lo siguiente: “Lo que de ninguna manera resulta aceptable es la teoría de que los fiscales deben depender del Poder Ejecutivo, criterio que vulnera el principio de la división de poderes, pilar del sistema republicano”.

Tenemos entonces, señor presidente, que la influencia que desgraciadamente hoy existe por parte del Poder Ejecutivo, según la opinión de los diarios afecta al sistema republicano. Y además trae aparejado el desprestigio del Poder Judicial. En efecto, la poca confiabilidad que hoy el pueblo le tiene al Poder Judicial implica que este órgano no pueda cumplir acabadamente con sus funciones y, sobre todo, con las funciones relacionadas con la investigación, el procesamiento y la condena de todos aquellos funcionarios que hubieren incurrido en actos de corrupción, violatorios del Código Penal.

Desgraciadamente, estas circunstancias desacreditan al gobierno. En consecuencia, creo yo que el gobierno debe tomar los pasos para corregir esta situación.

Con este proyecto vamos a dar el primer paso, y ojalá se sigan dando otros más a fin de que en poco tiempo más todos los senadores podamos decir que tenemos un Poder Judicial independiente, como una garantía para todos los ciudadanos y tengamos la satisfacción de saber que no sólo existen cientos de funcionarios procesados en libertad sino también condenados. Porque hasta hoy, desgraciadamente, no hay ningún condenado.

Con respecto a este punto quiero leer lo que dice este editorial de “La Nación”: “En efecto,

convertir al Ministerio Público en una mera dependencia del poder administrador es abrir el camino para que el presidente de la República extienda su influencia al campo de las decisiones judiciales, en abierta contradicción con lo que establece el artículo 109 de la Constitución Nacional”.

El origen de toda esta situación se remota al año 1989, porque hasta ese momento todos nuestros procuradores generales fueron designados con acuerdo del Senado.

Fíjese usted, señor presidente, que incluso en 1946, durante el gobierno del justicialismo, se hizo un juicio político contra todos los miembros de la Corte, y también se lo hizo contra el procurador general. Esto quiere decir que en la historia de nuestro país siempre se respetó la ubicación jurídica del procurador general, considerándose que únicamente podía ser removido por juicio político, y nunca jamás se lo consideró un funcionario susceptible de ser designado por decreto y menos que preste juramento ante el Poder Ejecutivo de la Nación; por el contrario, este funcionario siempre ha jurado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La excepción se origina con este gobierno, y particularmente a partir del último procurador general de carácter constitucional que tuvimos, diría yo, porque a partir del doctor Andrés D'Alessio, a los otros procuradores generales no los podemos llamar procuradores generales constitucionales, porque fueron designados por voluntad del Poder Ejecutivo y no por el designio de la ley y la Constitución. Entonces, desgraciadamente, esta institución se convirtió en un órgano del Poder Ejecutivo.

Y esta situación provocó mucha reacción en el país. Ninguna institución jurídica dejó de criticar este hecho. Todos quienes se preocuparon por este tema han observado esa circunstancia.

En este sentido, “El Cronista Comercial” del 17 de octubre de 1996 dice: “Entretelones de su renuncia como procurador. D'Alessio denunció presiones de Corach para que dejara el cargo. El ex procurador general de la Nación Andrés D'Alessio acusó ayer al ministro del Interior, Carlos Corach, de haberlo presionado para obtener su retiro del cargo. Durante los primeros meses del gobierno de (Carlos) Menem yo tenía la advertencia de que Corach, por entonces secretario legal y técnico de la Presidencia, quería exigirme la renuncia y que hasta se pensaba en ordenarla por decreto”, dijo el ex camarista.

“El actual decano de la Facultad de Derecho de la UBA reveló que ante esa situación hizo

consultas al presidente Carlos Menem y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, luego de lo cual 'me hizo pensar que no era bueno que el procurador y luego los fiscales inferiores fueran removidos por decreto, así que opté por renunciar.'"

Allí comenzó la subordinación del Ministro Público al Poder Ejecutivo. Una subordinación que, desgraciadamente, consideramos arbitraria, violatoria de la tradición y que, evidentemente, al ignorar al Senado, hizo un terrible daño a las instituciones del país, especialmente al Poder Judicial.

Señor presidente: los hechos nos demuestran que el Poder Ejecutivo tomó el control directo de la Fiscalía por intermedio del procurador, que resultó ser una persona que le respondía cabalmente en todos los aspectos.

Quiero mencionar una frase que, cuando la leí, me causó asombro. Tanto el ministro de Justicia, doctor Jassan, como el embajador argentino en Estados Unidos, doctor Granillo Ocampo, dijeron que el Poder Ejecutivo necesitaba "un Poder Judicial que acompañara a la política del presidente".

Tal como señala el principio jurídico: a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir que tanto el ministro de Justicia como el embajador argentino en Estados Unidos siguen pensando y creyendo que debe haber un Poder Judicial que políticamente responda al Poder Ejecutivo, lo que va en contra de todas las tradiciones de los partidos políticos, de lo que ocurre en los países democráticos del mundo y de la propia Constitución, que establece que el Poder Judicial no tiene por qué responder a la política de ningún poder.

En efecto, el Poder Judicial es uno de los tres poderes de la Nación y, por lo tanto, los dichos de estos funcionarios agravieron a la Constitución, a nuestra democracia y también al propio gobierno del Presidente de la República, porque públicamente salieron a decir que el Poder Judicial prácticamente tiene que estar subordinado al Poder Ejecutivo en materia política.

Esto es una aberración. Jamás pensé que algún funcionario podría hacer una confesión de tal naturaleza.

Observen lo que sobre este aspecto dice en el mismo editorial el diario "La Nación": "...En una decisión unilateral completamente antojadiza, el gobierno actual decidió, en 1989, prescindir del Senado en la designación del procurador general, con lo cual se aseguró el control directo de las fiscalías y pasó a tener injerencia

en el destino de un alto número de causas judiciales.

"En momentos en que existen tantas causas judiciales por presuntos casos de corrupción en el ejercicio de la función pública, resulta inaceptable mantener ese avance del Poder Ejecutivo sobre un área que la Constitución le ha vedado de manera expresa."

¿En qué ha desembocado esta situación, señor presidente? Ha desembocado en el desprestigio de la Justicia.

Y no lo digo yo. Consideremos la encuesta de Gallup, una empresa seria. Dice que en 1984, el 57 por ciento de los argentinos creía en la Justicia; tenía confianza en ella. En 1996, tan sólo el 11 por ciento de los argentinos cree en la Justicia. Esto es consecuencia del desprestigio a que llegó la institución.

Hoy me hubiera gustado tener que alabar al Poder Judicial; no hablar de estas cosas que, como demócrata, me duelen, porque aspiro a que en el país exista una Justicia independiente. Estoy convencido de que el día en que tengamos jueces independientes podremos enderezar todos los problemas que hoy padecemos, sobre todo, en materia de corrupción, que tanto daño nos hacen a todos los argentinos.

Mientras no tengamos esa Justicia, deberemos seguir luchando para conseguirla.

El trabajo de los legisladores debe apuntar a ese objetivo; tenemos que hacer lo necesario, poner nuestro granito de arena para que la Justicia vuelva a ser un poder independiente; para que vuelva a ser, con letras mayúsculas, el Poder Judicial de la Nación.

Fíjense lo que dice el diario "El Cronista", en uno de sus artículos. Lo voy a leer para que vean lo que opina el periodismo sobre esta situación. Lógicamente, esto debe hacer reflexionar a todos los senadores, de cualquier bancada que sean. El comentario expresa: "Es el sistema el que alimenta la corrupción; no a la inversa. Y este círculo vicioso se robustece cuando la Justicia es inoperante y la impunidad pasa a ser moneda corriente. La combinación es explosiva: con un sistema tributario en crisis, corrupción organizada y una fuerte debilidad de las instituciones que deben prevenirla, detectarla y sancionarla, no hay forma de evitar que el Estado sea una carga para la parte más sana de la sociedad[...] y una fuente de ganancias para el resto".

Como usted puede apreciar, señor presidente, los hechos que enumeramos demuestran la grave situación que estamos viviendo.

No se trata sólo de una preocupación de los diarios o de los legisladores de la oposición, sino que también existen legisladores justicialistas preocupados por este problema, a quienes quiero felicitar.

Por ejemplo, en la Revista Parlamentaria del 30 de octubre de 1996, el senador Cafiero dice: "No hay una genuina independencia del Poder Judicial. Urge que sancionemos la ley que crea el Consejo de la Magistratura, donde no haya una mayoría oficialista y se pueda hacer valer el criterio de los opositores".

También recojo las expresiones del senador Cafiero aparecidas en el diario "Página/12", en su edición del 23 de octubre de 1996, que sostiene lo siguiente: "Los problemas de corrupción no se resuelven, entre otras cosas, porque no hay una genuina independencia del Poder Judicial".

Entonces, como se podrá apreciar, la preocupación está entre los legisladores de todos los colores políticos. Y las sabias palabras de un hombre tan importante como el senador Cafiero creo que permiten afirmar que no estamos exagerando los hechos sino que simplemente reflejamos la realidad que está viviendo el país.

El artículo 69 del dictamen permite continuar en el desempeño de sus funciones al actual procurador general y al actual fiscal nacional de investigaciones administrativas. Se trata de dos hechos sumamente graves porque ninguna de las dos personas, de acuerdo con los antecedentes que obran en mi poder, están en condiciones de ocupar ese cargo.

El procurador general se encuentra sumamente cuestionado. Y para que estas afirmaciones no sean sólo producto de mis palabras, voy a leer lo que dice "La Nación" en un artículo publicado el 15 de octubre de 1996, que con el título "La Procuración, centro de críticas". "La actuación de los fiscales es cuestionada por excesiva dependencia del PE" expresa lo siguiente: "Los ataques al fiscal Pablo Lanusse y la orden del Presidente para que el procurador general, Angel Agüero Iturbe, coordine las investigaciones de corrupción aduanera han puesto bajo la lupa el papel de la Procuración General de la Nación, organismo del cual dependen todos los fiscales.

"El propio procurador, amigo del Presidente, es objeto de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito debido a la compra de un semipiso de lujo en la avenida Quintana 59, en el mismo edificio del juez Francisco Trovato.

"Durante el gobierno de Menem, la Procuración pasó de la órbita de la Justicia a la del Poder

Ejecutivo, y allí permanecerá hasta que no se reglamente la ley del ministerio público.

"Desde entonces, sobre ella pende la sospecha de haber trabado investigaciones de corrupción y desarticulado equipos de fiscales que metían las narices en casos sensibles, como las denuncias contra el ex intendente Carlos Grosso."

"Hay casos en los cuales los fiscales desestiman las denuncias sin siquiera comenzar la investigación. Los fiscales rebeldes al poder sostienen que la Procuración acóta sus márgenes de acción mediante resoluciones internas."

"El procurador responde a Menem. Es poco serio poner al frente de una investigación de corrupción a quien obstaculizó las investigaciones contra funcionarios promovidas por los fiscales independientes."

Si "La Nación" dice esto y descalifica de esta manera al actual procurador, entiendo que lo menos que tendría que haber hecho es renunciar hace tiempo, porque no puede ocupar ese cargo una persona que está siendo procesada por enriquecimiento ilícito y que tiene otros procesos por malversación de caudales públicos, según informaciones que he recibido.

Es muy grave que este hombre permanezca en el cargo, que debería ser ocupado por una persona que no estuviese cuestionada y cuya designación necesariamente debe pasar por el Senado para que tenga el apoyo de los dos tercios de los senadores.

De continuarse con el criterio del proyecto y, en consecuencia, con el actual procurador general, les preguntaría a los señores senadores de la mayoría para qué sirve esta iniciativa. Quisiera que estuviera aquí el señor senador Cafiero porque estoy seguro de que tal vez compartiría mi preocupación.

Si tenemos como cabeza de este órgano tan importante a un hombre tan cuestionado y procesado, que en consecuencia no reúne las calidades mínimas que debe tener para ejercer el cargo, evidentemente este proyecto de ley que sancionemos hoy de poco va a servir.

Es por ello que pienso que si los señores senadores del justicialismo tuvieran en cuenta las palabras del senador Cafiero, seguramente recapacitarían y aceptarían la modificación del artículo 69, a los efectos de que el procurador general no permanezca en su cargo.

Lo mismo podemos decir con respecto al actual titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. ¿Cómo es posible que se quiera ratificar en ese cargo al doctor Pinzón?

Pregunto cómo es posible. ¿Qué ha hecho el doctor Pinzón, desde que fue también designado ilegalmente por un decreto, cuando fue cesanteado, también ilegalmente, el doctor Molinas? Evidentemente fue colocado para que no se investigara nada porque desde que se designó al doctor Pinzón todos los funcionarios pasaron a ser personas decentes y en la administración pública no hubo ningún otro hecho de corrupción, o bien los diarios publican noticias que no son ciertas. Porque habría que pensar, por lo que leemos a diario, que cada día hay más corrupción y que todos los días hay una sorpresa. Anteriormente fue el caso IBM-Banco Nación; luego IBM-DGI y ahora es la Aduana, donde vemos que existe un contrabando extraordinario y que están implicadas casi todas las firmas importadoras y muchos funcionarios de donde evidentemente surge que se designó a este señor para que no se investigue nada.

Entonces, ¿cómo es posible que los señores senadores pretendan mantener en este cargo a este doctor Pinzón?

El propio presidente Menem dijo que a partir de ahora se iba a poner a la punta para combatir la corrupción si ello llega a ser cierto y si los señores senadores justicialistas realmente tienen interés, también lo harán. En consecuencia, lo primero que deben hacer es colocar en la Fiscalía Nacional de Investigaciones a una persona con idoneidad, para que haga las investigaciones, para que de esa manera podamos combatir la corrupción.

Por eso, se debe modificar esta parte del proyecto. Porque el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones necesariamente debe tener el apoyo de las dos terceras partes del Senado para tener la suficiente autoridad para investigar. No olvidemos que deberá investigar los hechos de corrupción más graves y, en consecuencia, debe tener todas las garantías del caso para su designación y para su remoción. Y no como ha ocurrido hasta ahora, que ha sido removido nada más que por un simple decreto del Poder Ejecutivo.

Como el señor presidente me indica que ha terminado mi tiempo, voy a concluir mi exposición manifestando que cuando se discuta en particular, me voy a referir a todas las exposiciones o los artículos en los que entiendo que hay que hacer modificaciones, para mejorarlos. Sin perjuicio de ello, voy a votar en general en forma favorable, y comparto en su totalidad las expresiones del señor presidente de nuestro bloque, el senador Genoud.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa de la Unión Cívica Radical.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: anticipo mi voto favorable en general y ratifico la disidencia parcial, que explicitaré en el tratamiento en particular.

Solicito la inserción de lo que pensaba expresar en esta sesión, a efectos de contribuir a la brevedad, tal como se había acordado en la sesión de ayer.

— El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Sr. Presidente:

La reforma constitucional de 1994 ha incorporado la figura del Ministerio Público con rango constitucional, ello, ha permitido dirimir aquella vieja disputa referida a la ubicación institucional y que a su vez impidió que el Órgano del Ministerio Público contara con una legislación —organizada— que regule sus funciones, deberes y atribuciones, como también los mecanismos de ingresos y egresos de sus integrantes. Si hacemos un análisis de nuestro ordenamiento jurídico, veremos que entre los precedentes constitucionales de 1819, 1826 y 1853 incluían dentro de la organización del Poder Judicial a dos (2) fiscales y 9 jueces como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los Constituyentes de 1853, previeron su inclusión en el artículo 94. Sin embargo, en la reforma del '60 se hizo silencio al respecto, relegándose la materia de su composición a la ley (según cuenta la historia por influencia de la delegación bonaerense no se pusieron de acuerdo en el número de integrantes de la Corte Suprema, pero el espíritu era que formaba parte del Poder Judicial).

Posteriormente se sancionó en 1862, la ley 27 "Organización de la Justicia Federal", estableciendo en su artículo 6° la integración de la Corte, no ya por dos fiscales sino por un Procurador General de la Nación y sus miembros —jueces—.

La ley 1893 sancionada en 1886 —Ley Orgánica de los Tribunales Federales— estableció las funciones y atribuciones del Ministerio Público.

El decreto-ley 1.285/58 —Organización de la Justicia Nacional— en su artículo 21 determinaba que: "el Procurador General integraba la Corte y era designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado", su designación fue equiparada a los ministros de la Corte.

La ley 23.774 modifica el artículo 21 del decreto-ley y establece que: la Corte Suprema está integrada por 9 jueces y ante ellos actuarán un Procurador General y los Procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación...

A partir del decreto 1.285/58 —que determina que el Instituto forma parte del Poder Judicial y su cabeza, el Procurador, era designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo, tal como se designa a los jueces—, ha sido medianamente clara su integración al Poder Judicial.

Hasta el año 1989 el Procurador General de la Nación era nombrado con acuerdo del Senado, luego —con el actual gobierno— se cambia el criterio de nombramiento y pasó a ser designado por el Poder Ejecutivo, a partir de

allí las posteriores designaciones fueron realizadas por decreto; politizando su función y desvirtuando su independencia funcional, necesaria para cumplir cabalmente con la observancia de la legalidad y protección de los intereses generales de la sociedad.

El fiscal del crimen "Guillermo de la Riestra" (LL, 112-735) publicó en 1963 la postura de los fiscales; con excelentes argumentaciones sostuvieron que su actividad se encuentra inserta en el Poder Judicial. Entre las razones, merece ser destacada la siguiente: "Si los fiscales son dependientes del Poder Ejecutivo, se llega a la ineludible conclusión de que el presidente de la República ejerce funciones judiciales por intermedio de ellos, prohibición expresa en la Constitución". Riestra finaliza su nota diciendo que: "la errónea doctrina de que los fiscales dependen total o parcialmente del Poder Ejecutivo no se fundamenta en texto legal alguno, promoviendo tan sólo una práctica o costumbre que no responde a ninguna necesidad".

En síntesis, no había constitucionalmente una norma que hiciera referencia al Ministerio Público, con la reforma del '60 se suprimió la inclusión prevista en la Constitución de 1853; pasó el Organismo a regirse por diversas leyes que corroboraban su inserción institucional en el Poder Judicial, desvirtuando su dependencia tan sólo por la práctica. Actualmente depende del Poder Ejecutivo, quien lo nombra y remueve por decreto. Tal como históricamente se ha demostrado al legislar en la materia, no sería necesaria una reforma, si la voluntad de los constituyentes era su pertenencia al Poder Judicial.

Ahora bien, ¿qué ha hecho la comisión encargada de redactar el artículo 120? El 22 de agosto de 1994, la Convención Constituyente, sancionó el artículo 120, otorgándole rango constitucional al Ministerio Público.

El miembro informante por la mayoría —doctor Masnatta— delineó la idea de que ... con el propósito de servir mejor a un adecuado ejercicio del valor justicia, claramente se ha expresado su independencia de cualquier otro poder, que se garantiza a través de la autonomía funcional y autarquía financiera. De esta manera, se asegura la defensa del justiciable; si el órgano acusador está desvinculado del Poder Ejecutivo y del Judicial, como también se ha previsto la separación específica de la función del acusador (fiscal) y del defensor, brinda plenamente independencia y juridicidad de aquellos, que tienen en sus manos la decisión definitiva de juzgar, pues controlan su competencia; efectúan el control de legalidad del orden público en las causas judiciales y en otros provee a la adecuada protección del derecho de defensa en cumplimiento del principio de igualdad y ejerce la representación de los menores e incapaces.

A su vez la defensa del justiciable obedece a otros principios rectores que se enumeran taxativamente, la inmunidad funcional y la intangibilidad de las remuneraciones que aseguran al funcionario su imparcialidad.

La función del Ministerio Público es promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, los fiscales se deben a ese valor justicia con mayúscula.

La primera cuestión que resuelve es su inserción institucional, delineando su naturaleza jurídica como un órgano "extrapoder", expresada en el espíritu de los constituyentes, pues su antecedente inmediato fue la ley 24.309 —artículo 3º— inciso g) en el que se habilita el

tema como Órgano Extra-Poder, incorporando una sección 4ª en la segunda parte de la Constitución (órganos del Gobierno Federal), con un nuevo capítulo.

El convencional Masnatta, comenzó su exposición expresando que "la comisión había trabajado sobre un proyecto presentado por el doctor Jorge de la Rúa, y que el texto era el resultado de una importante deliberación, cuyos antecedentes históricos venían de la época de la monarquía, dependiendo del rey, quien no sólo defendía su hacienda, su patrimonio sino que además debía proteger a los pobres, a los ausentes y a los incapaces, y con el advenimiento de la República se democratiza el Estado y se lo ubica dentro del Poder Ejecutivo".

Con posterior desarrollo del derecho procesal, se enfatiza en la defensa de los intereses públicos por sobre los del fisco, pasando a ser un acusador independiente cuya principal función es asegurar la defensa del justiciable, y pasa a la órbita del Poder Judicial.

Destaca que en su proyecto, que también figura entre los antecedentes computados, fue decisiva la opinión del constitucionalista Néstor P. Sagües, quien ha manifestado con claridad "el ministerio público no es un órgano servicial del Poder Ejecutivo, sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de legalidad y la recta administración de justicia. Admitidos estos roles se debe jerarquizar al organismo y ubicarlo donde debe estar, como una magistratura autónoma y como órgano extra-poder". Aunque no comparte el término, en virtud de no ser apto para su inclusión en el lenguaje de la Constitución. Se quiere expresar que no debe estar sometido al Poder Ejecutivo ni Judicial, debe actuar con independencia de los dos poderes.

Es la posición de los doctores Sagües, Vanossi y Seisdedos y la adoptada por la constituyente, siguiendo las doctrinas contemporáneas al respecto.

La Comisión redactora con inteligencia omitió la calificación de órgano extrapoder (expresamente), porque ningún órgano podría estar fuera del sistema adoptado por nuestra Carta Fundamental, que sólo admite la división tripartita de poderes, pero nada impide que se descentralicen las funciones para un mayor control, para brindar eficacia, eficiencia y velar por una correcta administración de justicia que es demandada por los tiempos que corren.

Tal aseveración se traduce en la independencia del Ministerio Público del resto de los poderes —mal llamados poderes—, por cuanto el poder del Estado es uno solo y se ejerce a través de los órganos diferenciados, encargados de ejercer las funciones esenciales de legislar, ejecutar y juzgar.

La "tríada de poderes" tienen su razón de ser, no ya en la división que realiza Montesquieu, sino en las funciones que Aristóteles describe del Estado, en "la política", el estagirita hablaba de tres funciones: hacer la ley, ejecutarla y de aplicarla a casos individuales, pero esas tres funciones están a cargo del poder del Estado.

Han pasado innumerables años desde aquella división tripartita; hoy a casi cuatro años del año 2000, la complejidad en el ejercicio de las funciones, la demanda de eficiencia y eficacia es generalizada y pública, razón por la cual en el mundo contemporáneo se habla de "órganos extra-poderes", o también llamados "órganos de control"; en rigor de verdad, en nuestro sistema de gobierno

podemos decir que estamos en presencia de la descentralización de funciones —teoría sistémica— se crean órganos de control externo a fin de descentralizar las funciones, ejecutar tareas de auditoría y control. En términos de García Pelayo estamos en presencia de la "expansión de la división de poderes".

El miembro informante del dictamen de mayoría —doctor Masnatta— expresó: "Sin duda, la materia opinable ha vinculado en los últimos tiempos al Ministerio Público con la administración de Justicia. Pero nosotros hemos entendido que mejor sirve a esa administración de Justicia fuera de ella".

El constitucionalista Bidart Campos, en su libro de *Elementos del Derecho Constitucional*, T. VI, *La Reforma Constitucional del 1994*, expresa: "La mejor postura siempre fue, para nosotros, la que tipificaba al Ministerio Público como órgano extrapoder o como parte del Poder Judicial. La Constitución material no reflejó adecuadamente —y a veces renegó— de cualquiera de las dos tesis"... "definimos al Ministerio Público como órgano extrapoder".

Sostiene que es un órgano de control, y que reviste una función controladora desde fuera de los tres poderes clásicos. Podría suponerse que no es un órgano de fiscalización o vigilancia sino un auxiliar del Poder Judicial. Pero esta postura queda superada, en primer lugar es definida con claridad suficiente la independencia (no subordinación) del Poder Ejecutivo; en segundo lugar las funciones tradicionales —si son bien ejercidas— le aparecen un espacio de control de constitucionalidad y legalidad que le es propio en cada causa a los fiscales intervinientes."

El diseño de la nueva Constitución lo incorpora en el texto, como sección cuarta, con independencia de las otras secciones que prescriben respecto al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; corrobora dicha afirmación, su estructura:

La segunda parte de la Norma Fundamental es "Autoridades de la Nación". Su título primero "Gobierno Federal" aparece dividido en: cuatro secciones, las que regulan respectivamente el funcionamiento del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público.

Esta hipótesis es afirmada en razón de diferenciarse del resto de los organismos creados por la reforma, donde claramente se vislumbra que la A.G.N. y el defensor del pueblo integran la sección primera —Poder Legislativo—, como capítulos sexto y séptimo respectivamente, y el Consejo de la Magistratura se encuentra inserto en la sección tercera —Poder Judicial—.

Por ende, si optamos por aceptar que el Ministerio Público forma parte de alguno de los órganos que ejercen la función de legislar, ejecutar o juzgar, no sería necesario que se incorpore en la Constitución una norma, por cuanto sería posible reglamentarlo por ley. En cambio, su creación como órgano extrapoder de control, implicaría necesariamente su previsión expresa en la Constitución Nacional (pensamiento expuesto por la doctora Graciela Reiriz, en las jornadas organizadas por "Fundejus" 20-4-94).

En la doctrina argentina, el doctor Bianchi, en su libro *El Ministerio Público ¿Un nuevo poder?* dice: "...si tenemos en cuenta que cada poder del Estado tiene asignada una sección específica, podemos llegar a suponer que los constituyentes de 1994 han querido erigir un

nuevo órgano de gobierno diferente y separado de los tres clásicos de la República". El senador Yoma hizo referencia al autor, pero considero necesaria su reiteración a fin de explicitar el pensamiento de doctrinarios, respecto a esta nueva criatura que nació con la reforma constitucional.

Como antecedentes de este tema opinable, aun entre la doctrina, contamos con diversas posturas que sostienen:

1. que integra el Poder Judicial
2. que depende del Poder Ejecutivo
3. que pertenece al Poder Legislativo
4. que se establece como órgano extra-poder

El sistema español es "judicialista" —el régimen orgánico del Ministerio Público— postula la integración al Poder Judicial.

En materia constitucional, la Constitución española prescribe en su artículo 124, las funciones del Ministerio público fiscal, el nombramiento del fiscal general de Estado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial.

Primero, tiene rango constitucional como en casi todas las Constituciones reformadas en los últimos años.

Segundo, forma parte del Poder Judicial.

Tercero, debemos tener en cuenta la forma de nombramiento del fiscal general (remarco este aspecto, porque luego será tema de fundamentación de la disidencia parcial que se tratará en particular).

El otro sistema llamado "administrativista o regalista", es el que coloca al Ministerio Público en la órbita del Poder Ejecutivo, lo constituyen todos aquellos países que han seguido el sistema francés. En Italia, es un órgano controlado por el Ministerio de Justicia. Impera en E.E.UU. cuyo *Attorney General* tiene funciones de orden político e integra el gabinete del Poder Ejecutivo, es asesor legal del presidente y de los ministros —coincide con la función del procurador del Tesoro, en nuestro país—, defiende los intereses fiscales y de orden administrativo, ya que es la autoridad máxima de la policía federal, del F.B.I. y establecimientos penitenciarios, etc.

Este sistema es fundado entre nuestros juristas por Joaquín V. González, los procesalistas Castro, Jofré, Alsina.

Los que lo ubican "dentro del Poder Legislativo", encontramos los países de la ex Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, Hungría, Rusia, etcétera.

La dos primeras posturas fueron las que adoptamos históricamente en nuestro país. Dada las vicisitudes que ha sufrido el proceso de decisión política para sancionar una ley Orgánica de Ministerio Público, una disposición aunque mínima, era necesaria para establecer su ubicación institucional y sus caracteres específicos, otorgándole unidad de actuación, independencia funcional, autarquía financiera y organización jerárquica. La Reforma del '94 lo ubica como órgano independiente y autónomo.

La última posición es el establecimiento del Ministerio Público como órgano autónomo ajeno a los otros tres poderes del Estado, procura asegurar la independencia funcional para el cabal cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de que la realidad latinoamericana no es una garantía real y efectiva en este sentido. Hay

países con Constituciones con característica de órgano autónomo:

a) La Constitución de Colombia de 1991, título X "Organismos de Control" y regula la Contraloría General de la República (vigila la gestión patrimonial) y el Ministerio Público.

Dentro del Ministerio Público incluye al Defensor del Pueblo, que cumple funciones con autonomía pero dependiendo del Procurador General.

b) La Constitución Federativa de Brasil de 1988, regula al Ministerio Público por separado del Poder Judicial. Lo hace bajo la denominación de "Funciones esenciales de la Justicia" (artículos 127-130), establece que es una institución permanente, esencial para la función jurisdiccional del Estado, regido por los principios de unidad, indivisibilidad, e independencia funcional. Para asegurar esto le otorga la facultad de crear su propio presupuesto para ser sancionado por el Congreso, y proponer al Poder Legislativo la creación y supresión de sus propios cargos.

c) La Constitución del Perú, que lo organiza independientemente de los tres poderes.

En el Derecho Constitucional Provincial, la Constitución de Salta (1986) lo incorpora como Órgano extra-poder. Prescribe: "En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás poderes públicos; éstos están obligados a prestar a este Ministerio la colaboración que requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones". El resto de las Constituciones lo hacen dentro de la órbita del Poder Judicial, la de Catamarca (1988), la de Córdoba (1987).

Nuestra Norma Fundamental reza en su artículo 120: "El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones."

En su análisis, en lo que respecta a su organización y estructura, cabe señalar que la novedad es la incorporación del Defensor General de la Nación junto al Procurador General, tal como lo expresara el doctor Cavagna Martínez, se supera la verdadera esquizofrenia consistente en que el jefe de Ministerio Público, al mismo tiempo en que manejaba la acusación, tenía que dirigir a los defensores, lo cual evidentemente producía una situación poco clara, que ahora queda zanjada. (Palabras expuestas en el Paraninfo en Santa Fe —miembro informante Masnatta—.)

Esto impone sancionar una ley que respete las dos estructuras más o menos paralelas, que deben ejercer respectivamente la específica función de cada área.

El Procurador y el Defensor General de la Nación que integran el Ministerio Público, ejercen la jefatura y la superintendencia relativa al cumplimiento específico de sus funciones, con atribuciones para fijar las normas generales para la distribución del trabajo, para supervisar su cumplimiento e imponer sanciones.

Sin embargo, este bicefalismo no puede exceder de lo específicamente funcional, en materia de gobierno y administración general y financiera, atribuciones tales como:

- Reglamentaria.
- Presupuestaria (elaboración del proyecto de presupuesto y su ejecución).
- Representativa (en relación con los otros poderes).
- Administrativa (celebración de contratos y convenios).

1. — Con respecto a la elaboración del presupuesto y a fin de asegurar la autonomía funcional y la autarquía financiera (artículo 120 Constitución Nacional) se prevé:

El Ministerio Público elaborará su presupuesto y lo remitirá al Congreso, por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Este solo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de Presupuesto General.

2. — El control de la ejecución presupuestaria estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y a su turno el control sobre rendición de cuentas del ejercicio está a cargo de la Comisión Bicameral que se cree al efecto.

3. — Otro tema de interés es las relaciones con los otros poderes del Estado, se ha previsto que con el Poder Legislativo realiza a través de la Comisión Bicameral, cuya composición y funciones fijaría la reglamentación, teniendo en cuenta que tanto el Procurador y el Defensor General sólo serán removidos mediante el Juicio Político —artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional—.

Esta Comisión tiene una función primordial y fundamental por cuanto es el órgano parlamentario que monitoreará el ejercicio del Ministerio Público a los fines de la responsabilidad política de sus jefes.

Con respecto al Poder Ejecutivo, siendo un órgano independiente por mandato constitucional, sólo le cabe al Poder Ejecutivo proponer las instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Corresponderá al procurador o defensor evaluar la conveniencia y oportunidad de emitir las instrucciones sugeridas por el Poder Ejecutivo.

En su relación con el Poder Ejecutivo, queda excluida de las funciones del Ministerio Público, la representación del Estado y del Fisco en Juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo nacional, funciones éstas que corresponden a la Procuración del Tesoro de la Nación y al Cuerpo de Abogados del Estado.

Su relación y coordinación será a través del Ministerio de Justicia o el correspondiente según el caso.

En su relación con el Poder Judicial, se establece que los dictámenes y requerimientos del Ministerio Público merecerán siempre la consideración de los jueces ante los que actúen, quienes están obligados a tratar todos los argumentos conducentes. Se establece que los miembros del Ministerio Público no ejercen facultades jurisdiccionales por vía de subrogancia.

Con el proyecto de ley que vamos a sancionar, apoyando en líneas generales el dictamen de la comisión, proporcionamos una norma garantista, que mejora y equipara el sistema del Ministerio Público a los jueces federales en todo lo referido a las garantías funcionales constitucionalmente definidas; el fin último es velar por una recta administración de justicia.

Sr. Presidente. — La inserción se votará juntamente con las solicitadas por los otros señores senadores.

11

MOCION

Sr. Galván. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tengo anotado a otro senador, salvo que usted quiera pedir otra inserción.

Sr. Galván. — Es para otro tema importante.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: previendo cualquier circunstancia numérica con relación a esta sesión, voy a formular una moción de orden para que en el momento que usted considere pertinente la ponga a consideración, a fin de que esta Cámara se constituya en tribunal de juicio político con relación al juez Francisco Trovato, y en el supuesto de que el encartado solicitare una ampliación para hacer su defensa en forma oral, como está previsto en el Reglamento, se autorice a la Presidencia de este cuerpo para que fije la fecha correspondiente, a efectos de ese acto procesal.

Le ruego que en su momento constituya a la Cámara en tribunal y que ponga a consideración esta moción que, como presidente de la Comisión de Juicio Político, formulo concretamente.

Sr. Presidente. — Lo vamos a hacer cuando tengamos quórum.

Sr. Galván. — Gracias, señor presidente.

12

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO
(Continuación)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: voy a ser muy breve. He pedido la palabra para expresar mi apoyo al proyecto que estamos considerando.

Como ex constituyente nacional creo que es importante haber logrado cierto grado de consenso frente a un instituto de esta naturaleza.

Pero no puedo dejar de señalar mi desacuerdo con el dictamen en lo que hace al artículo 69; esto es, el que consagra la inamovilidad de quienes actualmente desempeñan los más altos cargos: me refiero al procurador fiscal y al defensor oficial.

Escuchaba hoy al señor miembro informante cuando proponía la eliminación del artículo 69, propuesta que tampoco comparto porque entiendo que por vía ficta se consagra también —como él señaló, además— la inamovilidad de estos dos funcionarios.

Considero que ésta no es una cuestión menor en el marco de toda la ley porque los institutos funcionan en la medida en que las personas de carne y hueso a las que les toca desempeñar las respectivas funciones "funcionen", valga la redundancia. Las instituciones no funcionan *per se* sino que lo hacen a través de hombres y mujeres concretos.

Decía hoy el señor miembro informante que era importante destrabar la discusión, y para hacerlo propuso la metodología que yo señalaba. Pero creo que lo mejor que podemos hacer para destrabar una discusión —no sólo ésta sino también cualquier otra— es hablar sin eufemismos.

En definitiva, creo que uno de los ejes principales que ha sostenido la oposición en cuanto a su negativa para el artículo 69 es, precisamente, que las personas que desempeñan estos cargos no han sido designadas con acuerdo del Senado y, por lo tanto, creen que se altera o vulnera el espíritu que tuvo el constituyente.

Yo quiero hacer más concreto el problema. Realmente, no creo que éste sea el principal reparo que presenta consagrar la inamovilidad. Y digo esto porque estoy segura de que si fueran otros hombres los que estuvieran desempeñando el cargo de procurador; si fueran hombres con reconocida militancia en el justicialismo, como por ejemplo, el doctor Arslanián o el doctor Masnatta, nadie formularía demasiados reparos por esto que decía antes: tiene que ver la calidad de las personas que desempeñan el cargo.

Esto no significa una cuestión de nombres ni de situaciones personales frente a un determinado funcionario. Reitero: ésta no es meramente una cuestión de nombres, sino de nombres vinculados a hechos y a conductas objetivas que aconsejan que quien hoy está ocupando el cargo de procurador no siga en él.

Esto bajo ningún punto de vista significa condenar a una persona. Simplemente significa revalorizar que en la democracia la imagen y la

forma también son importantes. Sobre todo cuando son cargos de esta entidad, los funcionarios deben ser algo así como la mujer del César: no sólo ser honestos sino también parecerlo.

Por eso, señor presidente, no creo que en algún momento se vaya a destrabar la discusión porque, precisamente, allí está clavada: en que hay argentinos de distintos partidos políticos, incluso del oficialismo —soy justicialista— que no estamos de acuerdo con que se consagre la inmovilidad de estos funcionarios.

Reitero: no se trata de cuestiones personales ni de condenas anticipadas, para las que nosotros no estamos facultados, y que, en definitiva, serán de la Justicia. Significa lisa y llanamente preservar una imagen, que es también una manera de construir credibilidad y de que las instituciones funcionen, que de eso se trata.

Por eso, señor presidente, y para concluir, adelanto mi voto afirmativo en la votación en general. Cuando se aborde el tema en particular, expondremos la modificación que proponemos respecto de la redacción actual del artículo 69.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero de la Unión Cívica Radical.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: solicito la inserción de la exposición que iba a realizar.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Quiero expresar mi complacencia por haber arribado este honorable cuerpo a un dictamen común que no es unánime, porque —si bien existen disidencias parciales— posibilita la aprobación de la primera Ley Orgánica sobre Ministerio Público, la “Cenicienta” institucional de la República, al decir del prestigioso constitucionalista H. Quiroga Lavie.

Se supera con esta sanción una verdadera anarquía legislativa, resultado de la numerosa dispersión normativa existente en el derecho positivo que brevemente enumero a continuación: leyes 27; 1.893; 3.367; 4.162; 4.055; 17.516; 18.345; 19.539; 20.521 y decreto ley 1.285/58; además de las reglas contenidas en los códigos de Procedimiento Civil y Penal.

Pero creo que lo fundamental y prioritario es que el texto en análisis define la ubicación del Ministerio Público dentro del marco de la división de los poderes del Estado. Así superamos una absurda polémica existente en el derecho argentino, que asimilaba más el instituto al ministerio o agente fiscal, que al público, otorgándole prioridad a la defensa del patrimonio del Estado y sujetándolo a sus directivas e instrucciones en materia de política criminal.

No vamos a referirnos a esta cuestión, por cuanto la Convención Constituyente de 1994 ya clausuró este debate con el artículo 120, que dice así:

“El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

“Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

“Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.

Esto es respetado cabalmente en el artículo primero del dictamen de comisión:

1) El Ministerio Público es un órgano independiente.

2) Funcionalmente promueve la actuación de la Justicia para:

— Defender la legalidad.

— Los intereses generales de la sociedad.

Hasta aquí nuestra satisfacción.

Ahora debemos expresar nuestro más terminante disenso con el partido gobernante, por cuanto ha demorado la instauración del Ministerio Público independiente, sin causa alguna que lo justifique; y esto es así porque:

En primer lugar, pudo haberse dictado esta misma ley, sin necesidad de que la institución tuviese acogimiento en la Constitución Nacional. Tan es así que durante mi mandato como diputado nacional en el período 91/95, mis colegas de bancada, Juan Gauna y Antonio Hernández presentaron proyectos al respecto. También lo hizo el distinguido político y jurista Durañona y Vedia, y ya antes lo había hecho el constitucionalista Jorge Vanossi.

Ninguno de estos proyectos prosperó, ya que nunca se logró dictamen de comisión, por la oposición del justicialismo, quien dominaba la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Justicia, ambas integradas por quien habla.

Segundo: el mandato constitucional del artículo 120 es imperativo desde agosto de 1994, y recién ahora —a más de dos años— la Ley Orgánica del Ministerio Público integra el orden del día de esta honorable Cámara, en la que el oficialismo posee una mayoría tan amplia, que le permite fijar unilateralmente el plan de labor parlamentaria.

Pero felizmente hemos superado esta etapa de dilaciones, y hoy estamos convocados para aprobar finalmente la ley. Con discrepancias subsistentes, estamos avanzando para pasar de un estado de derecho a un estado de justicia, que es hoy el reclamo generalizado de la sociedad argentina.

Las disidencias parciales a las que aludimos *ab initio*, son las siguientes:

Artículo 5º: Se aconseja la modificación del artículo a partir del primer párrafo diciendo: “Los restantes magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º serán nombrados por un Consejo integrado por un representante del Poder Ejecutivo, tres representantes de cada una de las Cámaras del Congreso, con representación de la minoría, seis abogados elegidos por sus pares entre todos los que tengan matrícula federal, en elección organizada, fiscalizada y con-

trolada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y tres magistrados del Ministerio Público Fiscal o de la defensa, según corresponda, elegidos por votación de sus miembros, entre quienes se encuentren en ejercicio de la magistratura. Los integrantes del Consejo durarán cuatro años en sus funciones y dictarán su reglamento interno y todos los que resulten necesarios para el logro de su cometido.

En la modificación propuesta seguimos los lineamientos sugeridos por la XII Conferencia Nacional de Abogados celebrada en San Miguel de Tucumán en 1995. Dicha forma de designación garantizará una segura independencia de los nombrados y transparencia en el proceso selectivo de los integrantes del Ministerio Público.

Artículo 8º: Suprimir del artículo propuesto la frase "en su calidad de jefe supremo de la Nación", por connotar la mencionada expresión raíces autoritarias que repugnan el espíritu democrático de la Constitución Nacional. Basta con decir que el Procurador General de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación, sin ningún tipo de aditamentos, ya que así lo denomina al titular del Poder Ejecutivo el artículo 87 de la Constitución Nacional: "El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de 'presidente de la Nación'".

Artículo 10: Agregar al proyecto de artículo la frase "con excepción de la recusación sin causa". Las normas procesales prevén la recusación sin causa. Para evitar rémoras innecesarias que no afectan al debido proceso legal, proponemos la supresión de la "recusación sin causa".

Artículo 44: Suprimir en el inciso a) la frase "sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación". Suprimir totalmente el inciso e). Ambas disposiciones, cuya eliminación se propone, limitan en la redacción propuesta, la necesaria independencia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para el cometido de su función, al subordinar el actuado del Fiscal Nacional a las instrucciones del Procurador General, y condicionando la posibilidad de investigación y necesaria independencia que debe tener y gozar la fiscalía.

Artículo 69: Se propugna su total derogación y su reemplazo por el siguiente:

"Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados en forma interina por quienes lo ejerzan al momento de su entrada en vigencia. Dentro del plazo de 180 días contados corridos a partir de la vigencia de esta ley, los cargos serán cubiertos por las personas que resulten designadas conforme a los mecanismos y sistemas que establecen los artículos 5º, 6º y 7º. Si producido el vencimiento del plazo no se hubiera producido el reemplazo o la confirmación del funcionario por el sistema propuesto, cesará en sus funciones en forma automática."

Se propugna con esta modificación que el Ministerio Público goce *ab-initio* de la independencia necesaria del Poder Ejecutivo nacional, que asegure tanto para el Procurador General y el Defensor General y todos los funcionarios dependientes, la insospechabilidad que de-

viene de manera irreversible de un límpido proceso de selección y nombramiento.

El artículo 69 del dictamen establece el mantenimiento de la composición y estructura del Ministerio Público de quienes, en su ejercicio, han demostrado una total sujeción y dependencia al Poder Ejecutivo.

No queremos comprender en esta valoración a todos sus integrantes, ya que existen fiscales que han demostrado su coraje y libre criterio.

Pero debemos ponderar que sobre ciento ocho casos de corrupción incoados en la Justicia Federal entre 1990/95 contra funcionarios, legisladores, jueces y fiscales, sólo existen tres condenas; esto es menos del 4% de los procesados y numerosos sobreseimientos, que más allá de sus méritos, conmovieron a la sociedad creando el estado de sospecha generalizado sobre nuestra Justicia.

Como medida tendiente a restablecer la confianza social en la gestión de sus representantes, se impulsa la modificación propuesta.

Artículo 73: Agregar a la propuesta de redacción del artículo, luego del primer párrafo y antes de la frase "en sus respectivos ámbitos", la expresión "que resulten definitivamente designados conforme los mecanismos previstos en los artículos 5º, 6º, y 7º y 69 de la presente ley".

Esta modificación tiene por objeto impedir que los actuales miembros del Ministerio Público condicionen a quienes resulten en el futuro designados para cumplir dichas funciones, a través del dictado de reglamentaciones y modificaciones de estructura que respondan a los actuales criterios, seguramente distintos a los que tengan los futuros integrantes.

Finalmente, agrego otra disidencia que está referida a la estabilidad o inamovilidad de los agentes del Ministerio Público.

Me inclino por la periodicidad, que es uno de los recaudos más importantes para impedir la burocratización de un cuerpo que representa a la sociedad, constituyendo un nuevo poder social de control incluido hoy en el sistema representativo y republicano de gobierno, como lo afirma el doctor Quiroga Lavie.

Pero pongamos en marcha esta institución que hoy exige la seguridad jurídica y la paz social.

Javier R. Meneghini.

Sr. Presidente. — La inserción solicitada por el señor senador por Santiago del Estero por la UCR será votada junto con el resto de las inserciones.

El siguiente orador que tengo anotado está ausente. Se trata del titular del bloque justicialista. Solicito a los auxiliares se sirvan colaborar con la Presidencia para que se haga presente el señor senador Alasino. Luego pasaríamos a votar.

— Se llama para formar quórum.

Sr. Meneghini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Mientras esperamos para reunir quórum, por una razón de lealtad para con mi bloque quiero puntualizar —para que todos conozcan mi posición— que disiento totalmente con el artículo 69 del proyecto...

Sr. Presidente. — Quiero aclarar dos cosas al señor senador: primero, que ya llegó el orador a quien le tocaba hablar y, segundo, que el tema fue puntualizado por el titular y todos los señores senadores de la Unión Cívica Radical. Por otra parte, el señor senador Yoma ya adelantó que se retira el artículo 69.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: creo que el miembro informante por el dictamen de mayoría, señor senador Yoma, hizo un análisis profundo, extenso y muy pormenorizado del dictamen de mayoría, razón por la cual —en atención al tiempo y a que los colegas de la Unión Cívica Radical tienen otro compromiso— voy a procurar ser lo más breve posible. Pero no puedo dejar de realizar algunas reflexiones.

En primer término, se trata de una ley fundamental. La reglamentación del ministerio público es una de las normas que la Constitución manda sancionar. Este órgano viene a afianzar y a consolidar las instituciones de la República.

Por esta razón, en un trabajo que publicáramos hace algún tiempo, decíamos que dentro de los caracteres de la Constitución reformada en 1994 hay uno que le da entidad a la reforma: el carácter republicano, por cuanto consolida el principio de división de poderes y mejora los elementos de participación, los elementos de control, y la eficiencia. Por supuesto, cuando decimos que mejora y reafirma el principio de equilibrio de poderes hablamos de instituciones que se incorporan a la Constitución. En ese sentido, el ministerio público es una de esas instituciones fundamentales que pasa de tener un rango legal a tener un rango constitucional.

Por eso, bien se ha dicho que el ministerio público —tal como ha sido concebido en la Constitución de 1994— se erige en un instrumento abierto a la sociedad y sometido sólo al ordenamiento jurídico y que, juntamente con los jueces, concurre a la concreción del afianzamiento de la justicia, según declara el Preámbulo.

Es bien sabida —voy a ser muy sintético— la vieja discusión existente en nuestro país —a la que han hecho referencia algunos señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra— respecto de la ubicación del ministerio público: si está dentro de la esfera del Poder

Ejecutivo o de la del Poder Judicial. Esta discusión fue muy larga. Indudablemente, había más antecedentes en el sentido de que tenía elementos que lo asemejaban más a una estructura del Poder Judicial. Así, en la Constitución de 1853 —que decía cómo se integraba la Corte y nombraba a los procuradores— y, desde luego, en 1860, al sancionarse la reforma, no se dice cómo se integrará la Corte, por lo que el ministerio público queda, prácticamente, sin sustento constitucional. Pero estaba vigente la ley 27, que le había dado ese carácter y lo había establecido como parte del Poder Judicial, razón por la que se conservó de esa forma a través del tiempo.

De todos modos, más allá de lo que establecía la ley 27, todo lo que hace a la estructura, la organización y el funcionamiento del ministerio público lo hacía más partícipe de la naturaleza del Poder Judicial que del Poder Ejecutivo.

Cuando se llega a la reforma de 1994 se plantea la discusión acerca del carácter que debía tener el ministerio público. La ley 24.309, por la que se declaró la necesidad de la reforma constitucional, estableció la creación del ministerio público como un órgano extrapoder. Cuando se sanciona la Constitución, el artículo 120 es motivo de una sección especial, de una sección separada, al igual que las que encuadran a los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero no se habla, sin embargo, de órgano extrapoder. Simplemente, como lo señalaron varios señores senadores, se determinan sus características pero no se dice que se trata de un órgano extrapoder.

Gran parte de la doctrina, siguiendo lo que habían argumentado algunos convencionales constituyentes en 1994, sostiene que de todos modos se lo consagró como un órgano extrapoder y se remite a modernas concepciones en la materia en los derechos constitucional y administrativo, citando inclusive algunos casos del derecho comparado. En ese sentido, se citan las constituciones de Italia, de España y de Perú. Desde luego, como lo he señalado en algunos trabajos, no comparto en absoluto la teoría del órgano extrapoder. Considero que el ministerio público forma parte del Poder Judicial.

En primer término, entiendo que lo que se debe tener en cuenta, más allá de la intención del legislador, es la letra de la Constitución. Creo que en el ánimo de muchos convencionales constituyentes estuvo la idea del órgano extrapoder, razón por la cual le dedicaron una sesión especial, la sección Cuarta. Pero para determinar cuál es la ubicación institucional debemos analizar cuáles son la naturaleza y las funciones del órgano de que se trata.

Además, debemos tener presente en todo momento cuál es el sistema institucional de nuestro país. Todo el sistema constitucional argentino está basado en la división tripartita de los poderes. Todo está dentro de las funciones ejecutiva, legislativa o judicial, y no puede haber otra función ajena a esos tres poderes. ¿Qué quiere decir "órgano extrapoder"? Más allá de los poderes. Inclusive, ni aun dentro de la teoría de que hay un solo poder y que la diferencia radica en las funciones —ejecutiva, legislativa o judicial— se podría admitir, ya que hay un solo poder, que haya órganos extrapoderes, porque dentro de esa concepción decir que un órgano está fuera de los poderes implicaría sostener que está fuera de la República, porque ella está integrada por los tres poderes que siempre se ha considerado que conforman el Estado.

En cuanto a la discusión acerca de si formaba parte o no del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, considero que hubo una sobreactuación en algún sentido al querer sacarlo de la discusión y decir...

Sr. Presidente. — Señor senador Menem: la señora senadora por la Capital le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Menem. — Sí.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Yo quería hacer notar que extrapoder no quiere decir por encima de los poderes, sino otro poder. Es el caso, por ejemplo, de la universidad, que no depende ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Ministerio de Educación, ni del Legislativo; es autónoma y por eso se dice afuera del poder, lo que no quiere decir por encima del poder.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Le agradezco la intervención a la señora senadora, ya que lo que ella dice va más en apoyo de mis razones. Porque, con ese criterio, vamos a encontrarnos con una cantidad de órganos extrapoderes que directamente van a tirar por tierra la teoría de la división de poderes. Es la primera vez que escucho que la universidad es un órgano extrapoder.

Yo nunca dije que era poder por encima de los poderes, sino más allá de los poderes. Y los poderes son los que tradicionalmente hemos reconocido como Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Creo que la pregunta que tenemos que hacernos es esencialmente si es necesario crear un órgano extrapoder. ¿Cuál es el plus, cuál es el

valor agregado de crear un órgano extrapoder? ¿En qué beneficia o enriquece a la institución? Absolutamente en nada, porque con las características que le da la Constitución no hace falta que sea órgano extrapoder, porque habla de su independencia, de su autonomía funcional, de su autarquía financiera. ¿Qué mayor independencia que ésa quieren? Y si se quiere interpretar que porque se dice que es independiente es órgano extrapoder, el mismo carácter le correspondería al defensor de pueblo. Creo que el senador por el Neuquén ha sostenido aquí que el defensor del pueblo también es un órgano extrapoder.

Vean cómo empezamos a generar una confusión. La señora senadora habla de la universidad, el senador por el Neuquén habla del defensor del pueblo. Entonces me imagino el día de mañana, cuando un profesor de instrucción cívica quiera explicar en la clase a sus alumnos el tema de los poderes y les diga: "Chicos, en la República hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; además, hay extrapoderes". O, como lo explica Sagüés, en realidad no sería un cuarto poder, porque no es tan importante; lo podríamos llamar minipoder. Entonces, ese profesor de instrucción cívica diría: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y un minipoder que es el Ministerio Público y, también, otro minipoder que es el defensor del pueblo; pero además hay muchos otros minipoderes que son las universidades.

Señor presidente: creo que esta teoría del órgano extrapoder no enriquece en absoluto a la institución. Genera confusión y es totalmente innecesaria porque, con los caracteres que le da el artículo 120 de la Constitución Nacional basta y sobra para considerar que es un organismo independiente, que no recibe instrucción de ninguna autoridad, que tiene autonomía funcional, autarquía financiera. De modo tal que esto del órgano extrapoder es total y absolutamente innecesario.

Además, si promueve la actuación de la justicia, si los estamos equiparando en muchos casos a los funcionarios de la justicia en lo que hace a su nombramiento, a su remoción, forman parte del Poder Judicial. Hablamos de la intangibilidad de sus remuneraciones, de las inmunidades que tienen. Incluso, señor presidente, en el proyecto se habla de que los integrantes del Ministerio Público van a poder conservar la obra social del Poder Judicial de la Nación. Entonces ¿qué necesidad hay de complicarse hablando de un órgano extrapoder? Como dicen, si camina como tal, se viste como tal y se comporta como

tal es tal. ¿Para qué le vamos a dar otro nombre? Forma parte del Poder Judicial.

Creo que jerarquizamos más al Ministerio Público tomándolo como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera dentro del Poder Judicial que dándole un carácter de órgano extrapoder, porque va a estar ahí, solito, jugando como un libero institucional, que va a tener problemas de coordinación con los otros poderes del Estado.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Menem. — Sí.

Sr. Presidente. — Senador Genoud: pídale a la Presidencia las interrupciones.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Me dirijo a la Presidencia, pero la inquietud está dirigida a quien presidió la Convención Constituyente.

Si realmente el ministerio público estuviese dentro del Poder Judicial, esto debió haberse legislado en el capítulo del Poder Judicial de la Carta Magna.

La Constitución establece que la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que en el artículo 120 establece que la máxima responsabilidad o la máxima autoridad del ministerio público es el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación. De tal modo que el procurador no está sometido a la jerarquía y al poder de nadie; es autónomo funcionalmente.

Y la autonomía no es otra cosa que estar afuera del poder. Y en éste caso el Poder Judicial está bajo la responsabilidad directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Considero que de aceptarse este criterio tendríamos que admitir un error cometido por los constituyentes, que no explicitaron este tema y además legislaron por separado, lo que pareciera ser una gruesa equivocación.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — En primer término, como presidente de la Convención Constituyente no era su dueño. Era un mandatario que debía cumplir con las disposiciones, dirigir y tratar de que la Convención llegara a buen fin.

Creo que lo hemos hecho en un marco de consenso y de armonía, lo cual no quiere decir que todos hayamos compartido la totalidad de los puntos introducidos en la reforma de 1994.

Mucho menos su presidente que no tenía ni puede tener poderes dispositivos.

El presidente tiene que aceptar lo que diga el cuerpo; por lo tanto, me parece que esa referencia está de más.

En cuanto a que este instituto tiene que depender de la Corte, de ninguna forma es así. Tenemos el caso del defensor del pueblo, que se encuentra dentro de la esfera del Poder Legislativo; no depende en absoluto del presidente, del Congreso ni del Senado. Tiene autonomía funcional, no quiere decir que esté sometido ni que reciba órdenes. Que esté dentro de un poder no quiere decir que reciba órdenes.

De modo tal que desde mi punto de vista esta referencia es absolutamente errónea. Además, felizmente ésta es una discusión que se está planteando en un terreno de tipo doctrinario, porque la Constitución no dice que sea un órgano extrapoder. Pero como nosotros tenemos la obligación de hacer los aportes que tiendan a entender mejor la figura, yo creo que se la va a entender e interpretar mejor viéndola como es, o sea, formando parte del Poder Judicial, que integrando parte de un eventual órgano extrapoder cuya teoría, por otra parte, no está ni siquiera terminada de elaborar. Todavía hay muchas dudas sobre los órganos extrapoder.

Vamos a poner a una institución que tiene que ser firme, fuerte y consolidada dentro de la nebulosa de una doctrina extrapoder que, como digo, no le agrega absolutamente nada a la institución y no tenemos por qué embarcarnos en esta teoría cuando de la tipificación que se ha hecho de la figura en el artículo 120 de la Constitución se desprende que tiene condiciones más que suficientes para actuar con independencia, autonomía y, como dice la ley, promoviendo la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Sr. Presidente. — Le solicita una interrupción el señor senador por La Pampa.

Sr. Menem. — Se la concedo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: creo que el tema que estamos tratando en este momento, la calificación del Ministerio Público Fiscal, no es un problema meramente semántico; se trata de un tema largamente debatido en la Convención Constituyente de 1994, y fue éste el motivo por el cual se decidió incorporarlo en la Sección Cuarta, dentro del Título II, que es el que organiza los poderes del Estado.

La sección primera se refiere al Poder Legislativo, la sección segunda al Poder Ejecutivo, la sección tercera al Poder Judicial y la sección cuarta al Ministerio Público Fiscal.

Y quiero señalar que el miembro informante del despacho en mayoría, el doctor Masnatta — y en esto quiero citarlo a fin de que quede incorporado al Diario de Sesiones y se conozca la interpretación de lo que fue el espíritu del constituyente — dijo textualmente que "fue decisiva la opinión del constitucionalista Néstor Sagüés, quien ha manifestado con claridad: 'El ministerio público no es un órgano servicial del Poder Ejecutivo, sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de legalidad y la recta administración de justicia. Admitidos estos roles se debe jerarquizar al organismo y ubicarlo donde debe estar, como una magistratura autónoma y como órgano extrapoder'". Esto es lo que señaló el miembro informante de la mayoría en la Convención Constituyente de Santa Fe.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Lamentablemente, no estaba el señor senador por La Pampa cuando otro señor senador que me precedió en el uso de la palabra hizo referencia a lo que dijo el doctor Masnatta y otros constituyentes. Por eso hacía la aclaración de que una cosa es la intención y el espíritu del legislador y otra lo que dice el proyecto. Si la Constitución Nacional hubiera dicho que es un órgano extrapoder, la discusión estaría saldada; pero no lo ha dicho. La ley declarativa dice "órgano extrapoder", la Constitución Nacional guarda silencio sobre la calificación; no dice "órgano extrapoder".

A mi criterio, no se trata de un órgano extrapoder porque forma parte del Poder Judicial al ser una herramienta para la actuación de la justicia. Toda su actuación es en y ante el Poder Judicial para promover la defensa de la legalidad y de los intereses generales. ¿Y cuáles son los intereses generales de la sociedad? Los que están previstos en el Preámbulo, los que están consagrados en los derechos, incluidos los nuevos previstos en el artículo 36 y siguientes de la Constitución. Pero toda esa actuación es en la Justicia y ante la Justicia. Por eso forma parte del Poder Judicial.

Por todas estas razones estamos de acuerdo desde ya con la totalidad del proyecto de ley en consideración.

A fin de no extenderme en mi exposición voy a pedir la inserción de muchas consideraciones

que tengo sobre este tema vinculadas con la estructura, funciones, forma de designación y algunas otras observaciones.

Finalmente, cuando se trate en particular y se discuta artículo por artículo, cuyo debate seguramente será muy rico, haremos nuevas observaciones.

Más allá de las discrepancias que tenemos respecto de la ubicación institucional de este importante instituto que se ha incorporado en la Constitución reformada de 1994 — que en la medida que avanzamos con la sanción de diferentes leyes demuestra la riqueza de contenido y, pese a ser denostada en su momento, se va advirtiendo de qué forma su aplicación consolida la democracia, hace participar a la gente y eficientiza el funcionamiento del Estado —, participamos con gran satisfacción en la sanción del proyecto en consideración, sobre todo porque la mayor parte de sus disposiciones se han logrado por consenso de los integrantes de este cuerpo.

Sr. Presidente. — La inserción que ha solicitado será votada con el resto de las inserciones pedidas a lo largo del debate.

13

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. — A continuación será constituida la Cámara en Tribunal de Juicio Político.

— Son las 17 y 38.

— A las 17 y 42:

14

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO (Continuación)

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: nos apresuramos a dar sanción a uno de los institutos incorporados en la Constitución de 1994, que en mi modesto entender constituye uno de los puntos esenciales de cambio entre la Constitución anterior y la posterior a la reforma efectuada en ese año.

Dicho instituto trae a la discusión algunos elementos que no implican meras diferencias técnicas o académicas. No es solamente una cuestión académica afirmar que el Ministerio Público es — o no — similar al instituto del defensor del pueblo, ni tampoco que es — o no — un órgano extrapoder. No es una cuestión bizantina. Es muy importante porque define, de alguna ma-

nera, el espíritu que se tuvo en cuenta cuando se intentó que la antigua Constitución rigiera en los próximos años.

Estoy totalmente convencido de que la reforma de la Constitución llevada a cabo en 1994 fue mucho más allá de la tradicional división de poderes, y de que tal como la entendía la ortodoxia clásica —impresa en la Constitución del 53—, dicha división no es la misma.

Yo no existe más la división de poderes que había en la antigua Carta fundamental, por lo menos en la percepción que uno tiene de los institutos. Ya es imposible pensar en una división de poderes tradicional, cuando el Poder Ejecutivo tiene un cuerpo extraño a esa concepción, es decir, un miembro con responsabilidad parlamentaria.

¿Cómo se entiende en la doctrina clásica de la división de poderes este instituto, con un funcionario que participa del doble carácter, es decir, ejecutivo y legislativo o, por lo menos, que estando en el ámbito del Poder Ejecutivo responde de alguna manera políticamente ante el Congreso?

También se ha creado el Consejo de la Magistratura, un nuevo cuerpo que está dentro del Poder Judicial pero con una representación importante de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Dicho cuerpo, en gran parte, va a definir todas las cuestiones internas del Poder Judicial. ¿Cómo entendemos en la ortodoxia clásica de la división de poderes ese instituto? No podemos hacerlo.

Por ello, evidentemente, la nueva Constitución no ha superado la forma tradicional de aproximarnos a este problema. Tenemos que admitirlo, entenderlo y disfrutarlo, porque esta nueva visión acompaña a la democracia y a la participación de la gente, dejando de lado el sistema representativo ortodoxo. Se trata de una nueva forma de participar, de integrar y de intervenir.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Alasino. — Por esa razón algunos dicen que la democracia de estos tiempos conjuga el verbo participar del siglo pasado con el de representar. En definitiva, todas estas incorporaciones hacen que debamos admitir que esta Constitución es cualitativamente distinta; es mucho mejor, más democrática y moderna. Establece un mayor control por parte de la gente y de los órganos entre sí. El control intraórgano es

prácticamente un denominador común de los antiguos tres poderes.

Y esta discusión no es vana; es admisible. Entiendo por qué el acuerdo político que dio origen a la ley que declara la necesidad de la reforma hablaba de órgano extrapoder; porque estaba en el espíritu de quienes lo celebraron establecer que la función judicial del Estado, de la que sí participa el Poder Judicial y Ministerio Público, es una cosa, pero que el órgano que tiene autonomía, independencia y que tiene el control y promueve la acción, está fuera del ejido de los poderes. Se trata de dos cuestiones distintas.

Tal vez sea una cuestión que llama a la confusión cuando se la discute. Y esto no es una banalidad ni una cuestión meramente académica, porque si se trata de un órgano extrapoder, si se integra en la función judicial pero conserva su autonomía y su autarquía, esto garantiza que la legalidad y la promoción de la acción en defensa de los intereses generales residan en un cuerpo destinado exclusivamente a ese objetivo y que no mezcla la función que sí está integrada en el Poder Judicial.

Obviamente, cada uno tiene su propia aproximación al problema y distintas opiniones, pero no cabe duda de que la intención de los legisladores y del acuerdo político que promovió la reforma constitucional tenía un objetivo, y por eso este instituto quedó afuera y se mantuvo la definición de la integración del Poder Judicial de la vieja Constitución.

Creo, señor presidente, que todas estas circunstancias constituyen elementos cualitativamente muy importantes, y lo he dicho recientemente, y como los actores políticos no han cambiado, no los percibimos hasta que se nos imponen. Y se nos imponen porque allí están; están legislados para tener efectos en la nueva república y en la nueva democracia.

Poco a poco, a medida que comenzamos a plantear los problemas y tratamos de ensamblar lo viejo con lo nuevo aparecen problemas menores, que tratados políticamente derivan en la discusión acerca de la persona de un procurador. Entonces se minimiza la discusión; se baja su nivel. Realmente no tiene objeto que cuando estamos a punto de incorporar la reglamentación de este instituto, bajemos a la cuestión menor de las personas, de si nos gustan, si están procesadas, si son o no idóneas y si funciona o no la presunción de inocencia o la ortodoxia judicial. Más vale que esto se plantee de otra forma, en otros niveles y con transparencia, y que cuando se discuta un tema de esta naturaleza se hagan

contribuciones para mejorar el proyecto de ley y para enriquecer, de alguna manera, la opinión y se logre el objetivo que alguna vez imaginó el legislador que reformó la Constitución. Creo que éste es el objetivo y debe ser el camino de la discusión.

No quiero entrar específicamente en la cuestión del artículo 69. Puede ser que la coyuntura política haya motivado un discurso en donde, evidentemente, la situación personal o pública del procurador pueda sembrar algunas dudas. Pero no debemos dudar de que ésta es la solución que asegura la continuidad del control de legalidad que tiene este instituto en la función judicial.

¿Cuál sería la otra alternativa, o la que tal vez finalmente acordemos o pactemos en función de lograr un mayor consenso en la sanción de este proyecto, que es el objetivo que nos anima? El objetivo principal de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales en esta cuestión fue acordar, consensuar y lograr la sanción de este importante instituto con el acuerdo mayoritario de los bloques.

Entonces, en la discusión de este artículo no está el problema personal sino el consenso, que si bien no es el óptimo y absoluto, constituye un paso más en esa búsqueda.

Más allá del cálculo político en donde cada uno se desgarran las vestiduras en función de cómo se viene presentando la situación electoral o política del gobierno, en este recinto debemos plantear alternativas a esta situación, que evidentemente es muy difícil y escabrosa, porque si establecemos de manera definitiva este instituto, corremos el riesgo de caer en una precariedad acerca de quienes tienen que promover la legalidad, que puede generar un caos superior al que se quiere evitar. Creo que ésta es la manera en que se puede contribuir a mejorar el proyecto de ley; y la que estamos dispuestos a discutir.

Quiero cerrar mi intervención diciendo que de todo esto debemos rescatar lo bueno, es decir, el trabajo cotidiano que nos permitió arribar a un alto nivel de acuerdo acerca de este proyecto de ley, frente a la discusión que sobre este instituto cada uno tuvo en su bloque. En función de este consenso, que es a lo que aspira la Constitución de 1994, pudimos soslayar algunas cuestiones.

La Constitución de 1994 está armada para tener consensos; pero lo que sucede es que en determinados estadios, ellos sólo se consiguen con números. Cuando nuestra Carta Magna exige mayorías especiales y calificadas, porque

de lo contrario impide la sanción de la ley, está justamente buscando el consenso. En este sentido, en lugar de promover el voto de la mayoría, trata de impedirlo, a fin de que se logre un acuerdo y uniformidad en la opinión.

Señor presidente: creo que haríamos bien si en esta discusión que llevamos a cabo, en donde cada uno planteó los problemas y puntos de vista que considera más importantes, nos apartáramos un poco del cálculo político inmediato y promoviéramos o propusiéramos las soluciones que más a cubierto dejen a las instituciones argentinas. Este ha sido el espíritu que animó a nuestro bloque, así como también a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: dado que no hay más senadores anotados para hacer uso de la palabra y, en consecuencia, se va a proceder a la votación en general, solicito que ella se haga según el mecanismo previsto en el artículo 79 de la Constitución Nacional, porque de acuerdo con las exposiciones vertidas por todos los bloques en este recinto, entiendo que hay intención de lograr un consenso. Creo que ésta es una buena oportunidad para inaugurar este mecanismo.

Me parece sano y saludable que apliquemos este artículo de la Constitución, porque le dará mucha celeridad al tema y, además, porque en la comisión tenemos la posibilidad de tratarlo en particular. De todas maneras; si allí no se logra el acuerdo pertinente, el dictamen volvería para su consideración a este recinto, pero quiero destacar que estamos trabajando con buena voluntad e intencionalidad.

Sr. Presidente (Menem). — Como los señores senadores no tienen a mano el texto de la Constitución, por Secretaría se dará lectura al artículo al que hizo referencia el señor senador por Formosa, a fin de que se encuentren en condiciones de poder tomar una decisión al respecto.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee): "Artículo 79: cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario".

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por Formosa hizo una moción para que, de acuerdo con lo que establece el artículo 79 de la Constitución Nacional, la aprobación en particular se haga en comisión.

Antes de poner en consideración la moción, tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: nosotros no tenemos dificultad en aprobar en general el proyecto, tal cual lo anunciaron todos los legisladores de nuestra bancada, y en que pase a comisión para su tratamiento, discusión y aprobación en particular.

Sin embargo, surge una dificultad técnica en cuanto a que la norma establecida por el artículo 79 de la Constitución no está debidamente reglamentada.

Como es la primera vez que se plantea este tema, tenemos algunas dudas en cuanto a su mecánica.

Me permito señalar que, de existir una explicación en el Reglamento, no tendríamos inconveniente en proceder como lo solicita el señor senador Branda.

Como miembro informante del bloque radical y en función de que el Reglamento me permite hacer uso de la palabra en dos oportunidades, deseo señalar que hemos puesto de relieve en todo momento la búsqueda de consenso en este delicado proyecto del ministerio público...

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega a los señores senadores que atiendan al orador.

Sr. Genoud. — Cuando la Constitución establece los dos tercios de los votos para el acuerdo del Senado respecto de los ministros de la Corte, y el mismo proyecto que vamos a votar también establece los dos tercios de los votos del Senado en los casos del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, es porque le da prioridad al consenso en la designación de un funcionario que no va a durar un gobierno sino varios.

En el caso del doctor Agüero Iturbe, por su edad, puede permanecer con estabilidad en su función hasta el año 2020; de modo tal que ese funcionario puede llegar a ser procurador durante tres o cuatro gobiernos de la Nación.

Por ese motivo existe la sabia institución de los dos tercios, que obliga a los partidos políticos a concertar en el Senado, donde están representadas las principales fuerzas políticas, a los

efectos de que se designe una figura que tenga un perfil independiente, objetivo e imparcial.

Por eso es, señor presidente, que no abandonaremos la idea que ya expusieron senadores de nuestro bloque, de que, como mínimo, la designación de los titulares de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General debería ser tratada en el Senado y aprobada con los dos tercios de los votos.

De lo contrario, por la vía de una votación con mayoría simple como la que requiere la aprobación de este proyecto, el procurador quedará en su cargo por el término de más de veinte años.

Reitero la posición de la bancada radical: vamos a votar afirmativamente en general este expediente; valoramos el esfuerzo que han hecho todos para encontrar el consenso respecto de los puntos centrales; planteamos nuestra preocupación con referencia al artículo 69, con la inclusión de ese artículo o sin ella, porque a tenor de la interpretación expresada por el señor senador por La Rioja, aun eliminando el citado artículo, tanto el procurador como todos los fiscales igualmente deberían permanecer en sus funciones sin necesidad de acuerdo.

Aceptamos el criterio planteado por el señor senador por Formosa; lo vamos a discutir en comisión, pero no renunciaremos a nuestro pedido y reclamo de que los titulares de este poder bicéfalo —del Ministerio Público Fiscal y del defensor general de la Nación— cuenten con los dos tercios de los votos que exige el consenso.

Del mismo modo que buscamos el consenso para la ley, lo buscamos también para el perfil de quienes tendrán esta alta responsabilidad en el Ministerio Público de la Nación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: habré de referirme a dos cuestiones.

En el Reglamento de la Cámara se establece el mecanismo previsto en el artículo 79 de la Constitución Nacional; de modo tal que quedaría en cierto modo salvada la prevención manifestada por el señor senador Genoud.

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por La Rioja hace referencia al artículo 176 del Reglamento.

Sr. Yoma. — Correcto.

En segundo término, la aparente no aceptación de la propuesta del justicialismo, de eliminar el artículo 69 como manera de contribuir al consenso, está basada en una —aparentemente— firme convicción sustentada, más que

todo —y lo voy a decir con gran afecto—, en las tapas de “Página 12” antes que en el trabajo legislativo.

Digo esto porque ningún proyecto de ley reglamentario del ministerio público de algún señor senador establece el mecanismo que ahora están planteando como disidencia los senadores de la oposición.

En ningún momento la oposición planteó, durante los debates en comisión, esta disidencia. Es más, en todos los proyectos presentados por legisladores de la oposición figuran fórmulas parecidas o iguales a las del artículo 69 del dictamen de comisión.

...¹

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Galván. — ¡Pido la palabra!

Sr. López. — ¡Pido la palabra!

Sr. Berhongaray. — ¡Pido la palabra!

...¹

Sr. Presidente (Menem). — Le ruego al señor senador...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

...¹

Sr. Galván. — ¡Es una falta de respeto!

Sr. Yoma. — Terminó, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Le ruego moderar sus expresiones, señor senador, porque creo que no corresponden...

Sr. Galván. — ¡Que retire esas palabras!

Sr. Presidente (Menem). — ...ni al cuerpo ni a la jerarquía con que se ha llevado a cabo este debate.

Sr. Yoma. — Retiro esa palabra y cualquier tono que signifique un agravio hacia mis amigos de la Unión Cívica Radical y, particularmente, a mi comprovinciano de Famatina, senador Galván. Pero que no se teste; retiro esa palabra...

Sr. Galván. — Pido que se teste.

Sr. Storani. — ¡Es un agravio, señor presidente!

Sr. Yoma.* — Voy a terminar, señor presidente.

Más allá del agravio legítimo que sienten los amigos del radicalismo, hay una realidad incontestable: no hay un solo proyecto presentado

por la oposición que no contenga una disposición similar a la del artículo 69 del dictamen. Reitero: es una realidad incontestable. De todos modos, este aporte que hizo el justicialismo es un aporte a la construcción del consenso en torno a un tema respecto del cual la disidencia apareció ahora y no en la discusión en comisión.

Eliminamos ese artículo y pensamos o interpretamos que es un desafío para el Congreso construir un sistema que permita salir de la discusión que estamos teniendo ahora.

Los actuales integrantes del Ministerio Público han sido nombrados de acuerdo con el régimen legal vigente al momento de su designación. Esto no es lo que interpreta el senador Yoma o la bancada justicialista sino que gozan de estabilidad de pleno derecho por cuanto —reitero— han sido designados según el régimen legal vigente en su momento.

Insisto en un concepto que expresé al dar el informe de la mayoría. Si en este caso no tenemos en cuenta la estabilidad, cuando se reglamentamente el Consejo de la Magistratura quedarían en comisión todos los jueces y tendrían que rendir concurso por haberse cambiado el mecanismo de designación.

Entiendo que ése no fue el espíritu de los constituyentes ni es el espíritu de este Congreso, es decir, no pretendemos poner en una situación de incertidumbre a todo el Ministerio Público de la República.

Por eso, proponemos la eliminación de un artículo que simplemente es la reiteración de todos los proyectos existentes, tanto de la oposición como del oficialismo, y que hoy aparece como conflictivo. Así, apostamos a construir un sistema que otorgue legitimidad y transparencia y que lleve tranquilidad a los miembros del ministerio público. Además, apostamos al consenso. Si lo podemos lograr ahora, quedémonos hasta las tres de la mañana y continuemos con la votación en particular. El bloque Justicialista lo quiere hacer. Es decir, que votemos en general y que sigamos con la discusión en particular; que trabajemos para encontrar este consenso y que podamos sancionar hoy el proyecto de ley.

Obviamente, esto requiere del acuerdo de los bloques opositores. Comenzamos, como dijo el presidente de nuestro bloque, aportando un grano de arena para lograr este consenso. Eliminamos este artículo que hoy —reitero: no ayer— aparece con disenso.

Sr. León. — Las cosas que hacen ustedes de un día para otro...

¹ Palabras testadas por la Presidencia Provisional del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca, a ver si pone un poco de calma. (*Risas.*)

Sr. Villarroel. — Aunque sea, calma provincialiana.

Sr. Presidente (Menem). — Así es. Apelo a su serenidad.

Sr. Villarroel. — En rigor, se está promoviendo una discusión extemporánea, de acuerdo con los textos de la Constitución y del propio Reglamento, que prevé en su artículo 176 y siguientes el trámite de la moción del señor senador por Formosa.

La remisión a comisión se debería discutir después de aprobar en general el proyecto, cosa que todavía no ocurrió. En orden a extemporaneidades, debo decir que esta iniciativa del señor senador por Formosa se debería haber anunciado con suficiente antelación, porque el tema no es muy simple.

La remisión a comisiones, según está contemplado en el Reglamento del Senado, también incluye la posibilidad de que se envíe a comisión la consideración de algunos artículos determinados y no todos los que componen el proyecto.

Por otra parte, quiero hacer notar que no se puede admitir la queja de sorpresa respecto a esta cuestión del artículo 69, porque hay por lo menos tres disidencias explícitas e impresas en el orden del día, donde específicamente se plantea este tema.

Por último, querría decir que esta sugerencia de supresión directa, lisa y llana del artículo —digamos, esta demolición del artículo— en algún sentido implica meter en una bolsa en la que nadie pensó a todos los miembros del ministerio público, cuando en rigor la diferencia recae pura y exclusivamente en ambas cabezas de los respectivos órganos componentes del ministerio público, es decir, el procurador y el defensor general. Ahí estaba circumscripita la discusión.

Así que, en fin, espero no haber contribuido a la confusión sobre este tema.

Sr. Presidente (Menem). — Voy a conceder el uso de la palabra, pero quiero que ordenemos la sesión, porque se nos está yendo fuera de los carriles que corresponden.

Ha terminado la discusión en general. Corresponde votar en general. Hay una moción de orden del señor senador por Formosa de que se vote conforme al artículo 79 de la Constitución, que tiene su correlato en el artículo 176 del Reglamento.

La Presidencia entiende que no corresponde ese trámite, por cuanto —como bien dijo el

señor senador por Catamarca— se refiere a algunos artículos y no a la totalidad del proyecto.

Esta es una interpretación de la Presidencia que, de todos modos, va a quedar sujeta a la decisión del cuerpo, que es el que decide en definitiva cuando no está de acuerdo con una interpretación de la Presidencia.

En cuanto a las expresiones del señor senador por La Rioja, esta Presidencia, haciendo uso de la facultad que le da el artículo 33 inciso 11 del reglamento, hará testar aquellas expresiones que estime no corresponde haberlas vertido en este recinto.

Les ruego que no insistamos con este tema porque sería desvirtuar el sentido que tiene esta importante sesión.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Yo había pedido la palabra para una interrupción y no me fue concedida.

Quiero hacer ahora una aclaración. No es cierto, como dijo el señor senador por La Rioja de la bancada mayoritaria, que no se hubieran propuesto con anterioridad reformas al artículo 69 del texto que estamos tratando.

Me permito leer el que propuse, que está escrito en el dictamen que tienen en sus bancas todos los señores senadores, y que dice que quedará redactado de la siguiente manera —por eso hizo alusión el señor senador por Catamarca a ese artículo—: “Con excepción del procurador general y del defensor general de la Nación los demás cargos actualmente existentes en el ministerio público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

“Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del ministerio público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.”

Es decir que nosotros oportunamente, con anterioridad, antes de que se pidiera nada, habíamos propuesto un texto distinto preservando para este cuerpo las facultades innatas a las dos cabezas de este organismo bicéfalo que está creando esta norma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda claro, señor senador.

Pero de todos modos eso forma parte de lo que puede ser la discusión en particular.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para adherir a la posición manifestada por la Presidencia.

Cuando el tema de la aplicación del artículo 79 de la Constitución fue traído por el señor senador por Formosa, manifesté mis dudas con respecto a cuál era el tenor de la reglamentación que le habíamos dado a esa norma porque ésta es la primera vez que se plantea este tema como metodología.

Ahora advertimos que los artículos 176 y siguientes del reglamento establecen un trámite más acotado para remitir a comisión la discusión y aprobación en particular de los proyectos. En consecuencia, considero que esto debería ser dilucidado ya sea por una corrección de tipo reglamentario o por acuerdo de este cuerpo en el futuro.

Mientras ello no ocurra, señor presidente, creo que, para no incurrir en novedades que puedan significar un tratamiento heterodoxo desde el punto de vista parlamentario, lo mejor será aplicar el sistema tradicional y que se vote ahora en general. En cuanto al tratamiento y votación en particular, pediríamos que se realice el miércoles de la semana que viene.

Además, señor presidente, adhiero a sus expresiones en el sentido de testar las manifestaciones del señor senador Yoma, que ha traído a colación conceptos que ningún senador de este bloque ha planteado. Hemos hablado siempre del procurador general de la Nación y hemos dado su nombre. No hemos hablado ni de los cargos que se le formulan ni de las denuncias que tiene ni de los procesos que hoy en día se están ventilando en algunos tribunales. Porque, al margen de los nombres, estamos debatiendo una cuestión institucional.

Además, señor presidente —y no tengo jactancia—, esperamos que el próximo gobierno sea de la Unión Cívica Radical. Entonces, la designación del procurador general del Tesoro deberá contar con la aprobación de los dos tercios del Senado para encontrar un perfil concertado entre las fuerzas políticas que integran este cuerpo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: pienso que la Constitución es muy clara en este tema específico y no se puede interpretar que el reglamento se contrapone a la Constitución. Creo que el re-

glamento da lugar a lo que formula el señor senador por Formosa porque lo permite la Constitución.

En su artículo 79 la Constitución es muy clara al establecer que cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en comisiones la aprobación en particular del proyecto. Y el reglamento lo que hace es establecer un mecanismo a través de una redacción tal vez no muy feliz. Pero de manera alguna puede estar en contra de la Constitución. Evidentemente, no se puede interpretar —es mi opinión personal— de la forma en que lo hace el señor senador por Catamarca.

Lo que sí creo es que se trata de un tema muy grave e importante como para inaugurar un mecanismo que todavía no conocemos.

Es muy loable la propuesta del señor senador por Formosa. Considero que es un mecanismo que agiliza los trámites. La propuesta está hecha en la única convicción de permitir que el bloque radical asista hoy a esa expresión democrática que se llevará a cabo en un club a las 18. No lo anima absolutamente otro cometido. Lo que intentamos es solucionar el problema para que sea posible para ellos participar de ese acto que es importante, que es de reafirmación democrática, que es la actividad política natural de todos nosotros.

Estábamos apuntando a buscar algún tipo de solución para no detenernos en un trámite que nos pone en duda, evitando incurrir en mayores demoras con éste y otros asuntos pendientes.

Entonces, desde este punto de vista, voy a pedir al señor senador por Formosa que retire su moción y que manejemos los mecanismos tradicionales.

Veamos si se retirarán todos los miembros del bloque radical...

Sr. Berhongaray. — Todos.

Sr. Alasino. — Se van todos. Arreglaron la interna. *(Risas.)*

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Alasino. — Si no, podemos sesionar con los senadores que queden en el recinto; ya existe con ese bloque un compromiso en cuanto al artículo en cuestión.

Señor presidente: de todas maneras, una vez retirada la moción por el señor senador por Formosa no podemos avanzar con este proyecto, evidentemente, en los temas que están faltando, si queremos seguir sesionando. Están pendientes de consideración otros órdenes del día y

temas importantes. Nos comprometemos a no avanzar en nada que sea conflictivo. No queremos parar la sesión y dejar de aprobar cosas que quedan pendientes.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: estuvo en mi ánimo dirimir un conflicto dentro del tratamiento en particular, pero creo que se ha generado un mayor problema. Retiro mi moción y dejo planteada la posibilidad que establece ese artículo para que pueda aplicarse en otra oportunidad.

Por otra parte, manifiesto la necesidad de reformar oportunamente el reglamento, a efectos de mejorar la interpretación de este tema.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado por unanimidad.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción solicitados oportunamente.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en la reunión de presidentes de bloque de ayer pedí encarecidamente que comenzáramos esta sesión al mediodía, a efectos de que hubiera podido levantarse a las 18.

Es de público conocimiento que hoy hay un acto muy importante, que no solamente tiene

significación partidaria sino también institucional, porque festejamos el advenimiento de la democracia.

Nos encontramos con que hay voluntad del oficialismo para seguir tratando temas que no son conflictivos. De continuar en esa tesitura, la bancada oficialista nos obligaría a permanecer en el recinto porque no podemos, ni aun en aquellos temas en que hay acuerdo, dejar de participar en la aprobación de resoluciones, comunicaciones e, incluso, proyectos de ley.

Hago una apelación a que se mantenga el compromiso que asumimos ayer en la reunión de presidentes de bloque.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: vamos a aceptar la propuesta del señor senador por Mendoza, en la convicción de que participarán activamente de esta expresión democrática que es el acto que se lleva a cabo hoy. Dejamos así para la próxima sesión los temas que faltan tratar.

Sr. Presidente (Menem). — Queda en claro, entonces, que vamos a levantar la sesión por consenso, salvo que haya alguna manifestación en contrario.

La Presidencia entiende que lo más indicado es que pasemos a cuarto intermedio.

De este modo, se propone un cuarto intermedio para que reanudemos la sesión con la votación en particular del proyecto de ley de Ministerio Público.

Si hay asentimiento, se pasa a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora que determinen los presidentes de bloque.

— Asentimiento.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.

— Son las 18 y 18.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.